

UMBERTO JARA

OJO POR OJO

LA VERDADERA HISTORIA DEL GRUPO COLINA



EL HORROR DEL TERRORISMO Y LAS BATALLAS CLANDESTINAS

LAS DECISIONES EN LA SOMBRA DE FUJIMORI Y MONTESINOS

LOS OPERATIVOS DE BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA

 Planeta

UMBERTO JARA

OJO POR OJO

LA VERDADERA HISTORIA DEL GRUPO COLINA



OJO POR OJO

Primera edición, 2003

25,000 ejemplares

Segunda edición, noviembre de 2007

5,000 ejemplares

©Umberto Jara, 2007

©

ISBN: xxxxxxxxxxxx

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° xxxxxxxxx

Registro de Proyecto Editorial: xxxxxxxxx

Diseño gráfico: Danitza Navarro Duich

Realización de portada: Danitza Navarro Duich

Fotografía: las fotografías de Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, y Santiago Martín fueron cedidas para esta publicación por Francisco Madina Tagle, el resto de fotografías pertenecen al archivo personal del autor

Impresión:

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial en cualquier forma o medio sin el permiso anticipado y por escrito de la editorial.

Impreso en el Perú

Printed in Peru

*A Marcos Cytrynblum,
sabio generoso y solidario en la ciudad
de los Buenos Aires, con afecto y gratitud.*

*Es importante no sentirse intimidado
por el histérico despotricar ni por las
mentiras, y mantenerse tan aferrado
como uno pueda al camino de la verdad,
la honestidad y la preocupación
por las consecuencias humanas
de lo que uno haga o deje de hacer.*

NOAM CHOMSKY

ÍNDICE

[Prólogo a la primera edición](#)

[Prólogo a la segunda edición](#)

[Nota previa](#)

[Las alas del deseo](#)

[Voces clandestinas](#)

[Tiempo de revancha](#)

[Labores de ocultamiento](#)

[La captura de Santiago Martín Rivas](#)

[La extradición de Alberto Fujimori](#)

[Epílogo](#)

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

¿SE PUEDE COMBATIR AL CANÍBAL devorando al caníbal o al pirómano incendiándole la casa? La respuesta civilizada optará por el sereno no. Pero si el miedo entra a tallar, otra será la tendencia. La pobre condición humana reacciona de modo distinto cuando el miedo le sopla la nuca o le altera el sueño.

Ante una amenaza criminal –un salvaje atentado terrorista–, la masa espantada exigirá (y justificará) la devastación del canalla agresor. Es el efecto del miedo: clausura el discernimiento. Ese pavor es más letal cuando alcanza a un gobernante, porque este tiene la facultad de tomar decisiones.

Sobre esa base del miedo, replicando el ataque, se ha diseñado todo un sistema para combatir al terrorismo. Sus mentores lo llaman guerra de baja intensidad o guerra clandestina. Más directas, sus víctimas lo conocen como «guerra sucia». Se basa en un fundamento milenario que aconseja aplicar, ante el agravio, la Ley del Talión, aquella contenida en la Biblia: «Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe».¹

En los últimos tiempos, en diversos territorios, con ideologías, religiones e idiomas diferentes, el terrorismo ha desatado su oprobio homicida con una bestialidad cada vez en aumento, y ha sido, y sigue siendo, combatido con sus propias reglas de barbarie. Es decir, si el terrorista mata indiscriminadamente, el Estado también.

Los cultores del pragmatismo dirán con apuro que no existe otra manera de combatir la infamia terrorista. Sin embargo, la inapelable realidad muestra que ninguna guerra de aquellas ha logrado liquidar esa manifestación de la demencia. Y ya van varias, muchas, y el terrorismo persiste, crece y se enardece.

La pretendida estrategia de combatir al terror con los métodos del terror, no funciona, no es eficaz, porque olvida las razones de fondo y omite algo esencial, terrible: «El terrorista comparte un secreto y una identidad. Comparte códigos y protocolos de su misión, pero también, más en profundidad, una idea de castigo y devastación. (...) Ellos quieren morir. Esa es la ventaja que tienen, el fuego de la fe ofendida».²

¿Puede un soldado occidental ofrendarse como aquellos terroristas suicidas

convertidos en bombas humanas por elección propia? No existe uno capaz de esa locura, porque la milicia occidental viste el uniforme por un sueldo y alguna convicción, pero carece del «fuego de la fe ofendida».

Entonces, la estrategia de defenderse asesinando a un terrorista en la misma medida en que ellos asesinan tiene una debilidad de origen: matándolos se les da más razones para su inmolación. A ellos, en su creencia, la muerte los hace heroicos y los dignifica y, si su razón es religiosa, les abre las puertas a un paraíso de recompensa. En un sentido atroz, la muerte es para ellos un logro, un altar, un lugar ansiado. Combatirlos con la muerte es contribuir a su lucha y es disminuir, rebajar, estigmatizar a los soldados que se lanzan sobre ellos. Y es, también, someter a la población civil al padecimiento de un letal fuego cruzado generador de muertes inocentes, de viudas y de huérfanos.

Entre los varios países obligados a sufrir la demencia del terrorismo, está el Perú. Desde 1980, y durante más de una década, una salvaje agrupación llamada Sendero Luminoso, nublada por el vaho del fanatismo maoísta, desató una impresionante saga de destrucción que generó decenas de miles de víctimas, que según algunos, orilla los setenta mil muertos, y pérdidas económicas de tal magnitud que se podría haber fundado un nuevo país sin deuda externa.

En el año 1990, los militares peruanos estaban fatigados y cargaban con el rencor de su derrota. El gobierno de Alberto Fujimori, que se iniciaba en un país de paisaje desolado, tomó, en estricto silencio, la decisión de aplicar la guerra de baja intensidad o guerra clandestina, es decir, el terrorismo de Estado.

Se elaboró un plan propuesto por la plana militar y se dispuso la creación, no oficial, secreta y subrepticia, de un escuadrón especial, conocido después como Grupo Colina. Realizando tareas de infiltración, espionaje telefónico, secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales se logró aniquilar a la cúpula terrorista y se contribuyó en la tarea –coronada por la Policía– de capturar al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cuyo rostro se había detenido en las facciones de una última fotografía tomada en 1978, año en que se sumergió en las sombras. En esos días subterráneos, cayeron también muchos inocentes.

Hay quienes alcanzan una velada sugerencia en forma de pregunta: ¿para qué investigar esa etapa si, al fin y al cabo, Fujimori libró al país del terrorismo?

La respuesta es, precisamente, uno de los sustentos de este libro. Fujimori no aniquiló al terrorismo, aunque él levante esa bandera cada vez que le es posible y la use como escudo de impunidad. Lo arrinconó a un territorio específico, lo desactivó con eficacia, es verdad, pero no lo derrotó totalmente porque usó la misma estrategia, los mismos conceptos con los que Estados

Unidos de Norteamérica no puede derrotar al terrorismo islámico. La prueba es que Sendero Luminoso empieza a retornar aprovechando la ineptitud sin pausa de Alejandro Toledo, el actual presidente peruano.

Esa horrenda vigencia obliga a tomar conciencia sobre el peligro y consecuencias de aplicar una estrategia de guerra clandestina. No solo genera delitos de lesa humanidad, también causa muertes en la población civil. El lector descubrirá en estas páginas que la semana de espanto que vivió Lima en julio de 1992, fue la respuesta de Sendero Luminoso a las muertes ocultas que le iban siendo causadas. El costo lo pagó la población y en esas muertes inocentes – como las de la calle Tarata– también está la responsabilidad del gobernante. El ojo por ojo, lo cobra el terrorismo en la vida de ciudadanos inocentes.

Este libro aspira a contribuir en la tarea de archivar esa equívoca convicción de que se puede combatir al terror con las armas del terror. Todas las dolorosas experiencias, en distintos territorios, muestran que ese procedimiento, a final de cuentas, le otorga, más bien, ventajas al terrorismo, mancilla a las fuerzas militares y llena de dolor y antagonismo a las sociedades que lo padecen.

¿Cómo combatirlo entonces? Esa es una tarea de imaginación y reflexión que excede estas páginas. Pero, sin duda, la clave está en asumir las razones de fondo, y una de ellas tiene que ver con las obscenas desigualdades en el planeta. Que doscientas veinticinco personas acumulen el 70 % de la riqueza es inverosímil. Lo es más que los problemas de hambre y salud se puedan solucionar con solo un porcentaje del dinero que se gasta en guerras sin sentido. Tal es el tiempo ominoso que nos toca vivir.

El uso de la guerra clandestina o guerra de baja intensidad es funcional para políticos como Fujimori, que pretenden convertir el oprobio en una conquista. Sobre ese pedestal, Fujimori y su socio Montesinos basaron su permanencia en el poder y obtuvieron un respaldo impresionante: recién en el séptimo año de gobierno, una encuesta desaprobó levemente su gestión y por apenas un mes. Así, tras obtener una reelección, encubrieron un latrocinio descomunal que terminó con la fuga de ambos personajes; uno, Montesinos, en un yate nocturno; el otro, en el avión presidencial.

Durante años ocultaron con denuedo las ejecuciones y las fosas clandestinas. Sabían que ese misterio los descalificaba, pero mientras lograron mantenerlo como misterio, alegaron que su trabajo antiterrorista los legitimaba. Y hoy es el cimiento en que fundan su impunidad. Desde prisión, Montesinos acepta sus actos de corrupción y celebra leves condenas de seis o siete años. Desde su refugio en Japón, Fujimori vive del prestigio –conferencias y declaraciones– de haber derrotado al terrorismo y sonrío ante las acusaciones por

delitos de lesa humanidad señalando «que no existen pruebas».

Por esa exhibición de impunidad, esta investigación era obligatoria: aporta las pruebas escondidas por años. También cumple con la obligación de evidenciar mi postura frente a la corrupción del fujimorismo y, a la vez, refrenda una convicción: la respuesta de un periodista no está en el intercambio de acusaciones y menos en el agravio, sino en la realización de la tarea periodística. El trabajo es el argumento. Y esta investigación, con todos sus riesgos, acaso debió ser asumida por aquellos empeñados en descalificar antes que en competir profesionalmente.

Este libro ha sido escrito en el obligado, pero estimulante y solidario exilio argentino. El desarraigo, entre sus varios y sacrificados beneficios, enseña la virtud de la mirada equilibrada y serena sobre el tumulto de la historia reciente. Si el lector dispensa su paciencia, en las páginas siguientes va a encontrar una esmerada investigación y perdonará este desvaído prólogo que incumple con la atinada observación de Quevedo: «Dios te libre, lector, de los prólogos largos».

Umberto Jara

Buenos Aires, setiembre de 2003

¹ Éxodo 21, 23-25.

² Don Delillo: “El Apocalipsis no tiene lógica”, diario *Clarín*, Buenos Aires, 5 de enero de 2002.

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

NO SIEMPRE EL DOLOR ENSEÑA; muchas veces el olvido suele ocultar sus posibles lecciones. Así ocurre con los países sin memoria. Padecen sus tragedias y extravían sus enseñanzas. Acontece de este modo con el Perú. País de impulsos autodestructivos, escenario de envidias y rencores, empeinado en disputas insólitas y ciego a la construcción de mínimas concordias para encarar sus urgentes problemas, un día de 1980 vio explotar el furor criminal de Sendero Luminoso.

Una desmesurada pobreza le sirvió a la fanática organización terrorista para iniciar sus acciones utilizando a jóvenes cercenados de la posibilidad de un futuro. Los gobernantes, por arrogancia y por ineptitud, fueron desdeñosos ante un problema que no sentían suyo: ocurría en la sierra y, a veces, muchas veces, ese territorio no pertenece al Perú.

Las gentes tampoco prestaron atención. Total, eran muertes que acontecían muy lejos de sus casas. Hasta que un día las bombas tronaron en las calles limeñas y pronto todos tuvieron en las narices el horror de la muerte. Entonces, el terrorismo existió para todos.

Fue una larga, cruel, dolorosa guerra civil y, sin embargo, de aquel dolor el país no ha obtenido ninguna sólida lección. Cada quien utiliza los años del terror para dividirse en bandos e, incluso, obtener ventajas. Se ha llegado al extremo de crear entidades a las que no se debe criticar bajo pena de linchamiento moral –la Comisión de la Verdad, por ejemplo– y se incurre en la pretensión de sesgar la historia.

Acaso sea una obligación alejarse de las hipocresías de lo «políticamente correcto» y asumir balances que muchos asumen en privado y callan en público.

Por más que las figuras corruptas de Fujimori y Montesinos nos causen inmensa y justificable repulsa, el recuento que parece más equilibrado es que acertaron en tomar la decisión de enfrentar de manera resuelta al terrorismo –la captura de Abimael Guzmán es la muestra principal– pero se equivocaron de manera inexcusable en autorizar las ejecuciones extrajudiciales y, por ello, enfrentan los procesos establecidos en la ley. Pero incurrir en generalizaciones por el afán de denigrarlos (o por sostener actividades lucrativas de ciertas organizaciones) es agraviar a los policías y militares y ronderos que arriesgaron

sus vidas y cumplieron adecuadamente su deber en defensa de una sociedad que estaba desguarnecida. Por ese afán de atacar indiscriminadamente a Fujimori y Montesinos se terminó llevando a injusto juicio, por ejemplo, a los Comandos de Chavín de Huantar sin detenerse a investigar adecuadamente.

También es inaceptable la victimización del terrorista. Y esta afirmación supone transitar por terreno minado porque hay quienes claman horrorizados cuando se afirma que aquellos que fueron ejecutados extrajudicialmente eran, en su gran mayoría, terroristas. Su muerte obliga a sancionar a sus autores. No cabía su asesinato, sino su juzgamiento en un tribunal y, luego, el cumplimiento de una condena por terrorismo dispuesta por ley.

¿Por qué entonces los altares y las indemnizaciones? ¿Y por qué no se alza la misma ofendida voz por los actos salvajes y criminales de Sendero Luminoso? ¿Quién reclama por los modestos ciudadanos asesinados a machetazos por el senderismo? ¿Quién por las señoras embarazadas que la vesania terrorista destripaba delante de sus familias? ¿Quién por los niños bomba utilizados por las huestes de Abimael Guzmán? ¿Quién por los niños obligados a esperar las ejecuciones de sus padres en aquellos demenciales «juicios populares»? ¿Quién por las viudas y huérfanos de los policías asesinados en emboscadas, degollados y mutilados? Hay quienes son tan enfáticos para un lado, pero tan silenciosos para el otro.

No siempre el dolor enseña. El Perú está ahora en la etapa de los juzgamientos, pero nadie se pregunta con real interés de solución ¿qué hacemos con la pobreza? Hemos olvidado la principal enseñanza de los años de terrorismo: la pobreza incuba la violencia hasta que un día explota brutalmente.

Con la esperanza de que la historia que este libro relata no tenga que volver a ocurrir, el autor entrega al lector las páginas siguientes.

Umberto Jara

Lima, noviembre 2007

NOTA PREVIA

EN 1993, UNA DELACIÓN MILITAR y una investigación periodística pusieron a luz pública dos casos: la matanza de Barrios Altos y el secuestro y la ejecución de estudiantes de la Universidad La Cantuta. Estas señalaban la autoría de un escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina que actuaba con autorización presidencial. El entonces presidente peruano Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos resolvieron el tema procesando a un grupo de militares y otorgándoles a continuación una amnistía. Luego, clausuraron toda puerta de acceso a esos episodios, hasta que no quedó sino una opción: el improbable testimonio del jefe del escuadrón militar.

Durante años fue imposible conseguirlo. Y las denuncias periodísticas que se iban publicando padecían de la ausencia de ese testimonio fundamental. Algunos agentes de inteligencia prestaron declaraciones periodísticas y judiciales, pero siempre insuficientes, contradictorias e, incluso, inventadas o exageradas, lo que remarcó la necesidad del testimonio de quien recibió las órdenes directas.

A LO LARGO DEL AÑO 2002, ese implacable silencio fue horadado por una paciente pesquisa que este libro relata. En sus páginas está una impresionante historia que Fujimori y Montesinos buscaron ocultar por todos los medios.

El lector encontrará el cruento testimonio de los mayores del Ejército Peruano, Santiago Enrique Martín Rivas, jefe del Grupo Colina; y Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, jefe administrativo del escuadrón. Además de los dos mencionados oficiales, cuyos testimonios son el eje de la investigación, existe una fuente cuya identidad se mantiene en reserva y aparece citado únicamente como El General. Otros testimonios no se citan específicamente pero fueron de gran utilidad para descorrer el velo de esta historia.

El primer capítulo contiene información específica sobre Fujimori y Montesinos que apunta a una revisión distinta sobre acontecimientos que hoy, vistos con el tamiz del tiempo, muestran sesgos que, en su momento, pasaron inadvertidos y permiten entender mejor las razones del accionar de ambos personajes. Los tres capítulos restantes contienen la historia de la guerra clandestina que sacudió brutalmente al Perú a inicios de la década pasada.

Las pruebas de los testimonios obtenidos se encuentran en el archivo del autor en cintas de video, cintas de audio, disquetes, documentos y numerosas libretas con las entrevistas sostenidas.

LAS ALAS DEL DESEO

*Sin duda creo que es mejor ser
impetuoso que cauto, porque la
fortuna es una mujer y, si usted quiere
poseerla, es necesario conquistarla por la
fuerza; es evidente que ella se deja
dominar por el audaz y no por quienes
proceden con cautela.*

NICOLÁS MAQUIAVELO

TODO EMPEZÓ LA TARDE del viernes 13 de mayo de 1988, cuando una explosión ocurrida en las serranías de Ayacucho alcanzó a Vladimiro Montesinos y a Santiago Martín Rivas, aunque ninguno de los dos lo supo sino hasta dos meses después. En el crepúsculo de esa tarde, dos camiones portatropas con rumbo a la base militar del poblado de Huancapi, fueron emboscados por terroristas de Sendero Luminoso. El primer vehículo pasó sin sobresaltos, pero un trueno surgido de la tierra hizo volar desde la base al segundo camión. El capitán José Arbulú Sime quedó con el muslo destrozado y la pierna izquierda rota, el sargento Ángel Vargas Tamara y el cabo Fabián Roldán Ortiz no alcanzaron a darse cuenta de su destino de cadáveres despedazados sobre el camino de tierra, y el cabo Carlos Espinoza de la Cruz agonizó un rato largo con una mano en el boquete que tenía abierto en el abdomen. El resto de la patrulla, once soldados, con heridas de diverso grado, trató de entender, en medio de la convulsión, las órdenes que desde el piso barboteaba el capitán Arbulú. De pronto, la voz del oficial quedó sepultada por el estruendo de bombas caseras lanzadas sobre los caídos, y los soldados, inermes ante el sorpresivo ataque, asomaron, entre el velo de la humareda, a una escena de horror: un grupo de terroristas propinó una golpiza sin piedad al sangrante cuerpo del capitán Arbulú y luego, apagándose ya la luz de ese día, se escuchó el siniestro estallido de los once disparos con que fue ultimado. Los sobrevivientes quedaron en libertad para ir a contar la pesadilla. Era parte del estilo senderista, dejar sobrevivientes no por razón de piedad sino como recurso de guerra: buscaban que el pavoroso relato de los retornados de la muerte golpee el ánimo de sus compañeros para, de ese modo, debilitar la moral del contrincante.

Los habitantes del caserío de Cayara, en cuyas inmediaciones ocurrió la emboscada, optaron, esa noche y hasta la madrugada, por huir del poblado: sabían que a cada incursión senderista le sucedía una irracional visita militar. Quedaron pocos en el pueblo. Al día siguiente, las horas de terror vividas en esa aldea con chozas de adobe y pequeños sembríos, fueron relatadas por una adolescente, JHB, de dieciséis años de edad, que logró mantenerse oculta.

«Esa noche vi el incendio de los carros y después no pasó nada. A las diez de la mañana del día siguiente llegaron dos helicópteros y trasladaron a los soldados. A las dos de la tarde diez “morocos” (militares) a caballo entraron a la tienda de Benedicta Valenzuela y volcaron el arroz y el azúcar, y luego llegaron cincuenta cabitos, patearon las puertas y quemaron tres casas. A la entrada de Cayara mataron a Magalino Gutiérrez y Anastasio Asto, que estaban borrachos por la fiesta de la Virgen de Fátima, sus cuerpos los lanzaron a un abismo, y en

la iglesia asesinaron a Emilio Berrocal, Santiago Tello y Rodrigo Crisóstomo cuando estaban desarmando el anda de la Virgen. A Maura Ipurri le dieron con un machete en la cabeza, pero no murió, se desmayó y después escapó a la chacra. Más abajo estaban en la trilla de la cebada y el trigo, reunieron a catorce personas, los hicieron arrodillar y les arrojaron tres granadas. Todos murieron. A Eustaquio Oré, que tenía diecisiete años, lo mataron a cuchilladas y en Yurac-Yurac mataron a las hermanas Ana Cristina y Jesusa Apari y a sus cuatro peones. A mis primos de veintitrés y dieciocho años, que escapaban corriendo, los alcanzaron a caballo y los balearon. Ya no vi más porque se hizo de noche. Vino mi mamá. Me contó que a Graciana la violaron diez cabitos y como estaba embarazada abortó una criatura ya muerta; mi mamá me dijo que mejor escape del pueblo».³

A bordo de un camión, la adolescente logró llegar a la ciudad de Huamanga. Además de ella, otros testigos coincidieron en testimonios de horror. Se inició una investigación judicial que incluyó al jefe político-militar de la zona de emergencia, general José Valdivia Dueñas, junto a oficiales y soldados a cargo de la incursión en Cayara. Poco después, los testigos de la matanza empezaron a morir y el fiscal Carlos Escobar, sometido a reiteradas amenazas de muerte, se asiló en los Estados Unidos de Norteamérica y el expediente judicial a su cargo fue elevado al fiscal supremo Pedro Méndez Jurado. El caso alcanzó notoriedad en la prensa y el alto mando militar se sintió jaqueado: por primera vez un general enfrentaba la posibilidad cierta de ser procesado judicialmente.

ESE AÑO 1988, el capitán Santiago Enrique Martín Rivas tenía 30 años de edad y vivía en las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), ubicadas en un sector del enorme complejo de la Comandancia General del Ejército que alguien bautizó, con subdesarrollada vanidad, como el Pentagonito y así habremos de llamarlo por brevedad de escritura. Martín Rivas tenía prestigio entre sus compañeros de armas, era considerado un «guerrero», en la acepción usada en los cuarteles en los días de combate contra la subversión. En 1981, a los 22 años, recién graduado como subteniente, había combatido en la Cordillera del Cóndor en el conflicto con el Ecuador, de donde volvió con méritos ganados en el campo de batalla y reconocidos por Fernando Belaunde, el presidente de ese entonces, un buen señor diestro en confundir las tareas de gobierno con las artes de la retórica. El capitán Martín gozaba de la confianza de sus superiores porque, desde 1982, había sido un duro militar en la zona de emergencia de Ayacucho, lo que equivale a decir que no solo combatió al sanguinario movimiento terrorista Sendero Luminoso, sino que, además, conocía en silencio episodios acontecidos en la oscuridad de esos años en los cuales, junto a los

abominables actos cometidos por los maoístas de Sendero Luminoso, se anotan los crímenes de patrullas militares contra campesinos y población civil y un centro de torturas en la ciudad de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, conocido como la Casa Rosada, en alusión al color de las paredes del inmueble.

El capitán Martín vivía en el Pentagonito por su adicción al trabajo, un rasgo celebrado por sus superiores porque así tenían, incluidos los fines de semana, a un hombre de confianza capaz de advertirles a tiempo sobre las intempestivas y atroces noticias en aquellos días de feroz guerra interna. Se mantenía soltero porque, según las lecciones aprendidas, así ofrecía menos vulnerabilidad si quería seguir siendo un eficaz miembro del servicio de inteligencia militar; pero también utilizaba esas instalaciones como refugio en precaución de un disparo furtivo a cargo del senderismo, pues era consciente que más de un acto suyo en la zona de emergencia lo había puesto en la mira del enemigo, y aunque siempre usó un seudónimo era un convencido de que la mejor seguridad es aquella que uno se procura.

Una mañana de julio de ese año de 1988, el jefe del SIE, el coronel Osvaldo Hanke Velasco, le informó que debía asumir una misión muy reservada: ser oficial encargado del caso Cayara y el enlace con un informante llamado Vladimiro Montesinos Torres. Ninguno de los dos datos le eran desconocidos. Sabía quién era Montesinos, aunque no lo conocía en persona. Y en cuanto al caso Cayara, lo afectaba personalmente por la muerte de un amigo suyo, el capitán José Arbulú. Además, en aquellas semanas, en el Pentagonito vivían alterados con el caso Cayara por las sucesivas denuncias que revelaban las atrocidades cometidas por efectivos militares.

El encargo de esa mañana era de suma importancia y el capitán Martín Rivas lo percibió de inmediato. Pero solicitó al coronel Hanke una explicación sobre el informante. Todo militar, mucho más un miembro del SIE, estaba enterado del mandato existente desde 1984, prohibiendo el ingreso a toda instalación militar del excapitán Vladimiro Montesinos Torres, dado de baja por espía y procesado por delito de traición a la patria en 1976. Entonces, ¿cómo se explicaba una orden para entrevistarse con tal personaje?

El coronel Hanke no le dio mayor explicación, simplemente le hizo saber que la orden provenía del general Carlos Mauricio, jefe de Estado Mayor, y había que cumplirla. Se trataba de un intercambio de sobres. Montesinos entregaba uno con documentos y recibía otro con dinero y unos vales.

Dos meses después de la matanza de Cayara, en un chifa sin comensales de la avenida San Luis en San Borja, muy cerca del Pentagonito, se efectuó la

primera de las varias reuniones que llegaron a sostener los dos personajes.

Montesinos, que entonces tenía 40 años, arribó a bordo de un Pontiac dorado, el mismo automóvil de una célebre fotografía publicada en setiembre de 1983 por el semanario *Caretas*, en una precursora denuncia sobre quien, en ese entonces, apareció sindicado como autor de una campaña de intrigas contra los jefes militares y acusado de desempeñarse como abogado de narcotraficantes junto a una pequeña red de policías y fiscales.

Aquella vez, el Ejército, ante la campaña desatada por Montesinos, replicó reabriéndole el proceso por traición a la patria y el excapitán huyó al Ecuador para evitar la prisión.⁴

Ahora había retornado, estaba tratando de reubicarse, vestía con pulcritud, pero con evidente modestia, y el dato de una exigua billetera asomó al final de esa charla al pedirle Montesinos a su interlocutor el favor de ingresar con su vehículo al cuartel general y llenar el tanque de combustible con los vales que extrajo, con inútil disimulo, del sobre recibido. Era un enorme vehículo, con un motor de ocho cilindros, utilizado por los generales y que solían ser rematados tras cinco años de uso. Lo había adquirido en uno de esos remates a través de un amigo, y lo usaba para aparentar un vínculo con alguna jerarquía militar. En las siguientes reuniones solicitó el mismo favor.

En esa primera cita no se limitaron al intercambio de sobres. Ninguno de los dos, hombres vinculados a las tareas de inteligencia, iba a dejar pasar la oportunidad de indagar el uno sobre el otro. Al enterarse Montesinos de que el ceñudo capitán que tenía al frente sería en adelante su nexa con los mandos militares, se sintió obligado a dar una explicación sobre su leyenda negra. Esbozó un discurso de inocencia en el cual, más que un relato veraz, se podía advertir la cualidad de un expositor persuasivo. A Martín Rivas no le interesaba la justificación personal del individuo que tenía enfrente, cumplía órdenes, de eso se trataba, pero estaba intrigado por saber cómo había logrado Montesinos que el jefe de Estado Mayor autorizara un contacto con él a pesar de las severas prohibiciones.

El diálogo condujo fácilmente hacia la respuesta por el interés del excapitán en dejar establecida la importancia de su aporte. Dijo conocer al general Mauricio porque fue su instructor en la Escuela Militar. Ambos pertenecían al arma de artillería y ese es un nexa interno que funciona en la estructura militar con la misma eficacia que el vínculo de integrar la misma promoción. Pero, sobre todo, manifestó haber logrado el contacto porque ofrecía una ayuda sustancial en un tema que amenazaba con desestabilizar a los jefes militares: el caso Cayara. Era, dijo, asesor del Fiscal de la Nación, tenía acceso a toda la

investigación, podía obtener copias de los documentos y, de ser necesario, organizar las reuniones entre la superioridad y el magistrado.

En realidad, no era, oficialmente, un asesor, aunque se presentara como tal. Pero, a los efectos prácticos, tenía acceso directo al Fiscal de la Nación, Hugo Denegri, y al Fiscal Supremo, Pedro Méndez Jurado. El nexo lo obtuvo a través de un viejo amigo de la infancia, luego compañero de armas, y retirado, al igual que él, con el grado de capitán, Eloy Villacrez Riquelme.

«Cuando volví al Perú luego de haber estado en Venezuela, Montesinos me buscó –cuenta Villacrez– para pedirme apoyo económico y relaciones. Se los brindé. Ya se había graduado de abogado y pensé que había superado lo del pasado. Un pariente mío que trabajaba en la Fiscalía lo ayudó y allí hizo carrera».⁵

En ese tiempo de enorme inestabilidad política, desmesurada corrupción judicial y autoridades en las listas de muerte del terrorismo, Vladimiro Montesinos le era funcional a los regentes de la Fiscalía por su acceso a información gracias a sus nexos con mandos militares y con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). No había olvidado, y tampoco iba a olvidarlas nunca, las lecciones aprendidas en sus jóvenes años como asistente del general Edgardo Mercado Jarrín, primer ministro de la Junta Militar. Por ellas sabía que buena parte del poder no proviene, necesariamente, de los cargos, sino de las puertas que se pueden abrir, de los contactos establecidos y del vital acceso a la información. En su afán por atar los cabos de su resurgimiento no dejó ninguna tarea de lado, y así, Vladimiro Montesinos, aquel año, además de su ligazón a la Fiscalía, contaba también con otro vínculo importante: estaba incorporado al SIN como colaborador, gracias al ofrecimiento suyo de entregar información sobre integrantes de los grupos terroristas que aparecían en los expedientes fiscales dejados a la deriva en aquella época de crisis y desorden.

El general Edwin Díaz Zevallos, jefe del SIN entre 1986 y 1991, es uno de los que tiene memorioso detalle del lance. «Se vivía fines de 1988, Francisco Loayza Galván, asesor a medio tiempo del SIN, me solicitó recibir a su amigo doctor Vladimiro Montesinos Torres, que disponía de importante información para el Servicio referida a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Acordada la entrevista recibí a Montesinos Torres, quien me manifestó que en su condición de asesor del Fiscal de la Nación conocía la existencia de miles de expedientes abiertos contra personas acusadas de subversión o terrorismo que estaban virtualmente amontonados en la fiscalía y que contenían información de valor para Inteligencia. Acepté tal colaboración, razón por la cual Montesinos fue autorizado para acudir semanalmente al

Servicio, llegando los días jueves con cantidades apreciables de expedientes en su automóvil; los dejaba, y recogía los dejados la semana anterior. Información básica que era cargada en las computadoras del Servicio, previo procesamiento».⁶

Conocedor del juego de las apariencias y la eficacia de exagerar convenientemente un dato nimio, Montesinos se ocupó del detalle de solicitar una simple identificación. «La autorización del aporte de Montesinos –cuenta el general Díaz– demandó otorgarle, a su pedido, un carné del SIN para facilitar su condición de colaborador y contactos con la Fiscalía de la Nación, e inclusive movilidad». Establecido el nexo, el resto era cuestión de persuadir a ambas partes sobre la necesidad de establecer relaciones a través suyo, y así lo hizo. Díaz relata que «a partir de ese momento realicé reuniones de coordinación con el doctor Pedro Méndez Jurado, a varias de las cuales no fue extraño Montesinos, quien incluso llegó a coordinar algunas de ellas».⁷

El excapitán Montesinos, derivado en abogado y convertido en utilitario asesor fiscal, era un convencido de que, en el Perú, el poder real pasa por los militares. Lo había vivido directamente entre 1973 y 1974 como asistente del general Mercado Jarrín, primer ministro de la Junta Militar de Gobierno y comandante general del Ejército, y desde entonces conocía la importancia de transitar por los solemnes salones de Palacio de Gobierno, sabía el significado de estar presente en las reuniones celebradas tras infranqueables puertas, entendía el enorme poder que otorga el tener acceso a documentos secretos y tenía el pleno convencimiento de que, en política, a veces, basta un elemento clave o un pedazo de información vital, para acceder a lugares insospechados.

Estaba profundamente convencido de ello porque lo había vivido. Nadie le podía contar ninguna historia si él, antes de cumplir los treinta años, siendo apenas un capitán, fue atendido en Washington por autoridades del Departamento de Estado y recibido en el cuartel general de la CIA. Un fólter lleno de documentos secretos sobre el armamento adquirido por el Perú a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue la llave.⁸

Aquella vez terminó expulsado del Ejército por espionaje y traición a la patria, se salvó del fusilamiento ordenado en las leyes y consiguió una sentencia benigna de solo dos años disfrazada con cargos de falsedad y desobediencia, porque sus jefes, empezando por el Comandante General, se cuidaron de evitar la vergüenza pública de admitir el embuste de un bisoño edecán, y también evadieron un grave proceso contra ellos porque el listado íntegro del armamento peruano adquirido a la potencia mundial socialista había dejado de ser un secreto en un momento en que las antiguas rencillas con Chile parecían anunciar vientos

de guerra.

De ese tiempo le quedó a Montesinos, además de la nostalgia del poder, una suerte de adicción por el placer de vivir en ambientes más generosos, más estimulantes, más atractivos que los destinados al común de las gentes, a esas gentes que, en algún momento, trasladó por las calles de la ciudad a cambio de unas monedas en su oficio de eventual taxista. Por eso, para evitar el obsequio de vales de gasolina o el dinero prestado o vestir opacos trajes y gastados zapatos, siguió buscando una rendija, apenas una delgada rendija, capaz de franquearle el retorno al perdido esplendor.

Esa rendija bien podía ser el puente que estaba tendiendo con los militares involucrados en el Caso Cayara. En los meses siguientes, continuaron las reuniones con el capitán Santiago Martín Rivas; cada uno, en cada cita, con un sobre bajo el brazo.

«El caso Cayara no fue el único servicio prestado por Montesinos – rememora el ahora mayor Martín—. En ese tiempo había un montón de juicios. No solo por los casos de terrorismo, sino por otros temas de los agentes del SIE. Un problema más o menos común se daba con los agentes a los cuales se les otorgaba una falsa identidad y terminaban teniendo dos mujeres. Usaban su nombre real y tenían una esposa. Los destacaban a provincias con otra identidad por su trabajo de infiltración y se casaban bajo ese nombre falso y sus nuevas mujeres reclamaban la pensión. Los agentes decían: “Me casé por mantener la cubierta y entrar a tal o cual sitio”. Esos problemas de falsedad eran delitos y había que solucionarlos; además, los agentes pedían que les resuelvan el problema para hacer tranquilos su trabajo; y seguir los pasos de terroristas: era un trabajo difícil. Entonces, había que solucionar los inconvenientes y Vladimiro sabía cómo. Solucionaba todo. Le daban los números de expediente, era lo único que pedía, y semanas después se aparecía con los casos archivados. Cerraba las denuncias en las fiscalías y allí terminaba todo. Era eficaz. Con eso ganaba dinero porque cobraba por cada caso y ganaba confianza».

En cada encuentro fue logrando también cierta familiaridad con su enlace y, años después, a pesar de considerarlo su enemigo, Martín Rivas cuenta:

«No fui nunca su amigo como algunos periodistas han inventado, pero tampoco voy a caer en el disparate de los que ahora le niegan toda capacidad. A Montesinos, en ese tiempo, le tuve alguna simpatía. Era hábil, agudo para conversar, sabía ver bajo el agua, y conocía los vacíos legales de los códigos y cómo sacarle la vuelta a las leyes. No era para nada académico, pero sus escritos judiciales eran certeros. Me causaba gracia cuando se miraba las manos. Eran chicas para alguien que había sido militar. Pero se ufanaba de ello. Decía: “Los

hombres talentosos tenemos manos chicas” y citaba ejemplos históricos: Alejandro Magno, Napoleón. Cuando tuvimos alguna confianza, conversábamos sobre la necesidad de combatir a Sendero con lo que habíamos aprendido sobre la guerra de baja intensidad. En ese tiempo, Sendero estaba ganando la guerra y los militares éramos carne de cañón».

Con su activa y eficaz participación en el caso Cayara, Montesinos logró que el expediente se detenga en la Fiscalía de la Nación, evitó un proceso al jefe de la zona de emergencia de Ayacucho, general José Valdivia Dueñas, y permitió que el alto mando militar se alivie de una grave responsabilidad.

Pero obtuvo algo más: que un viejo fantasma suyo se esfumara de una vez. Solicitó, y le fue concedida, la gracia del archivo definitivo del proceso por traición a la patria que pendía sobre él. Nunca fue condenado por ese delito, pero el expediente reabierto en 1983, se mantenía como un fusil apuntándole en previsión de algún movimiento en falso. El excapitán, autor de los delitos de traición a la patria y espionaje, supo pasar la factura y dio un paso importante para allanar el camino a su vieja aspiración de volver a tener presencia en los ámbitos militares. Al quedar sin efecto la prohibición de ingresar a las instalaciones castrenses, la rendija para su retorno se fue ampliando.

LA VIDA SIGUIÓ SU RUMBO. Al final de 1989, el capitán Santiago Enrique Martín Rivas fue enviado a seguir un curso en la Escuela de Inteligencia del Ejército colombiano y el abogado Vladimiro Montesinos Torres continuó vinculado a la Fiscalía de la Nación y al SIN. No se volverían a ver hasta poco más de un año después, cuando una torpeza del azar le entregó a Montesinos el sueño postergado de volver al poder.

A las cuatro de la tarde del domingo 8 de abril de 1990, se supo que entre los candidatos a la presidencia del Perú, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, había apenas una diferencia de tres puntos porcentuales, resultado que obligaba a una segunda vuelta electoral. La sorpresa anunciada por las encuestas se consumó en las ánforas. Uno de los hombres más ilustres en la historia peruana, cuyo talento literario y convicciones personales se reconocían en el mundo entero, estaba en el preámbulo de una derrota electoral a cargo de un desconocido ingeniero de origen japonés, sin más antecedentes que una cuestionada gestión como rector de la Universidad Agraria de La Molina.

Semanas después, el 10 de junio de 1990,⁹ Alberto Fujimori logró la Presidencia de la República. Y aquel proceso electoral fue la coyuntura propicia para que Vladimiro Montesinos, necesitado de vengar viejos rencores y saciar antiguas carencias personales, obtenga lo perseguido los dos años anteriores en

predios militares: un resquicio para acceder al poder.

La punta del ovillo fue una denuncia por delito de defraudación tributaria y contra la fe pública planteada, en el preámbulo de la segunda vuelta, en contra del candidato Fujimori ante la 32ª Fiscalía Penal de Lima. Su autor fue un joven diputado, Fernando Olivera, un personaje que, con el recurso de la denuncia permanente y no siempre fundamentada, llegó a construir una popular y polémica carrera política. Ese abril del 90, su denuncia era cierta: acusó a Fujimori de haber comprado y vendido inmuebles subvaluando el precio a fin de evadir el pago de impuestos.

El objetivo no era necesariamente justiciero porque esa práctica estaba extendida en un país desecho por una espeluznante hiperinflación y degradado por una corrupción de bandoleros, y, sin duda, un buen número de electores padecía del mismo problema. Pero como en política las formalidades se llevan y traen de acuerdo con cada ocasión, en la sorda guerra de denuncias, racismo y guerra religiosa que se instaló, se había encontrado un arma letal para traer abajo al japonés que el electorado, en sus capas más populares, empezaba a acoger con el apelativo del Chino. La denuncia apuntaba a que el fiscal la acoja y solicite a un juez penal abrir instrucción: un candidato con un proceso penal abierto no podía seguir en contienda.

Fujimori, consciente del peligro, buscó ayuda en su mínimo entorno. Un entorno improvisado y con rasgos de comedia, compuesto por tres familiares muy cercanos que asistían sorprendidos a la aparición de abruptos personajes, merodeadores de ocasión que meses después estarían fuera de juego porque Fujimori reveló pronto que su concepto de pragmatismo estaba reñido con la mínima lealtad.

Fue uno de esos súbitos asesores el que recomendó a Montesinos como artífice para solucionar el problema: Francisco Loayza Galván, un sociólogo vinculado a los servicios de inteligencia, profesor en las escuelas militares y amigo de Montesinos desde 1974. Ante el requerimiento de Fujimori, ese abril de 1990, le dijo: «Conozco un abogado, que es justamente nuestro contacto con el SIN. Se llama Vladimiro Montesinos Torres y asesora al Fiscal Supremo en lo penal. Fujimori, entre sorprendido y desconfiado me dijo: “quiero conocerlo personalmente, arregla una reunión lo antes posible”».¹⁰

Ese mismo día, a las 11 de la noche, en casa de Fujimori, en el distrito de La Molina, Montesinos fue enterado del problema. Con gran soltura y convicción, ofreció resolver el problema en tres días y más bien planteó efectuar coordinaciones políticas para la campaña. El testigo de esa cita cuenta que Fujimori desconfió de la autosuficiencia de Montesinos y de su afán por

integrarse al círculo de campaña, y cortó abruptamente la reunión causando el desconcierto del abogado. Tras acompañarlo a la puerta, Loayza le pidió que lo esperase en el auto. Al salir, le explicó que había sobreactuado pero que las cosas se arreglarían si traía resultados.

A los tres días, cumpliendo la promesa efectuada, Montesinos apareció con la solución al problema. Fiel a su estilo de anteponer los vericuetos formales a los asuntos de fondo, había obtenido una resolución fiscal disponiendo un trámite previo de acumulación de pruebas, que obligaba, por lo menos, a tres meses de gestiones, tiempo suficiente para encarar la segunda vuelta. Descargó el arma del oponente con una argucia de abogado taimado. «Tal demostración de eficiencia –cuenta Loayza– sorprendió al ingeniero Fujimori, quien no pudo contener su alegría y por primera vez lo vi sonreír espontáneamente».¹¹

EXISTEN ESCENAS QUE LA HISTORIA jamás alcanza a registrar y, a partir de unas certezas, las deja libradas a la imaginación. ¿Cómo se habrán evaluado de primera impresión, esos dos hombres que desconocían estar iniciando un destino de siameses?

Uno parco, de impenetrable rostro oriental, mirada inexpresiva asomando de dos rendijas con dos pequeñas rocas incrustadas como pupilas, desconfiado desde tiempos ancestrales, formado en un idioma tajante traído por sus padres en un pobre barco de inmigrantes venido desde la aldea japonesa de Kumamoto, obligado, a la vez, a conocer una sintaxis española que nunca pudo aprender del todo.

El otro, locuaz y atildado, mezcla extraña de soldado por obligación paterna y, a la vez, miembro de una familia de abogados, atraído desde siempre por la política, dueño de una cultura específica afincada en las páginas de la geopolítica, el espionaje y la historia política y cultor de la trampa como método, del fin como justificación de los medios y, sobre todo, encandilado por el fulgor del poder.

Si advirtieron diferencias, establecieron dudas o mutuas desconfianzas, cada uno las guardó para sí; ambos se necesitaban. Uno tenía el vehículo; el otro conocía el camino. La ambición era la misma. Ese día, a finales de abril de 1990, al amparo de su eficacia, el abogado Vladimiro Montesinos Torres se convirtió en asesor de Alberto Fujimori, el próximo Presidente de la República del Perú.

Nació una alianza que durante una década se mantuvo bajo los mismos códigos de la eficacia y la necesidad mutua. Llegaron a ser el derecho y el revés de un mismo cargo y, al final del camino, los desmesurados actos de ambos personajes dejaron con una sensación de hecatombe a un desconcertado y

empobrecido país. Al fin y al cabo, no eran virtudes las que los iban a unir. Y ya se sabe, el delito obliga a la complicidad.

Al despuntar la última década del siglo XX, hundida en los escombros de una época de barbarie, la población peruana apenas sobrevivía asfixiada por una hiperinflación que está anotada como una de las tres peores sufridas por la humanidad. En sus calles campeaba la violencia de dos grupos terroristas salvajemente enfrentados a un Ejército y a una Policía que, a su vez, respondían con ciega y brutal represión. La muerte era una lúgubre presencia cotidiana y, en medio de esos despojos, aquellos dos aventureros de la política iniciaron una sociedad.

Desde un inicio, Montesinos entendió cuál debía ser su juego. «Para él, Fujimori era un personaje inculto –ha dicho Loayza– y con una noción política elemental, que había llegado a la posibilidad de ser presidente solo por el azar. Me dijo: “hoy más que nunca tenemos que coparlo, existen todas las posibilidades de hacernos del poder. El Chino está en la calle. ¿Te das cuenta de lo que representa Fujimori? ¿Has visto a su mamá y cómo vive? Si los militares se dan cuenta de lo que realmente es el Chino y su incapacidad para manejar el país, pueden fácilmente ser tentados a un golpe. Debes convencerlo que nosotros sí podemos armarle un gobierno sustentado en las Fuerzas Armadas”». ¹²

Dueño de mayor experiencia, tributario de lecturas políticas, cercano al poder militar, Montesinos captó que la clave estaba en copar a ese ingeniero desprovisto de todo. Pero a Fujimori no le asiste el refugio de la ingenuidad. Algo sabía.

Había sido rector de la Universidad Agraria de La Molina, una politizada universidad, con enorme presencia de una izquierda radicalizada en los tiempos de la subversión, y, desde ese escenario, menor en términos de ejercicio de poder, pero escenario al fin, había logrado acceder a la presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores merced a un manejo bastante hábil que supo combinar el buen uso del silencio con la audaz oferta de alianzas al límite, hasta convertirse en la alternativa consensual de un colectivo con espinosas discrepancias. De modo, que lo asistían nociones básicas de manejo político.

Había también un detalle de Fujimori que Montesinos aún no conocía. O, en todo caso, estaba enterado de una generalidad aparecida en la prensa en marzo del 90, pero nada sabía del trasfondo. Es la historia de *Madame Carmelí*. Los académicos suelen pasar por alto los datos considerados como banales. Sin embargo, ciertos hechos ajenos a la «cultura» explican, a veces con apreciable profundidad, las actitudes, las motivaciones y, sobre todo, los gestos de inaudita audacia de aquellos personajes que, en la historia, asoman desde el anonimato a

protagonismos impensables.

Hacia 1986, la señora Carmela Valenzuela era una mujer de origen campesino que solía visitar a un sobrino suyo, alumno de la Universidad Agraria y ocupante de una modesta habitación en la residencia de estudiantes. El muchacho era discípulo del profesor Alberto Fujimori y un día se le acercó pidiéndole aceptar un regalo que él y su tía querían entregarle. Dijo el alumno que se trataba de una señora conocedora del uso de las hierbas medicinales en la selva de Quillabamba, en el Cusco, y que, además, sabía leer el destino. Fujimori aceptó recibirlos en su oficina, y en esa reunión la mujer le predijo un futuro que después habría de ocurrir palmo a palmo: que ocuparía, uno tras otro, un sillón cada vez más importante hasta llegar al más trascendental en el país. En los años siguientes, Fujimori ocupó el sillón de rector, el sillón de presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y el sillón de la Presidencia de la República.

Fábula o mito, la historia viene desde la intimidad de Fujimori, lo corroboran sus declaraciones públicas asumiendo su afición a consultar sobre el futuro, además de otras pistas sobre la veracidad de la mujer autora del vaticinio. En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, una pesquisa periodística denunció que, en la lista de candidatos a diputados de la agrupación de Fujimori, Cambio 90, aparecía una tal Carmela Valenzuela, una astróloga conocida como *Madame Carmelí*, que años atrás había purgado una condena por narcotráfico. A su vez, el mayor Santiago Martín Rivas recuerda que, en febrero de 1992, le fue encargada una de las varias tareas confidenciales que realizó en los dos primeros años del gobierno fujimorista.

«Me dijeron que tenía que ir al Cusco y desde allí, en un helicóptero de la base militar, llegar hasta la ciudad de Quillabamba para recoger y llevar hasta Lima a una señora llamada Carmela. El mismo Comandante General llamó al Cusco y dijo que me apoyaran, que tenía prioridad para lo que necesitara porque iba en una misión importante. Llegué a Quillabamba, ahí estaba la mujer, pero tuvimos que esperar su carga. Eran sacos con hierbas que venían a lomo de bestia. La espera fue larga y empezaron a llamar por la radio porque desde Lima querían saber cómo iba todo. En la guarnición del Cusco se generó expectativa, querían saber de quién se trataba. Cuando me vieron bajar con una señora y sus hierbas, tuve que decir que era una colaboradora que sabía mucho sobre Sendero Luminoso. Llegamos en un Hércules que aterrizó en Las Palmas y a la señora la dejé en el SIN. Era Madame Carmelí. ¿Para qué la traje? En esos días se tomaba la decisión del autogolpe del cinco de abril».

Lo cierto es que, Fujimori, en más de una ocasión repitió, en privado, la historia del anuncio que una vez le hicieron sobre su destino de gobernante, y

ese detalle le dio una convicción, irracional si se quiere, para ir en pos del cargo apenas este se vislumbró posible.

Montesinos –que en los años siguientes también tendría un astrólogo a mano, apto para la vileza– utilizó otros recursos para cercar a Fujimori. El suyo era un arte maligno que después, ya en el ejercicio del poder, lograría perfeccionar de manera tan asombrosa que, por ejemplo, años más tarde, en la ciudad de Lima, no hubo reunión en la cual los asistentes, además de apagar sus teléfonos celulares, no cumplieran con el rito preventivo de desconectar las baterías por temor a que la conversación «sea interceptada por Montesinos».

Era un maestro del engaño, un personaje que empezó fingiendo poder hasta obtener un desmesurado poder real, un sujeto capaz de construir, a partir de un dato simple, un discurso con envoltura importante porque sabía, con minuciosidad de artesano, el oficio de utilizar las apariencias.

Fue ese talento el que lo llevó a obtener un lugar junto a ese descendiente de japoneses que acababa de conocer. Le hizo saber, apenas en la segunda reunión sostenida, que el primer cuidado a tener estaba vinculado al espionaje dispuesto por el servicio secreto de la Marina. «Le dijo que la antena parabólica que estaba ubicada en el cerro cercano a su vivienda estaba siendo direccionada a su casa y que por esa vía la Marina, cuyo Comandante General estaba con el FREDEMO,¹³ posiblemente estaba recogiendo información. Le recomendó que revise a todo aquel que entre a su casa, sean de Cambio 90 o no, porque podían portar grabadoras o sistemas de escucha, así como sembrar micrófonos en su casa; por eso era importante que solo los tres conociéramos los temas, y que los papeles que él llevaba fueran incinerados una vez explotado su contenido. Fujimori determinó una habitación especial a la que solo teníamos acceso los tres», rememora Loayza.¹⁴

La destreza de Montesinos radicó en hacer sus recomendaciones asumiendo un papel de mensajero del SIN, organización a la que, sin embargo, en ese entonces, pertenecía apenas como un colaborador externo. El interés del candidato Fujimori lo obtuvo acercando informes de los agentes de inteligencia pero, sobre todo, con los artificios de su modo de exponer, con su pericia de hechicero capaz de combinar datos ciertos con datos improbables hasta crear una sensación de hombre informado en detalle y, por lo mismo, necesario, acaso imprescindible.

Si con la explotación de ese rasgo logró una cercanía importante, también es verdad que Montesinos supo explotar sagazmente el lugar en que la historia lo encontró parado. No era nadie en términos de cargo o ubicación profesional, pero tenía acceso a los altos mandos militares y tuvo la fortuna de conocer al

próximo presidente, descubriendo, simultáneamente, la orfandad en que se encontraba. Podía ser, como en efecto lo fue y de manera asombrosa, el eslabón capaz de unir dos debilidades: un Ejército desprestigiado por la derrota que le inflingía la subversión y abrumado con las denuncias por graves violaciones de derechos humanos, y un anónimo político, absolutamente solitario, sin organización partidaria ni base social, urgido por encontrar un respaldo para evitar que se le esfume la lotería entregada por el estado de ánimo de una población empobrecida y desesperada.

Ese nexo, Montesinos lo plasmó a la perfección. Consiguió un rehén, Fujimori, al que luego transformó en cómplice, y consiguió un socio, el Ejército, que esperaba replegado y temeroso las decisiones del sorpresivo Presidente. De pronto, la mesa reacomodaba sus fichas y un jugador oportuno estaba repartiendo juego a favor. De esa alianza surgió, además, una nueva fórmula política, un nuevo esquema por el cual los militares podían ejercer el poder sin estar formalmente en el poder gracias a un civil capaz de fingir, con diestro descaro y suficiente convicción, que la batuta estaba exclusivamente a su cargo.

EL PRIMER PASO FUE AISLAR A FUJIMORI llevándolo a vivir a una instalación militar. Montesinos le hizo saber que había una conjura en marcha destinada a acabar con su vida. Cierto o no, el argumento tuvo la suficiente solidez. Al fin y al cabo, en junio del 90, la violenta polarización a la que había llegado el país y la cruda exposición de las miserias de una sociedad cuyos bandos en lucha enconada llegaron a usar como argumento las diferencias raciales y religiosas, hacía pensar que todo era posible.

Una mañana de junio, «se planeó el operativo para sustraer al ingeniero Fujimori de su seguridad personal, sin que lo percibiese su custodia –relata el entonces jefe del SIN general Edwin Díaz–. Al día siguiente, muy avanzada la mañana recibí la urgente llamada telefónica del general de la Policía Fernando Reyes Roca preocupado por la “desaparición” del ingeniero Alberto Fujimori, de cuya seguridad era responsable».¹⁵

Salió de su casa oculto en la maletera de un automóvil que llegó de visita y cruzó la ciudad llevándolo desde La Molina hasta las instalaciones del Círculo Militar en la avenida Salaverry. El acceso a estas instalaciones se realizó con la anuencia del comandante general del Ejército, general Jorge Zegarra Delgado, y, simultáneamente, se dispuso que efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) custodien el perímetro exterior del local.

Desde ese día, el presidente electo del Perú empezó a despachar en un establecimiento militar, inaugurando una costumbre que perduró durante el

ejercicio de su mandato, primero, en el Pentagonito y, a lo largo de los años, en el local del SIN. Siempre junto a Montesinos.

Una vez instalado Fujimori, su asesor se presentó a iniciar su trabajo, pero un rescoldo de su pasado no se terminaba de apagar: una inapelable guardia militar le impidió el ingreso. El incidente lo incomodó sobremanera y quienes recuerdan la peripecia relatan que exigió el nombre del oficial encargado y amenazó con su inevitable destitución desde la altura de su flamante cargo. Pero el oficial encargado de la custodia tenía órdenes precisas de cerrarle el paso, y con rabieta y amenazas auestas, el flamante asesor presidencial hubo de volver sobre sus pasos.

La orden provino del despacho del jefe del SIE, el coronel Rafael Córdova, un viejo conocido de Vladimiro Montesinos. Por una coincidencia de aquellas con las que el destino se divierte, Córdova, en 1976, cuando ambos eran capitanes, había sido el encargado de arrestar a Montesinos y de asumir la función de instructor en el proceso que terminó con su expulsión del Ejército. De modo que conocía ampliamente su trayectoria, y, como integrante del servicio de inteligencia militar, había seguido paso a paso las actividades del personaje que reaparecía en la palestra.

Por eso, el coronel Córdova, apenas enterado de las cercanías de Montesinos con el electo presidente, ordenó impedir su acceso a una instalación militar siguiendo la orden regada en todas las guarniciones militares en la década de los ochenta. Encargó también un informe confidencial sobre sus antecedentes.

El comisionado a redactar ese informe fue el capitán Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, un oficial que luego ganó luz pública al ser sindicado como jefe administrativo del escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina. Su experiencia como agente del servicio secreto peruano le permitió a Pichilingue vivir en la clandestinidad apenas se expidió, en mayo de 2001, una orden de captura en su contra y, en medio de su vida a salto de mata, recordó puntualmente el episodio del que fue directo protagonista.

«El coronel Córdova me detalló quién era Montesinos y me ordenó que pida en el archivo el expediente y le prepare un resumen de no más de cuatro páginas. Era un expediente de unas setecientas páginas. Estaban todas las andanzas de Vladimiro, su proceso por el delito de traición a la patria, junto a documentos probatorios sobre las relaciones con algunos personajes del narcotráfico, su conexión con la CIA, con abogados y jueces y fiscales; conexiones con algunos políticos. También había documentos sobre la relación de Montesinos con estudios de abogados de prestigio sobre encargos, digamos, complicados.

»Con el expediente en la mano me dirigí a mi oficina y sintetiqué la información. El coronel Córdova leyó el informe verificando algunos datos con los documentos que figuraban en el expediente secreto, me dijo no comentes nada con nadie, cogió su tampón y su pequeño sello con la figura de un zorro y lo estampó al final de la última página autenticando de esa forma el documento. Luego, llamó por el intercomunicador al secretario para que su chofer tuviera listo su vehículo. “Me voy a la oficina del Comandante General –me dijo–, y el expediente se queda conmigo”.

»Después, me contó que el informe sería elevado al presidente Fujimori y que el comando disponía que el SIE se haga cargo de la protección, y así fui destacado a las instalaciones del Círculo Militar del Perú, en Jesús María, con la indicación de que todos los oficiales de permanencia encargados de la seguridad del recinto debíamos cumplir la orden de no permitir el ingreso de Montesinos».

El mayor Pichilingue, grado con el cual fue dado de baja del Ejército, añade: «al día siguiente, volvió nuevamente pero acompañado del señor Francisco Loayza, que sí ingresaba libremente porque era asesor de confianza del Presidente». Pero, a pesar de la intervención de Loayza señalando que Fujimori autorizaba el ingreso, Montesinos tampoco pudo sortear la valla. El oficial exigió una autorización escrita. «Vino la orden escrita –añade Pichilingue–, y no hubo más remedio que dejarlo pasar. Se nos comunicó que, a partir de esa fecha, por orden del Presidente, el señor Montesinos formaba parte del grupo de asesores y, por lo tanto, tenía autorización para ingresar a cualquier hora».

El cauteloso coronel Córdova desconocía que su precavida orden era extemporánea. Ya en abril, Montesinos había entregado a Fujimori copia de la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar archivando el proceso en su contra. Fue por eso que la autorización escrita para su ingreso se expidió sin demora alguna. Aquella recompensa por el caso Cayara le dio sus dividendos. Montesinos siempre supo estar un paso adelante y ese instinto lo acompañó hasta el día en que, saturado de poder, olvidó controlar su entorno y se desplomó con estrépito.

En ese entonces, aquella autorización firmada por Fujimori fue mucho más que la simpleza de un permiso ocasional. El espía que vendió secretos de Estado, que fue degradado y expulsado con deshonra en 1976, retornaba, catorce años después, con el aval de las más altas autoridades del poder civil y militar. Creían sumar a un eficiente y astuto colaborador, pero, en realidad, empezaba una nueva etapa para las fuerzas armadas y la política peruana.

DE CASUALIDADES ESTÁ HECHA la historia de las naciones y sus personajes notables proceden, las más de las veces, del albur. El azar fue también el origen de un paradigma seguido con ferviente admiración por Montesinos: J. Edgar Hoover, el siniestro jefe del FBI, cuya increíble y perversa vigencia en siete administraciones fue trascendental en la vida de los Estados Unidos de Norteamérica.

Hoover llegó a las alturas de su inamovible cargo a partir de una casual conversación entre dos funcionarios a bordo de un trolebús. Uno de ellos recomendó a «un joven abogado» para su ingreso al *Bureau of Investigation*. Así, Hoover pasó de clasificar correspondencia en una oficinilla del Departamento de Justicia a una entidad a cuya jefatura logró arribar con las artes de la intriga y la infidencia, hasta convertirla en el poderoso *Federal Bureau of Investigation*, el legendario FBI, desde el cual, durante cuarenta y siete años, entre 1924 y 1971, tuvo bajo chantaje a siete presidentes norteamericanos cuyas intimidades, debilidades, negocios y perversiones conocía utilizando el espionaje y la escucha telefónica.

La referencia a J. Edgar Hoover tiene un sentido. El periodismo peruano, a veces aficionado a la metáfora que descalifica antes que a la información rigurosa, bautizó a Montesinos con el adjetivo más ruidoso y más a la mano: el Rasputín del régimen fujimorista. Vladimiro reaccionó con una demanda judicial, no tanto por sentirse insultado sino por el equívoco. Su modelo no era el monje ruso, aquel campesino rústico y alucinado cuyas extrañas dotes parasicológicas influyeron en el descalabro final del zarismo. Era otro el personaje favorito de Montesinos. Su maestro, si cabe, el espejo en que se miraba, era alguien muy distinto: Edgar Hoover, un hombrecillo cuya biografía lo registra como hijo de un padre con problemas psiquiátricos y una madre capturada por los ritos de la religión católica. El hijo de esa pareja, que siempre firmó como J. Edgar Hoover, declaró, desde adolescente, admiración por un libro titulado *El Evangelio de Judas Iscariote* y satisfacción porque en el *Día de los Inocentes* lograba «engañar a un montón de personas». Una vez graduado como abogado, desnudó dos rasgos notorios: la obsesión por esconder su solitaria vida privada y la obsesión por trabajar sin descanso siete días a la semana. Logró fundar lo que en los años treinta se consideró como «la organización más grande que jamás haya creado una mente humana», el FBI, cuyo enjambre de agentes le permitió acopiar temibles expedientes atiborrados de detalles y documentos con los secretos más privados de políticos, autoridades, líderes de opinión, periodistas, artistas y todo el espectro social que pudiese serle útil para chantajear, amenazar, difamar o atemorizar. Supo usar ciertos adelantos

disponibles para horadar toda protección a la intimidad, y por medio de escuchas clandestinas, intervenciones a líneas telefónicas, fisgonas fotografías, implacables seguimientos, informantes remunerados, hurtos documentales y todo cuanto su imaginación pudiese alcanzarle, construyó un poder que lo mantuvo vigente casi cinco décadas y lo puso por encima de cargos y jerarquías. Hoover solo admitía, y como un par, al Presidente.

Aquel fue el personaje de inspiración para Vladimiro Montesinos Torres. A fuerza de leer con atención de discípulo todo libro sobre el avieso Hoover, supo que en cualquier orden de la vida, y más en política, la información era el arma imbatible. Conocer todo, virtudes y defectos, grandezas y miserias, fortalezas y debilidades, aspiraciones y necesidades en el momento oportuno, y contar con frondosos archivos, perfiles psicológicos y registros en audio y video, significaba tener el arma más eficaz: la información. De esa admiración y de las lecciones obtenidas en las biografías de Hoover, surgió la frase con la cual Montesinos gustaba autocalificarse: «Soy un hombre de la comunidad de inteligencia». No cultivó la lectura como un placer intelectual, sino como una fuente de información. Ese era el valor que le daba y de allí provenía el impulso para su afición de lector.

En los años noventa, un culto funcionario de la embajada peruana en Washington recibió el encargo de mantenerlo al tanto de las novedades bibliográficas acordes a su gusto. Entre esos envíos en valija diplomática, llegó a su despacho un libro que lo encandiló: *Oficial y Confidencial, La vida secreta de J. Edgar Hoover*,¹⁶ una completa, precisa y minuciosa biografía del jefe del FBI, en cuyas páginas se pueden encontrar impresionantes similitudes con las acciones emprendidas por Montesinos mientras tuvo a su cargo el control de los servicios de inteligencia del Perú.

La verdad es que la lectura de ese libro entrega, desde la sorpresa, una fotocopia de hábitos pérfidos y métodos infames usados por el asesor presidencial. Tan solo una apurada enumeración pone al descubierto que las artes ladinas de Montesinos no fueron hallazgos de su imaginación, sino una recopilación de las destrezas más perversas de su modelo. El jefe del FBI «inventó» la estrategia de convertirse en indispensable averiguando todo cuanto necesitaba saber el mandatario de turno; usó el estilo de hacer referencia pública del Presidente asumiendo un papel de sumisión; no reconocía la autoridad de ministros y solo admitía la autoridad presidencial; recurrió al soborno para lograr ventajas políticas; usó a la prensa para destruir honras con abyectas campañas de difamación o entregando información secreta a «medios amigos»; utilizó la oficina de impuestos para chantajear y perseguir opositores; tuvo miles de

agentes dedicados a la escucha telefónica y a la recopilación de secretos; recibió dinero de la mafia mientras declaraba públicamente su decisión de perseguir a sus miembros. Cada uno de estos puntos fue usado con la fidelidad de un calco por el socio de Fujimori.

HASTA EL AÑO 1990, el SIN era apenas una instancia burocrática arrinconada en destartaladas oficinas conocidas con el burlón apelativo de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), porque ser destinado a esa unidad significaba tener pocas o nulas posibilidades de ascenso. Sin embargo, todo cambió con el arribo de Montesinos.

A los dos años se construyó, con diseño específico, un magnífico y moderno edificio con amplias oficinas; enormes salas de reunión; despacho y vivienda para el Presidente; otro tanto para el asesor; numerosas oficinas para el trabajo de analistas; ambientes para grabar todo cuanto se transmitía en la radio y televisión; salas con cámaras ocultas para registrar en video las visitas, los pactos y los pagos a quienes admitían ingresar en el circuito de la corrupción; y restaurante, comedor y bar para reuniones de alto nivel y para el personal. En el sótano, celdas de castigo y ambientes para ilegales reclusiones de enemigos del régimen o para cómplices caídos en desgracia. Y una enorme legión de agentes, hombres y mujeres, diseminados por todo el país.

Ningún peruano, con alguna «importancia», tuvo vida privada y ningún secreto fue realmente un secreto. Con sofisticados aparatos de escucha telefónica y una colmena de agentes transcribiendo las conversaciones, los intrusos oídos del SIN conocían miles de conversaciones profesionales y personales aún antes que algunos de sus destinatarios. Cuando el sistema creció incontenible se instalaron circuitos televisivos en zonas claves de la ciudad, cuya señal llegaba en tiempo real a un panel de pantallas. También se instalaron equipos de interceptación de faxes para capturar las ondas lanzadas al espacio y se adiestraron a criollos *hackers* para tratar de saquear correos electrónicos confidenciales. A la par, centenares de vigilantes husmeaban en lugares insospechados, apelando al disfraz de diversos oficios, sembrando micrófonos en oficinas y domicilios, captando discrepancias políticas y también intimidades de todo tipo. Se llegó a instalar una red de informantes en varios hoteles limeños con el pérfido pago de un salario adicional a los propios empleados o el ingreso de nuevos trabajadores con el encargo de reportar determinadas visitas. Huéspedes ingresados sigilosamente terminaban espíados sin misericordia y un reporte o una copia de la factura o el registro de alojamiento con el nombre de la pareja de ocasión, salía junto con los visitantes para el posterior chantaje al espíado.

En sus diez años de gestión, así como tuvo cómplices insospechados en un abanico inverosímil, desde aparentes políticos de oposición, ávidos publicistas, sacerdotes, prostitutas o gentes de los bajos fondos, varios empresarios, «que siempre invierten en el gendarme», le hicieron la corte.

Pero todo eso se fue dando poco a poco. Lo asombroso es que el hilo de la madeja que lo llevó al poder absoluto, fue su papel inicial como nexo entre Fujimori y los militares. Desde esa frágil posición, Montesinos, con paciencia inicial, llegó a dotarse de un territorio propio desde el cual, con el enorme aval de la derrota al terrorismo y la desactivación de un intento de golpe de Estado, pasó a controlar las fuerzas armadas y policiales en su totalidad.

Lo hizo con plena autoridad, al punto que el escalafón de méritos dejó de existir como argumento para disponer los ascensos. Formó una cúpula arrogante nacida de la amistad y cohesionada con los favores de una desmesurada corrupción, e impuso en los principales cargos a sus compañeros de promoción sin importar méritos o capacidades.

En realidad, vengó su expulsión del Ejército convirtiéndose en un comandante general de facto. En algún rincón de su imaginario, el capitán expulsado decidió culminar su carrera con el máximo cargo posible. Existe un memorable registro filmico, hallado tras su caída, que así lo confirma. El 19 de marzo de 1999 se realizó una ceremonia en la cual todos los oficiales militares, de general a capitán, firman una carta de sujeción en favor de Vladimiro Montesinos reconociendo su autoridad. Fujimori no asistió ni estuvo enterado y su asesor presidió la ceremonia con adusto gesto militar e impecable traje de estadista en la sombra. El narcisismo suele vengar una humillación. En este caso, la de haber sido dado de baja. Los historiadores no deberían olvidar la inestimable ayuda que la sicología puede brindar para entender los delirantes actos de quienes tienen predilección por la bambolla del poder.

Pero esos hechos estaban aún por acontecer en los años siguientes. En aquel junio de 1990, Montesinos vislumbró su tarea inmediata: o encontraba una manera de hacerse indispensable o, en algún momento, prescindían de él. Con tal de mantener a flote su precaria embarcación, el novel gobernante dio, de entrada, contundentes muestras de estar dispuesto a lanzar fuera de borda a cuanto tripulante fuese necesario. Era una cuestión de sobrevivencia que Fujimori manejaba con intuición y frialdad orientales. Su aliado electoral, aquel amplio movimiento evangélico que había desarrollado un trabajo de hormiga obteniendo eficaces adhesiones puerta a puerta, quedó fuera de juego apenas resultó electo. Poco después, marginó, sin detenerse en explicación alguna, a su equipo económico, abastecedor de las ideas populistas de su campaña, mientras mudaba

su discurso, sin mover una ceja, hacia propuestas liberales, las mismas que había cuestionado con fiereza semanas antes.

Al ver la hosquedad de esas decisiones, Montesinos tuvo más en claro el perfil del personaje con el cual necesitaba establecer una relación permanente. Supo tejer sus hilos. «De entrada, empezó con las formas –cuenta un exministro del régimen–: nunca cambió el usted mientras otros se lanzaban al tuteo. Para Montesinos, fue siempre “ingeniero Fujimori” o “señor Presidente”, nunca “Alberto”». Incluso, en los años posteriores cuando ya tenían fechorías compartidas, jamás dejaron el trato formal y distante que imponía Fujimori y que desde el primer instante supo captar Montesinos.

Contaba, además, con una ventaja: la orientación concedida por sus lecturas. «Algo sabía sobre el ejército prusiano –afirma Santiago Martín–, y le gustaba repetir que Otto von Bismarck había gobernado sin necesidad de ser gobernante». Era una referencia a los dos monarcas rusos que siguieron la partitura puesta por el militar, no por razón de aprecio sino por razón de necesidad. Esa era otra clave. Montesinos sabía que en política no juegan los afectos sino las necesidades, los intereses y, sobre todo, las interdependencias. Y le sumó a las lecciones aprendidas, su audaz determinación, favorecida por una ausencia de criterios morales.

En su ambición por afirmarse en el nuevo poder que se establecía, además de su aporte en ideas y contactos, tuvo, desde un inicio, una utilísima arma: accedió a un secreto del nuevo presidente y supo generar una complicidad forzosa, una dependencia inevitable.

¿Qué llegó a conocer Vladimiro Montesinos? La versión más misteriosa, controvertida y, acaso, más cercana a la verdad habla de la nacionalidad de Alberto Fujimori. ¿Nació en el Japón y llegó al Perú en el Bokuro Maru, la modesta embarcación de la cual descendió Mutsue, su madre, declarando tener dos hijos, según documentos de la época secuestrados luego desde el gobierno? ¿O efectivamente, como él gustaba decir amparado en su documento de identidad, era un predestinado que nació en una humilde chacra limeña el 28 de julio de 1938, el mismo día del aniversario patrio?

El refugio otorgado por el Japón a la caída del expresidente peruano, le añade sospecha de verdad a un asunto nunca aclarado, plagado de versiones contradictorias, documentos adulterados, archivos puestos a resguardo, y, sobre todo, un tema blindado por un hermético silencio oficial. Además, toda indagación sería terminada por el apasionamiento de investigadores periodísticos que durante años sostuvieron con fervor que Fujimori era japonés, y, sin embargo, una vez enterados del cobijo concedido por el Japón, terminaron

proclamando, con igual énfasis, que era peruano, creyendo encontrar así un argumento de apuro para su extradición.

La fuga encubierta de Fujimori ocurrió un 13 de noviembre de 2000. Partió en visita oficial a una cumbre de gobernantes en Brunei –con las bodegas del avión presidencial, se supo luego, abarrotadas por un equipaje inusual–. La gira tuvo una escala no programada en Malasia y concluyó, sorpresivamente, en Tokio, desde donde envió, la mañana del domingo 19 de noviembre, su renuncia a la presidencia de la república sin más ceremonia que el despacho de un prosaico fax. En los días siguientes, el gobierno japonés le concedió con prontitud –¿o le refrendó?– la nacionalidad japonesa, y Fujimori pasó a vivir con holgura en un cómodo departamento de un residencial barrio de Tokio abonando un alquiler de diez mil dólares mensuales. Al tener la condición de súbdito del imperio japonés, quedó a salvo de un proceso de extradición. Este refugio providencial es el que permite atribuir veracidad a la leyenda aquella de que Montesinos, desde la campaña electoral del 90, conoció el secreto de la nacionalidad de Fujimori.

Un testimonio directo asevera que antes de conocer a Fujimori, y cuando todavía Vargas Llosa era el candidato favorito, Montesinos buscó tomar contacto con el FREDEMO, la agrupación que parecía destinada a la victoria. «Montesinos mencionó más de una vez –afirma Martín Rivas– que por no darle una cita, Vargas Llosa no llegó a ser presidente. Contaba que la había solicitado pero que su secretaria, una señora Cillóniz, no le confirmó nunca nada. Según él, la gente que hacía en el SIN los perfiles de los candidatos descubrió que era japonés, pero no le dieron mayor importancia porque era un candidato chiquito, un chinito que había estado en la Universidad Agraria y había tenido un programita en Canal 7. Esos papeles los consiguió Montesinos y se los quiso ofrecer al FREDEMO, pero luego terminó vinculado a Fujimori».

No existe una certeza total, pero los indicios son convincentes en subrayar que el inconveniente descubierto y explotado por Montesinos fue ese, el de la nacionalidad de Alberto Kenya Fujimori Fujimori. El semanario *Caretas* en un informe del 24 de julio de 1997 resumió, entre otros puntos, que «en la ficha de extranjería de 1934, Mutsue Fujimori, la madre del Presidente, declara bajo “Antecedentes al ingresar al país” dos hijos menores de 10 años. El microfilme de esa ficha ya no está en el archivo general de Migraciones». Añade la revista que «en el acta de bautizo de Alberto Fujimori hay una alteración visible en el espacio donde se consigna el lugar de nacimiento».¹⁷ Finalmente, en diciembre de 2001, el congresista Daniel Estrada, presidente de una comisión investigadora del Congreso Peruano, informó que en el interrogatorio realizado a Vladimiro

Montesinos aconteció el siguiente diálogo: «¿Usted sabía que era japonés? Sí. ¿Y por qué no lo denunció? Porque creía que era una persona fuerte y capaz de vencer al terrorismo».¹⁸

Si Montesinos supo exactamente el estatus de la nacionalidad de Fujimori, su lugar y fecha de nacimiento reales, es asunto que, al menos por ahora, no se conoce con exactitud. Hay, sí, evidencias muy sugerentes y las refrenda también el hecho de que fue el único de sus colaboradores iniciales que se mantuvo y ejerció funciones en los diez años de gobierno fujimorista. Lo concreto es que la existencia de algún secreto aunó la interdependencia que los ensambló desde el principio. Luego, se acrecentó por eficiencia en las labores del asesor para, finalmente, cimentarse en la sociedad para la corrupción y el enriquecimiento ilícito que llegaron a establecer conforme avanzó el tiempo.

Sin embargo, en el incierto año 90, aun si ese secreto no hubiese existido, de igual modo Montesinos tenía en sus manos a Fujimori porque le aportaba, precisamente, lo que necesitaba para sostenerse: respaldo militar y acceso a los servicios de inteligencia.

Al arrimar la hojarasca de esos años, asoma otro dato que tiene un valor en sí mismo: la relación de Vladimiro Montesinos con la CIA. Este vínculo le otorgó una cuota de suma importancia en el naciente poder, un soporte que la sagacidad de Fujimori no pasó por alto.

Hoy se sabe que, en la campaña electoral del 90, la CIA acudió en sorprendente apoyo del candidato Fujimori. Si bien Mario Vargas Llosa, con su ilustrada prédica liberal, aparecía como un candidato afín a los intereses norteamericanos, en realidad, la pasión puesta por el escritor en la divulgación de sus ideas lo convirtió, a los ojos yanquis, en un riesgo para sus intereses porque podía generar una polarización tal que un país sumido ya en una guerra interna, terminase en una incontrolable explosión civil beneficiosa para la agrupación maoísta Sendero Luminoso. Asimismo, las convicciones personales y éticas de Vargas Llosa negaban cualquier posibilidad de negociación política de las que suele imponer Estados Unidos en la región. Es un intelectual y un hombre de convicciones, no un político, y, entonces, no iba a ser un aliado en los términos que acostumbra la administración norteamericana. En cambio, a Montesinos lo conocían, entendía los códigos de la «comunidad de inteligencia», era un animal político y tenía el acceso directo al súbito candidato huérfano de todo y, por lo mismo, capaz de todo con tal de perdurar.

Documentos desclasificados por el Departamento de Estado en el año 2002, confirman la relación entre la CIA y Montesinos. Pero, además, en cuanto a lo sucedido en aquella campaña electoral, existe por lo menos una importante

prueba concreta. El 30 de mayo de 1990, el diario aprista *Hoy* publicó un artículo bajo el título «Soberbia y obstinación de Mario Vargas Llosa teme Estados Unidos». Al toparse con el texto, Vargas Llosa creyó «que era uno de los embustes que fraguaba la prensa oficialista –luego el escritor continúa–: Cuál no sería mi sorpresa cuando, el 4 de junio, el embajador de Estados Unidos vino a darme incómodas explicaciones sobre aquel texto. ¿Entonces, no era fraguado? El embajador Anthony Quainton me confesó que era auténtico. Se trataba de la opinión de la CIA, no de la Embajada ni la del Departamento de Estado, y venía a decírmelo».¹⁹

Con los aportes alcanzados en aquella campaña electoral, que no fueron pocos: solución de la denuncia por evasión de impuestos, respaldo de la fuerza militar, seguridad personal, información de los servicios de inteligencia, más un secreto compartido, Montesinos quedó listo para la ambición postergada durante tantos años. Atrás quedó el espía de los años setenta, el excapitán expulsado del Ejército, el taxista que estudiaba leyes, el oscuro abogado de narcotraficantes, el asesor informal de la Fiscalía de la Nación. Estaba listo para empezar a dominar, desde la sombra, desde el silencio, todo cuanto le iba a ser posible dominar en los años venideros.

Con él marchaba el ganador de la lotería que les abrió de par en par las puertas de Palacio de Gobierno. Tenía también su propia historia y sus propias ambiciones. Había crecido soportando el zarandeo de oficios de Naoichi Fujimori, el padre inmigrante: agricultor al norte de Lima, sastre en el pequeño poblado de Huacho, nuevamente agricultor en el borde urbano de la ciudad limeña, luego vulcanizador y, finalmente, florista.

Cuando la familia, por fin, se afincó en un pobrísimo conventillo de la avenida Grau, en un vecindario acorralado por las difíciles calles del barrio de La Victoria, Alberto Fujimori aprendió las claves de una tara nacional: la viveza criolla. Es un código de supervivencia que convierte en supuesto atributo a la picardía, a la capacidad de engaño, a la deliberada incongruencia entre el decir y el hacer.

De esas asignaturas se empapó Alberto Fujimori mientras repartía en una bicicleta los ramos de flores del humilde negocio familiar. No fue producto de la casualidad que, en la campaña electoral que lo encumbró, su primera frase de titular en los diarios fuese: «No soy ningún caído del palto» en alusión a que podía ser un desconocido pero no un tonto. Acto seguido, eludió un debate con Mario Vargas Llosa apelando a una excusa falsa: intoxicación con bacalao, en aquella delirante Semana Santa del 90 con procesiones politizadas y un Cardenal clamando a sus feligreses por votos que nunca arribaron para impedir el ascenso

del japonés. Casi nadie percibió el detalle de la afición de Fujimori por el embuste y cuando asomó sirvió más bien para la sonrisa: desde el inicio de su mandato, se hizo célebre la frase: «Qué buena yuca, ingeniero», un modo procaz y populachero de celebrar el engaño. Ese atributo, si así se puede nombrar, le fue útil para encubrir el pertinaz saqueo de centenares de millones de dólares mientras declaraba su horror por la corrupción, a punto tal que, hacia 1998, en el año en que la hacienda pública ya estaba siendo saqueada a manos llenas, el país fue sede de un congreso mundial anticorrupción.

Nadie sabe, y su inquebrantable intimidación tampoco concederá el dato, cuál fue la razón que lo condujo, desde 1977, hacia la política. Aquel año ya aspiraba a cargos directivos en la Universidad Agraria donde era profesor. La inclinación no deja de tener un timbre peculiar porque el oficio de la política es ajeno a los predios de la colonia japonesa y, en cierto modo, el arribo de orientales a la política peruana se dio recién, de manera notoria, en el gobierno de Fujimori. Pero el hijo de Naoichi y Mutsue fue también, en ese sentido, un personaje inusual. Su inteligencia, su pasmosa frialdad de razonamiento y una aguda capacidad de observación, le permitían manejarse con ideas si no originales por lo menos diferentes, inesperadas. Esa fue la base de su exitoso distanciamiento de lo que llamó, con eficaz frase, «los políticos tradicionales».

Como político, Fujimori unió a su habilidad un aprendizaje de impresionante rapidez. Usó un estilo signado por la atención a las necesidades de los sectores más pobres, un poco por convicción y otro tanto porque allí estaban los votos necesarios para un proyecto que, junto a Montesinos, habían fijado enveinte años de vigencia. Llegaron a la mitad del plazo con el prodigio de lograr, incluso en el ocaso, índices de aprobación popular que otros presidentes no obtuvieron ni en sus mejores momentos. «Robó, pero trabajó» el cínico lema que identifica a los gobernantes de los años noventa que, con el dinero de las privatizaciones alentadas por el dogma liberal, hicieron obra popular y fortuna personal, también incluye a Fujimori. Se distinguió por trabajar de manera incansable y la obra pública de sus dos gobiernos es extensa y útil. La soledad que lo envolvía le dio la ventaja de la adicción al trabajo para ahuyentar el silencio de la ausencia familiar y el desierto de la amistad por la descomunal desconfianza que, junto a la deslealtad, son los rasgos notorios de su personalidad.

Si se hubiese marchado a los cinco años de su primer gobierno, tras sofocar al terrorismo y reflotar al país de los escombros económicos, habrían existido indudables elogios. Pero, al hurgar en los despojos de su ciclo, queda claro que tuvo motivaciones mayores de poder y riqueza. Una rigurosa discreción,

heredada de sus ancestros, le permitió esfumar las huellas de su sostenida rapiña y lo alejó también de los desbordes exhibicionistas de su siamés Montesinos. Sin embargo, los diez años de su cuñado Víctor Aritomi como inamovible embajador en el Japón y los ciento doce viajes de su hermana Rosa entre Lima y Tokio son el rastro de un traslado constante de dinero en efectivo ingresado a un sistema bancario ajeno a las pesquisas occidentales. En su encierro, Montesinos confesó las remesas mensuales que en efectivo le enviaba a Palacio de Gobierno, y eso explica, entre tantas cosas, que con un sueldo oficial que no llegaba a los mil dólares, dio el salto de matricular a sus hijos en universidades norteamericanas después de haber sido el partero en cada uno de los cuatro nacimientos en la casa sin recursos para pagar una clínica. En su último viaje como gobernante, cuando solo él sabía que no habría retorno, las bodegas del avión presidencial estaban repletas y hay quien dice que la escala no prevista en Malasia, en el vuelo en fuga hacia el Japón, fue para desembarcar lingotes de oro.

Sin duda, no fue un político tradicional. Logró una empatía singular con las gentes a punto tal que recién en su séptimo año de gobierno apareció la primera encuesta en la que su gestión era desaprobada; y, aún después de su debacle, siguió apareciendo con índices superiores a los del gobernante que lo sucedió. Tuvo como costumbre almorzar y descansar entre las dos y las cinco de la tarde para trabajar hasta cerca del amanecer mientras las esposas de los ministros, sobresaltadas por los timbrazos del teléfono a las tres o cuatro de la madrugada, exigían a sus maridos la renuncia al cargo o el divorcio inmediato. En los numerosos viajes que realizó era capaz de dormir profundamente en medio del alboroto de un helicóptero y despertar con enorme brío para un trajín capaz de desvanecer a funcionarios más jóvenes que él. Tuvo como distracción predilecta la pesca en hermosos parajes escondidos de la selva, y quienes lo acompañaron en esas excursiones cuentan que alguna habilidad culinaria lo asistía. Desde su divorcio, acontecido en 1992, las versiones de romances ocultos coincidieron en afirmar una predilección por los generosos muslos femeninos. Nunca habló de tú con nadie y, aún en la broma, mantuvo la distancia del usted, tal vez así se consideraba a salvo de la debilidad de las confesiones personales.

Tampoco fue un político tradicional en la preservación del botín: no existe la casa en Miami, la cuenta bancaria en Suiza o en Las Bahamas, la casa de verano en una playa exclusiva o los inmuebles y regalos de lujo a las amantes. Su medida oriental, su capacidad de silencio y su acceso a ignotos aliados japoneses parecen tener eficacia en la impunidad económica alcanzada, y en eso se distingue del disparate de su cofrade Montesinos apabullado por evidencias de

flagrantes videos grabados que lo tienen como protagonista de exorbitantes entregas de dinero a políticos y empresarios.

Con Montesinos, en cambio, ocurrió lo que acontece tras un descalabro político: lo oculto quedó al descubierto. Tenía mil doscientas camisas Christian Dior, su marca favorita; quinientos trajes, la mayoría de confección italiana y francesa; casi un centenar de zapatos; más de una decena de relojes Rolex, Patek Philippe y Piaget con incrustaciones de diamantes; centenares de corbatas de seda. Sin embargo, y este es el detalle: en toda una década apareció en público apenas unas siete veces.

Cuando se rasga la intimidad, la luz se cuele por todo lado: su esposa se enteró a través de la prensa que durante años tuvo una amante, y la amante hubo de admitir que no lo había sido en exclusiva porque una hermana suya gozó también del regalo de un inmueble en un barrio exclusivo. Aparecieron sus lujosas casas en zonas acaudaladas de la ciudad, todas recargadas, sin más gusto que el gusto de gastar dinero, como si el catálogo de las tiendas se hubiese vaciado en esos aposentos para otorgarle a su propietario la sensación de tener todo cuanto se puede comprar. Pero el sello más personal se halló tras unos muros rústicos incapaces de captar la curiosidad de quienes transitaron por años a la altura de Playa Arica, en la Panamericana Sur.

Como extraído del guion de una película, el sueño del espía, del hombre clandestino, se materializó en un búnker edificado sobre un terreno de más de dos mil metros cuadrados con puertas y paredes blindadas y una construcción subterránea. En apariencia era una casa de playa, pero en su interior estaba el derroche de un reyezuelo: amplios salones y dormitorios atiborrados de alfombras, cortinas y muebles finos, costosos utensilios y pretenciosos adornos. Bajo tierra, se encontró un completo departamento para su descanso con un dormitorio similar al de un hotel de cinco estrellas, un comedor de lujo, una piscina climatizada y un sistema de pasadizos secretos para poder huir. La salida de uno de esos túneles consistía en empujar una loza disimulada por una inofensiva jardinera con un macetero liviano de flores. Junto a las cocheras para los autos blindados, estaban los ambientes apartados para el sueño en turnos de su horda de guardaespaldas.

Lo descrito es una simpleza, si cabe, al lado de un inventario mayor. Dinero: una cifra imposible de precisar con exactitud que algunos contabilizan en mil millones de dólares saqueados al Estado peruano y ocultos en bancos y paraísos financieros, de los cuales apenas un leve porcentaje se ha detectado. Poder: jefe absoluto, en la sombra, de las fuerzas armadas y policiales y los servicios secretos; y, también en la sombra, copresidente de la República del

Perú y jefe del Poder Judicial. *Mr. Solution* en el afectuoso apelativo del gobierno norteamericano que, a través de la CIA, apoyó sus actividades hasta la ruptura en el año 2000 cuando Montesinos pretendió establecer estrategias peligrosas a espaldas del imperio. Espionaje: durante una década buscó emular al Dios omnipresente del que hablan los creyentes y se entregó a ese delirio con ayuda de sofisticados aparatos israelíes de inaudita eficacia y una legión de agentes a su servicio dedicados a interceptar comunicaciones de telefonía fija y celular, a sembrar micrófonos en cuanto ambiente se pueda imaginar y a grabar conversaciones en computadoras capaces de registrar decenas de conversaciones en simultáneo. Se sirvió también de conexiones computarizadas con acceso a los movimientos migratorios o a las demandas judiciales apenas eran presentadas en los tribunales; tuvo también una vasta y cómplice red de informantes compuesta por empresarios, militares, políticos, jueces, fiscales, abogados, periodistas, artistas, *vedettes*, prostitutas, mozos, *barmen*, cuidadores de autos y hasta el servicio doméstico en casas de opositores, además de su organización de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional que, en algún momento, llegó a ser un ejército propio de tres mil personas. Con toda esa parafernalia, unida a sus célebres grabaciones en video que registraban subrepticamente a quienes conferenciaban con él, logró confinar la palabra intimidad a las silenciosas páginas del diccionario.

Al final del camino, no pudo escapar a esa ironía que se nombra como destino y fue a dar a una cárcel construida a partir de su perversa imaginación. En la Base Naval de la Marina de Guerra, a orillas del frío mar del Callao, rodeada por un campo minado, cerco de púas electrificado, custodios con furiosos perros y vigías armados en los techos, se alza un presidio de máxima seguridad. Es un conjunto de diez opresivas celdas de concreto capaces de resistir un ataque aéreo y selladas con pesadas puertas de acero aptas para contener explosiones. La luz y los servicios higiénicos no están para nada al alcance del preso porque se accionan desde fuera. Una tarima de cemento cubierta por un colchón hace las veces de cama y una línea horizontal como la boca de un buzón, a mitad de la puerta, sirve para el pase de la comida. Al fondo, un reducido patio acoge el solitario paseo de los reclusos, cabecillas del terrorismo peruano, a razón de media hora cada día y en turnos individuales.

Ese encierro de ataúd hizo capitular a Abimael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, y toda su ferocidad de ideólogo asesino no le alcanzó para soportar el espanto de ese alojamiento. Al otro jefe terrorista, Víctor Polay Campos, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), lo sumió en una escalofriante depresión que durante años le impidió levantarse del camastro de

cemento para usar la media hora de caminata.

En junio de 2001, tras estar ocho meses prófugo, Vladimiro Montesinos Torres, a los 56 años de edad, fue confinado a esa prisión edificada bajo sus órdenes cuando, desde la cima del poder, se vanagloriaba de haber confinado a los cabecillas del terrorismo en una fortaleza sin salida.

El perfil de ambos es, sin duda, peculiar, sugerente y hasta atractivo, como ocurre con las biografías malignas. Son personajes llenos de matices y misterios y su influencia sobre la vida de los peruanos, incluso la que asomó después de su descalabro, es innegable. Fujimori y Montesinos tuvieron una década para cuanto devaneo asomó en su desatino de creerse invulnerables. Y en su sociedad jugaron a los mensajes ocultos que ningún analista supo descifrar, como aquella célebre entrevista televisiva, tras la liberación de los rehenes en la casa del embajador japonés, en la que se presentaron vestidos exactamente igual, incluidas las corbatas. Fue un modo de mostrarse como los dos presidentes, uno hacia el país; el otro hacia los militares. Si lograron una vigencia de diez años, que les permitió atesorar cifras grotescas para un país pobre y plagado de urgencias como el Perú, se debe a un hecho que les confirió el apoyo y la confianza mayoritaria: haber terminado con la pesadilla del terrorismo, esa infame enajenación que durante más de una década convirtió la vida cotidiana en un martirio de espanto y dolor. Ese logro fue el argumento central para su legitimación y, durante años, toda crítica, oposición o cuestionamiento se contestó con el mérito de la proeza antiterrorista, y las gentes, agradecidas por el portento, así lo aceptaron.

Sin embargo, ese pedestal que Fujimori y Montesinos usaron para su vigencia tiene en su base secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Es una historia oculta que les generó momentos de enorme zozobra, pero con enorme afán y con el recurso avieso de trasladar las responsabilidades a escalones menores eludieron sus responsabilidades directas.

En su ayuda acudió, de manera involuntaria, el apasionamiento de periodistas y políticos que organizaron débiles investigaciones y dieron apresurada tribuna a contradictorios testimonios de personajes de quinto orden. Ese flanco fue aprovechado por Fujimori y Montesinos para filtrar versiones destinadas a fijar la responsabilidad exclusiva en militares de rango menor que estuvieron bajo sus órdenes. También les sirvió para esconder lo central: que ambos aprobaron la estrategia para combatir al terrorismo con los recursos de la llamada guerra de baja intensidad o guerra clandestina, que es la forma como los gobiernos denominan lo que, en rigor, es terrorismo de Estado. En síntesis: decidieron combatir al terrorismo con los usos del terrorismo. Producto de esa

estrategia surgió el llamado Grupo Colina, un clandestino escuadrón militar autorizado desde la más alta instancia del Gobierno.

Conocer esa historia requería de testimonios claves para terminar con el misterio que les sirvió de protección a los dos personajes que gobernaron el Perú en la década del 90.

³ Semanario *Caretas*, 16 de mayo de 1988.

⁴ Su autoexilio duró más de dos años, en Ecuador y Argentina. Estadías que generan sospechas por sugestivas ayudas. En Quito se alojó en casa del presidente de la Corte Suprema de Justicia y su pedido de asilo fue avalado por el magistrado y por un general del Ejército ecuatoriano. Existe una pregunta nunca aclarada: ¿Había participado Montesinos, pocos años antes, en un operativo desarrollado por un agente de la CIA apellidado Hamilton y que consistió en la entrega de documentos sobre la capacidad militar peruana en la conflictiva frontera norte? En Buenos Aires, Montesinos Torres obtuvo estatus de residente mediante la resolución del 12 de setiembre de 1984 expedida por el jefe de Admisión de Extranjeros, Jorge Ignacio Bunge. Tuvo el DNI 92.566.821 y fijó domicilio en Av. Córdoba 652, piso 1, Dpto. F. Existe la hipótesis de ayuda otorgada por algún miembro o funcionario de la ex Junta Militar de Gobierno argentino. La relación se habría establecido entre 1974 y 1976 cuando Montesinos era asistente personal del primer ministro y ministro de Guerra, general Edgardo Mercado Jarrín.

⁵ Entrevista en el diario *El Comercio*, 29 de abril de 2001. Eloy Villacrez a los 13 años de edad compartió las aulas escolares con Montesinos en el Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa, luego se reencontraron en la Escuela Militar de Chorrillos, para después trabajar con la Junta Militar de Gobierno presidida por el general Juan Velasco Alvarado. A la caída de este, en 1975, Villacrez se marchó a Venezuela, se vinculó con el Movimiento al Socialismo (MAS) que encabezaba José Vicente Rangel, quien luego llegaría a ser canciller del presidente Hugo Chávez, personaje con el cual Villacrez también mantuvo vínculos en los años 90.

⁶ Diario *La República*, 15 de noviembre de 2000. Fragmento de las memorias inéditas del general Edwin Díaz Zevallos.

⁷ Ídem.

⁸ El 5 de setiembre de 1976, en el vuelo 974 de Braniff, Montesinos viajó a Washington. En el expediente 385-77 sobre el proceso que le fue seguido en el fuero militar, un fax de la Embajada de los Estados Unidos informa que viajó a sostener reuniones con “oficiales de Estado, Defensa, del Consejo de Seguridad Nacional, así como con la CIA”. También fue recibido por el teniente general Gordon Summer, presidente de la Junta Interamericana de Defensa. El 21 de setiembre, a su retorno al Perú, Montesinos fue detenido.

⁹ Segunda vuelta electoral 1990: Alberto Fujimori 62.4, Mario Vargas Llosa 37.6.

¹⁰ Francisco Loayza Galván: *Montesinos, el rostro oscuro del poder en el Perú*, sin pie de imprenta ni fecha de edición. La edición citada circuló en el Perú el año 2001.

¹¹ Ídem.

¹² Loayza, op. cit.

¹³ Sigla del Frente Democrático que encabezó el candidato Mario Vargas Llosa.

¹⁴ Loayza op. cit.

¹⁵ Diario *La República*, 16 de noviembre de 2000, fragmento de las memorias del general Edwin Díaz Zevallos, segunda entrega.

¹⁶ Anthony Summers: *Oficial and Confidencial. The Secret Life of J. Edgar Hoover*, G.P. Putnam's Son, New York, 1993. La versión en español fue publicada con el mismo título por Editorial Anagrama, Barcelona 1995.

¹⁷ Asimismo, el sociólogo Francisco Loayza Galván afirma que Montesinos le confió el año 90: “El Chino no es peruano y eso es peligroso. Yo estaba preocupado con las labores propias de la campaña y no le presté la debida atención. Pero puedo asegurar que ese es un secreto que él (Fujimori) jamás le confiaría a Vladimiro Montesinos. Estoy seguro que más bien fue él quien se apropió de una prueba y la ha sabido usar, como lo hace con otras personas, para extorsionarlo”.

¹⁸ Comisión Investigadora de la Influencia Irregular sobre el Poder Judicial y otros poderes del Estado, conocida también como Comisión Estrada. Diciembre de 2001.

¹⁹ Mario Vargas Llosa: *El pez en el agua*, Ed. Seix Barral 1993, p. 513.

VOCES CLANDESTINAS

*Mire, Vallejo lo dijo mejor que nadie:
«Hace un frío teórico y práctico».
Y así también la crisis. Y el Perú es un país
con muchas leyes pero sin ley.*

ALFREDO BRYCE

EL PERIODISTA Y EL GENERAL se conocían desde varios años atrás, cuando El General era un comandante a puertas de un ascenso y juntos hicieron un viaje de zozobra entre Huanta y Huamanga, a bordo de una camioneta con dos soldados heridos y los escasos cincuenta kilómetros de distancia duraron una eternidad. Fue en el tiempo de las emboscadas de Sendero Luminoso a patrullas militares como cosa de cada día. La ansiedad compartida en esa noche de incertidumbre les generó un curioso sentimiento de fraternidad y, en los años siguientes, mantuvieron contacto, se dispensaron ayudas mutuas y, sobre todo, establecieron una respetuosa relación en la cual el periodista nunca exigió información que El General no estuviese dispuesto a dar, y este jamás acudió con un pedido incómodo. A pesar de ello, largos meses de persuasión no lograron convencer al militar para sostener una reunión sobre un tema que había decidido proteger con la armadura del silencio. Solo la intervención providencial de una novia de sus años de cadete, consiguió establecer la cita en su casa de playa, al sur de Lima.

En una cómoda terraza frente al mar, guarecidos por una sombrilla, con la compañía de una atenta libreta de apuntes y sendos vasos de vodka cargados de hielo, ambos se embarcaron en una charla de confianza cuyo silencio inicial fue roto por El General con un tono socarrón:

«Ustedes viven persiguiendo las noticias, pero las mandan al archivo antes de saber qué pasó realmente. ¿Te acuerdas del viaje del Chino a los Estados Unidos en junio del 90? Salió en todos lados, ¿no es cierto? Y fue todo muy favorable, ¿no es verdad? Pero ¿sabes lo que trajo de ese viaje? Dos decisiones con respaldo norteamericano, eso trajo el Chino de ese viaje. El Perú se caía a pedazos. Había juntado los dos peores problemas que pueden existir: crisis económica y terrorismo. No era juego. Ni para nosotros ni para los gringos. Para ellos era fundamental recomponer el Perú porque sino la región se iba al demonio. ¿Te imaginas lo que habría sido que un grupo maoísta tome el poder o siga teniendo en jaque a un tercer gobierno democrático con la gente muriéndose de hambre y sin empleo? Se iba a la mierda el programa liberal. Argentina, Brasil y, sobre todo, Chile ya estaban en la onda. Perú era clave. Además, está a mitad de continente y es puerta de acceso a todo lado. ¿Qué vino en agosto, a los pocos días con Fujimori como presidente? ¿Te acuerdas? El ajuste, ¿no es cierto? El ministro de Economía diciendo: “Dios nos ayude” y adelante con el programa. Doscientos, trescientos, cuatrocientos por ciento de aumento de precios. ¿Te acuerdas de ese día? Carajo, a los oficinistas la plata del menú apenas les alcanzó para comer un plátano con un paquetito de galletas. A nosotros nos dieron orden de inamovilidad porque se esperaba un desborde. Pero

no pasó nada. La gente reaccionó tranquila, pensando que no quedaba otra; así es este país, muy extraño.

»Esa fue la parte pública. En privado estuvo la otra decisión, la que no se podía anunciar, la que tenía que prepararse y ejecutarse en silencio. ¿Me entiendes? Un nuevo plan en serio para detener de una vez al terrorismo. Una nueva estrategia. Ten en cuenta algo: para mí la política gringa está muy bien resumida en una frase famosa sobre Pinochet: “Pinochet es un gran hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.²⁰ Eso es. Y el 90 los Estados Unidos encontraron a su hijo de puta, mejor dicho, a sus hijos de puta, el Chino y Vladimiro».

Antes de seguir, El General eligió las palabras siguientes paseando la mirada sobre el oleaje iluminado por un orondo sol de verano, y, con una media sonrisa, continuó:

«Ustedes creen que las cosas son siempre dos más dos, ¿no es así? Las cosas son más jodidas y en una guerra interna no hay dos más dos que valga. Esa segunda decisión, tomada con aval gringo, fue entrar a la guerra de baja intensidad, era la única manera. ¿Cómo arreglaron sus problemas Chile y Argentina? ¿A ver, dime, de qué modo? Fajándose con los comunistas. Me matas uno, te mato dos. Y sobre esa base rearmaron su economía. Así funcionó. No había y hasta ahora no hay otro método contra el terrorismo. Bueno o malo, no es el tema; así era. Y así es. Es una guerra. No se hizo antes porque nunca hubo apoyo político. Ni con Belaunde ni con Alan García, ellos cuidaban su imagen y no les sirvió de nada porque avanzó el terrorismo, hubo excesos de ambas partes, se fue a la mierda la economía, la gente vivía asustada, y para esos presidentes no quedó ningún aplauso. ¿O no fue así? El Chino aceptó tomar la decisión política. Ese es el punto clave que nunca lo va a querer reconocer. No le quedaba otra. Si quería seguir siendo presidente en ese país destruido y acorralado, tenía que seguir estrategias que ya habían funcionado. Eso fue lo que trajo de su primer viaje a los Estados Unidos, las dos decisiones: aplicar un programa económico liberal y aplicar la guerra de baja intensidad contra el terrorismo. Esas decisiones lo sostuvieron en el cargo. Con la situación que vivía el país, ¿tú crees que Fujimori hubiese podido decidir por sí solo? Por favor, por eso digo que ustedes archivan las noticias y no averiguan más. Después vino eso de culpar al Grupo Colina de todo; pasaba algo y... Colina lo hizo. ¿Y los jefes? ¿Y los que decidieron la política a seguir? ¿Dos mayores del Ejército podían hacer las cosas por sí solos, porque se les ocurría? ¿Dos mayores podían disponer de ayuda logística y decidir acciones de ese nivel, con esa repercusión política? ¡Por favor!

»Todo país que aplicó la guerra de baja intensidad, tomó las decisiones en

los más altos niveles y con anuencia de los Estados Unidos. ¿A qué fue Kissinger a la Argentina en 1978? ¿A ver el Mundial? ¿Porque le encantaba el fútbol? ¡Por Dios! Además, por un instante imaginemos que esos dos mayores del Grupo Colina tomaron la decisión, ¿okey?; se fueron por la libre, ¿de acuerdo? Entonces, con el lío político que se armó, al día siguiente los habrían encanado, los mostraban a todo el país y no los defendían, ¿o no? ¿Por qué sacó los tanques el general Hermoza Ríos? ¿Por qué se dio una ley de amnistía? ¿Por los del Grupo Colina únicamente? ¿Porque eran sus hijitos? No, por favor, discúlpame, pero ese es el problema del periodismo cuando no va al fondo de las cosas. Era una política de Estado, una decisión tomada desde el inicio de ese gobierno, una decisión necesaria y respaldada por los Estados Unidos. Por eso lo sostuvieron a Fujimori, incluso después del autogolpe, porque garantizaba un programa liberal y un enfrentamiento total con el terrorismo. Después de diez años de derrotas, había, por fin, alguien dispuesto a asumir la decisión política para ir adelante con una guerra de baja intensidad. No había otro modo de pelear contra los terroristas. O les aplicas sus propios métodos o te siguen matando a escondidas. Y vienen los periodistas a joder con que el Grupo Colina para aquí y para allá, y lo único que han hecho es ayudar a que los responsables principales, los que tomaron las decisiones y las órdenes, estén liberados de ese problema, esperando salir de la cárcel para gozar de sus millones o, como Fujimori, que ya está gozando, allá en el Japón».

La vehemencia de sus palabras, lo puso de pie, se acercó a la baranda de madera, y fijó la mirada en las olas leves, teñidas de sol. El periodista avanzó con la cizaña de un comentario. «¿Sabe una cosa, General? Da la sensación de que está defendiendo al Grupo Colina». El hombre giró, golpeó las manos juntándolas como en una imploración, volvió a su silla y luego de sorber un trago largo, siguió sin variar el énfasis.

«Por favor, ese no es el punto. Hubo más de un grupo operativo, en eso consiste una guerra de baja intensidad, en armar grupos clandestinos de acuerdo a cada situación y para misiones específicas. Es cierto que el equipo más estable, el más operativo fue el Grupo Colina, pero las responsabilidades de ellos tienen que verse en la proporción que les corresponda. Lo que yo sostengo es que por cargar únicamente contra esa gente se olvida y se protege a los directos responsables, a los ladrones que luego de que militares y policías pusimos en orden el país acabando con Sendero Luminoso y el MRTA, aprovecharon ese prestigio, aprovecharon la paz lograda, para dedicarse a robar.

»Ese es el punto. ¿Quiénes tomaron las decisiones? ¿Quiénes ordenaron seguir ese camino? ¿Por qué nadie se ha querido ocupar de eso realmente? No

vengan a joder con que unos agentes del SIE eran capaces de todo y tenían libertad para hacer todo. El Ejército es jerárquico y un mayor no mueve un dedo si la orden no viene de arriba, y en esos temas las órdenes tienen que venir de bien arriba porque sin decisión política no se mueve nada. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas era Fujimori, y no porque lo diga la Constitución, sino porque él ejerció ese cargo públicamente y al interior de las Fuerzas Armadas, así fue. Y tomó decisiones con su comandante general Hermoza Ríos, y con su otro jefe, Vladimiro, que sabía muy bien de qué se trataba. Él se lo hizo entender al Chino. Los grupos operativos, como Colina, eran eso: o-pe-ra-ti-vos. No eran de-ci-so-rios. ¿Queda claro o no?»

Es un militar particular, al menos para los estándares peruanos. No por el énfasis con que habla, tampoco por los temas que conoce, sino por su afición a la lectura. En el pequeño anaquel de la sala hay algunos títulos sobre historia política, y en su domicilio tiene una biblioteca suficiente sobre el tema. Por el impulso de esa afición, siguió abriendo el cajón del silencio.

«En todo esto había un punto fuera de discusión: o Fujimori hacía las alianzas que necesitaba o terminaba fuera. A la CIA desde un inicio le interesó que Fujimori sea presidente porque a él, que no tenía nada, le podían imponer políticas determinadas.

¿Crees que después de los problemas que hubo con el Plan Cóndor en Chile y Argentina, Vargas Llosa iba a autorizar una lucha clandestina contra el terrorismo? Para nada. Nos íbamos a la guerra civil. Y Estados Unidos no quería eso. Y el Chino aprendía bien rápido. ¿Hablaste alguna vez con él? ¿Te diste cuenta que mirando con esos ojitos inexpresivos estaba sacando cuenta de todo? Además, ¿qué le quedaba si en ese momento era cascarita? Como político la supo hacer: en poquito tiempo tuvo a los Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas de su lado. Qué le interesaba no tener partido. Por eso salía a cada rato a recalcar que no le debía nada a nadie y los dejó colgados al APRA y a los evangélicos que lo habían apoyado. No tenía poder, solo tenía un cargo pero en pocas semanas consiguió el poder, con apoyo interno y externo. No era ningún cojudo, y estaba dispuesto a pagar la factura que giraba Estados Unidos: aplicar un programa económico liberal y barrer con el terrorismo. ¿Nos entendemos?

»Ahora, el otro dato es que el resultado de ese viaje le fue favorable a Montesinos. Agarró más vuelo. ¿Sabes por qué? Porque conocía el tema. Había estudiado en la Escuela de las Américas y de allí han salido todos los militares que en América Latina han combatido contra el terrorismo; ya lo conocían en la CIA, es decir, sabía cómo era el manejo y al tener la confianza del Presidente podía articular un plan de trabajo con las Fuerzas Armadas. Así empezó la cosa,

no con Barrios Altos ni con La Cantuta. Esas son dos graves consecuencias de una política que se siguió. La prensa ha sido tan monotemática que terminó por hacer creer que todo el problema del combate al terrorismo se reduce a dos casos: Barrios Altos y La Cantuta. ¿Nunca te has planteado la posibilidad de que tanto énfasis en solo dos casos haya sido promovido desde arriba para protegerse y para que no se conozcan muchos otros casos? Ahí está, entonces los periodistas también tienen su cuota de responsabilidad por caer en ese juego y sacar reportajes, por ejemplo, a ese agente Bazán, un pobre agentito diciendo que escuchaba las reuniones de Fujimori y Montesinos. Por favor. ¿Cómo escuchaba? ¿Era invisible? ¿Lo invitaban? ¿Era Rambo? Con esa falta de criterio lo único que han hecho es ayudar al Chino y a Montesinos, ¿o no?

»A estas alturas lo que le queda al que quiera saber la verdad es interpretar, volver a mirar las cosas, sacar las noticias del archivo y pensarlas y analizarlas y allí se van a encontrar revelaciones y... sí, sí, por supuesto, encontrar testimonios pero de fondo, claves. ¿Quieres saber en qué consiste la guerra de baja intensidad? Pregúntale al mayor Martín Rivas, él conoce el tema, Montesinos lo trajo de Colombia por eso. ¿Ya te hicieron el contacto con Martín?».

AL CORRER LEVEMENTE la cortina del ventanal, el periodista vio un patrullero aparcado frente al edificio. Alcanzó a distinguir a dos policías conversando al interior del vehículo y el sobresalto que tuvo le impidió fijar otros detalles. Después se lo explicaron, y, en los días posteriores, también llegó a saber la rutina de ese pequeño departamento –una sala comedor, dos habitaciones, un baño, una cocina y un patiecito con tendal– cuyos focos, a pesar de la penumbra, permanecían apagados durante el día para evitar visitas inesperadas imposibles de ser atendidas por el único habitante del inmueble. Recién en la noche, cuando los otros residentes retornaban del trabajo, las luces se encendían. Otro tanto ocurría con el teléfono. Durante el día ningún timbrado recibía la atención de una respuesta, salvo que se cumpliera con una clave establecida: tres timbrados seguidos de una interrupción y luego un nuevo ingreso de la llamada. Entonces, el único habitante del día, con voz mordida, cortante, decía: «¿Quién habla?».

Esa tarde, el periodista ingresó a ese departamento sin saber dónde se encontraba. Una hora antes, de acuerdo con las indicaciones, esperó en la esquina de las avenidas Arequipa y Santa Cruz la aparición de una camioneta 4x4 con lunas polarizadas cuya puerta trasera se abrió desde el interior mientras una voz le indicaba subir. En los asientos delanteros iban dos hombres. El que manejaba era fornido, más bien gordo, con enormes bigotes y tenía encendido a todo volumen un disco de Carlos Santana cuyos acordes acompañaba con entusiasmo golpeando las manos en el timón. El otro, de contextura media, tenía

un teléfono móvil en la mano y daba las indicaciones. Durante las idas y vueltas en la camioneta, Santana no dejó de tocar, y aparte de una llamada dando aviso de que el contacto se había producido más un par de frases intercambiadas entre los dos sujetos, no se habló nada durante el desfigurado trayecto. A poco de llegar, y a pesar de que las lunas no dejaban mayor visión, el periodista recibió la indicación de echarse sobre el asiento mientras el guía hacía una llamada.

Ingresaron a un estacionamiento en un sótano y, antes de apearse del vehículo, el encargado de las instrucciones le ordenó caminar con la mirada en el piso. El gordo se quedó al volante embebido en su música.

No tropezaron con nadie en el breve tránsito hasta el departamento cuya puerta abrió el guía y, mientras este ingresaba a una habitación, el periodista describió ligeramente la cortina para tratar de ubicar la zona, pero se encontró con el patrullero estacionado apenas a unos metros.

Instantes después apareció el mayor del Ejército Santiago Enrique Martín Rivas, en ese momento el hombre más buscado del país. Vestía un pantalón negro, camisa celeste y, afeitado y peinado, lucía esa pulcritud en serie de los militares. Saludó con un apretón de manos y, de inmediato, indicó tomar asiento en la mesa del comedor cubierta por un mantel floreado y alejada del ventanal. Hizo un preámbulo sobre los antecedentes de la reunión y las razones por las que accedía a las sucesivas entrevistas que se iban a desarrollar en adelante. El militar sostuvo que el silencio le había causado mucho daño y que el rumbo de los acontecimientos lo convenció de la necesidad de dar a conocer su versión de los hechos.

El periodista, al verlo receptivo, aprovechó para solucionar su intranquilidad por la presencia del coche policial. Con una media sonrisa, Martín Rivas contestó: «El enemigo también enseña; Abimael Guzmán se escondía frente al cuartel general del Ejército; usted sabe, no existe la costumbre de buscar en los lugares obvios».

Luego, en medio de la conversación ya establecida, el mayor percibió que el periodista miraba su rostro con cierta insistencia, como si buscara algo: ¿una señal?, ¿un gesto? Avezado observador, el militar, cayó en la cuenta y dijo con ironía: «¿Quiere ver mi ceja?, ¿está buscando la cicatriz?». Con una sonrisa guasona hizo una señal autorizando una revisión de ambas cejas: «Mire, busque, no hay ninguna cicatriz». Acto seguido, se puso de pie para hacer notar su pequeña estatura, y separando con las dos manos las solapas de la camisa, dijo, siempre irónico: «¿A usted le parece que este es un cuello de buey?, y mi voz ¿le parece una voz imperial?». El periodista lo miró asintiendo: ni cuello de buey ni voz estentórea, más bien el físico usual de alguien que mide menos de un metro

setenta.

«Ese es el periodismo ficción –prosiguió el militar– un género muy usado en este país». Era una referencia a una difundida publicación describiéndolo con «cuello de buey», «voz imperial» e hiriéndose una ceja con un letrero de metal en el escenario de la matanza de Barrios Altos, una de las gravísimas acusaciones por las que eligió estar prófugo.

Así inició la charla mostrando su agrado por la esgrima verbal. En adelante, más de una vez, en las diversas entrevistas, tuvo una actitud provocadora, basada en sus aptitudes para polemizar. Se consideraba, y no le faltaba razón, un buen analista político. Había aprendido a combinar las lecturas militares –los clásicos usuales: Clausewitz y Sun Tzu– con la política y la historia. Lo caracterizaba una memoria de elefante capaz de recordar fechas, datos y nombres con sorprendente precisión, y más de una vez dijo con fastidio: «Yo no soy ese asesino que han dibujado, ustedes, los periodistas; soy un militar que peleó en una guerra y cumplió con su deber, ¿o usted cree que a la guerra se va a celebrar misa?». El mismo argumento utilizado por los militares sudamericanos implicados en graves episodios de violaciones a los derechos humanos. En esa primera reunión, tras algunas vueltas, empezó su relato.

«Me fui al extranjero a final de los ochentas a estudiar en la Escuela de Inteligencia de Colombia. Quedé en primer lugar en un curso con veinticuatro oficiales de distintos países, segundo quedó un argentino –lo dice acentuando el detalle–. Por eso, el ejército colombiano me planteó quedarme como instructor invitado y mi comando me autorizó; pero, cuando asumió Fujimori, ahí no más, a los cinco meses, en diciembre, me ordenaron volver. No me gustó. Pensé que se trataba de una de dos: o me reintegraban al servicio, y estaba harto porque los años anteriores me los había pasado en las zonas de emergencia; o me llamaban para darme de baja. ¿Por qué de baja? Porque el Ejército había apoyado la candidatura de Vargas Llosa, y yo, como integrante del SIE, trabajé en el plan antsubversivo que se le propuso al FREDEMO».

–¿No es algo paranoico pensar que lo iban a dar de baja –lo interrumpió el periodista–, si usted dice que destacó en un curso internacional?

–¿Quién le ha dicho que en el Perú los méritos se respetan? –contestó el militar con el ceño fruncido–, aquí no valen nada, en este país todos utilizan a todos para sacar ventajas.

–¿Quién lo trajo de Colombia? –continuó el periodista.

Entonces Martin Rivas prosiguió con su relato:

–Esa fue la sorpresa para mí. En el aeropuerto me esperaban agentes del SIN y me dijeron que tenían orden de llevarme al local de Las Palmas donde “el

doctor Vladimiro Montesinos”. Eso me llamó la atención porque mi obligación era reportarme a mi comando.

»Llegamos y, efectivamente, en una oficina pequeña, en el viejo edificio, lo encuentro a Montesinos. De entrada me quitó el tuteo con el que nos tratábamos en años anteriores; pasó a ser el doctor y yo el mayor; estableció rápidamente su nivel de autoridad. Me explicó que era asesor directo del Presidente de la República y que estaba a cargo de diseñar todo el plan de lucha antiterrorista. Me dijo: “¿Se acuerda de las conversaciones que teníamos sobre la necesidad de usar la guerra silenciosa para derrotar al terrorismo? Por eso lo he traído de Colombia, ahora hay luz verde para trabajar en serio”. Cuando dijo “lo he traído de Colombia”, pensé y quién carajo es este para tomar decisiones sobre un militar, por eso le dije: “Disculpe, la orden de volver la recibí de mis superiores”. “Sí –me dijo–, fue a mi pedido y se coordinó conmigo, la idea es que usted trabaje aquí en el SIN”. Me llamó la atención su propuesta y no me gustaron sus aires de autoridad. Después de esa reunión, me fui de inmediato a la Comandancia General a reportarme como corresponde porque esa es la norma, todo soldado que sale o regresa tiene que despedirse y reportarse con su comando. Allí me explicaron la cercanía de Montesinos con Fujimori y me dijeron que se estaba organizando una estrategia para dar lucha frontal a los terroristas usando la guerra de baja intensidad. Para definir mi situación le dije al general Hermoza Ríos, que en ese momento era jefe de Estado Mayor y al que yo conocía de antes: “Mi general, ¿cómo voy a ir al SIN?, soy un militar en actividad, he combatido contra Ecuador en Falso Paquisha, he luchado contra Sendero. ¿Cómo voy a trabajar a las órdenes de un excapitán expulsado del Ejército?”».

–Mayor –volvió a interrumpir el periodista–, más allá de que Montesinos no era un cuadro militar, ¿por qué se negaba usted si eran amigos y ya habían trabajado juntos en años anteriores?

–Mire, señor periodista –replicó Martín con fastidio–, ese tema lo quiero aclarar de entrada porque es otra de las invenciones del periodismo y de los políticos que no investigan pero hablan. Nunca fui amigo de Montesinos. Lo conocí por el caso Cayara, por una orden superior que yo cumplí. Puedo decir, como mucho, que alguna simpatía le tuve porque era buen conversador, pero jamás desarrollamos ninguna amistad; y en el tiempo de Fujimori, nunca estuve a órdenes de Montesinos, jamás trabajé para el SIN. Yo fui miembro del SIE, del Servicio de Inteligencia del Ejército.

–¿No tuvo ninguna relación con Montesinos a pesar de que este lo hizo volver de Colombia?

–Entiéndame bien –contesta sin esconder su molestia–, una cosa es que mis superiores, aceptando el pedido de Montesinos, me ordenaran volver, y otra muy distinta es que yo haya trabajado bajo sus órdenes. Yo trabajé con el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINTE, el general Juan Rivero Lazo.

–Jerárquicamente fue así, pero tuvo relación, contactos, participación en los planes dirigidos o coordinados por Montesinos, ¿no es cierto?

–Eso no lo niego, pero aclaro: por orden de mi comando. Asistía a las reuniones de planificación en el SIN, pero a nombre del Ejército, enviado por mis superiores. Además, en ese tiempo yo tenía acceso directo a los más altos mandos por mis conocimientos sobre guerra antiterrorista. Esa historia de mi amistad con Montesinos es falsa, y no lo digo ahora cuando nadie reconoce cercanías con él, eso viene de mucho antes. Soy un militar que combatió al terrorismo porque ese es el trabajo que se me asignó. Yo no he estado en política y menos en corrupción. Y le digo algo más. En una ocasión, me indicaron que vaya a la oficina de Montesinos porque necesitaba hablar conmigo. Me hizo una pregunta, quería saber de manera directa si era verdad que cuando empezó sus funciones hubo un plan para asesinarlo promovido por el anterior jefe del SIE, el coronel Córdova, y si yo fui el encargado de esa misión. Le dije que tuviera cuidado con las versiones de sus sobones y que se acordara que yo no estuve en el Perú en ese momento, pero «que si hubiese recibido la orden de liquidarlo, no estaríamos hablando en esa oficina». Esa era mi relación con Montesinos».

LA CONVOCATORIA DE SANTIAGO MARTIN RIVAS en diciembre de 1990 no fue producto de ninguna casualidad. Al interior del Ejército tenía prestigio como combatiente de Sendero Luminoso, pero, además, se le reconocían conocimientos sobre guerra no convencional o guerra de baja intensidad, es decir, sobre el modo clandestino de combatir al terrorismo con los mismos códigos del terror.

Si bien uno de los más capaces, Martin, como es obvio, no era el único. Los personajes que aquel año tomaron a su cargo la organización de un nuevo esquema de lucha contra la subversión tenían entre sí una afinidad: habían sido preparados, en distintas épocas, en la Escuela de las Américas, el cuestionado centro de formación militar creado por los Estados Unidos para dar instrucción especializada en el combate contra el terrorismo a los militares de los ejércitos latinoamericanos. El tiempo demostró que sus alumnos terminaban involucrados, indefectiblemente, en dantescos casos de violaciones de derechos humanos.

Entre las diversas críticas a la Escuela de las Américas, destaca un informe de la revista *Newsweek*, publicado el 9 de agosto de 1993 bajo el título

«Dirigiendo una escuela para dictadores». En él se hace notar que entre los alumnos de la Escuela de las Américas se cuentan funestos personajes como el panameño Manuel Antonio Noriega, el argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, el boliviano Hugo Banzer o el peruano Vladimiro Montesinos, dentro de una extensa lista de militares que, en diversos países del centro y del sur de América, terminaron vinculados a casos de desaparición forzada de personas, matanzas de población civil, ejecuciones extrajudiciales de subversivos y uso de fosas clandestinas. En cada caso, afirma *Newsweek*, «Washington ignoró el deshonesto comportamiento de sus egresados cuando el enemigo del hemisferio era el comunismo».²¹

El Perú no fue una excepción. En 1990, bajo las órdenes de Alberto Fujimori –jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú, función que asumió tanto en lo formal como en los hechos–, varios egresados de la Escuela de las Américas trabajaron en el diseño de una estrategia de combate al terrorismo: Vladimiro Montesinos Torres, convertido en jefe de facto de los servicios secretos; el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, que ostentó la comandancia general del Ejército entre 1991 y 1998; el general Juan Rivero Lazo, jefe de la DINTE; y los capitanes, luego ascendidos a mayores, Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, ambos miembros del SIE. Todos utilizaron la formación obtenida en la mencionada escuela para diseñar y ejecutar una estrategia de guerra clandestina que incluyó la creación del escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina, así como otros grupos operativos hasta hoy desconocidos.

En uno de los varios testimonios escritos que le entregó el mayor Carlos Pichilingue al periodista, se encuentra una información muy concreta:

*En el año 1980, por convenio del Estado peruano con los Estados Unidos de Norteamérica, un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos fuimos becados para asistir a un curso en la Escuela de las Américas, Fort Gulick, zona del canal de Panamá. Antes de viajar, los cadetes tuvimos que pasar por una selección completa tipo comandos. En el lugar recibimos instrucción de guerra contrasubversiva, combate de baja intensidad, en la zona de la selva caribeña; siendo la instrucción recibida en aquella época por militares norteamericanos que combatieron en la guerra de Vietnam. La instrucción consistió en lineamientos doctrinarios y práctica operacional orientada a regular los procedimientos de destrucción y/o aniquilamiento del enemigo terrorista. Esas disposiciones se mantuvieron escritas en los textos y manuales del Ejército Peruano.*²²

Con esos criterios, en aquel revuelto año de 1990, se empezaron a definir

los métodos para enfrentar a la subversión que asolaba al Perú, incluida la capital Lima. Más de la mitad del territorio estaba considerado como zona de emergencia y, por lo tanto, sometido a la autoridad de jefes militares, cuyos efectivos vivían bajo el acoso de un enemigo oculto que los atormentaba con ataques nocturnos, emboscadas, coches bomba y disparos salidos de la nada cuando menos lo esperaban. Las respuestas militares y policiales eran irracionales, nacían de una letal mezcla de miedo y furia y, por lo mismo, terminaban agrediendo y ultimando a la población civil.

En esos años de horror, miles de personas vivían en mortal equilibrio esquivando el fuego cruzado de terroristas y militares. Además, así como el uniforme era señal suficiente para que el senderismo acribille a su portador, desde el lado de las fuerzas del orden, bastaba una tez oscura, un rasgo andino o la sospecha nacida de una vestimenta pobre para abatir a un hombre o a una mujer. El estallido de terror iniciado en 1980, en lugar de amainar una década después, avanzaba «del campo a la ciudad», según el lema maoísta al que se adhería Sendero Luminoso con un fanatismo tremebundo.

Fue Vladimiro Montesinos quien planteó lo que se consideraba como única opción para operar frente al terrorismo. Fue también quien le explicó a Fujimori la necesidad de llevar adelante esa alternativa. Por eso, una vez convencido, el nuevo gobernante tuvo entre sus primeras declaraciones aquella afirmando, enfático, que antes de terminar su mandato el terrorismo estaría derrotado. En ese tiempo de espanto, con un país que ya tenía encima veinte mil muertos por la sorda guerra civil, tal declaración sonó a frase de ocasión, a otra promesa irracional propia de un político. Si dos gobiernos sucesivos no habían solucionado nada, ¿por qué el novato se aventuró a ese compromiso?

Aquella crucial decisión de aplicar las lecciones aprendidas por militares peruanos en la Escuela de las Américas fue una de las primeras en la agenda presidencial, incluso antes de asumir formalmente el cargo. Ya en junio, en las instalaciones del Círculo Militar, donde refugiaron a Fujimori, fue un tema prioritario.

Para Montesinos y para los militares conocedores del tema, no había mayor misterio. En la Escuela de las Américas, excombatientes de la guerra de Vietnam eran integrantes del cuerpo de instructores, y tenían impregnada, literalmente, a sangre y fuego, la convicción de que el enemigo comunista debía ser aniquilado con la misma ferocidad con que actuaba. Usaban los rituales de la muerte y los mecanismos psicológicos como forma de combate, es decir, el mismo miedo que generaba el enemigo con sus atrocidades debía serle infundido causándole el mismo pavor a través de acciones tan brutales como las que perpetraban. Sin

más vueltas: el terror se combatía con el terror, y el gobierno autorizaba, de manera no oficial, el uso del terrorismo.

«¿Viste la película *Nacidos para matar*?²³ –había preguntado El General en la extensa conversación–. Allí se muestran las técnicas enseñadas en la Escuela de las Américas. Hay una escena en la que abren fosas para enterrar a los vietcongs, pero antes le ponen a los cadáveres cal y los entierran todos juntos. Aquí, en Perú, se hizo lo mismo. ¿Sabes por qué se hacía eso? Porque la cal quema y acelera el proceso de descomposición de modo que hace irreconocibles a los cadáveres en caso de ser descubiertos. Y también por una razón psicológica. La tradición oriental es la misma que se encuentra en el Perú, especialmente en los Andes: el culto al cadáver. Los familiares sufren más cuando no encuentran el cadáver de su ser querido y piensan que si no tiene sepultura andará vagando por los parajes en que falleció. Sendero Luminoso era un movimiento andino, compuesto en su gran mayoría por militantes con ese origen, y ese tipo de situaciones influía para que las madres o las esposas se nieguen a que sus hijos integren las filas senderistas. Las fosas, la cal, eran elementos de guerra que buscaban la disuasión».

Otro elemento esencial de la llamada guerra de baja intensidad era la clandestinidad, considerada insustituible para lograr infiltraciones en el enemigo, seguimientos, escuchas telefónicas, capturas no oficiales, obtención de arrepentidos, asesinatos selectivos, desaparición de militantes y, por cierto, anonimato del personal involucrado en las acciones. Todo ello como parte de un concepto: la labor de inteligencia. Por eso, para cimentar su posición en el recién estructurado poder, Vladimiro Montesinos asumió tal labor. Conocía el tema, era el nexo entre el poder político y el poder militar y logró de Fujimori algo que, en ese momento, los hostigados militares se lo reconocían vivamente: la decisión política ausente en los gobiernos de Belaunde y García.

Montesinos fue precavido desde un inicio. Conocedor de las intrigas políticas, sabía de la importancia de refugiarse en la gestión encubierta. Su primera decisión fue no asumir oficialmente la dirección del SIN. Si se convertía en un funcionario público quedaba sometido al control político y a inevitables pedidos de renuncia. Su estrategia buscó ser más refinada.

Se ubicó como asesor presidencial para situarse en un territorio que dependía de la voluntad personal del Presidente, quien, al fin y al cabo, podía tener los consejeros de su elección y, ante cualquier cuestionamiento, podía limitarse, como en efecto ocurrió, a sostener que se daba demasiada importancia a un colaborador suyo «carente de autoridad». En efecto, en términos formales, Montesinos no tuvo mando, pero, en términos reales, que es finalmente la forma

en que el poder se expresa, su imperio llegó a ser mayúsculo. Esa fue la razón por la cual, a lo largo de esa década, el Servicio de Inteligencia tuvo siempre un jefe nominal –primero, el general Julio Salazar Monroe, y luego el almirante Humberto Rozas Bonucelli–, ambos sometidos al arbitrio total y excluyente del excapitán Montesinos.

El segundo paso del asesor presidencial fue de inteligente eficacia: unificó los servicios secretos peruanos. La idea era coherente. Si Sendero Luminoso y el MRTA causaban estragos con una infraestructura menor a la de las fuerzas armadas y policiales, y, sobre todo, tenían mortal certeza en los seguimientos a blancos militares y políticos y una pasmosa eficacia en la infiltración de las instituciones, oponerle el número, la capacidad y los recursos de los institutos armados tenía que dar frutos. Con esa idea, convirtió al Servicio de Inteligencia Nacional en el centro de coordinación al que debían reportar los servicios secretos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía.²⁴

Para que esa naciente estructura funcione bajo su batuta, procedió a descabezar la jerarquía ubicando en su lugar a militares de su elección. Fue un proceso que, en un inicio, llevó a algunos cambios sucesivos, pero después consiguió fijar una estructura férrea con gente de confianza inamovible en sus puestos, quebrantando disposiciones internas instituidas desde hacía muchos años. Así ocurrió con la Marina de Guerra, donde ubicó como jefe del servicio secreto al almirante Antonio Ibárcena Amico, para luego convertirlo en comandante general de esa arma a pesar de existir un código por el cual un marino miembro del servicio de inteligencia no podía convertirse en jefe de toda la institución. Ibárcena lo fue, y durante muchos años, vulnerando también el criterio de sucesión y postergando a otros marinos con derecho a asumir el más alto cargo de la institución. Cuando se descubrió la red de corrupción, Ibárcena fue identificado como un hombre muy cercano a Montesinos y dueño de un patrimonio imposible de tener con sus ingresos castrenses –que le permitió incluso la afición por los caballos de raza–. La vigencia en el cargo y los «beneficios» obtenidos por el Almirante, tenían una lógica: la Marina, por su equipamiento, tuvo un papel fundamental en la implacable interceptación telefónica de esos años.

El copamiento ocurrió también, y de modo inflexible, en el Ejército. Si bien en un principio mantuvo una relación complicada con el jefe de la Dirección de Inteligencia, general Juan Rivero Lazo, Montesinos resolvió el asunto nombrando, en enero de 1991, como jefe del SIE al coronel Víctor Silva Mendoza, y promoviendo al jefe de Estado Mayor, general Nicolás Hermoza Ríos, al cargo de comandante general, función en la que se mantuvo inamovible

hasta el 20 de agosto de 1998, tiempo en el cual funcionó el llamado triunvirato, el poder sostenido y compartido entre Fujimori, Montesinos y Hermoza. A la caída del régimen, Hermoza terminó en prisión, confesó y repatrió veinte millones de dólares depositados en bancos suizos, pero las autoridades, mientras se echaba a andar el proceso judicial, siguieron rastreando más cifras en entidades del paraíso fiscal caribeño.

Con los servicios de inteligencia unificados y puestos a su mando, Montesinos pasó a tener el parte diario de cada uno de los servicios y empezó a enviar fluida información al despacho presidencial con los secretos del país. Alcanzó, día a día, transcripciones de escuchas telefónicas, resultados de seguimientos, intimidades de personajes públicos, hasta fijar la certeza de que su eficacia era invalorable. Para Fujimori, ese modesto profesor universitario convertido en la máxima autoridad del país, aquel aluvión de informaciones, aquellos sobres esperados cada mañana antes de iniciar su jornada, significaron mucho más que la importancia de contar con datos confidenciales. Fue, sobre todo, el embeleso de empezar a conocer, a sentir, a disfrutar la sensación de omnipotencia con que hechiza y enajena el poder. Lo sabía Montesinos y lo manejó con destreza. El Chino, era, de pronto, dueño de todas las intimidades, concededor de todos los secretos, los negocios, los problemas, los placeres y las miserias de aquellos poderosos que jamás lo habrían saludado de habérselo cruzado o, directamente, ya le habían propinado desaires, como aquel empresario televisivo que lamentó no haberle dado ni la mínima audiencia de unos minutos cuando años atrás Fujimori acudió a sus oficinas a solicitar un espacio para hacer un programa agrario en el modestísimo horario de seis de la mañana.

Cuando Fujimori salió a decir, con aquella sonrisa irónica que tantas furias desató en cierto sector: «No tengo amigos y no le debo nada a nadie», no era la veleidosa frase de un político, era un mensaje calculado, un modo de decir «los tengo en mis manos». Después, cuando su nueva autoridad sin deudas ni compromisos quedó establecida, su secuaz se encargó de ganar las adhesiones de los más insubordinados poderosos con perversas artimañas que ninguno denunció. De pronto, llegaban a sus escritorios anónimos sobres con una aviesa cinta de audio, unas fotografías incómodas, unos documentos fatales. Hubo también quienes dieron muestras de gratitud, como aquel empresario cuya simpatía fue ganada al revelarles, de manera contundente, la infidelidad de su mujer. Montesinos solía contar que le causó sorpresa la reacción casi festiva del personaje, pero luego entendió la actitud por una frase que lo dijo todo: «Este divorcio no me va a costar ni un cobre».

«En ese momento —afirma Martín Rivas—, Fujimori no sabía que Vladimiro tenía el arte de presentar como suyo lo que los demás hacían o pensaban. Sabía llevarse siempre los laureles. Por supuesto, con cierta base, porque había leído bastante. No era un intelectual ni mucho menos, pero era inteligente, rápido y sabía usar esa inteligencia para apropiarse del saber de los demás y presentarlo como elaboración suya. Si no sabía algo convocaba a un especialista, lo escuchaba y luego llevaba el tema hasta donde el Chino con una propuesta; así logró la fama de saber todo y solucionar todo».

La verdad es que por esos días, la eficiencia de Montesinos le dio la seguridad necesaria a Fujimori para iniciar una tarea de sobrevivencia: combatir al terrorismo. Si no lo derrotaban, el país no iba a soportar un tercer gobierno incapaz de solucionar el horror cotidiano. Si lograban la victoria, podían conseguir una legitimación capaz de abrirles puertas insospechadas. Había un arma: la guerra clandestina, pero tenía un gran costo político, ellos apostaron fuerte. Si algo los caracterizó fue la audacia de vivir al filo de la navaja. Y consiguieron su objetivo: en los años siguientes derrotaron al terrorismo. Pero esa victoria providencial para el país mostró, después, evidencias sobre crímenes de guerra. También, esa victoria, les permitió consolidar una autoridad, un poderío y un respaldo popular que les franqueó una reelección y luego otra muy breve, cuyo balance final dejó a cara descubierta una corrupción rayana en la enajenación: una vida entera no les alcanzaría para gastar la descomunal cifra de dinero saqueado al Estado.

En lo que respecta a la guerra de baja intensidad, a ese combate antiterrorista basado en la clandestinidad, su historia no se puede resumir en un párrafo; tampoco en páginas plagadas de adjetivos degradantes. Para intentar comprenderla cabalmente es necesario indagar en las razones, los criterios y la lógica seguida por los actores de aquellos episodios sumidos en la violencia.

Cierto es que los criterios encarpados bajo el rótulo de tácticas y estrategias militares suenan absurdos cuando los conoce un pacífico criterio. Sin duda, la propia existencia de los ejércitos, como entidades destinadas al aniquilamiento físico y moral de congéneres calificados como enemigos es absurda y atroz, y, sin embargo, existen desde los orígenes de la humanidad. Por lo mismo, es imposible acceder a una visión del tema sin antes entender cuál es el razonamiento que mueve a ese pensamiento militar.

En el Perú, en los años finales del siglo XX, las desproporcionadas diferencias económicas alentadas por las disparidades raciales y culturales, estallaron detonadas por un rencor agazapado, tan incontrolable que no paró hasta convertirse en una infernal confrontación entre connacionales.

Un malestar social macerado en largos años de inmensas desigualdades fue esa pradera que las lecciones de Mao Tse Tung ordenan incendiar. Con el tono de una profecía, el líder del comunismo chino escribió que una revolución no necesita exportar ejércitos sino ideas, y entonces, en una apacible ciudad de la sierra peruana, sin que el país oficial se percatase, a lo largo de los años setenta, con paciencia de iluminados, un grupo de profesores universitarios formados en la China comunista, empezó a convertir a sus alumnos en devotos seguidores de una ideología cuyo principio fundamental es el cambio a través de la violencia.

En ese tiempo, en la todavía hermosa y serena ciudad de Huamanga, adornada paradójicamente por treinta y tres iglesias, los alumnos de la Universidad San Cristóbal desconocían los fundamentos básicos de las profesiones que debían aprender, pero eran incondicionales y ardorosos adeptos de los textos de Marx, Lenin y Mao. Las tres espadas de la revolución mundial, como solían llamarlos cuando pintaban sus solemnes retratos en paredes ceremoniales. A esa cofradía se sumó, de manera unilateral, una cuarta espada: un delirante profesor de filosofía, aficionado a la lectura tanto como a la bebida, casado, a los treinta años, con una hermosa muchacha, Augusta La Torre, once años menor, cuyo corazón no necesitó conquistar porque se la entregó el padre, un militante del Partido Comunista, admirador del profesor Abimael Guzmán que había vuelto de Pekín con una felicitación entregada por el propio Mao Tse Tung.

Así, en el departamento de Ayacucho, en cuyo territorio se libró la batalla final contra la colonización española, surgió, en mayo de 1980, el Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso.

Su jefe, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, había nacido el 3 de diciembre de 1934 en la ciudad de Mollendo, una ciudad costera en el litoral sur del país. A los ocho años de edad fue abandonado por su madre y fue criado por familiares, primero en Chimbote, y luego por su madrastra, en la andina y tradicional ciudad de Arequipa. De esa infancia, por todo recuerdo, le quedó el estigma de ser considerado un hijo bastardo. A los cuarenta y seis años de edad, puso en acción a la organización terrorista Sendero Luminoso, a partir de un mesianismo inspirado en la ferviente creencia de que aplicando las cruentas lecciones militares de Mao haría posible una epopeya del campo a la ciudad, similar a la Larga Marcha del maoísmo. Entonces, sin piedad alguna y con el fervor escalofriante del fanático, desató una espeluznante y tenaz violencia.

Fue cosa de cada día la aparición de campesinos degollados sin saber por qué, mujeres embarazadas con las entrañas al aire por ser «enemigas» de una «revolución» que ni conocían ni entendían, niños obligados a mirar el siniestro

sainete de «juicios populares» como preámbulo a la muerte a machetazos de sus padres. Se arrasaron poblados enteros previa matanza de sus moradores mientras las redes de luz y agua sucumbían con las cargas explosivas puestas para dejar en estado de sitio a ciudades enteras.

Como no fueron contenidos al inicio de sus acciones porque un señorial gobernante los consideró apenas «una banda de abigeos», su impunidad creció y con ella el horror. De pronto, en las ciudades, se multiplicaron audaces atentados selectivos a plena luz del día con el agravante de dejar a desprevenidos transeúntes muertos o heridos de gravedad en la vía pública. En la cima de la locura, los muertos y las bombas fueron tantos que los diarios solo tenían espacio para informar sobre los atentados de increíble atrocidad, aquellos con críos despedazados tras ser utilizados como niños bomba, o los terroríficos coches bomba, atiborrados de mortales cargas de dinamita y anfo, que eran lanzados contra edificios públicos o edificios de viviendas para segar la vida de decenas de ciudadanos sorprendidos en la faena diaria o en el descanso en sus hogares.

Cada punto del sanguinario listado tiene un relato individual en el que se mezclan el inconsolable dolor de viudas y huérfanos, de padres y madres, de hijos y nietos, con la delirante sevicia de un movimiento terrorista que siempre añadió, a la atrocidad de la muerte, la ceremonia de una crueldad adicional: cartuchos de dinamita para despedazar el cuerpo inerte de sus víctimas, exposición de cadáveres mutilados para infundir pánico. Eso fue Sendero Luminoso. Y según proclamaba su desquiciado discurso, aspiraban a generar, desde la destrucción, un «nuevo orden y una nueva república».

En ese tiempo de tinieblas, cuyo recuerdo es sobrecogedor, las llamadas fuerzas del orden se entregaron, con su inexperiencia pero también con su brutal ineptitud, a la represión indiscriminada poniendo entre dos fuegos a la desamparada población. Aldeas enteras fueron devastadas por patrullas presas del pavor o desbordadas por sentimientos sanguinarios hasta cavar fosas clandestinas para esconder centenares de cadáveres privados de la posibilidad de argumentar una probable inocencia o el derecho a un juzgamiento acorde con la ley.

Cuando se realizaban capturas el destino de los detenidos se podía resolver con la tortura o con la ejecución, y cuando incómodos periodistas provincianos insistieron en denunciar los excesos, fueron silenciados por algún misterioso balazo oficialmente reportado como un atentado terrorista. En el fragor de las hostilidades, aquellas versiones se daban por ciertas en la mayoría de casos. Solo después se supo que Sendero Luminoso nunca atacó a periodistas porque los

medios de comunicación les servían como eficaces cajas de resonancia al diseminar, sin querer, el pánico en la población.

En la ciudad de Huanta, un estadio fue usado como un centro de detención del cual muchos no salieron jamás a pesar de haber ingresado a una hora establecida, con nombres y apellidos y más de un testigo. Acaso uno de los criterios más viles que se usó fue la muerte o la detención basadas en la semejanza racial: si andino el terrorista, entonces terrorista todo portador de faz andina. Y eso dio lugar a centenares de inocentes hacinados en cárceles capaces de quebrar la razón del más equilibrado. Pero también sirvió para una conducta perversa de ciertas politizadas organizaciones que incluían en los listados de inocentes a militantes del terrorismo por cuya libertad intercedían a la par de tramitar asilo para senderistas en fuga hacia Europa.

Es cierto que las patrullas sufrían emboscadas de pesadilla seguidas de una vesania inverosímil –cabezas de policías y militares exhibidas sobre lanzas, excremento untado a las vísceras dejadas al aire, mutilación de genitales–, pero aún así cuesta entender que, desde el lado de las fuerzas del orden, aquellas atrocidades senderistas se convirtiesen en el combustible de la venganza militar tomada en la persona de cualquier poblador porque el enemigo era oculto, carecía de rostro, emergía de las sombras para luego desaparecer.

Cuando la violencia llegó a la capital peruana, se agudizó la situación. Para un país centralizado en Lima, las miles de muertes ocurridas a lo largo de los años eran apenas cifras de ciudades del interior que la indolencia y el racismo impedían sentir como propias. Cuando en pleno corazón de la ciudad donde las autoridades simulaban laborar, donde los políticos exhibían sin pudor sus miserias, donde las gentes peleaban el sustento diario, donde se paseaba, se jugaba, se amaba, se soñaba; cuando en esos lugares las bombas empezaron a estallar y los muertos eran el vecino o el amigo o el muchacho aquel o la señora del quiosco; cuando la televisión y los diarios empezaron a mostrar que los escombros, los vidrios rotos, las ventanas astilladas pertenecían a las casas de todos; y cuando el ulular de las ambulancias aturdió las avenidas y los cuerpos despedazados dejaban rastros en los árboles de coquetas calles, entonces el país entero, es decir, Lima, admitió que el terrorismo era cierto y estaba allí dentro, demasiado cerca de los hijos, de los afectos, del frágil milagro de respirar. Fue entonces que todos empezaron a clamar por una solución urgente y eficaz.

La desesperación de millones de personas atezadas por el miedo y la pobreza generó una apuesta final por el azar y decidieron elegir, el 8 de junio de 1990, a un desconocido llamado Alberto Fujimori. Puesta la mirada atrás, brinca una evidencia: ¿cómo iba a sostenerse ese repentino Presidente de la República

surgido del alterado estado de ánimo popular? Solo dando una pronta y eficaz respuesta al miedo colectivo. De lo contrario, ese ánimo popular, por definición cambiante, ferozmente cambiante cuando lo atiza el miedo, lo iba a engullir con la misma fuerza con que lo había ungido.

¿Cuál era esa pronta respuesta? Para Fujimori y Montesinos y para las Fuerzas Armadas, solo quedaba un camino para enfrentar al enemigo oculto, enseñoreado en el terror desde hacía una década. La tragedia es que la considerada por ellos eficaz fórmula, tuvo como base el mismo concepto usado por el contrincante: el horror de la muerte como respuesta; el accionar clandestino como método; el golpe psicológico como sistema. El ancestral, el atávico ojo por ojo, el Talión revestido por la «ciencia» aprendida en la Escuela de las Américas y volcada en los manuales militares.

Nadie se planteó una pregunta –aún hoy, en el mundo entero, los estados agredidos por el terrorismo siguen sin planteárselas–: ¿se debe combatir la barbarie con la barbarie, el espanto con el espanto?, ¿se debe proteger la civilización usando la misma brutalidad del terrorismo? En 1990, en el Perú, tampoco se las plantearon ni hubo tiempo para hallar respuestas. La urgencia dio paso al sordo pragmatismo. Y ese término, pragmatismo, fue celosamente reclamado como sello propio por Fujimori. Por eso, para discernir esta historia, es inevitable averiguar, rastrear, escudriñar en lo que pensaban, decidían y ejecutaban aquellos protagonistas. En esa búsqueda se podrá encontrar también la explicación del macizo silencio en que fueron envueltos ciertos eventos atroces, para evadir responsabilidades en los más altos niveles.

DESTAPÓ CUIDADOSAMENTE una rechoncha botella de Coca-Cola de dos litros y dijo, sonriente, el mayor Santiago Martín Rivas, que por algo la primera transnacional en ingresar a la órbita socialista de antaño fue la Coca-Cola, y recordó la sorpresa que le causó aquella crónica de García Márquez describiendo a la ex Unión Soviética como «un millón de kilómetros cuadrados sin un cartel de Coca-Cola». Ese gusto por la bebida negra era uno de los inconvenientes de su encierro de prófugo cuando la provisión se agotaba. «Es mi único vicio, y no sé si llamarle vicio», dijo antes de beber a sorbos breves, con agrado, el vaso colmado con la bebida. Tras un intercambio de preguntas y respuestas, hizo un gesto con la mano pidiendo una pausa, dio la sensación de haber hallado la punta de un monólogo y empezó a decir:

«Cuando el gobierno decidió unificar los servicios de inteligencia empezamos a trabajar de manera coordinada y con un criterio muy claro: aplicar las herramientas de inteligencia. La inteligencia por formación, por origen, es

una actividad clandestina, y sus labores están entre el límite de lo legal y lo ilegal, y normalmente son ilegales. Cada país, de acuerdo a sus necesidades, crea equipos especiales de inteligencia. Así es en todo el mundo. Es una labor reconocida legalmente porque el Estado le asigna un presupuesto a ese Servicio de Inteligencia. Si un Servicio de Inteligencia no tiene agentes, y este no forma equipos especiales, entonces ¿para qué está un Servicio de Inteligencia? En la guerra antisubversiva hubo muchos de estos equipos que cumplieron funciones y se fueron activando y desactivando. No hay que olvidar que Sendero tenía abiertos seis o siete frentes, entonces, para cada uno de ellos, se iban formando diferentes equipos. Cada zona tenía sus respectivas características. La situación de Ayacucho era diferente a la de Lima o a la del Cusco. Además, el policía no puede perseguir clandestinamente, tampoco el militar uniformado, ambos son identificables. Esa labor la tenían que hacer netamente los agentes de inteligencia. Y se formaron decenas de grupos para misiones distintas.

»A los oficiales normalmente es muy difícil infiltrarlos en grupos terroristas porque el riesgo de identificación es alto. Cuando terminan su carrera hay una ceremonia pública, se conocen sus nombres, quedan álbumes de cada promoción con las fotografías de cada cadete, son trescientos o cuatrocientos álbumes por cada promoción con las fotografías de sus integrantes circulando por diferentes lugares. Entonces, ¿cómo se infiltra un oficial si hay un álbum con su foto, su nombre y su historia publicada? Sería un ente detectable. En cambio, los agentes están formados para ese trabajo, su formación es clandestina, son agentes desde el día que entran; y también hay unos que sirven para unas tareas y otros para otras. Por ejemplo, a Puno, que es una zona aimara, no pueden ir veinte tipos de Lima porque inmediatamente se sabe que son foráneos; entonces, se tiene que usar a todos los puneños que sean agentes y hablen aimara o quechua, que se vistan como puneños, que caminen como puneños y que sean puneños. Es una profesión, no es tan simple. Hay una idea generalizada de que todo hombre de inteligencia es malo, que es un asesino, que es un criminal, que es alguien que ha sido preparado para hacerle daño al país. No es así. Hemos sido preparados para trabajar en silencio, clandestinamente, arriesgando todo para buscar información precisa, detectar al enemigo y facilitar a las fuerzas operativas los datos para que puedan ejecutar sus operaciones. A tal punto que un ejército operativo, formal, abierto, que no tenga inteligencia, no podría jamás ganar una guerra.

»Mire usted, a finales de los años ochenta, Sendero se da cuenta que sus acciones en el campo no tenían la misma repercusión que cuando se hacían en las ciudades. Una emboscada a una patrulla militar merecía solamente un pequeño informe periodístico desde las alturas de Ayacucho, pero un coche

bomba en el centro de Lima era primera plana en todos los medios de comunicación durante varios días. Además, después de casi diez años de guerra en el interior del país, tenían que dar un paso más, entonces, empezaron a desplazar la guerra. A ese desplazamiento Abimael Guzmán le llamó el equilibrio estratégico y buscaban una gran caja de resonancia para una campaña que llamaron “Cercar las ciudades desde el campo”.

»Frente a eso, necesitábamos saber cuáles eran las rutas de aproximación de Sendero hacia Lima. Durante esa época, la misión fue viajar constantemente por las provincias que rodeaban a la capital y se llegó a determinar los ejes centrales del terrorismo. Eso se logró haciendo un trabajo de inteligencia. Semanas, meses, recorriendo todos esos lugares con diferentes cubiertas, básicamente como comerciantes de productos de panllevar. Uno llevaba fideos, atún, arroz y compraba carne, granos; nos detenían los subversivos, pagábamos nuestros cupos. Para ese ir y venir, buscábamos a los agentes más aparentes; y en ese ir y venir, observábamos, íbamos a las ferias, la gente bebía y hablaba. La información se enviaba a los analistas y, en mi caso, yo hacía los análisis en el lugar en que me encontraba y los enviaba telefónicamente. Así logramos detectar las líneas exteriores de aproximación a Lima y las líneas interiores porque Sendero ya estaba dentro y tumbaban las torres de alta tensión para dejar sin luz a la ciudad, organizaban los paros armados, las campañas de desabastecimiento, los coches bomba, los ataques a comisarías, los atentados contra personalidades, todo eso.

»Entonces, esa fue la primera labor: descubrir, desde el campo de inteligencia, cuál era la estructura que tenía Sendero para tomar Lima. Le preciso que, aunque ahora no se quiera reconocer, esa fue una tarea coordinada por orden de la más alta instancia, y no fue obra de una sola institución, fue un trabajo conjunto que se planificaba en el SIN. El primer gran logro y, sobre todo, un paso clave, fue la captura de los archivos de Sendero, todos esos documentos que se hallaron junto con el video donde por primera vez se vio a Abimael Guzmán con su rostro real. Durante diez años había sido una especie de ser omnipresente, pero se descubrió que era un sujeto de carne y hueso que se emborrachaba y que no tenía esos rasgos de austeridad y sacrificio exigidos a sus militantes. Ese trabajo fue producto de una política de Estado que se empezó a aplicar. Las órdenes venían de Fujimori y todo se coordinaba con Montesinos. Mire usted, hay un punto que nadie ha analizado. Busque el mensaje que Fujimori dio al país en los primeros días de febrero del 91, cuando presenta el video de Abimael Guzmán y su banda, y verá que los conceptos que él da son los conceptos de un trabajo de inteligencia, de una estrategia nueva aprobada,

obviamente, por él y por su asesor. Allí se habla de todo lo que le estoy contando. ¿O usted cree que todo eso lo decidí yo?».».

EN LOS ARCHIVOS DE DIARIOS de la Biblioteca Nacional, en una sala despoblada de visitantes, los diarios de la década pasada se archivan, es un decir, en cajas con etiquetas que anuncian las fechas. Son ejemplares cubiertos por un fatal polvillo de papel guardado, que alcanza un empleado aburrido por el silencio y sin más objetivo que llegar al fin de la jornada. En uno de ellos, se puede leer que poco antes de las once de la noche del jueves 7 de febrero de 1991, el presidente Alberto Fujimori dio un mensaje a la Nación difundido en cadena nacional por todas las estaciones de televisión. Se añade que mostró escenas de un video descubierto en el allanamiento de una casa del residencial barrio de Chacarilla del Estanque, donde el líder terrorista estuvo oculto, con la sorpresa adicional de que el inmueble quedaba frente al Pentagonito, el centro de operaciones de la Comandancia General del Ejército.

Para el país fue un mensaje de enorme impacto porque se pudo conocer el rostro vigente de un sujeto del cual apenas se conocían antiguas fotografías, todas anteriores al momento en que decidió sumergirse en las sombras, allá por 1978. Esa noche apareció en las pantallas de los hogares peruanos, el rostro del individuo causante de las penurias cotidianas –los cortes de agua, los cortes de luz, el miedo de salir a los parques o al cine– pero, sobre todo, apareció la faz miserable del inasible promotor de más de veinte mil muertes. En un ambiente sombrío, junto a su cúpula, todos ataviados, hombres y mujeres, con trajes grises tomados del estilo maoísta, se pudo ver a Guzmán danzando, ebrio y a su modo, el *sirtaki* popularizado por la película *Zorba, el griego*.

El éxito político de esa noche fue indiscutible. Con apenas seis meses en el poder, en quince minutos, Fujimori desmitificó la figura de un individuo que se había construido una leyenda con los utensilios del misterio, las versiones interesadas sobre sus dotes de líder magistral y el efectismo alucinante de los atentados con los cuales lograba dar la sensación de que podía estar en todas partes y en ninguna. Se hizo llamar «Presidente Gonzalo», el conductor de masas con las cuales fundaría una nueva República, y a quien sus huestes, por su sacrificada gesta, debían pleitesía revolucionaria y ofrendas diversas, incluyendo la vida propia, de ser necesario. Pero, en la fría noche de aquel junio sorprendente, la pantalla de los televisores mostró, en un opaco video, a un desangelado gordo, borracho y con desprolija barba, batiendo palmas sin gracia ni solemnidad alguna. Abimael Guzmán no era la cuarta espada de la revolución mundial ni el líder mítico fabricado gracias a las artes del misterio.

Esa noche, en su mensaje de apenas cuarto de hora de duración, el presidente Fujimori, refiriéndose a la lucha antisubversiva asumida por su gobierno, dijo estar complacido por la paciente tarea «de un pequeño equipo especializado» que logró llegar al núcleo dirigenal de Sendero. «Estos resultados –añadió– han sido posibles por una nueva estrategia con la esforzada y efectiva labor de los Servicios de Inteligencia en proceso aún de reconstrucción». Fujimori agregó algo mucho más evidente:

«Nuestro enemigo era invisible y había que enfrentarlo de la misma manera» y, luego de precisar que un trabajo de inteligencia no se hace público, remató señalando: «Seguiré manteniendo reserva en los casos que ello amerite; *no se resuelven estos problemas de otra manera»*.²⁵

Provisto de los recortes, el periodista esperó ansioso un nuevo contacto. Ocurrió varios días después. Pero, mientras el fanático de Santana conducía desprovisto de toda preocupación, fascinado por una música que, sin duda, debía conocer de memoria, ingresó una llamada que puso fin al viaje y el periodista terminó de peatón, frente al mar, en la acera sin taxis de la avenida Costanera. Fue una previsión inoportuna por movimientos extraños en el edificio al que se dirigían, que resultaron ser los simples aprestos para una bulliciosa fiesta de cumpleaños que esa noche impidió pegar un ojo al vecindario.

Días más tarde, retomado el contacto, Martín Rivas tuvo en sus manos copia de los recortes periodísticos de aquel mensaje de Fujimori, y tras leer, uno a uno, con la paciencia que solo puede tener un hombre en el encierro, dijo, subrayando su frase con una sonrisa triunfante: «Ahí lo tiene, él mismo asumía en público lo que ahora niega. Pero, es solo un dato. Hay mucho más, ese fue solo el principio».

Sobre la mesa, como elementos de un ritual, en cada reunión, hubo siempre una botella de Coca-Cola y dos vasos. Y cada vez, antes de iniciar la conversación, el primer acto del militar consistió en abrir la botella, llenar los vasos a tope, decir salud con cortesía y beber un trago largo. Y las más de las veces empezó las entrevistas con el desafío de una pregunta:

«¿Usted cree que lo más importante de ese operativo fue encontrar el video con las imágenes de Abimael Guzmán? Si bien desde el punto de vista político e, incluso, operativo, tener las imágenes de Abimael Guzmán y su gente fue muy importante, lo realmente valioso fue la captura del archivo de Sendero Luminoso. Con esos documentos, recién pudimos conocer cabalmente el pensamiento del enemigo, sus acciones, su lógica, su organización, su gente. Tomó unos meses estudiarlos y analizarlos, había que conocer de doctrina comunista y estar formado políticamente. Yo tenía esa formación, y me ayudó

alguien más.²⁶ Muy bien. Como el Ejército fue parte del planeamiento, cuando se halló esa documentación se decidió formar un equipo de analistas encargado de estudiar el material. Le voy a decir una cosa, aclarando que no es ninguna crítica contra la Policía, que se pone muy susceptible y exige siempre todo el mérito como exclusivamente suyo. Aquella vez se tenía algo muy claro: la especialización de cada arma. Y eso ayudó bastante. Entonces, como la función policial no es interpretar, porque no manejan conceptos políticos ni sociológicos ni de doctrina, se dispuso la participación de analistas del SIE y la Marina para trabajar junto a los policías del GEIN.²⁷

»Hay que tener en cuenta que en una guerra el enemigo emite mensajes de gestos, de hechos y de discursos que hay que entender y descifrar. Por eso, siempre me parecieron cuestionables los “senderólogos”,²⁸ especialmente, los que se dedicaban a la lectura de cifras. Había que ir a las causas y no a las consecuencias. Cuando decían que en un mes Sendero había hecho doscientas pintas, no era una contabilidad que por sí misma dijera algo de importancia, porque si una sola pinta se ponía en la pared del Cuartel General del Ejército valía por mil pintas, ¿me entiende? Bueno. Ese año 91, cuando Montesinos reunía en el SIN a todos los directores de inteligencia y todos asistían con sus analistas –yo asistía a esas reuniones, acompañando al general Rivero Lazo y otras veces iba en su representación–, habían amplias discusiones, tres, cuatro días, y las mejores decisiones se sacaban allí y cualquier problema se solucionaba allí porque estaban todas las armas. Una de esas decisiones fue analizar el archivo de Sendero Luminoso. Para esa labor fui designado junto al capitán Carlos Pichilingue».

EL CURICH ES UNA FONDA de estilo italiano, ubicada en la calle Bolognesi, en el distrito de Miraflores. En el primer ambiente tiene un mostrador que exhibe embutidos, frascos con aceitunas, encurtidos y los platos del día. Al fondo, hay un ambiente con mesas, el piso y el techo de madera, poca luz, un piano y un músico versátil que acompaña, en las noches, a quienes concurren a beber. Pero a media tarde el lugar no tiene concurrencia y las mesas del fondo están en penumbra.

En una de ellas tomó asiento el mayor Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, mientras un vigía hacía guardia en la vereda que da a la puerta de ingreso del local.

Pichilingue es un hombre alto y robusto, de cara redonda, con mirada mansa pero alerta y una actitud amable que sorprende si se tiene en cuenta que está acusado de ser el segundo del Grupo Colina. Afirma conocer labores de

contrainteligencia y, además, ser ingeniero militar. A pesar de una orden de captura dictada en su contra, se moviliza por la ciudad para establecer un contacto, como en esta ocasión, o, algunas veces, para escaparle al tedio del encierro. En su caso, según él, el riesgo de una captura disminuye mucho porque asegura él «no tengo la popularidad que la prensa le ha dado a mi amigo, el mayor Martin, y no me reconocen».

Días antes, al ser consultado, a través de Martin Rivas, sobre la posibilidad de sostener una entrevista, estuvo de acuerdo, pero, por previsión suya, solicitó un número de teléfono móvil al cual llamar minutos antes de la cita. Y así fue. El periodista recibió la indicación de dirigirse al malecón Cisneros. Una hora después, el teléfono volvió a timbrar con el dato de dirigirse a la calle Bolognesi y, finalmente, se le indicó el lugar. Ya en la mesa, sin ninguna mirada presente, aparte de un mozo soñoliento, el mayor Pichilingue inició el diálogo con su modo pausado. Advirtió que su interés en hablar surgía de una profunda decepción ante las noticias sobre las millonarias cuentas escondidas en bancos extranjeros por jefes militares del entorno de Montesinos. «Nos mandaron al frente, arriesgamos la vida, ahora nos acusan de asesinos y resulta que, mientras nos sacrificábamos, nuestros generales robaban y vivían muy bien y ahora se pueden pagar buenos abogados, mientras yo tengo que vivir oculto y perseguido», dijo con fastidio pero sin perder la calma, aunque le era difícil contenerse al nombrar al general Hermoza Ríos: «Es el colmo, mi Comandante General resulta que está lleno de cuentas bancarias. Veinte millones de dólares, señor –recalca–, y gracias a nuestro trabajo se hizo llamar el “General Victorioso”».²⁹

Era obvio que en ese lugar no podía realizarse ninguna entrevista. En realidad, el militar citó al periodista para precisar acuerdos de confidencialidad, cuidados a seguir y, a pesar de la anuencia de Martin Rivas, para sondear, por sí mismo, si había algún interés oculto en el solicitante de la información. Una vez absueltas las dudas y las preguntas, la única conclusión, para ambos, fue que no había otra opción distinta a correr el riesgo. Entonces, el militar dio por terminada la reunión, prometió un contacto en breve y antes de ponerse de pie dijo: «A usted no le conviene revelar nada de inmediato, sobre esa base lo voy a llamar». Y se marchó.

Una quincena después, hubo una llamada. El periodista pensó que el mayor Martin seguía en ánimo confesional porque en la avenida San Borja Sur lo recogió la misma camioneta, con el gordo sometido a su delirio por la guitarra de Santana y el mismo parco guía con el teléfono en la mano. Sin embargo, cuando llegaron a destino quien salió a recibirlo fue el mayor Pichilingue. No preguntó,

el periodista, si ambos personajes compartían el mismo refugio, pero en las ocasiones siguientes pudo advertir que, a veces, estaban ambos y, en otras, uno de los dos se encontraba ausente. Pero, entre ellos, había una sintonía de criterios casi unánime y un trato amical que, sin embargo, no dejaba de lado la jerarquía porque Pichilingue siempre dispensó un trato de jefe a Martin Rivas.

Durante la entrevista, Pichilingue, al igual que su compañero, empezó por dejar constancia de que el silencio guardado a lo largo de los años era el origen del cerco del que estaban escapando. Dijo ser consciente de que hablar les serviría apenas para dejar registro de su posición, para intentar explicar las razones de sus actos, pero todo aquello que pudiese venir estaba por completo fuera de su alcance. Ese convencimiento de destino jugado del que solo cabía huir hasta donde les fuera posible, hacía pendular el ánimo de los dos prófugos entre la resignación y la rebeldía.

Sentado en la misma mesa con un mantel de flores celestes y una jarra de agua en medio, el mayor Pichilingue empezó reivindicando el trabajo de análisis del archivo de Sendero Luminoso, «un trabajo valioso que llevó a decisiones fundamentales en el combate contra el terrorismo». Luego, con una voz pausada, sin ánimo soliviantado, controlando toda emotividad, comenzó su relato.

«En enero del 91, el comandante Rodríguez Zabalbeascoa nos transmitió la orden de nuestro comando, en el sentido de que los dos oficiales –Martin y Pichilingue– participáramos en la interpretación y cruce de información de los documentos que se habían acumulado en las instalaciones del “Palomar”».

Alguien le puso ese apelativo, el «Palomar», a una oficina de unos treinta metros cuadrados ubicada en la parte más alta del edificio de la DINCOTE,³⁰ en la avenida España.

«Allí nos instalaron al equipo de analistas formado por oficiales del Ejército, la Marina y la Policía. Para agilizar el trabajo teníamos computadoras, y en la oficina de al lado, estaba toda la infraestructura montada por la Marina para la interceptación telefónica de los senderistas y de políticos de izquierda que los ayudaban. Aunque parezca increíble, y lo nieguen, hubo congresistas que apoyaron al terrorismo. Hay uno que vocifera contra nosotros, nos llama criminales pero escondió en su casa a Lucero Cumpa cuando esta se fugó, por eso, ese congresista, recibió un “regalito” en la cochera de su casa. Algún día se sabrá la historia de esos patriotas. Esa información, le digo, no es una ocurrencia mía, la supimos con el chuponeo telefónico que hacían los marinos. A ellos se les dio esa tarea porque la Marina es la que tiene los mejores equipos para esa labor, no ve que por las características de su trabajo necesitan un equipamiento sofisticado, sino ¿cómo se comunica, por ejemplo, un submarino con tierra? Eso

es de siempre. Y en esa época cada arma aportó lo que mejor sabía hacer. Pero volviendo al trabajo que nos encomendaron, se hizo bajo la coordinación directa de Vladimiro Montesinos y era tan desconfiado que mandó como su representante a un comandante llamado Roberto Paucar Carbajal, un oficial que nunca había trabajado en inteligencia, no era un analista; en otras palabras, un cero a la izquierda para ese trabajo. Pero cumplía una misión: se encargaba de recolectar copias de los informes que íbamos emitiendo y también chequeaba las actividades de los integrantes del grupo. ¿Sabe cuál era la inquietud de Montesinos? Que no se filtre nada y que toda la información se canalice a través de él. Así se llevaba el mérito, iba donde el Chino y le contaba los avances como si él mismo estuviese haciendo las cosas. Era tan paranoico que nos mandó a su controlador.

»Los oficiales encargados pudimos desagregar la documentación incautada y logramos establecer la estructura político militar de Sendero, los nombres de la mayoría de los personajes que formaban parte de la cúpula, sus modos de accionar, los conceptos que manejaban, inclusive las razones del salvajismo de sus acciones. Para ellos eran mensajes de guerra, una manera de asustar a la población para que no ayude a las fuerzas del orden. Toda esa información, una vez consolidada, fue entregada al comandante general del Ejército y a Montesinos. Luego preparamos, con el mayor Martín, un documento muy completo, de más de cuatrocientas páginas, sobre cómo enfrentar a Sendero Luminoso, es decir, ya sin los errores de los años anteriores y, sobre todo, conociendo bien al enemigo y aplicando la guerra de baja intensidad.

»Por la preparación de ese documento, el presidente Fujimori nos dio una felicitación y esa es la felicitación por la que han tejido una mentira diciendo que nos felicitaron por la matanza de Barrios Altos. Eso es falso porque las fechas no coinciden: la felicitación es de junio del 91 y Barrios Altos fue en noviembre, y nadie felicita por un hecho que no ha ocurrido. ¿Sabe cuál es la verdad de ese documento? Que esa felicitación fue una ocurrencia de Montesinos, él se la pidió a Fujimori, ¿y sabe por qué? Mire, si usted revisa ese documento, va a encontrar que están incluidas personas que nunca participaron en nuestro trabajo ni lo entendían y tampoco participaron en ningún trabajo contra Sendero. Allí aparecen el cuñado de Montesinos, el coronel Cubas Portal –que después fue general–, su hombre de confianza Huamán Azcurra; Alberto Pinto Cárdenas al que nombró jefe del SIE; y el controlador que nos mandó, Roberto Paucar Carbajal. Eran sus protegidos y necesitaban ascender, pero como no reunían méritos, Montesinos encontró la oportunidad, pidió la felicitación, los puso en esa lista y así fabricó un documento que, por la importancia que tenía el trabajo

contra el terrorismo, les sirvió en su ascenso. Era gente que Montesinos necesitaba hacer crecer. No se olvide que estamos en 1991. El mayor Martín no necesitaba eso para ascender, y yo no ascendí ese año sino el año siguiente».

Esta afirmación se corrobora por la existencia del oficio 3991-SGMO-A dirigido el 10 de julio de 1991 por el general Jorge Torres Aciego, ministro de Defensa de aquella época, al comandante general del Ejército, indicándole que la felicitación del presidente Fujimori se incluya en los «legajos personales de los interesados y tomado en consideración en el proceso de ascensos del presente año». Y, efectivamente, los hombres de Montesinos ascendieron.

«Lo importante, y eso es algo que se ha mantenido en silencio todos estos años –añade el mayor Pichilingue–, es que el documento que preparamos fue una de las bases para la estrategia que luego se aprobó seguir. De ese documento se hicieron únicamente cuatro copias y fueron entregadas al Presidente de la República, al comandante general del Ejército, que era el general Pedro Villanueva Valdivia, a Vladimiro Montesinos, y el último ejemplar quedó en manos del comandante Rodríguez Zabalbeascoa, como jefe del grupo de análisis. Si el documento salía a luz pública, los responsables directos serían los que tenían cada una de las copias. Después se realizó la Mesa Redonda de junio del 91, en la Comandancia General con la autorización de Fujimori. Esa reunión fue la que cambió la historia, para bien y para mal. Y le digo para bien porque en esa Mesa Redonda se aprobó aplicar la guerra de baja intensidad y se pasó a luchar de manera eficaz contra el terrorismo; y para mal porque por esas acciones ahora nos llaman asesinos».

El rastro de los documentos emitidos con sigilo no se ha borrado. El Presidente, en esos días, fue expeditivo y la secuencia de sus órdenes lo alumbró como una linterna al sospechoso. El pedido de felicitación, como es obvio, no fue hecho oficialmente por Montesinos, lo hizo la máscara que lo ocultaba: el jefe nominal del SIN, el general Julio Salazar Monroe. Este, el 20 de junio de 1991, le envió al Presidente de la República el oficio 028-SIN-01 solicitando un reconocimiento a ocho oficiales «que vienen trabajando intensa y abnegadamente en tareas relacionadas con la lucha contrasubversiva».³¹ Cinco días después, Fujimori ordenó al ministro de Defensa, general Torres Aciego, que «se haga llegar el reconocimiento del Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas» en razón de los «eficientes servicios en materia de Seguridad Nacional». Junto a este, otro documento también deja su condición burocrática para convertirse en evidencia. Es un oficio enviado el 30 de julio por Fujimori al ministro de Defensa, con la orden de que su felicitación debía incluirse en el puntaje para ascensos de ese año a favor de los oficiales que

«han participado en exitosas operaciones especiales de inteligencia».

Una conjetura inevitable es que un Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas no asume la responsabilidad de las órdenes que da sin antes conocer el asunto de fondo. Es decir, Fujimori, conocía del documento elaborado para llevar adelante la guerra clandestina y estuvo enterado de la reunión, la Mesa Redonda, en la que su plana militar aprobó la nueva estrategia a seguir. Por eso emitió el «premio» de su felicitación.

Esa tarde, en los meandros de la conversación con los dos militares, asomaron opiniones desencantadas sobre el sentido de la carrera militar: «Si perdemos una guerra somos cobardes, si la ganamos nos llaman asesinos»; ásperos conceptos sobre las mesnadas senderistas: «No eran personas, eran salvajes, peores que un criminal»; y hasta inconvenientes en las campañas al interior de la sierra: «Para tener cubiertas debíamos llevar agentes femeninos, pero cuando les venía la regla había un problema logístico en medio de la puna». Ante el cuestionamiento directo sobre las acciones acontecidas, la respuesta siempre fue defensiva y categórica: «Fue una guerra, y hubo bajas en ambos bandos, ¿o usted cree que no murió ningún militar?, ¿o piensa que no tenemos viudas ni huérfanos?».

En medio del borbotón confesional, asomó un tema capital: cómo se llegó a tomar la decisión para llevar a cabo la guerra de baja intensidad. En ese punto, tras una larga narración en la que asomaron los cabos sueltos de nombres y otros detalles, el mayor Pichilingue, ante las precisiones exigidas, planteó entregar un testimonio escrito con todo el detalle de una reunión crucial celebrada en junio de 1991.

PASARON TRES SEMANAS, y una tarde el periodista recibió la indicación de ir a la Plaza San Martín y apostarse en una pizzería en la esquina de la avenida La Colmena. Llegó a las cinco de la tarde, y media hora después ingresó al local una mujer vestida con sencillez, fue directo a la mesa del periodista, esbozó una sonrisa como saludo y le entregó un sobre. En su interior había un disquete con un archivo que contenía un documento extenso, una larga exposición sobre los fundamentos de la guerra no convencional y, al final, un texto bajo el título:

LA HISTORIA DE LA MESA REDONDA

En junio de 1991, el comandante general del Ejército, Pedro Villanueva Valdivia, ordenó realizar una reunión de emergencia convocando a todos los oficiales generales.

Asimismo, el general Pedro Villanueva Valdivia le hizo saber al jefe de la

DINTE, general Juan Rivero Lazo, que, para la toma de decisiones, se debía realizar una exposición al Alto Mando sobre la situación político-militar de Sendero Luminoso y el modo de enfrentarlos de manera radical. Rivero sugirió al general Villanueva que a dicha reunión concurran dos capitanes y sean los encargados de realizar dicha exposición, porque conocían los pormenores de la guerra. Villanueva dio su conformidad.

Un miércoles del mes de junio de 1991, los capitanes Santiago Enrique Martín Rivas y Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, junto al general Rivero, nos dirigimos al quinto piso del Cuartel General del Ejército. Los dos capitanes vestíamos de civil con ternos oscuros. La seguridad era extrema. El propio jefe del Comando Administrativo del Pentagonito, general Zevallos Málaga, tenía en sus manos una relación de los generales que debían asistir al evento y personalmente se encontraba chequeando el ingreso de los mismos. Recuerdo a los siguientes: Gral. de Ejército Pedro Villanueva Valdivia, Comte. Gral. del Ejército; Gral. de Div. Nicolás De Bari Hermoza Ríos, jefe de Estado Mayor del Ejército; Gral. de Brig. Juan Briones Dávila, subinspector General del Ejército (reemplazaba al Gral. Div. Luis Palomino Rodríguez, quien se encontraba en los EE.UU); Gral. de Div. Pizarro, Comte. Gral. de la Primera Región Militar con sede en Piura; Gral. de Div. José Valdivia Dueñas, Comandante Gral. de la Segunda Región Militar con sede en Lima; Gral. de Div. Rodolfo Robles Espinoza, Comandante Gral. de la Tercera Región Militar con sede en Arequipa; Gral. de Div. José Pastor Vives, Comandante Gral. de la Quinta Región Militar con sede en Iquitos; Gral. de Brig. José Ferreyros Seguín, jefe de la Oficina de Información del Ejército; Gral. de Div. Robledo, jefe del Comando de Personal del Ejército; Gral. de Brig. Petronio Fernández Dávila Carneiro, jefe del Comando del Frente Interno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Gral. de Brig. Martínez Aloja, Comte. Gral. del Frente Político-Militar de Ayacucho; Gral. de Brig. Luis Pérez Documet, Comte. Gral. del Frente Político-Militar de la zona del Centro con sede en Huancayo; Gral. de Brig. Ramal Pezantes, Comte. Gral. de la División de Fuerzas Especiales con sede en Lima; Gral. de Brig. Ríos Araico, Comte. Gral. del Frente Político Militar del Huallaga con sede en Tarapoto. Completaban esta reunión los generales Delgado Bejarano, Chamocho Munda, Howard Rodríguez, Salazar Monroe.

Al iniciarse la reunión tomó la palabra el general Pedro Villanueva, en su condición de Comandante General, quien se dirigió a todos los allí presentes: «Señores oficiales generales hoy es un gran día en la historia de nuestro Ejército, todos los aquí reunidos representamos a la gran masa de soldados que

en estos momentos combaten al enemigo terrorista a nivel nacional, por lo tanto, los acuerdos que serán debatidos en esta reunión podrán ser aceptados o rechazados, pero mientras eso no ocurra ninguno de los aquí presentes podrá abandonar este lugar; esta reunión durará hasta que tomemos una decisión unánime lo cual permitirá un accionar más contundente sobre el enemigo subversivo; los he hecho llamar a todos para escuchar sus opiniones con respecto al actual desarrollo de la guerra, los acuerdos que aquí se tomen serán de entera responsabilidad de todos nosotros».

Luego cedió la palabra al director de Inteligencia y este, por su parte, indicó que dos oficiales de menor grado pero experiencia en la guerra antisubversiva harían una exposición.

El capitán Martin Rivas comenzó precisando que la exposición estaría basada en experiencias de combates en la zona rural y urbana del país contrastadas con experiencias de guerra revolucionaria en otros países, así como el aprendizaje de la doctrina ideológica de Sendero Luminoso basada en los textos de Mao Tse Tung referentes a la guerra de movimientos, guerra de baja intensidad, guerra de posiciones, equilibrio estratégico y guerra de aniquilamiento.

Informó sobre el brutal accionar de Sendero y la gran necesidad de cambiar de estrategia y de combatir al enemigo con sus propios métodos, es decir, pasar a la guerra de baja intensidad, a la guerra clandestina, con todo lo que ello significaba y con la necesidad de usar métodos equivalentes. Explicó que el Estado en los últimos años había ido perdiendo el principio de autoridad, principio esencial que se debía recuperar para la supervivencia del Estado.

En esta larga exposición se presentó también el Libro rojo o Manual de la guerra contrasubversiva en donde constaban las sugerencias para presentar batalla conjunta al enemigo.

Después de varias horas de discusión y con el acuerdo de todos los oficiales generales se planteó lo siguiente: el único camino a seguir era enfrentar al terrorismo con sus propios métodos; por lo tanto, por cada autoridad caída por actos terroristas, se debería responder con operaciones de inteligencia que también generen el temor interno en Sendero Luminoso. El objetivo debía ser que ningún senderista se sienta seguro en ningún lugar del territorio, pues, Inteligencia lo encontraría a como diera lugar («El zorro perseguiría a su presa hasta su propia madriguera»).

Por cada acto terrorista realizado contra la población civil, Inteligencia debía responder en forma contundente y aún más drástica sobre objetivos terroristas. Con estas acciones de aniquilamiento, el senderismo lo pensaría, no

una vez, sino muchas veces, antes de realizar algún acto terrorista contra las fuerzas militares o policiales o políticos y ciudadanos. Se les haría sentir que ellos no eran tan clandestinos como hacían creer.

Asimismo, se debía cortar el medio logístico proveniente de la zona del Huallaga, así como alentar el avance ya iniciado por Guzmán y sus fuerzas hacia la zona urbana, principalmente Lima, en donde deberíamos derrotarlos, pues, ellos no conocían bien el combate urbano.

La reunión culminó con la aceptación, por unanimidad, de todos los acuerdos. Asimismo, se acordó que todo lo que se hiciera en adelante sería respaldado por todos los generales allí presentes y se debía guardar la reserva del caso y empujar el carro hacia la victoria final. El general Pedro Villanueva volvió a tomar la palabra y dijo: «Hoy día vamos a empezar a ganar la guerra, aquí están reunidos los comandantes generales de los próximos diez años, si alguno no está de acuerdo que dé una alternativa, de lo contrario, habrá unanimidad». Nadie se opuso.

Quedaba solicitar la aprobación del Presidente de la República. Días después, se nos informó que, en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, tomaría las decisiones y acciones políticas que fuesen necesarias. La orden estaba impartida. Igualmente, el Presidente de la República ordenó que se realice una reunión entre los jefes de inteligencia de los institutos armados y de la Policía Nacional, a fin de que coordinen las futuras acciones conjuntas para terminar con el enemigo en el más breve plazo, en dicha reunión deberían estar todos los elementos operativos y los jefes de decisión directa. Por otro lado, indicó que quien lo representaría sería su asesor en el aspecto de seguridad, el Dr. Vladimiro Montesinos Torres.

En el mismo disquete y a continuación de este texto, seguía uno más breve con el título:

REUNIÓN EN EL SIN DE TODOS LOS ÓRGANOS DE INTELIGENCIA

Esta reunión tuvo una duración de dos días, en los cuales cada uno de los entes de Inteligencia expuso la situación y los alcances obtenidos en los últimos años en cada instituto. Se encontraban al mando de la inteligencia de cada uno de sus institutos los oficiales que, en años anteriores, habían sido promoción en el curso de Inteligencia: los generales Juan Rivero Lazo (Ejército), Elesvan Bello Vásquez (Fuerza Aérea), Antonio Ibárcena Amico (Marina) y Antonio Ketín Vidal Herrera (Policía).

Se explicó que el móvil no era trabajar para beneficio propio o de

instituciones, por el contrario se debía entender que la guerra había que ganarla con la participación de todos.

Se llegó a determinar y aprobar mecanismos y coordinaciones sobre operativos de vigilancia, seguimiento y eliminación de senderistas. Se acordó que la Policía pondría el énfasis en vigilancias y seguimientos, y luego los grupos operativos de las Fuerzas Armadas serían las encargadas de realizar la respectiva limpieza.

En esa reunión también se llegó a determinar que todas las capturas serían presentadas por la Policía, DINCOTE, y que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas que laboraban en la clandestinidad no deberían aparecer para nada. Sobre todo se debería evitar que aparezcan en los medios de comunicación. Esto para evitar que las acciones clandestinas de los equipos de Inteligencia del Ejército se pudieran conocer y para evitar que sus efectivos sean identificados por los terroristas.

LA MUJER QUE ASOMÓ EN LA PIZZERÍA fue portadora de un testimonio importante. Trajo información de fondo sobre la manera en que los niveles de mando fueron generando decisiones que, poco después, darían lugar a cruentos episodios. En los días siguientes se retomó el contacto. Los personajes de la camioneta salieron de escena y la novedad consistió en la llamada de una mujer al teléfono móvil de siempre.

Una mañana, en previsión de un pinchazo telefónico, le habló al periodista con familiaridad, como si fuera una amiga suya. Tras el saludo y un par de comentarios banales, dijo: «Me tienes que comprar el disco que me prometiste, que tal si esta tarde nos encontramos en Polvos Azules». Cuando el periodista contestó afirmativamente inquiriendo por la hora del encuentro, la voz de la mujer concluyó diciendo: «A las seis en el pasaje» y colgó tras simular una despedida afectuosa.

Polvos Azules es un mercado popular iniciado por vendedores ambulantes. Cuando los enfrentamientos entre la policía municipal y el tropel de desempleados que tomó las calles para inventarse un empleo llegó a extremos insolubles, un alcalde, de criterio práctico, les entregó un baldío cercano a Palacio de Gobierno para la instalación de un verdadero campamento de negocios inverosímiles. Con el tiempo, el esfuerzo de esos centenares de ambulantes, los precios cómodos de sus productos y el masivo ingreso de mercadería de contrabando les permitió un crecimiento suficiente para edificar una enorme galería comercial de varios pisos, con sectores específicos para cada rubro de negocio. En el primer piso de esa galería, ubicada a pocos metros de la

Plaza Grau, se encuentra, en medio de una bullanga de Babel, una cantidad de pequeños quioscos cuyo rumor aturde los oídos con una charanga de cantantes y orquestas sumidos en la confusión de sus ritmos: son los expendedores de discos compactos piratas. Con laboriosa y, acaso, igualitaria tecnología, se puede encontrar, por ejemplo, todo el catálogo de la Sony a precios largamente populares.

Al lugar acordado llegó una mujer de unos treinta años de edad. Vestía un *blue jean* y una blusa discreta y holgada, y tenía rasgos agradables. Se acercó desenvuelta, saludó aparentando familiaridad, revisó algunos discos y empezó a caminar dando indicaciones: el periodista debía tener una línea telefónica nueva y destinada únicamente a recibir y contestar llamadas de los prófugos. Por ningún motivo debía usarse en otras llamadas. Una vez instalada la línea debía comunicar el número a través de un correo electrónico a una dirección que la muchacha tenía anotada en un papel que alcanzó apretándole la mano al periodista. Caminaron juntos, y cerca de la salida, la mujer se despidió y se perdió entre el tumulto.

Una semana después de dar el aviso por el correo electrónico, el periodista recibió una llamada. Era la misma mujer. Lo citó en el cruce de las avenidas Universitaria y Venezuela, subieron a un microbús, avanzaron unas cuadras y luego caminaron dando vueltas por una y otra calle hasta desembocar en un parque. En ese momento, la mujer tomó asiento en una banca, le indicó al periodista una casa y le dijo que, cuando ella se hubiese marchado, se tomase unos minutos antes de tocar tres veces el timbre. Cuando el periodista cumplió con las indicaciones, la puerta se abrió y se topó con una escalera, por cuyo borde se extendía un cordel atado a la chapa de la puerta y que al tirar de él abría la entrada. No vio a nadie. Subió las escaleras y, al final, a mano izquierda, cerca de dos sillones muy sencillos y un vetusto televisor apagado, se encontraba Santiago Martín Rivas.

En este nuevo refugio, el militar tenía un aspecto cansado y, sobre todo, adormilado, a pesar de que ya era el mediodía. Fue la primera vez que habló de un insomnio a nivel de aborrecible padecimiento. En sus momentos de mayor estrago podía quedarse en vigilia tres días continuos hasta verse obligado a tomar una aplastante dosis de hipnóticos a cuyo uso se resistía, no tanto por contraer una inevitable dependencia al fármaco, sino por un efecto secundario capaz de arruinar una cualidad de la que se preciaba: su memoria de elefante. Contó también que el desvelo lo había contraído en las incursiones en la sierra donde solían avanzar de noche, pero, al llegar el día, cuando tocaba el descanso, dormir se convertía en un riesgo que era mejor evitar. Ante la acotación del

periodista sobre la influencia que también debían de tener ciertos recuerdos, el hombre pescó la intención, frunció el ceño y, con un gesto de malestar, indicó tomar asiento.

Había mudado de refugio cumpliendo la regla de no mantenerse demasiado tiempo en un mismo lugar, pero también por influencia de una vecina provista de enorme curiosidad a la que se le dio por tocar durante el día la puerta del departamento apenas escuchaba el televisor o la radio encendidos y, al no ser atendida, reservaba el final de día, cuando llegaban los ocupantes visibles, para darles reporte del extraño fenómeno de un televisor o una radio que se encendían y apagaban por sí solos. Insistió tanto en su intromisión que la mudanza la debió efectuar antes del tiempo previsto y por ello «tenía algunos problemas logísticos» que no detalló, pero, sin duda, el principal asunto estaba solucionado porque en la mesa de centro, entre los dos sillones, estaba, como de costumbre, una campante botella de dos litros de Coca-Cola y los dos vasos de rigor para iniciar la conversación.

Aunque las reuniones en el SIN se destinaban a coordinar acciones, las rivalidades, antiguas y nunca resueltas, entre la Policía y el Ejército, se mantuvieron. Además, Montesinos aún no tenía el sólido poder que estaba construyendo, aquel poder que en el futuro daría lugar a que una simple llamada telefónica suya fuese suficiente para que la orden se cumpla. En esos días, algunos jefes policiales aún no habían «entendido» las reglas de juego que se avvicinaban. El 21 de junio de 1991, ocurrió un hecho a partir del cual Montesinos empezaría a mostrar la fuerza de sus decisiones.

En la noche de aquel 21 de junio, la Policía asestó un golpe importante al senderismo. Un organismo llamado Socorro Popular, inicialmente creado para acciones de ayuda a integrantes de Sendero Luminoso, había mutado sus fines para convertirse en parte del sanguinario brazo armado de la organización senderista. Casi todos los crímenes cometidos en la capital peruana contra políticos, militares, policías, alcaldes y empresarios, abatidos en las calles, en sus casas o en sus centros de trabajo, tenían la autoría de Socorro Popular. Asimismo, participaban en la organización de atentados que, en esos meses, habían sucedido a un ritmo de casi un centenar por mes. Lima estaba bajo asedio senderista y en el total del territorio peruano, a poco de cumplirse un año de gobierno fujimorista, se habían producido cerca de dos mil atentados de diverso tipo –asesinatos, voladuras de torres eléctricas, coches bomba, dinamitazos a locales públicos, cortes de carreteras con destrucción de puentes y cobro de cupos–. De modo que la captura de líderes de Socorro Popular fue un golpe de suma importancia.

A partir del análisis de los documentos incautados en el archivo senderista, la Policía ubicó una dirección: calle Santa Violeta 181, San Martín de Porres. Una zona populosa en el sector norte de la ciudad. Poco antes de la ocho de la noche, desde la azotea de ese inmueble, dos integrantes de la cúpula central de Sendero Luminoso, Yovanka Pardavé y Tito Valle Travesaño, asomaron y se fueron a cenar al chifa Mei Yin, ubicado a pocas cuadras del lugar. Cuando terminaban de cenar –«y antes de que abonaran la cuenta», se quejaría el propietario del establecimiento– ambos fueron capturados. Luego, operativos realizados esa misma noche en otros inmuebles permitieron la captura de otro jefe, Víctor Zavala Cataño, y se descubrió también una clínica clandestina para la atención de los senderistas heridos.

En unas horas, tres criminales, autores de demenciales atentados, otros mandos de menor rango y una amplia documentación, cayeron en manos de la Policía. La sorpresa fue conocer que Yovanka Pardavé contaba con varios documentos de identidad y, en medio de las bombas que tronaban para horror del país, había logrado salir y volver de Canadá y Francia en enero de 1990. Algo empezaba a cambiar, pero esas importantes capturas trajeron abajo al jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE).

«El jefe de la DINCOTE era el general John Caro –apunta Santiago Martin Rivas– y cuando cayeron la Pardavé, Valle Travesaño y Zavala Cataño, hubo una reunión en el SIN en la que estuvimos Montesinos, los generales Hermoza Ríos, Salazar Monroe, Valdivia Dueñas, Rivero Lazo, el comandante Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, el capitán Pichilingue y quien habla. La idea era, como se había establecido, que la policía nos entregue a los detenidos para interrogarlos porque los policías no lograban hacerlos hablar. Los terroristas ya sabían cómo eran los interrogatorios tipo de la Policía. Estaban entrenados. Además, nuestro interrogatorio era llevado a la parte política y no a la comprobación de hechos, y eso daba lugar a que se les fuera la lengua. Aparte que estábamos entrenados en técnicas de interrogatorios. Ese fue uno de los cursos que hice en Colombia. Nos iban a entregar a los tres por un fin de semana. Lo llamaron a John Caro, y antes ya habían hablado con el fiscal Pedro Méndez Jurado para que no intervenga nadie de la Fiscalía. Pero Caro no quiso. Y eso cayó mal porque varios datos para el operativo habían salido del trabajo de análisis conjunto realizado en el “Palomar”. Además, había un acuerdo sobre el sistema de trabajo. Pero John Caro dijo no. Luego hizo una concesión y aceptó que el interrogatorio fuese en la DINCOTE. Nos dieron la orden de ir a mí, a Pichilingue más dos comandantes de contrainteligencia de la Marina. Fuimos y hubo problemas».

A la negativa del jefe policial se añadió la rivalidad entre Martín Rivas y Benedicto Jiménez, un oficial de la Policía de igual rango y también conocedor de los problemas del terrorismo. Se conocían desde 1983, ambos habían servido en Ayacucho, la zona donde emergió Sendero, y siempre habían tenido sus propias miradas sobre el análisis político y militar aplicado a esa lucha. En ese momento, los celos profesionales se agudizaron: era la mayor captura del año, conseguida tras muchos reveses, y Jiménez, al igual que el resto de policías, consideró que el Ejército no debía tener ingerencia en ese operativo.

«John Caro quería presentarlos a la prensa ya mismo –prosigue Martín–, nosotros queríamos explotarlos antes de que todo trascienda y antes de que sean entregados al fiscal, porque cuando llegaban los abogados democráticos,³² los terroristas terminaban protegidos. La idea era conocer qué tanto sabían de Abimael Guzmán. Sabíamos que tras varias horas seguidas de interrogatorio iban a entrar en razón. Cuando informamos que no se pudo hacer nada y la Policía presentó a la prensa a los detenidos y encima filtró las discusiones que habíamos tenido, Montesinos se enojó. Llamó a reunión, asistimos los mismos de la reunión anterior y, entre otras cosas, informó que el general Ketín Vidal, que ya trabajaba en el SIN, sería el nuevo jefe de la DINCOTE. Al poco tiempo, después de que terminaron de preparar para el cargo a Vidal, John Caro se tuvo que ir a su casa. Por eso Ketín llega con medios, Montesinos le da recursos. Ahora, Fujimori y Montesinos niegan haber ordenado todo eso, y eso es puro cinismo».

En el archivo de las investigaciones anticorrupción del Congreso peruano, existen, entre centenares de cintas, dos videos rotulados con los números 806 y 807. Forman parte del lote de videos incautados a la caída de Vladimiro Montesinos y son testimonio de un caso singular en el mundo: todos aquellos intrínquilis de la política que suelen mantenerse en férreo anonimato, eran, en este caso, grabados por el socio de Fujimori.

En esas cintas están implacablemente registradas las miserias de la política, y son una prueba incontestable del inmenso poder acumulado por Montesinos, la impresionante influencia ejercida sobre todos los ámbitos del país y las diversas fechorías cometidas. En esas escenas, imprescindibles para la justicia pero también utilizadas con fines políticos por el gobierno sucesor de Fujimori, aparecen conversaciones de intriga política; parlamentarios oficialistas reunidos en pleno para recibir instrucciones; militares de alto rango recibiendo indicaciones; empresarios solicitando favores o transando negociados; magistrados de la Corte Suprema coordinando el sentido de los fallos judiciales; candidatos, incluso de la oposición, recibiendo instrucciones y financiamiento;

hasta escenas más grotescas: suscripciones de contratos y entregas de dinero en efectivo a parlamentarios opositores para conseguir su incorporación al oficialismo, así como montañas de dinero, uno, dos, tres millones de dólares en billetes entregados, entre sonrisas, a los propietarios de los principales canales de televisión del país. Todo grabado en video por Montesinos.

El sentido exacto de esa afición por grabar imágenes aún está por precisarse. ¿Chantaje a los personajes involucrados? Pero ¿cómo, si el asesor aparece en las escenas? ¿Registro de los hechos para darle a su socio Fujimori exacta constancia de las acciones realizadas? Puede ser, sobre todo por ese rasgo personal de Fujimori de mirar siempre bajo la lupa de la desconfianza. ¿Afición delirante por verse en las cintas de video? Quizá, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que una de las cintas incautadas muestra algo rayano en el desvarío. Montesinos y su amante Jacqueline Beltrán están de paseo en una playa del Caribe y con ellos van dos guardaespaldas, cada uno con una cámara de video, grabando los pasos de la pareja que se supone está en un viaje íntimo y de placer. El trastorno también afectaba al socio. Fujimori, durante años, tuvo contratados los servicios de una empresa encargada de filmar cada uno de sus viajes para luego prepararle ediciones personales que veía con agrado, las más de las veces a solas, en la sala de cine de Palacio de Gobierno.

Hay quien afirma, y merece algún crédito, que esas cintas, las de ambos, eran parte del material con el cual, en su momento, pensaban testimoniar «su gesta histórica» –uno, de manera pública; el otro, ante la comunidad de inteligencia–. Esa obsesión por los videos estaba referida a lo que ambos consideraban como las cuatro victorias de su gobierno: la derrota de Sendero Luminoso; la recomposición de la economía del país remontando una hiperinflación; la resolución del antiguo conflicto bélico con el Ecuador; y la derrota del otro grupo terrorista, el MRTA, lograda con un espectacular operativo militar que puso fin a la crisis de los rehenes en la residencia del embajador del Japón.

Sea cual fuere el resorte que hubo detrás, lo cierto es que las cintas existen, son pruebas indiscutibles, se hicieron públicas en transmisiones que un país azorado vio durante meses en el año 2001, cual símil político de la serie televisiva *Gran Hermano*. Existen otras cintas no divulgadas y en manos de Fujimori, porque fue este quien dejó el presente para su cómplice antes de fugar al Japón. Incautó con un falso fiscal las cintas, se guardó las que lo comprometían, seleccionó aquellas que incriminaban a Montesinos y tantos más, las archivó en unas maletas que mostró a la prensa, las puso en manos de un notario, embolsó las restantes y se marchó con ellas rumbo a Tokio, dejando

armado un cataclismo político y ético. Fue como un aviso entre siameses: cavarás mi fosa, pero también la tuya. Lo había anticipado Montesinos en la crisis de los días finales del gobierno: «Si caigo yo, también cae Fujimori». Y así fue. Y lo sabían ambos.

Pero volviendo a las cintas 806 y 807, en ellas existen revelaciones de Montesinos que refrendan el testimonio de Santiago Martín Rivas: los operativos militares no fueron actos aislados de un grupo de soldados, fueron parte de una estrategia preparada y aprobada por la más alta instancia de gobierno, y cuyas decisiones correspondieron al presidente Alberto Fujimori; al jefe de facto de los servicios de Inteligencia, Vladimiro Montesinos; y al comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos. Así lo afirmó, en privado ante un grupo de congresistas, el propio Montesinos:

«Cuando se combatió el terrorismo habían cuatro ejes centrales: la primera era la decisión política. ¿A quién le correspondía eso? Al jefe de Estado, al Presidente. Si no había decisión política nada funcionaba; o sea, si el estadista no definía el objetivo de erradicar la subversión, el aparato del Estado no andaba, y la violencia la tuvimos con el señor Belaunde, con el señor Alan García, no hubo decisión política y al no haber decisión política nada se organizó. (...)

»La otra cuestión, yo me acuerdo mucho, cuando se inició, el año 88, con Alan García, el proceso a Osmán Morote, ¿saben cuánto duró el juicio? Cinco años cuatro meses. ¿Y eso qué significa? Que cada vez que salía Morote, toda la televisión estaba en las diligencias para ver la declaración, y eso servía de combustible para la subversión. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaban de la publicidad de los medios. Y la primera noticia que hizo Morote fue cuando declaró, amenazó, que, en el año 2000, los jueces que lo estaban juzgando estarán en el banquillo y él será el juzgador, y entonces esa era la noticia que salía. Morote hacía las noticias y Sendero se alimentaba. Esa era la verdad. Había que romper eso, tenían que crearse los tribunales militares, los jueces sin rostro, los procesos sumarísimos. Claro, eran sumamente rígidos, pero todo ese mecanismo posibilitó que superáramos la situación en que nos encontrábamos.

»El trabajo de inteligencia tenía que ser coordinado –afirma Montesinos–. ¿Qué pasaba? Que no había una integración, no había una conducción central. Yo les voy a contar una anécdota. El año 90, el 28 de julio, cuando asume el Presidente de la República, tenemos la primera reunión acá, y vino el general Alvarado Fournier, ministro del Interior, con el general Cuba y Escobedo y John Caro. Estábamos sentados ahí y le preguntamos: A ver, John Caro, ¿cuál es su misión? Él dice: “Bueno, mi misión, la clásica del policía, combatir al terrorismo, capturarlo con las pruebas, elaborar el atestado y ponerlo a

disposición del Ministerio Público para que sufra la condena del Poder Judicial”. “Muy bien, ¿cuántos hombres tiene usted?”. “Cincuenta hombres”.

»O sea, el problema número uno del Perú era el terrorismo y John Caro tenía ¡¡¡cincuenta!!! hombres el año 90; teníamos guerra del 80 al 90, diez años, y la DINCOTE con cincuenta fulanos y para John Caro su misión era capturar. ¿Y cuándo capturar? Cuando ponen un coche bomba al sospechoso lo agarran y lo interrogan. Lo cuelgan de un hombro y si declara “suavecito” le mandan el atestado. Pero ¿quién buscaba a Abimael Guzmán? Nadie lo buscaba. Y esa era la realidad. Había que replantear ese problema.

»Entonces, el trabajo de Inteligencia –continúa Montesinos– ¿a dónde tenía que dirigirse? ¿A quién buscaban? Buscaban al hombre que ponía el petardito, al tipo que hacía el volante, al que hacía la pinta o al que estaba en la universidad haciendo la arenga. A esos agarraban. El trabajo tenía que orientarse al elemento pensante, directriz. Por eso es que el Presidente da una exposición al país, presenta, ustedes se acordarán, una famosa pirámide, y expone la pirámide y dice: “Acá está la cúpula, acá está el elemento medio y acá está el elemento de base. ¿Por qué fracasó –dijo– la estrategia contra el terrorismo en los diez años? No había decisión, no había mando, nada; todo se orientaba por inercia. La nueva estrategia de gobierno está diseñada ¿hacia dónde? A venir acá, o sea, a la cúpula. ¿Y en la cúpula cuántos son? No son más de veinte personas”». ³³

Eran diecinueve. Una cúpula formada con ese número siguiendo la misma cifra dispuesta para el Partido Comunista Chino por Mao Tse Tung, pensamiento y guía de Abimael Guzmán, quien, cuando fue capturado y ya prisionero, solicitó la dispensa de seguir portando el botón con el rostro de Mao que el propio líder chino le había prendido en la solapa al concluir el tercer adoctrinamiento que Guzmán tuvo en Pekín.

Entre esos diecinueve estaban los capturados aquel junio del 91, Yovanka Pardavé, Tito Valle Travesaño y Víctor Zavala Cataño. Otros cabecillas empezaban también a ser capturados y confinados a prisión. A todos ellos les quedaban pocos meses de vida y solo quedaría un sobreviviente: Osmán Morote Barrionuevo, el número dos de la organización, preso desde noviembre de 1988 por una delación ordenada por Abimael Guzmán. Pero antes iban a acontecer otros sucesos.

LOS TESTIMONIOS COINCIDENTES de Montesinos y Martín Rivas desnudan la política seguida y las órdenes libradas para los operativos clandestinos efectuados en esos meses, batallas silenciosas libradas en la ciudad, desapariciones nunca denunciadas por tratarse de integrantes de las filas

terroristas, cadáveres de senderistas abandonados en las calles de los barrios en que vivían como mensaje a la organización: «ya no son tan clandestinos como antes». Eran hechos indescifrables en ese tiempo. El país se había acostumbrado a contar los muertos por centenares y el límite de quién estaba dónde, era difuso. Tiempos duros en los que, incluso, hubo espacio para el negocio del terror implementado por algunos gurúes de escritorio permitiéndose irresponsables vaticinios para un país desesperado.

Cuando Sendero Luminoso emplazó en Lima a los destacamentos de aniquilamiento del llamado Ejército Guerrillero Popular –fanáticos sicarios provenientes del Alto Huallaga, escenario del pacto del terrorismo con el narcotráfico que financió el armamento subversivo–, empezaron a amanecer cadáveres nunca reclamados o enterrados en silencio. Cierto es que muchos de los caídos eran militantes del terrorismo y sus cadáveres expuestos eran el mensaje al contrincante que, a su vez, dejaba recados similares con los policías, militares y autoridades que la subversión aniquilaba en las calles y la televisión mostraba, con morbo, en cada noticiero. Eran senderistas, es el argumento de quienes avalan la inmemorial Ley del Talión. Pero, ¿cuántos inocentes cayeron en medio? ¿Cuántos fueron acusados de colaboración y se fueron a pudrir en las cárceles sin pruebas?, ¿cuántos fueron a dar a fosas clandestinas aún no descubiertas? Y, finalmente, ¿era el mecanismo que se debía seguir?, ¿era inevitable? Aún hoy, en tiempos del post 11 de setiembre, es una pregunta que abre debates todavía sin resolución. ¿Con qué armas y hasta dónde tiene derecho de defenderse un Estado? ¿Se combate la barbarie con la barbarie?

A pesar de los atroces episodios de la historia reciente, aún continúa la disyuntiva. Al día siguiente del salvaje atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York se podían leer estas líneas en el diario *The Washington Post*: «Este no es un crimen. Es una guerra (...) La primera reacción del secretario de Estado, Colin Powell, a este día de infamia fue prometer “llevar a los responsables ante la justicia”. Eso está muy mal. Se enjuicia a los criminales, pero se hace llover destrucción sobre los combatientes. Esta es la distinción fundamental que ya no se puede evadir (...) Este es un enemigo colosal. Calificarlo como un grupo de cobardes que perpetra inconscientes actos de violencia es una necesidad complaciente. Aquellos dispuestos a matar a miles de inocentes, al mismo tiempo que acaban con sus propias vidas, no son cobardes. Son guerreros mortales y perversos que deben ser tratados como tales. ¿Cuál es el responsable? Pronto lo averiguaremos. Pero cuando lo sepamos, no debe hablarse de “enjuiciar rápidamente” a esta gente. Un acto abierto de guerra requiere de una respuesta militar, no judicial».³⁴

Esa visión, que añade violencia a la violencia y pretende justificar la respuesta al terror con métodos terroristas asumidos por un Estado, es la base de la mentalidad militar –utilizada por gobernantes de turno– imperante desde hace muchas décadas, primero para combatir la violencia del comunismo, y luego para hacer frente a la enajenación del terrorismo. La experiencia demuestra que al final queda un degradante resumen de crímenes contra la humanidad y, si se quiere ver el asunto desde la eficacia, el enemigo no resulta derrotado.

Para Martin Rivas, al igual que el contingente militar latinoamericano, la respuesta es una: «Nosotros obedecemos órdenes; si no las cumplíamos nos sometían a proceso, y al cumplirlas combatimos al terrorismo para salvar al país». Es el concepto de la obediencia debida, pero ella, sin embargo, trae consigo una reflexión no atendida en los predios militares: «¿Se deben cumplir órdenes que afectan derechos elementales de las personas?».

Lo cierto es que, en la explosiva batahola de ese tiempo, la opción para Fujimori y sus jefes militares se resumió en una frase: «El zorro perseguirá a su presa hasta su propia madriguera». ¿En qué consistió, específicamente, la estrategia aprobada desde la más alta instancia de gobierno? Quien puede dar noticia exacta de los acuerdos tomados en El Pentagonito, en la llamada Mesa Redonda de junio del 91, es el propio expositor de los conceptos explicados aquella vez a los jefes militares, el entonces capitán Santiago Enrique Martin Rivas.

EL MILITAR ES DE LOS QUE EXTREMAN cuidados en su relato. En los días anteriores a la cita escribió, en una pequeña computadora personal, un extenso documento recapitulando el episodio de la llamada Mesa Redonda. En él, junto a datos sobre aquel evento, se expusieron consideraciones conceptuales sobre la manera en que el Ejército le propuso a Fujimori enfrentar al terrorismo. La versión completa muestra a un profesional con un conocimiento solvente sobre el tema y eso explica la razón por la cual, a pesar de su rango menor, fue ubicado como expositor ante la plana mayor militar. Esta es la versión resumida de la exposición que Martin Rivas dio a la jerarquía militar la noche en que tomaron la decisión de combatir al terrorismo con una nueva estrategia.

La guerra convencional es el choque entre Fuerzas Armadas de dos o más países que entran en conflicto. Estas fuerzas se enfrentan respetando ciertas normas o leyes de la guerra, como el empleo de uniforme, el respeto a los prisioneros de guerra, a los heridos, a las declaratorias de guerra y a la restricción en el uso de determinadas armas. Todas estas características son reconocidas por el Derecho Internacional a través de sus organismos y

convenciones. Esa es la guerra convencional.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, surgió un nuevo tipo de guerra que, por no respetar las leyes y convenciones, se ha dado en llamar **guerra no convencional**. Denominada también **guerra clandestina, combate de baja intensidad o guerra sucia**. Tiene las siguientes características:

- La lucha no es entre dos Estados sino entre dos ideologías opuestas; una, fundamentalista y opresora que lucha por destruir la otra, la democracia occidental, en la cual se profesa la libertad de culto y de elección.
- No hay declaratoria de guerra ni desplazamientos militares de gran magnitud, y las armas convencionales pasan a segundo plano ante otra arma mucha más peligrosa: el arma psicológica.
- No hay fuerzas adversas, uniformadas y armadas; el enemigo se esconde y confunde en la población y forma parte de esta.
- Es difícil descubrir quién o quiénes de los que nos rodean son los enemigos. Este enemigo sale del interior mismo del país y la desintegración comienza desde dentro.
- El enemigo comunista o fundamentalista habla de libertad, democracia popular, nacionalismo, derechos humanos, conceptos llevados hacia sus intereses e interpretados desde puntos de vista particulares.

En estas condiciones, el militar profesional que tiene una preparación para defender las fronteras de su país y para luchar contra el enemigo mediante el combate con métodos convencionales, se encuentra confundido porque las fronteras están intactas, porque no lucha con el enemigo enfrente, sino con el enemigo oculto que aparece por todos lados; inicialmente no esgrime armas, sino ideas y presenta signos apenas perceptibles que impiden identificarlos y, aún cuando cometa el error de mostrarse, no se le puede atacar y destruir porque «estamos en paz», porque es «libre de expresar sus ideas y pensar como mejor le parezca». Así, en estas condiciones y sin una orden para atacar, sin un objetivo por conquistar o una zona por defender, se explica que sea desconcertante hacer frente a este enemigo que «sin haber declarado la guerra, hace la guerra, pero pretende la paz».

Las ideologías fundamentalistas recurren a la **guerra no convencional** materializada mediante las acciones terroristas. El objetivo es destruir una sociedad, quebrando la relación entre autoridades y población, para tratar de imponer su propio orden. Para ello recurren a crear una sicosis colectiva nacida

del miedo, la inseguridad, el terror, en tal magnitud que el organismo social se paralice y, aún teniendo los medios de defensa en sus manos, no sea capaz de utilizarlos.

El método utilizado por el terrorismo es la intimidación y la eliminación. Y las acciones del terrorismo se realizan de manera selectiva y sistemática en presencia de la población, buscando producir en ella shocks psicológicos; luego, la prensa y el comentario público se encargarán de cimentar el pánico.

*Al iniciarse los 90, el terrorismo, mediante la **dislocación** había quebrado el tejido social del país, es decir, en términos del senderismo maoísta «habían agudizado las contradicciones del sistema». Luego, mediante la intimidación (amenazas, asesinatos, coches bomba, atentados a locales públicos, paros armados) habían ocasionado la desmoralización (pérdida de fe de la población, migración interna, éxodo al exterior, proliferación de huérfanos y viudas, reclamos al Gobierno y Fuerzas Armadas) y, finalmente, en forma conjunta y simultánea se había generado una circunstancia letal la eliminación (asesinatos selectivos de líderes y personalidades).*

En esas circunstancias, se requiere responder con los mismos métodos, con acciones clandestinas, con acciones de infiltración en el enemigo y, sobre todo, generándole al terrorismo el mismo temor: hacerles sentir que sea cual fuese el lugar de su escondite serán descubiertos y su fuerza militar eliminada, con la finalidad de intimidar y buscar la desmoralización del terrorismo. Las guerras se basan en acciones y reacciones, por cada golpe recibido se está obligado a una respuesta similar y, sobre todo, mayor. Von Clausewitz la definió como «Un acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad». Esa es la guerra.

Todos estos conceptos que fueron expuestos y aprobados por el alto mando militar y el Presidente de la República no fueron, por supuesto, una creación nuestra. Son los conceptos que nos fueron enseñados en la Escuela de las Américas, a donde concurrimos muchos oficiales por orden de nuestra superioridad y por un acuerdo del Estado peruano y el Estado norteamericano. Era el modo de luchar contra la subversión.³⁵

*Estos conceptos se registraron en un documento titulado *Esquema estratégico-táctico para enfrentar al PCP-SL*³⁶ en los aspectos político, ideológico y militar. Según el testimonio de Pichilingue, refrendado por Martin Rivas, el documento tuvo cuatro únicos destinatarios. Era un amplio estudio sobre el movimiento senderista a partir de sus propios documentos y, a partir de ello, se planteaban las acciones a seguir. Se destacaba un capítulo denominado «Línea militar», en el cual estaban desglosados todos los movimientos*

operativos de la subversión. En realidad, era el estilo de guerra maoísta al cual se debía oponer, en la lógica seguida entonces, los usos de la guerra no convencional, es decir, lo que en Latinoamérica se ha conocido largamente, y con secuelas dolorosas, como «guerra sucia». Cambiaba el territorio y el estilo del enemigo podía ir desde la guerrilla urbana en el Río de la Plata, la masa chilena politizada, pero sin armas, o el fanatismo maoísta peruano. En todos los casos la respuesta fue la misma: desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas y gobiernos militares o civiles actuando con el aval de Washington.

EN 1991, LAS CALLES DE LIMA eran un escenario de combate. Tras una cruenta guerra interna iniciada en 1980, Sendero Luminoso creyó que había llegado el momento de tomar por asalto el poder. La hora del «equilibrio estratégico» asomó en el extravío de Abimael Guzmán. Lo alentó un gobierno nacido de la casualidad, establecido sobre los escombros de un país derruido por la crisis económica y la violencia. Por lo mismo, los fanáticos creyeron ver la ocasión. Enfrente, estaban Fujimori, su asesor y sus militares, conscientes de su enorme fragilidad. Eran militares derrotados desde hacía diez años, y guarecido entre ellos, estaba un novato gobernante sacudido a punta de atentados. La opción era jugar su destino a cara o cruz. Eligieron la cruz.

²⁰ La referencia es a la frase de Vernon Walters, militar americano que era el segundo de la CIA cuando ocurrieron los golpes militares de Chile (1973) y Argentina (1976). Un artículo de *Clarín* reseña: “Los militares latinoamericanos –dijo alguna vez– son una fuerza estabilizadora y una pared para las ambiciones de los comunistas”. Y añadió: “Pinochet es un gran hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Terminó con la pobreza extrema en Chile”.

²¹ *Newsweek*: informe “Dirigiendo una escuela para dictadores”, 9 de agosto de 1993.

²² Documento entregado por el citado oficial y que se encuentra en el archivo del autor.

²³ *Born to kill*, clásico film bélico de Stanley Kubrick, un descarnado y crítico testimonio sobre la instrucción proporcionada a los marines que combatieron en Vietnam.

²⁴ El reporte abarcaba a toda entidad estatal. El Decreto Legislativo 746, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, dispuso que se reunía a todos los servicios bajo el SIN, incluidos órganos de inteligencia de ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales.

²⁵ Diario oficial *El Peruano*, mensaje a la Nación de Alberto Fujimori, 7 de febrero de 1990. (Las cursivas corresponden al autor). Los demás diarios de esa fecha consignan la misma información.

²⁶ Referencia a William Tena Jacinto, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La referencia no fue proporcionada por Martin.

²⁷ Sigla del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, organismo policial de vital participación en la lucha antsubversiva.

²⁸ Denominación coloquial dada a sociólogos, periodistas y políticos que asomaron como presuntos especialistas en el movimiento Sendero Luminoso.

²⁹ El general que comandó el Ejército Peruano entre 1991-1998 abrió las cuentas: 976.31 (a nombre de Creston Trust), 976.318 (Garden Trust), 796.319 (Arcadia Trust) en el Edmond Roschild Bank, de Suiza. Las cuentas Q-5668.481 (a nombre de Nanda Ltd.), Q-5668.481 (Atenea) y Q-5668.488 (Pegaso) se abrieron en la sede de Nueva York del ABS Lugano Bank de Suiza. Estas cuentas las abrió, a partir de 1994, el traficante de armas James Stone, quien hizo diversos negocios con el Ejército Peruano y tuvo estrecha relación con Vladimiro Montesinos.

³⁰ Siglas de la Dirección Nacional contra el Terrorismo.

³¹ En ese listado se encuentran Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue y Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, quienes efectivamente trabajaron en el manual que se utilizaría en la guerra clandestina. Junto a ellos, se incluye a cinco hombres de Montesinos que no conocían el tema, no participaron en nada pero necesitaban ascender: Luis Cubas Portal, Roberto Huamán Azcurra, Alberto Pinto Cárdenas, Roberto Paucar Carbajal y Ronald Robles.

³² Asociación de Abogados Democráticos fue el nombre de la agrupación bajo cuyo manto operaban los abogados senderistas defensores de los elementos capturados. Utilizaban, vía militantes senderistas, el asesinato y la amenaza contra jueces y sus familiares para obtener, como en efecto obtenían, la liberación de terroristas.

³³ Reunión privada de Vladimiro Montesinos con congresistas del oficialismo, realizada en abril de 1998. Consta en los videos 806 y 807 incautados al exasesor y archivados en el Congreso Peruano.

³⁴ “A la guerra, no a las cortes”, por Charles Krauthammer, página editorial *The Washington Post*, 12 de setiembre de 2001.

³⁵ La versión completa de este documento se encuentra en el archivo del autor.

³⁶ Sigla correspondiente al Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso.

TIEMPO DE REVANCHA

*No hay ninguna diferencia entre matar y
tomar decisiones por las que se
manda a los demás a matar. Es
exactamente lo mismo. Tal vez peor.*

GOLDA MEIR

«ERA UN INFIERNO, 7 SOLDADOS MUERTOS, 30 heridos... Barbarie, bomba vuela en pedazos ómnibus con la escolta presidencial». El titular del diario *La República* resumió la sensación dramática de los diarios que amanecieron en el país el sábado 3 de junio de 1989, dando noticia de la emboscada al regimiento escolta presidencial Húsares de Junín, ocurrido a muy pocas cuadras de Palacio de Gobierno.

Quince minutos antes de la una de la tarde, en la cuadra once de la estrecha y antigua calle Junín, un bus militar se detuvo porque un volkswagen aparentemente descompuesto impedía el tránsito. Un hombre se acercó empujando un triciclo y, en un abrir y cerrar de ojos, puso una caja bajo el vehículo y se unió veloz a los dos ocupantes que saltaron del pequeño auto que había detenido el tráfico. Cuando los tres terroristas voltearon la esquina, una explosión levantó por los aires al pesado autobús con sus veintisiete ocupantes y, en cosa de un instante, seis militares yacían despedazados, uno de ellos carbonizado, y los demás, gravemente heridos, se arrastraban entre los metales retorcidos del armatoste en llamas. Tenían en harapos los históricos uniformes de sus antecesores, aquellos que, en 1824, habían cabalgado victoriosos en la gesta libertaria de las pampas de Junín.

En la angosta calle del antiguo sector de Barrios Altos, quedó un enorme hoyo de un metro de profundidad junto a diez viviendas siniestradas, transeúntes heridos y vehículos con las lunas rotas retratando la brutalidad del atentado en medio de un alboroto de vendedores ambulantes, vecinos y pasajeros del resto de coches, todos, entre la conmoción y el pánico. A vuelta de esquina, en el jirón Huánuco, un policía quedó abatido con un disparo en la cabeza. Había intentado detener a los tres senderistas en su huida y terminó tendido en la acera con un rastro de sangre manchando su rostro.

Una hora y media después arribó el presidente Alan García. Rodeado de seguridad y periodistas, calificó como «rutinarios y negligentes» a las víctimas de su propia escolta. Era el Perú de 1989. Y aquel suceso de la calle Junín, en Barrios Altos, habría de finalizar recién dos años después, en una calle cercana y con un episodio igualmente feroz.

HABÍA TENIDO AÑOS MUY COMPLICADOS y, aunque en la paz de ese domingo bebía el vodka helado sintiendo en la piel la espuma del oleaje traída por el viento, El General traslucía en la mirada los recuerdos sombríos de una época plagada de historias ocultas, imposibles de borrar a pesar del rigor del silencio que se había impuesto.

El día en que sintió que el muslo izquierdo se le cocinaba sin dolor, pero con una sensación de brasa ardiente, entendió de golpe que la vida ocurre en un instante, que ese sol serrano en el iluminado cielo bajo el cual estuvo tendido, podía apagarse en el tiempo que tarda en fluir un chorro de sangre caliente sobre la pierna, ocultando los colores del pantalón y apelmazándose con la tierra. Por eso, cada vez que podía y a quien quisiera escucharlo, le alcanzaba la frase: «El verano era un regalo en el refugio de su casa». Llegaba, incluso, a contar detalles familiares de los tiempos difíciles, pero jamás soltaba una palabra sobre los episodios ocurridos en las zonas de emergencia donde combatieron, sin éxito, a Sendero Luminoso. Se limitaba a decir que había actuado «dentro de los lineamientos» y sabrá Dios lo que significaba exactamente esa frase genérica y cuántos incidentes ocultaba. Cuando pasados los años logró el ascenso a general, se volvió más reservado todavía y, en alguno de los recientes encuentros, el periodista pudo percartarse de que había incorporado a su modo de hablar el recurso de largos silencios de los cuales emergía con otro tema modificando el rumbo de la conversación.

Pero en la tarde cálida, mientras agrega hielo al vaso, dice, mirando el mar con insistencia: «Estos imbéciles cuánto dinero habían robado; siempre hubo rumores pero jamás pudimos imaginar tanta cantidad». Y aunque en ningún momento hizo una afirmación explícita, podía entenderse que su férrea negativa a hablar encontró una justificación para hacerlo al toparse con las noticias que revelaban una corrupción militar de órdago. Tal actitud no es necesariamente virtuosa porque bien puede provenir de una sincera necesidad de cuestionar lo ocurrido brindando un testimonio, como también puede ser la expresión de un estado de ánimo ante el fastidio de las noticias. Pero, en última instancia, es el testimonio el que interesa.

«Cuando armaron la nueva estrategia me hicieron algunas consultas por mi experiencia en las zonas de emergencia, pero como desde un inicio empezaron a tener esa actitud de círculo cerrado, me iba enterando de las decisiones una vez tomadas. Un punto importante fue el nombramiento del general Hermoza como comandante general. Cuando manejas una situación de crisis necesitas al hombre adecuado para esa crisis. Es probable que después no te sirva, que su papel sea para esa crisis y que sus cualidades para resolverlas, una vez solucionado el problema, ya no sirvan y se necesite un cambio. En ese momento, se necesitaba un guerrero para la guerra contra Sendero. Ese era Hermoza Ríos. Ya sé... está bien... –se interrumpe ante la sonrisa irónica de su interlocutor– para el país civil, para la opinión pública, para la prensa, Hermoza era un cualquiera, pero hay que pensar esto desde la interioridad del Ejército. El año 91, se consideraba

que el guerrero, el que podía ser el duro para pelear contra Sendero, el que podía asumir las decisiones a tomar, era Nicolás Hermoza Ríos. Además, con él se empezaron a dar los mensajes simbólicos. ¿Recuerdas que salía en público, en la televisión, haciendo planchas, corriendo junto a los soldados vestido de comando? Todo eso fue preparado y tuvo un sentido. Fue para dar la imagen de un jefe militar, de un soldado-soldado.

»Ese mensaje podía captarlo o no el peruano promedio, podían incluso burlarse los periodistas o los políticos, pero el objetivo era enviar ese mensaje al enemigo, al senderista. Decirles a sus militantes: “Miren, el jefe de este ejército es fuerte, es un militar duro, está en la cancha; al otro, al de ustedes, se le ha descubierto que es un gordo, borracho, mujeriego y que hace el ridículo bailando *Zorba, el griego*”.

»Aunque al común de las gentes le parezca una tontería, ese intercambio de mensajes es parte de una guerra clandestina. Esos simbolismos influyen en la tropa, la nuestra y la del enemigo. Y aunque el común de las gentes no lo entienda, toda guerra y todos los ejércitos se mueven, además de sus acciones, con sus símbolos y con sus mensajes. Y el terrorismo es el que más usa los símbolos y los mensajes. Cada atentado tiene un mensaje. Ahora bien, es verdad que Hermoza con su panza no era lo mejor, de acuerdo, pero al interior estuvo dispuesto a tomar decisiones que otros no se atrevían y tenía el ascendiente que se necesitaba para iniciar acciones de guerra. Era el hombre preciso para esa situación de crisis, una crisis que llevó hasta la humillación para el Ejército. Cuando Sendero voló el ómnibus con la escolta presidencial, lo hizo para demostrar que podía atacar al propio Presidente de la República, le estaba diciendo: “Hoy a tu escolta, mañana a ti”. Además, ese atentado fue hecho para demostrar que a los militares nos tenían acorralados. Aquella vez ¿qué pensó la gente? Que eramos unos inútiles, que en la sierra o en la ciudad nos volteaban igual. Y no fue casualidad que atentaran contra un destacamento que simboliza y forma parte de la historia militar. Fue un atentado para humillar al Ejército. Alan García no quiso tomar ninguna decisión y nos quedamos, como se dice, con sangre en el ojo. Pero cuando llega Fujimori apareció la ocasión. Apareció un presidente dispuesto a tomar la decisión política; entonces, faltaba el jefe militar para llevarla a cabo. Ese fue Hermoza Ríos. El no quería ser otro general derrotado. Te lo digo en una palabra: él estuvo dispuesto a ir adelante, a vengar las humillaciones, a aplastar al terrorismo, como finalmente se hizo, hasta llegar a casos como Barrios Altos y La Cantuta. Si hablas con Martín Rivas, te va a contar más detalles de los que yo conozco».

AL CABO DE VARIOS ENCUENTROS y con ayuda de la tertulia que desvanece el tedio

del encierro, entre los prófugos y el periodista se empezó a desarrollar una comunicación más fluida.

Al inicio, el vínculo se rigió muy formalmente por el nexo establecido a través del General, cuyo aval fue fundamental para abrir el silencio encerrado a piedra y lodo de los dos militares. En los primeros encuentros, los requisitos de seguridad eran ineludibles y tomaban su tiempo, y una vez puestos frente a frente, los diálogos entre el periodista y los dos mayores se acompañaban de un inevitable estudio de los gestos, las miradas y las actitudes de cada uno de los involucrados. Luego, conforme transcurrían las citas, los silencios incómodos y las dudas mutuas, fueron dando paso a una soltura mayor en las conversaciones.

El periodista tuvo el tino de no exigir siempre material informativo, y dejó que algunas de las reuniones transcurran en una cháchara informal que les servía a los enclaustrados como una distracción cercana a la terapia. En esos parloteos, Santiago Martín Rivas mostró una memoriosa afición por el fútbol que le permitía recordar alineaciones enteras de los mejores elencos de Universitario de Deportes, su club favorito. Podía recitar el minuto y el modo en que ocurrieron goles memorables. Conocía, con una precisión de archivo, las formaciones de los rivales en los encuentros históricos por la Copa Libertadores de América, y las repetía adornando sus recuerdos con anécdotas perdidas en los diarios de cada época.

Otro dato sorprendente resultó su afición por la lectura. Cuando meses después lo capturaron, la policía le requisó ejemplares de Borges, Saramago, Umberto Eco y Graham Greene. A su compañero de cerrojo le atraían más bien los libros sobre los servicios secretos y, ambos, eran aficionados a películas en video que alquilaban a través de algún colaborador. Preferían los *films* con biografías sobre personajes históricos, los episodios bélicos de Vietnam y la Segunda Guerra Mundial o, simplemente, el género de acción. En cada uno de sus cambios de morada, a pesar del problema causado por su tamaño, no dejaron de llevar consigo un vetusto televisor y una videocasetera en buen estado, artefactos que les permitían despacharse una ración de películas, vistas una y otra vez en el insomnio de la madrugada.

Pero el insomnio no era solamente producto de un disturbio del sueño contraído en las labores sin horario de sus años en las sierras de Ayacucho y Huancayo y en la selva del Huallaga. Era un malestar proveniente, sobre todo, de la malevolencia de los recuerdos.

Cuando un hombre mata a otro no sabe que cargará para siempre con ese instante. Toda muerte, por más que se ampare en la excusa del cumplimiento del deber, genera pesadillas. El síndrome de guerra tiene, al fin y al cabo, el

implacable material de los recuerdos. El seco golpe contra el piso de un cuerpo abatido, la última mirada de horror o súplica o rencor del victimado, los quejidos, los ayes, el espanto amplificado de los gritos, las maldiciones o los lamentos, una oración, una frase última con el nombre de una mujer o un hijo. Todo eso se fija, indeleble, en la memoria y asoma con los años. Cuanto más lejos en el tiempo se cree de estar de esos episodios, más recurrentes se tornan las remembranzas con un tormento tal que el sueño es imposible y las madrugadas eternas son lo más parecido a una insoportable desesperación. Tal vez si supieran cuánto los va a perseguir la implacable memoria, más de uno omitiría un disparo fatal, el tiro de gracia. Pero cuando un hombre mata en nombre de un uniforme piensa que está cumpliendo con un deber y el desvarío de la adrenalina lo lleva, incluso, a sentirse satisfecho. Solo después, aunque se niegue a admitirlo, sabe que toda muerte nunca deja en paz. Pero ya es tarde cuando lo advierte y las noches se van en blanco, unas tras otras.

Cuando se convencieron de que el silencio de los años anteriores no los había conducido a nada y cuando se persuadieron de que el periodista no buscaba un material para un reportaje de coyuntura, el diálogo se hizo más fluido y más confidencial. Se añadió también la advertencia, siempre insinuada, de que la seguridad de los prófugos pasaba a tener relación directa con la seguridad del periodista. Nunca usaron términos explícitos, pero sabían revestir un aviso como si fuera una sugerencia.

Una tarde, citaron al periodista para darle respuesta a una propuesta que él había planteado: hablar de los asuntos más espinosos y empezar a discutir la opción de grabar un testimonio en video. Ese día fueron evasivos en cuanto a la filmación, ni confirmaron ni negaron la posibilidad –que más adelante se instrumentó–, pero sí fueron explícitos en su decisión de conversar sobre los temas más oscuros. Le informaron que cambiaban de refugio y debían hacer un trayecto largo porque habían decidido cambiar radicalmente la zona geográfica de su clandestinidad. Iban a cruzar la ciudad de sur a norte con el riesgo de ser interceptados por alguno de los retenes policiales establecidos en la Panamericana Norte. Estaban convencidos, sobre todo Martin Rivas, de que un encuentro con la policía iba a terminar con ellos muertos a balazos. «No nos van a tomar presos, nos encuentran y nos matan, nos aplican la ley de fuga», sostenía Martin, sin dar mayor explicación. Entonces, la presencia del periodista era para ellos como un salvoconducto para evitar ser muertos en caso de una captura.

Salieron de la casa ubicada frente al parque, a las nueve de la noche. El chofer del auto que pasó a recogerlos cargó los maletines con el equipaje, un par de frazadas, libros, una computadora portátil y, en el asiento posterior, al medio,

ubicó el televisor con la videocasetera. Luego, Martin Rivas se calzó una gorra, le bajó la visera hasta donde pudo, se ajustó el cierre de una gruesa casaca azul y esperó la indicación del chofer. A su lado, en el inicio de la escalera, Pichilingue esperó también la señal enfundado en una casaca color ladrillo. Cuando el chofer dio la señal los dos prófugos bajaron los escalones rápidamente y cada uno ingresó al vehículo usando la puerta de cada lado. Detrás de ellos, bajó el periodista, al que indicaron cerrar la puerta de la casa y situarse en el asiento delantero. Cuando el auto se puso en marcha, la bodega de la esquina estaba cerrando sus puertas y en un banco de la plaza un grupo de muchachos fumaba y reía. No había nadie más. La noche tenía esa insidiosa humedad limeña que empapa hasta el hastío.

El auto dio unas vueltas por la zona, volvió a pasar por el parque y luego enrumbó con dirección al Callao. Los pasajeros iban en silencio; de cuando en vez, un murmullo apagado surgía del asiento posterior. El chofer conducía rígido, con las dos manos aferrando con fuerza el volante, y tenía la vista atenta a cada detalle de la vía.

Tras unos minutos, se oyó la voz de Martin Rivas recordándole al chofer la actitud a tomar en caso fuesen interceptados por la policía. Su voz tenía un toque de agitación. Cuando terminó de hablar, su compañero, Carlos Pichilingue, agregó: «Al hablar con los “tombos” tienes que actuar con naturalidad». El chofer asintió. Cuando el vehículo giró para ingresar a la ruta que da a la refinería de La Pampilla, el piloto dijo con tono áspero:

«Desde aquí tenemos que estar bien moscas». Pero, la ruta estaba despejada, apenas un camión a paso cansino por la derecha. La iluminación era pobre y, solo al pasar por las instalaciones de la refinería, los reflectores iluminaron la noche dejando ver la bruma de una niebla incipiente. Pero no había ningún vehículo patrullando. «Ojalá antes del empalme con la Panamericana no esté la policía de carreteras», volvió a hablar el conductor siempre con su tono cortante.

El viaje siguió en total silencio y ni siquiera para disipar en algo la incertidumbre encendieron la radio. Tras pasar la ciudad de Ventanilla y antes de la cuesta hacia las casas de estera de la «invasión»³⁷ conocida como Pachacutec, sobre la mano derecha, a unos quinientos metros de distancia, apareció estacionada una camioneta gris 4x4 de la policía de carreteras. Todos los ocupantes se sobresaltaron. Martin Rivas le ordenó al chofer seguir a la misma velocidad y no mirar hacia el vehículo estacionado. Al momento de sobrepasarlo, el coche policial hizo una señal encendiendo y apagando los faros. «¿Qué hago?», preguntó el chofer. «Sigue igual, sigue tranquilo», respondió

alguien desde el asiento posterior. Por el espejo retrovisor, el chofer advirtió que la patrulla se había puesto en marcha. «Putá madre, nos jodimos», espetó, pero Martín le preguntó si venía a velocidad y el chofer replicó que no, que venía a velocidad normal. Pero apenas terminó de responder, se oyó la voz de Pichilingue gritándole al conductor: «Carajo, por qué aceleras, maneja normal, huevón». Ya era tarde. La patrulla advirtió el pique imprevisto del auto, encendió sus luces de alerta rojas y azules, descontó rápidamente la distancia y por el altavoz se oyó la indicación de que el auto debía detenerse.

Era un paraje oscuro y no había nadie a la vista. Ambos vehículos se estacionaron. Martín le dijo al chofer: «Baja y habla tranquilo». El periodista bajó la luna de la ventanilla y sintió la humedad en el descampado: respiraba copos de nube. Por el espejo lateral vio que el chofer saludaba al policía, que viajaba junto al conductor, mientras extendía el brazo al interior del vehículo. Un momento después, descendió el policía provisto de una linterna mientras las luces de la patrulla iluminaban una porción de la ruta.

Cuando el vidrio del lado izquierdo bajó, se encontró con el saludo de Pichilingue; al otro extremo estaba Martín Rivas, que reaccionó fingiendo estar soñoliento. Al ver en medio de los dos el televisor, el policía preguntó: «¿Y eso?»; de inmediato respondió Pichilingue «Nos estamos mudando, jefe», a la par que le alcanzaba el documento con el que la policía autoriza las mudanzas. El policía lo revisó y antes de terminar de leer, en sentido contrario asomó un camión lento pero con el motor bramando en el silencio de la noche. La atención se distrajo y al terminar el trueno, se oyó al policía decir: «Bueno, bueno, sigan» mientras devolvía el papel. El chofer puso en marcha el auto, miró por el retrovisor y dijo: «los “tombos” dieron la vuelta». Entonces, se escucharon los soplidos que siguen a la respiración contenida y, en medio de interjecciones, los tres individuos celebraron el final del percance. A su lado, el periodista sintió la garganta seca y el deseo de beber un largo trago de agua.

Varios kilómetros después, el auto ingresó a una estación de servicio. Se estacionó junto al minimarket, ordenaron apearse al periodista y le indicaron que espere en ese lugar. El vehículo retomó la marcha y, poco más adelante, visible apenas como un punto de luz, dejó la pista y se perdió entre las calles de tierra de un pueblo joven³⁸ instalado en pleno arenal.

Tras más de media hora de espera, con los huesos llenos de agua, el periodista vio reaparecer el auto. Venía solamente el chofer que lo condujo de retorno hasta la avenida Colonial. Allí le informó que, tres días después, a las dos de la tarde, debía esperarlo en la misma esquina en que lo estaba dejando para transportarlo «a su reunión con los muchachos» y, tras agregar: «casi nos

jodemos, maestro», se marchó. El periodista anotó con precisión los datos del lugar y esperó la llegada de un taxi.

A LOS TRES DÍAS, en el lugar establecido, con una hora de retraso «por cuestión de seguridad», apareció el mismo chofer en el mismo auto de la noche del traslado. Fueron al mismo destino, pero esta vez variaron la ruta utilizando el peaje de la Panamericana Norte. «Como ve, acá siempre hay “tombos” por eso no usamos esta ruta con los muchachos», se sintió obligado a explicar el lacónico piloto. En la estación de servicio del viaje anterior, esperaba la mujer del encuentro en el mercado de Polvos Azules. Con la misma actitud familiar, como si se conocieran de tiempo atrás, le indicó al periodista que debían tomar un microbús, que durante el trayecto mantuviese la vista abajo como si leyera y le alcanzó un diario. Subieron a uno con asientos libres, señal de que el paradero final estaba cerca, pero el periodista no tenía interés en resolver acertijos.

En un momento la mujer le indicó bajar, y caminaron unas cuadras hasta un inmueble cuya puerta abrió ella misma. Apenas asomó al interior de la pequeña vivienda, detrás de un descascarado librero de madera, que hacía las veces de separador de ambiente, el periodista se topó con los dos militares entumecidos alrededor de una mesa. En el arenal el frío es implacable. No importa si la modesta edificación tiene una losa de cemento sobre la cual reposa. La humedad se apelmaza con la arena y se cuele calando todo abrigo. Sin embargo, cuando, tras los saludos, la mujer sirvió dos humeantes tazas de café, el periodista no ocultó su sorpresa al ver que Santiago Martín Rivas, a pesar del frío, no suspendía su invariable costumbre de conversar con una botella de Coca-Cola al lado.

A diferencia de encuentros anteriores, estaban con una disposición más firme para hablar. Hicieron un preámbulo largo sobre el ostracismo de tantos años que terminó, según calificación propia, en «la satanización» de sus figuras. Dijeron haber conversado largamente sobre un punto que ahora advertían como fundamental: si en algún momento hubiesen abandonado el silencio, sus jefes no habrían ocupado, como lo hicieron, ese vacío para culparlos de todo. «Si hubiésemos dicho nuestra verdad, tal vez no nos mirarían como ahora nos miran todos». Por eso habían llegado a la conclusión de que, más allá de sus dudas, sus temores y suspicacias, acorralados como estaban, no tenían otra opción que contar lo que sabían. «Además –añadió Pichilingue– si todos han hablado, han dicho lo que han querido, y se han hecho tantas versiones, supongo que en algo servirá que se sepan cosas que han estado ocultas o tergiversadas». A su lado, como un jefe que escucha atento, Santiago Martín Rivas asentía. En las charlas siguientes ambos estuvieron juntos y, era obvio, que estaban compartiendo el

mismo escondite.

Con la libreta de apuntes sobre la mesa, un café al lado y la aplicada atención haciéndole olvidar el frío, el periodista empezó a escuchar y a anotar el testimonio que, acaso por esa jerarquía vigente aún en la intimidad de fugitivos, empezó con la voz de Martín Rivas.

«Una guerra es un intercambio de mensajes, de símbolos, no hay hechos aislados; desde un poste caído hasta un coche bomba, todo tiene una razón de ser. En este tipo de guerra, esa es la manera como dialogan los enemigos. Sendero la usó desde el principio. Lo que ellos llamaban ILA, el Inicio de la Lucha Armada, empezó con un elemento simbólico: esa ánfora electoral quemada el 18 de mayo del 80 en Chuschi, que se vuelve un hito, o los perros colgados en los postes del centro de Lima como anuncio de que iban a matar policías y militares. Esas señales servían para generar mística, moral en sus seguidores. ¿No ve que eso aparecía en los diarios? De ese modo, se enteraban todos sus combatientes. En cada muerte, Sendero dejaba mensajes subliminales. Cuando asesinaron al almirante Cafferatta, no solo apuntaron al Comandante General de la Marina, sino también al partícipe en la masacre del Frontón. Fue un mensaje. Después, mataron a Ponce Canessa, el jefe de los Infantes de Marina, y siguieron hasta Bolivia a Vega Llona. Mensaje a los oficiales y soldados: “Mira le doy a tus jefes por haber participado en tal o cual hecho; y si le doy a tus jefes, cómo no te voy a dar a ti; y si tú quieres ser jefe, piénsalo bien cuando decidas atacarnos”. Buscaban la desmoralización de nuestras fuerzas. Y nos llegaron a arrinconar. Mientras dimos respuestas convencionales fuimos blanco de emboscadas y atentados.

»El análisis de todos estos hechos permitió entender qué pasaba. Recién cuando entiendes es que puedes buscar soluciones. ¿Cuál era la mejor solución? Desaparecerles un par de dirigentes y generarles el efecto de sentirse descubiertos para que empiecen a ver en cada esquina a un agente de inteligencia. El mismo efecto que ellos nos causaban. Había que sacarlos de los pueblos jóvenes para evitar que tengan un lugar tranquilo para esconderse. Tenían que empezar a vivir a salto de mata y no posesionarse de un lugar. Desaparecías a ocho miembros de uno de sus destacamentos y entonces se sentían descubiertos, inseguros, con miedo, “Nos están dando a nuestros cuadros”; algo que no les había ocurrido antes. Y ese temor también debía llegar a la gente que los ayudaba.

»Por eso, empezaron los operativos de rastrillaje. No eran para encontrar terroristas, eran para obligarlos a salir de las zonas más pobres, para no dejarlos en paz y para asustar a quienes les ayudaban. Los rastrillajes también servían

para quitarles espacio porque después de las noches de revisión casa por casa, se le daba a la población agua gratis, víveres, corte de pelo. ¿A dónde se iban los senderistas? Empezaban a alquilar casas y eso significa crearles una complicación logística: dinero, fachadas para alquileres, vecinos desconocidos.

»Teniendo el Estado una organización de mayor envergadura, teníamos que replicar y meter el miedo que nos metían, que a ellos les pase lo que a nosotros: no saber si el heladero que pasa por su calle es o no un militar camuflado; solo así iban a empezar a sentir miedo, y cuando empezaron a desaparecer, más miedo, y en otros casos les dejábamos los muertos a la vista para escarmiento y para asustar a los colaboradores. Exactamente eso había hecho Sendero en los años anteriores. Destripaban a los policías, dinamitaban los cuerpos de los militares y con los civiles igual; la matanza de Lucanamarca, por ejemplo, fue espantosa, lo hicieron a propósito para que la gente se niegue a ayudar a los militares, a los policías. Igual ocurrió con los asesinatos de las lideresas populares. Cuando Sendero preparaba su Paro Armado del 92, María Elena Moyano se oponía. La mataron. Pero no les bastó con quitarle la vida: dinamitaron su cuerpo, lo despedazaron. Eso fue para asustar a sus seguidores, para paralizarlos. A Pascuala Rosado, igual. La mataron a la salida de su casa y la dejaron tirada en la calle para que el horror se difunda y evitar que aparezcan sucesoras de esas mujeres que organizaban a la población para enfrentarse al senderismo. Si eso crecía, era peligroso para ellos. Esas muertes tenían un mensaje: “Si alguien quiere ser líder, esto le va a pasar”.

»¿Quién inició esa guerra? ¿El Ejército? Frente a eso había que oponer los mismos métodos. Pero ahora la responsabilidad la quieren descargar en un grupo de militares que obedecemos órdenes. Es la salida fácil del político, es la salida de los mandos, fue la siniestra maniobra de Montesinos que nos echó encima a la prensa. La participación del Ejército fue la opción tomada por el Estado, ordenada por el gobernante. Y cuando se dio la orden, ¿desconocían que los militares entraban a matar? Claro, ya sé, de inmediato el retruque es “pero nadie autoriza los excesos”. El problema es que la guerra es de por sí un exceso. Está hecha para matar. Esa es su miseria. Por eso no hay guerra limpia. Y es una contradicción hablar de guerra sucia. Toda guerra por definición es sucia.

»Solo así el Estado logró iniciativa estratégica. Sendero siempre la había tenido y recién entre fines del 90 al 92, el Estado empezó a imponer la autoridad perdida. Se entró a los penales, a las universidades, a poblaciones como Huaycán o Raucana que eran reductos senderistas en plena capital. Se empezaron a realizar acciones en el momento que el Estado disponía, y cada una de esas acciones tenía un mensaje. Era una guerra. Una guerra no convencional.

»Claro que después, con el país pacificado, se olvidó que una guerra no tiene ética ni moral. Los principios de guerra significan que el fin supremo es ganarla con el menor costo y las mayores ventajas, o sea, la menor pérdida posible de vidas humanas, pero de tu gente, y lograr imponer tu voluntad al adversario. Es verdad que la muerte, el repaso, la exposición de cadáveres no es algo ético, por supuesto, pero es un método de guerra que atemoriza al enemigo y a la población que quiera ayudar o sumarse. Al fanatismo solo se le puede controlar y combatir con los mismos métodos que utiliza, con la misma guerra clandestina. Lo contrario es darles ventaja. Y en el Perú, desde 1980, se les había dado esa ventaja».

Se queda en silencio, muy serio, con el ceño fruncido y la mirada dura, ausculta a su compañero antes de seguir, y dice, con tono marcial: «Esos fueron los fundamentos que se usaron para el caso Barrios Altos; ojo, le aclaro, no los inventamos nosotros, están en los manuales militares y a los militares nos enseñan y luego nos ordenan cumplirlos».

EL OPERATIVO BARRIOS ALTOS

Douglas Hiver Arteaga Pascual tenía una gran capacidad para observar con disimulo y guardar férreo silencio, había sido entrenado en el oficio de mirar y callar. Sin embargo, en marzo del año 2006, a los 57 años, preso, acusado por muertes que no eran de su autoría y abandonado por el Ejército, institución a la que pertenecía con el grado de Técnico Jefe Superior, decidió liberar del silencio una historia que había mantenido en reserva durante largos y complicados catorce años. Las mañanas del 15, 22 y 29 de marzo de 2006, de pie, frente al tribunal a cargo de su juzgamiento, narró la historia que está impresa en el frondoso expediente 28-2011 de la Primera Sala Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que juzgó a los militares del Grupo Colina por el caso de la matanza de Barrios Altos.

Douglas Arteaga había nacido el 30 de octubre de 1949, y al cumplir 40 años se infiltró en las filas de Sendero Luminoso. Era el año de 1989, la organización terrorista había logrado derrotar al ejército en la sierra, empezaba a operar en Lima, la capital del Perú, y Arteaga, un hábil integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), fue uno de los efectivos elegidos para llevar adelante el *Plan Telaraña* destinado a obtener información sobre la relación de las huestes senderistas con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y los partidos marxistas Patria Roja (PR) y Partido Unificado Mariateguista (PUM), entidades que, protegidas por su fachada de legalidad, daban apoyo a la organización encabezada por Abimael Guzmán.

El caso más flagrante era el del PUM cuyo líder era un parlamentario con gran protagonismo, Javier Diez Canseco Cisneros. Ya en el año 1983, con el terrorismo de Sendero Luminoso asolando al país, el PUM había difundido un acuerdo manifestando que «la estrategia revolucionaria en nuestro país demanda la acumulación de fuerzas en el terreno militar. La violencia revolucionaria es la respuesta a la violencia reaccionaria y por ello la organización militar es el instrumento esencial para la toma del poder».³⁹ Años después, a partir de 1985, cuando integrantes de Sendero Luminoso habían caído presos, Diez Canseco, desde su posición de congresista, proponía leyes de amnistía para los terroristas.

El Estado peruano remecido por el terrorismo, recién en 1989 atinaba a utilizar un arma más eficaz que los fusiles y las ametralladoras: la inteligencia, una de cuyas eficaces variantes es la infiltración en las filas enemigas. Así, Douglas Hiver Pascual Arteaga, apareció en el Pueblo Joven Villa El Salvador con la careta de vendedor ambulante. Se convirtió en activista vecinal hasta conseguir un cargo dirigenal que le abrió el acceso a las asambleas de la famosa, en su época, Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (Cuaves). Ubicación suficiente para exhibir sus intereses políticos y ser captado e infiltrarse en el objetivo inicial: los partidos Patria Roja y Partido Unificado Mariateguista.

Después, contó Arteaga ante el tribunal, que un senderista lo buscó en su puesto ambulante y le pidió que lo acompañara a recoger latas vacías (usadas para hacer granadas artesanales) en los basurales de Pampas de San Juan. Poco tiempo después lo invitó a un «bingo» que resultó ser una reunión clandestina en la que le obsequiaron ejemplares del vocero terrorista *El Diario*. «Empiezo en La Rinconada, me llevan a un local en la noche, era de esteras y allí estaban reunidos jóvenes, y dicen: “hay un nuevo compañero, bienvenido seas...” recibí clases de entrenamiento político, ideológico, como quince días... los instructores nos hablaban de Marx, Lenin, pensamiento Gonzalo, habían documentos...Lo primero que aprendí fue la regla de oro: nunca admitas que eres del partido».⁴⁰

Al informar a sus jefes de esta conexión, el militar infiltrado recibió la orden de variar su objetivo y de dedicarse a solamente a obtener información de los senderistas. Dejó de llamarse Douglas Hiver Pascual Arteaga, le entregaron documentos con una identidad falsa y le asignaron como clave un nombre de agradable sonoridad que hacía referencia a la dignidad de un abad de monasterio: Abadía.

En su nueva labor, el agente Abadía tuvo que sortear la valla de las pruebas a las que fue sometido en una «Escuela Popular» de Sendero Luminoso. «Eran duros, me estudiaban psicológicamente para ver si estaba mintiendo. Tuve varias

citas con ellos, me hicieron preguntas muy duras..., pero aprobé esos exámenes, lo supe hacer porque yo sabía de interrogatorios...después me dijeron: «te vas, compañero, a tal sitio», me destacaban a varios destacamentos de células, en Lima». ⁴¹ Tras lograr la confianza de sus nuevos compañeros empezó a enviar informes al Puesto de Inteligencia de Lima que le fue asignado. «Normalmente mandaba mis informes cada 15 días, 20 días, de acuerdo a cómo se presentaba la oportunidad... informes, directivas, nombres, relaciones, croquis, locales donde se estaban realizando actividades... todo con lujo de detalles... me cuidaba después que los aniquilamientos fallaban... yo daba cuenta a mi comando advirtiéndole que iba a haber un atentado a esa autoridad, contra ese puesto, etc.». ⁴²

En el verano de 1990 asomó la gran oportunidad para el agente infiltrado. Le dieron una dirección y un nombre. Abadía llegó al jirón Huanta 840 en Barrios Altos. Era un viejo solar con un cartel a la entrada que anunciaba: «Se arreglan cocinas Surge», y, en el patio, aparecían estacionados triciclos de los heladeros de Donofrio que desde hacía décadas circulaban por las calles de la ciudad de Lima. Preguntó por Filomeno León, el técnico en el taller para cocinas averiadas y un vecino le indicó dirigirse al interior 102. León lo recibió, lo acomodó en la vivienda, empezaron a vivir juntos, a compartir tareas y a distraerse encendiendo el televisor sobre el cual dormitaba un gato llamado Pirincho. Entonces, Abadía supo que el taller de cocinas y los carromatos de los heladeros eran la fachada para encubrir un refugio para el brazo militar senderista encargado de cometer crímenes selectivos y atentados terroristas.

En el departamento 102 había una escalera pegada a la pared que conducía a un altillo donde habían instalado camarotes para ocho personas y una pizarra acrílica. En ese ambiente se escondían los militantes «que llegaban de provincias, planificaban el atentado ordenado por sus jefes, lo ejecutaban y se marchaban nuevamente a sus ciudades de origen», precisa Arteaga. El agente Abadía supo también que los pacíficos triciclos de heladeros tenían apenas una capa de helados debajo de la cual se escondían, para su traslado, armas, dinamita y el letal Ammonium Nitrate Fuel Oil (Anfo) capaz de demoler un edificio o abrir forados allí donde explotase. Era una cobertura perfecta: los heladeros de Donofrio eran parte del paisaje limeño y nadie podía sospechar que eran vehículos para el transporte de utensilios de destrucción y muerte.

Las pesquisas de Abadía empezaron a dar resultados para el trabajo de inteligencia en contra de los terroristas. Una nota del Servicio de Inteligencia del Ejército señalaba que «Desde enero de 1991, delincuentes subversivos, aprovechando (...) sus actividades como «vendedores ambulantes» a nivel de Lima Metropolitana realizan actividades proselitistas y acciones de sabotaje,

particularmente en Lima cuadrada y calles adyacentes (...). Además, dirigentes ambulantes se vendrían reuniendo con mandos del PCP-SL en el Jirón Huanta No. 840, Barrios Altos, Lima, en la que vendrían coordinando sus actividades».⁴³

Sin embargo, en los insólitos días que vivía el Perú en 1991, dos agentes pertenecientes al Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Jhonny César Berríos Rojas y Silvia Madeleine Ibarra Espinoza, fueron detenidos por la policía, el 2 de abril, cuando tomaban fotografías a los inmuebles situados a lo largo del jirón Huanta. Vale decir, fueron apresados por realizar acciones de inteligencia para detener la bestialidad senderista que venía asesinando ciudadanos y destruyendo la ciudad de Lima. La tarea de Abadía tiene una evidencia más de eficacia: el primer día de junio de 1991 fueron detenidos los terroristas Juan Laurente Rivas y Carmen Paredes Laurente, junto a otros cuatro miembros rasos, en una casa ubicada en el Jirón Huanta No. 829, a pocos metros de la guarida senderista situada en el 840.

A mediados de 1991, Abadía recibió la orden de entregar sus reportes al administrador de un taller de mecánica. Lo llamaba por teléfono, preguntaba por el señor Alejandro y concertaban una cita. El señor Alejandro era, en realidad, Santiago Enrique Martín Rivas, mayor del ejército, jefe del destacamento clandestino llamado Grupo Colina.⁴⁴

En octubre de ese año, Abadía entregó a Martín la información que cambiaría sus vidas, ocasionaría muertes, golpearía duramente a Sendero Luminoso y concluiría, más de una década después, con ellos condenados a prisión junto a dos hombres poderosos que habían gobernado el país. Pero en octubre de 1991, entregar esa información era, para Abadía, cumplir con la misión encargada. Le reveló al mayor Santiago Martín Rivas que Filomeno León y Manuel Ríos, arrendatarios de los interiores 102 y 106, estaban organizando una pollada en el predio del jirón Huanta 840. El evento ya tenía fecha, 3 de noviembre, y acudirían mandos senderistas para intercambiar informes y definir atentados para el mes de diciembre. Los que regentaban el lugar eran, además, los que habían dado refugio a los terroristas que hicieron volar el bus con el destacamento Húsares de Junín a bordo, en junio de 1989 en la cercana calle Junín. Le entregó una tarjeta en la que se podía leer «Gran polladaailable, organizada por el Sr. Óscar León pro-fondos arreglo del desagüe». El precio de la cuota era de dos soles cincuenta, una cifra mínima incapaz de solventar la compostura de un alcantarillado. Ese día asistieron treinta personas, es decir, la recaudación tuvo una magra suma: 75 soles.

En ese tiempo, la pollada era una invención folclórica que había empezado a popularizarse hacía apenas un par de años atrás. La población venida de la

sierra, en su mayoría desplazados víctimas de la violencia en busca de refugio, carecían de recursos para consumir carne y, al ver que el pollo era de consumo masivo en la ciudad de Lima, optaron por sustituir la parrillada por la pollada. Le añadieron los detalles de las fiestas comunales andinas donde no faltan el huayno y el licor. Así, en las zonas más pobres de la ciudad, donde lograban radicar esos modestos grupos andinos que huían del fuego cruzado entre las fuerzas del orden y el terrorismo, era posible observar, cada domingo, las populares polladas.

La organización senderista sacó provecho de la invención. Venidos también del Ande a la costa, pronto se dieron cuenta de que esas fiestas podían ser un medio eficaz para enmascarar el momento en que sus efectivos intercambiaban información y recibían los planes para los atentados que estremecían Lima.⁴⁵

El mayor Martín trasladó el informe a sus superiores y, días después, recibió la orden de entrenar a los efectivos del grupo clandestino que tenía a su cargo para incursionar en la casona el día anunciado: 3 de noviembre. Estaban acantonados en la playa La Tiza, ubicada a 55 kilómetros al sur de Lima, en el distrito de San Bartolo. Hoy es un balneario de uso exclusivo para las familias de los oficiales del ejército, en aquel entonces La Tiza era una playa escondida con acceso solo a través de una trocha.

El personal compuesto por agentes hombres y mujeres del Servicio de Inteligencia del Ejército, realizaba rutinas físicas a la orden del capitán Carlos Eliseo Pichilingue Guevara y, bajo el mando del mayor Martín, se realizaban los ejercicios de tiro. Tenían fusiles automáticos ligeros (FAL) y fusiles de asalto HK. Practicaban arduamente para adquirir destreza en cómo sacar el arma, cargarla corriendo, tirar de pie, tendidos, con obstáculos, con siluetas, a bordo de vehículos en movimiento, en vehículos detenidos, también en el uso de granadas, además de técnicas para el secuestro de personas. Para la incursión en Barrios Altos practicaron también técnicas de dominación de inmuebles utilizando las habitaciones del personal de tropa encargado de la custodia de la playa.⁴⁶

Al atardecer del sábado 2 de noviembre, se desplazaron desde la playa La Tiza, en tres vehículos, sin armamento, quince integrantes del equipo de contención y seguridad.⁴⁷ Al llegar a las inmediaciones de la Maternidad de Lima, se desplazaron por las calles aledañas. La casona del jirón Huanta 840 se ubica apenas a una cuadra. En las horas siguientes, fingieron ser parejas de enamorados paseando, observaron el vecindario, transitaron por la puerta del inmueble y, hasta el día siguiente, se fueron turnando en la vigilancia. A mediodía del domingo 3 informaron que la situación estaba bajo control y, a las cuatro de la tarde, partieron desde La Tiza dos camionetas, una Cherokee roja y una Mitsubishi blanca que transportaban a los agentes Julio Chuqui Aguirre,

Antonio Pretell Dámaso, José Alarcón Gonzales, Héctor Gamarra Mamani, Pedro Suppo Sánchez, Jesús Sosa Saavedra, Angel Pino Díaz, Fernando Lecca Esquén, Hugo Coral Goycochea, Wilmer Yarlequé Ordinola, Nelson Carbajal García y el capitán Eliseo Pichilingue Guevara.

Los cincuenta y cinco kilómetros de distancia concluyeron a las seis menos cuarto en un estacionamiento ubicado en la avenida Grau, frente al Hospital Dos de Mayo. Minutos después, en un escarabajo Volkswagen de color naranja conducido por el agente Gabriel Vera Navarrete, arribó Santiago Martín Rivas. El jefe operativo recibió la información sobre el movimiento de civiles y personal policial de la zona y ordenó un ingreso al inmueble para observar el desarrollo de la pollada. El agente Sosa Saavedra ingresó a la casa y verificó que el plano confeccionado por Abadía coincidía con la realidad. A las ocho y media de la noche, las dos camionetas dejaron el estacionamiento, avanzaron por el jirón Cusco hasta la intersección con el jirón Cangallo y se estacionaron a media cuadra de la Maternidad de Lima, quietos a la espera de que Abadía salga de la pollada. La tensión de esa noche ha borrado el recuerdo de la hora en que apareció el agente infiltrado. Para unos fue a las 9, para otros cerca de las diez, lo cierto es que el infiltrado confirmó la asistencia de cuadros senderistas, en especial dos: el camarada Joel, jefe del grupo de aniquilamiento metropolitano de Sendero Luminoso y un mando político, una muchacha vestida con jeans y una gorra: «la única con gorrita». Abadía les alcanzó una precisión necesaria: había dos fiestas, la del segundo piso no interesaba, el objetivo estaba en el primer piso.⁴⁸

Minutos antes de las diez y media de la noche el equipo de contención comunicó al jefe operativo, Martín Rivas, que algunos asistentes empezaban a retirarse. De inmediato, las camionetas estacionadas en el jirón Cangallo encendieron sus motores e ingresaron a contramano por el jirón Miró Quesada. Un vendedor ambulante, Orestes Ramos Rodríguez, desde su habitual lugar al costado de la puerta de emergencia de la Maternidad de Lima, vio aparecer los dos veloces vehículos y los observó estacionarse frente a la puerta del Jirón Huanta 840 con tal premura que uno de ellos, el de color rojo dio un topetazo por detrás a la camioneta blanca. En el interior de los vehículos venían trece hombres armados.

Fernando Lecca Esquén, como se le había indicado, abrió el baúl de la camioneta roja, Héctor Gamarra Mamani y Jesús Sosa Saavedra bajaron el bolso con los fusiles de asalto HK de 9 mm con silenciadores y lo colocaron en el callejón de entrada al inmueble. El agente Pedro Suppo Sánchez le ordenó a la señora Cleotilde Portella Blas, vendedora de golosinas y cigarrillos, sentada al

costado de la puerta, que se retire de inmediato. A una cuadra, el sargento de la policía Luis Prado Reyes, de la comisaría de San Andrés, de servicio en el cruce de los jirones Huanta y Huallaga, miraba con desgano los movimientos de los hombres.⁴⁹ Los choferes se quedaron al volante, dos bloquearon el ingreso –Julio Chuqui Aguirre y Hugo Francisco Coral Goycochea– y nueve tomaron las armas puestas en el piso del callejón, ingresaron a la quinta con los rostros cubiertos por pasamontañas, llegaron hasta el patio donde veinte personas bailaban y bebían. No advirtieron la presencia de los militares hasta que se escuchó un grito en medio del bullicio de la música: «Tírense al piso, terrucos concha de su madre, al piso». Algunos, con signos de embriaguez, atinaron a increpar a los intrusos, pero una ráfaga de metralla los derrumbó. El resto obedeció y se tendió en el enlosado, y allí, con el fondo musical de un huayno, empezaron a sentir, cada uno, fagonazos ardiendo en la piel, y una y otra vez, una enorme quemazón en los brazos, en las piernas, en el pecho. Un niño, Javier Ríos Rojas, que había presenciado azorado la escena, cruzó en busca de su padre, Manuel Isaías Ríos Pérez, y fue abatido; la crónica periodística consignó después que tenía apenas ocho años. Del interior, sacaron ejemplares de *El Diario*, el vocero de Sendero Luminoso y los arrojaron encima de los cuerpos como señal identificadora.⁵⁰ Todo duró diez minutos. No se oyó ningún balazo, apenas unos chasquidos, aunque después se hallaron ciento once casquillos y treinta y nueve proyectiles, además de los incrustados en los cuerpos. Los silenciadores de los fusiles HK son muy eficaces. Tanto que los vecinos de fiesta en el piso superior no se percataron de nada en medio de su pachanga.⁵¹

Una señora que había salido a la calle apenas quince minutos antes, al retornar quedó pasmada con la sorpresa de la masacre, con los cuerpos inertes, con el aire fúnebre que empezaba a invadir el lugar. Once varones, tres mujeres y un niño muertos; cuatro heridos de gravedad. La mujer salió gritando en busca de auxilio. En la calle, un transeúnte logró divisar dos camionetas que viajaban raudas hacia el jirón Junín, en Barrios Altos, con dos circulinas encendidas en los techos, aquellas que identifican a los vehículos oficiales. Minutos después, el policía Miguel Ángel Figueroa Méndez, vio llegar un camión porta tropas del ejército que se detuvo en el cruce de las calles Huanta y Huallaga. Un grupo de vecinos se acercó alarmado a contar lo sucedido pero ninguno de los militares prestó atención ni tuvo interés en verificar los hechos. Descendieron seis efectivos armados y minutos después se marcharon. La presencia del camión tuvo un solo objetivo: impedir una eventual persecución.

A la medianoche, todos los miembros del Grupo Colina participantes en el Operativo Barrios Altos, encendieron las velas de una torta, cantaron el feliz

cumpleaños, hicieron un brindis y abrazaron a su jefe, el mayor Santiago Enrique Martín Rivas. Cumplía 33 años. ⁵²

CUANDO SANTIAGO MARTIN ESCUCHA LA OBSERVACIÓN de que lo correcto era, incluso tratándose de senderistas, proceder a su captura y bajo ningún punto de vista cometer una ejecución extrajudicial, afirma que sí, que se los habría podido detener, pero que el objetivo de esa noche era otro y que, además, era inútil capturarlos: «¿Para qué? ¿Para que los jueces los liberen? ¿Para que algunos políticos o las ONGs digan que son heladeros inocentes y los defiendan?». Con igual énfasis, añade: «Oiga, señor, no hay que perder el contexto, era el año 91 y así estaba el país, los senderistas recibían ayuda ya sea por miedo o por intereses y casi siempre terminaban libres. ¿O ya no se acuerda de eso?». ⁵³

En la raída pared hay un reloj y en el gastado hule que cubre la mesa reposan las tazas y un vaso cuyo contenido agota Martín Rivas antes de seguir.

«El operativo Barrios Altos no tuvo como objetivo la captura de terroristas. El objetivo era darle un mensaje contundente a Sendero. Esa casona era un centro de operaciones senderista. Fíjese lo que le voy a contar. De ahí salieron y allí volvieron los que hicieron el atentado a los Húsares de Junín. ¿Se acuerda, en junio del 89? Esa vez, se dieron el lujo de decirle al gobernante: “A ti te golpeo, fíjate lo que hago con tu escolta, mira como mato a tus soldados, a los que te cuidan”, y encima, a Alan García se le ocurrió ir al lugar a contar los muertos. Un líder nunca debe ir al escenario de la derrota. Ese día, Sendero se sintió más ganador que nunca, al propio Presidente de la República lo llevaron a esa calle a contemplar el golpe asestado. Les salió redondito el atentado: el “Presidente Gonzalo” le dio muestras de su poder “al presidente de la democracia burguesa”. Ese mensaje fortaleció a sus seguidores. Y a la población civil le creó desconcierto, más miedo y la sensación de que su gobernante y sus fuerzas estaban siendo derrotadas. Una de las peores cosas es la desmoralización de una sociedad. Ahora bien, cuando todo eso pasó, al interior de Sendero se sintieron muy seguros porque no se pudo descubrir nada sobre ese atentado, nada, pero nada. Un misterio. O sea, su sistema de clandestinidad seguía siendo muy seguro. Por eso se mantuvieron en el mismo lugar hasta que los descubrimos.

»Todo empezó a cambiar cuando cayó la casa de Buena Vista, en la que estuvo Abimael, y pudimos estudiar los archivos de Sendero. Allí descubrimos que una de las tácticas que seguían era esconderse en lugares cercanos a puestos militares o policiales. Entonces, el trabajo de inteligencia se orientó también en ese sentido. Y con el trabajo de los agentes se llegó a determinar que la casona

del jirón Huanta era un refugio senderista.

»Fíjese. Primero, la ubicación. A una cuadra está Plaza Italia y allí se encuentra nada menos que el local de la Dirección de Inteligencia de la Policía. Estaba también el local de la 25ª Comandancia. A la vuelta: la comisaría de San Andrés. Y a la espalda: el Casino de la Dirección de Inteligencia. Segundo, los ocupantes. Resulta que allí vivían como ocho heladeros de D'Onofrio y algunos ambulantes. Y esas eran las cubiertas que Sendero usaba para hacer los “reglajes”.⁵⁴ Como heladeros podían pararse donde quisieran. Uno de ellos, el que organizó la pollada, se plantaba con su triciclo frente a la Dirección de Inteligencia y conocía todos los movimientos, los mismos policías le compraban los helados y conversaban con él. La idea era muy buena, si después hasta la copió Montesinos para sus trabajos. Tercero, en ese lugar se ocultaron los del atentado contra la escolta presidencial porque esa casa está cerquita al jirón Junín. Fugaron a pie, por el tráfico y las calles estrechas de la zona no podían fugar en auto, y se hicieron humo rapidito. Esa sospecha quedó confirmada con la vigilancia que establecimos. Allí operaban senderistas. Entraban estudiantes de San Marcos, estaban los heladeros, hacían polladas, se daban las indicaciones para los atentados en el centro de la ciudad. Tenían, a unas cuadras, el Congreso y Palacio de Gobierno. Además, el día del operativo dijeron que era una pollada para arreglar el desagüe. Bueno, si la entrada era, creo, de dos soles, ¿cuánto iban a sacar? ¿Ochenta soles? ¿Con eso arreglaban el desagüe? ¡Por favor!».

Ese año 1991 recién se había empezado a desplegar «la nueva estrategia» y en noviembre consideraron que necesitaban notificar a las huestes senderistas que se había echado a andar un nuevo estilo de combate. El exceso, dicen, era parte del mensaje.

«Lo que ocurre es que hay que entender –prosigue Martin Rivas– que en la guerra lo que cuenta es el efecto ocasionado por la acción. Uno de los mensajes era: “Te golpeo en el lugar en que te escondes”, es decir, “ya no eres tan misterioso como antes, ya te ubicamos, ya te seguimos los pasos, ya sabemos por dónde caminas”. Otro mensaje era: “Si aniquilas a mi gente, aniquilo a la tuya, no importa cuánto tiempo haya pasado, de aquí salieron y aquí se escondieron los que asesinaron a los Húsares y te lo hacemos saber para que te percales de que hagas lo que hagas, tarde o temprano, te vamos a encontrar y vamos a ser más duros que ustedes”. A eso se sumaba responderles el atentado del 15 de diciembre del 89. Seis meses después del ómnibus de los Húsares, hicieron otro atentado, del que no se habló mucho, contra un ómnibus con agentes del SIE; hubo un muerto y otro mutilado.

»Otro mensaje fue: “Ya sabemos que las polladas y los heladeros son tus

disfraces”. De ese modo, se les transmitía a los terroristas temor, inseguridad. Sus familiares les iban a decir mejor no sigas, salte del Partido. Esto, le repito, no es una invención nuestra. Son las armas de la guerra. En todas las culturas siempre han existido estas cosas que servían para obtener objetivos y para imponer una voluntad. En la guerra con Chile, después de una batalla venía el repase a nuestros soldados, degollando sobrevivientes. ¿Por qué lo hacían? Para que las madres, y las rabonas que veían eso, prohibieran a sus hijos y a sus maridos enrolarse para luchas patrióticas.

»Así ha sido y así será. Es la guerra. Y es verdad: toda guerra es brutal, es salvaje, llena de atrocidades. En eso consiste y los militares recibimos de la sociedad el encargo de combatir. El problema es que Fujimori y Montesinos no cumplieron con la campaña que se iba a realizar después para explicarle al país estos fundamentos, criterios o como quieran llamarlos. La gente hubiese estado receptiva en ese tiempo porque acababa de salir del padecimiento de la violencia. Pero, ellos vieron riesgos políticos y pensaron que echando toda la culpa a un grupo de subalternos se solucionaba el asunto.

»Hay algo más. El mensaje más importante de ese operativo fue uno que ningún analista, de esos que tanto hablan y escriben, ha sabido descifrar. Era un mensaje directo de líder a líder. El nuevo presidente le notificaba a Abimael Guzmán que no era igual al anterior, que esta vez la cosa iba en serio y que lo pensara dos veces antes de atentar contra él o contra su entorno. No olvidemos que era noviembre del 91. Sendero había decidido el asedio de Lima para tomar el poder. No estamos hablando de poca cosa. Después de diez años de guerra interna, pensaban que las condiciones estaban dadas para la victoria final. Para ellos, la oportunidad estaba pintada por la crisis económica y por tener al frente un gobernante sin base social, y encima con un Congreso que no lo dejaba gobernar, con jueces que liberaban terroristas, con los curas en contra. Ese era el escenario.

»En ese contexto hay que mirarlo a Fujimori con sus decisiones pero también con sus temores. Se le explicó que la única opción era ingresar a fondo en la lucha clandestina. Montesinos la conocía. Y la aprobación de Fujimori y del comando militar, salió de lo siguiente: si no lo hacían se quedaban sin sus cargos porque Sendero nos estaba ganando la guerra. Como el terrorismo era el tema que más afectaba al país, Fujimori seguía el asunto paso a paso. Se enteraba y autorizaba y ordenaba los operativos. Le digo que hubo muchos. Algunos de rutina, o menores, pero el de Barrios Altos fue uno de importancia, y la orden vino desde arriba. Además, ¿sabe por qué? Porque estaba en Lima una comisión de Derechos Humanos,⁵⁵ que como siempre defendía a los terroristas.

Como si el país no tuviese una guerra, nos acusaban a los militares de asesinos y no se fijaban en los derechos humanos de los militares y los policías muertos, de sus huérfanos ni de sus viudas. Entonces, ese operativo fue también una manera de decirle a nuestras fuerzas que había apoyo de bien arriba y que estas comisiones podían venir con sus denuncias y sus investigaciones, pero los militares ya no estábamos atados de manos, que la guerra era total y hasta la victoria. ¿Se da cuenta? Igualito que Sendero, el mensaje a todas nuestras fuerzas, a nuestros oficiales, agentes y soldados, llegó a través de los medios de comunicación.

»Por eso le digo, lo que la prensa y los políticos llaman Grupo Colina no era un grupo de militares locos que actuaban por su cuenta y hacían lo que querían. Si hubiese sido así, entonces, de inmediato, habrían dado de baja y encerrado a todos. Si no lo hicieron, si se opusieron a las investigaciones y al final dieron una ley de amnistía es porque ellos, Fujimori, Montesinos y Hernoza, tomaban las decisiones. No se puede hacer una guerra si no hay decisión política, más aún cuando se trata de una guerra clandestina».

La inclemente lógica del relato permite examinar, desde el revés, los acontecimientos de entonces. No fue una torpeza, como se creyó en su momento, dejar tantas señales en el lugar de los hechos. Cuando el escuadrón de aniquilamiento culminó la masacre de Barrios Altos, en el techo de las camionetas en que fugaron, las circulinas se encendieron deliberadamente para dejar en claro que no se trataba de un atentado terrorista, sino de un operativo misterioso, confuso para los demás, pero que Sendero Luminoso sabría identificar. La prensa habló de grupo paramilitar. No podían saber que estaban redactando un contrasentido: no eran civiles fungiendo de militares, era directamente un grupo operativo militar. Fue también por esa deliberada actitud de dejar evidencias que, en su momento, no se le dio mayor importancia a la procedencia de los vehículos porque sonaba incongruente dejar pistas. Pero de eso se trataba: eran mensajes intercambiados entre dos fuerzas peleando en las sombras.

Aún hoy, el descarnado relato de esa estrategia sorprende, pero es parte del mismo estilo de guerra clandestina que se sigue aplicando en el mundo y de la cual dan terrible testimonio, por ejemplo, los frecuentes actos de escarmiento mutuo entre israelíes y palestinos.

El propio Montesinos confirmó el uso de esa política. En abril de 2002, interrogado por una comisión del Congreso, señaló: «Cuando yo hablo de la guerra, hablo de la guerra contra Sendero Luminoso, no contra personas. Estamos hablando de organizaciones violentistas que pusieron en peligro la

viabilidad de la democracia, el Estado de Derecho. Entonces, la guerra psicológica tiene que hacerse contra esas organizaciones».⁵⁶

Otro dato confirmatorio de esa guerra psicológica o guerra clandestina, se encuentra en los vehículos utilizados en la masacre de Barrios Altos: ambos pertenecían al Estado. La camioneta Mitsubishi blanca con líneas rojas y placa RQ 3815 estaba adscrita al Ministerio de la Presidencia y fue «robada» el 23 de agosto. La otra, una Cherokee color plata con placa RQ 7425 era usada por el viceministro del Interior, el abogado David Mejía Galindo, y fue también «víctima» de un robo simulado el 30 de octubre en el distrito de La Perla, en el Callao. Los simulacros de robo se efectuaron para tener una coartada en caso ocurriese alguna situación imprevista. No está en el terreno de la casualidad que una de las camionetas perteneciera a un hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, según confesión del propio Montesinos: «¿Sabe usted desde cuando lo conozco al doctor Mejía? Desde el año 89. Yo lo hice nombrar director de Gobierno el año 1990. Por recomendación mía al presidente Fujimori y al ministro Adolfo Alvarado Fournier, fue nombrado director de Gobierno y, posteriormente, es nombrado viceministro del Interior. Es una persona de mi estrecha confianza».⁵⁷

LA CREACIÓN DE UN ESCUADRÓN de aniquilamiento estructurado de tal forma que pudiese recibir órdenes directas desde la más alta instancia tuvo su origen en una desesperada necesidad de eficacia.

A lo largo de años, mucho se ha escrito y discutido sobre la existencia real del Grupo Colina. Versiones periodísticas, no siempre sólidas, han dado diversas versiones y, en algunos casos, han llevado el asunto a la confusión o le han otorgado demasiada importancia a la formalidad de un nombre. Precisamente, de esa insistencia en atribuirle un nombre, se sirve Santiago Martín Rivas, sindicado como jefe de la agrupación, para negar la existencia de un grupo denominado Colina. Argumenta que «ningún grupo de inteligencia tiene nombre, desde el momento que es clandestino y por un factor llamado compartimentaje, se trata, incluso internamente, que sea secreto».

Señala también que los operativos secretos no dejan huella documental: «se nombra a un responsable, él recibe una misión, escoge su personal, sus medios, pide el apoyo logístico: dinero, movilidad, todo lo que necesite y ejecuta su labor. Eso no es novedad, existe en todo el mundo, ¿acaso han encontrado un plan de operación de la CIA para derrocar un gobierno en Latinoamérica?».

Atribuye el nombre de Grupo Colina a una creación de los medios de comunicación. «Dijeron que tras la muerte del capitán Juan Colina Gaije nos

reunimos todos los agentes, lloramos ante su tumba, hicimos un pacto de sangre y juramos vengarlo. Pero hay una gran disfunción de tiempo, el capitán Colina murió el año 84; hay siete años de diferencia entre un hecho y otro».

Pero el mayor Pichilingue tiene una variante a la versión sobre el nombre. «Lo que afirma el mayor Martin es cierto. Ningún grupo operativo tiene nombre. Es clandestino por naturaleza. Pero, como a partir del 91 se juntó a los mejores agentes, a los que tenían más experiencia, como un grupo estable y se empezó a operar con personal fijo, uno de los agentes propuso ponerle como nombre Grupo Colina en homenaje al capitán Juan Colina Caige que murió infiltrado en Sendero Luminoso. El mayor Martin dijo que no, se opuso porque es regla de inteligencia no usar denominaciones. Pero de manera informal quedó el nombre, como la idea les gustó a todos se empezó a usar. Es que la historia del capitán Colina muestra el gran riesgo que se corre trabajando en inteligencia: era un oficial infiltrado en Sendero y al ser capturado lo mató un miembro del Ejército pensando que era senderista».

Tal es el origen, pero, más allá del nombre, lo realmente importante es la revelación de Santiago Martin Rivas dando cuenta de que, en 1991, precisamente el año de la masacre de Barrios Altos, las circunstancias obligaron a conformar un grupo operativo estable que añadió a sus funciones de inteligencia las de combate, es decir, acciones de aniquilamiento.

«La misión que tenían las fuerzas de inteligencia, que era buscar información y luego comunicarla para la elaboración de acciones, tuvo que cambiar. ¿Por qué? Si en esa búsqueda se detectaba y encontraba un grupo armado senderista, era imposible esperar a comunicar. Si se encontraba a un grupo de Sendero, ¿quién iba a combatir? Mientras se procesaba la información y se llamaba a las fuerzas de combate, ¿acaso los senderistas iban a esperar? Si se les detectaba, había que actuar en ese momento. Por eso, los equipos de inteligencia se militarizan por necesidad, por efectividad y por oportunidad. Eso fue todo el 91 y el 92. En ese tiempo, se dio una guerra silenciosa entre Sendero e Inteligencia.

»En esos dos años, seis de siete destacamentos especiales de Sendero desaparecieron. Algunos morían, otros eran capturados. Tuvieron que formar nuevos destacamentos a la loca, para reemplazar a los anteriores. Pero gente que venía con diez años de combate era irremplazable. En cambio en el Ejército era diferente. Si morían ocho o diez comandos, los llorábamos, los enterrábamos y al día siguiente estaban reemplazados, quizá con la misma eficiencia.

»Fue una política de Estado. Y fue efectiva. En una fuerza clandestina lo peor que puede pasar es ser identificado, y peor todavía si te eliminan gente. Allí

es dramático porque te haces mil preguntas. ¿Qué más sabrán? ¿Mi familia? ¿Volverán? Y eso origina que el enemigo se repliegue, se atemorice. Después del operativo de Barrios Altos, Sendero recibió el gran mensaje: cuidado con sus reuniones, los estamos detectando y aniquilando. Y sirvió: no hubo más polladas senderistas y los heladeros de inteligencia desaparecieron. El operativo cumplió el objetivo. ¿Es excesivo? Sí, señor, lo es. En eso consiste. En disuadir al enemigo para que el rival no repita sus acciones. Y así se cuida a la población civil».

Sendero Luminoso respondió con una violencia apocalíptica y emprendió la demolición de Lima, en el sentido material y anímico. Era una guerra psicológica y el terrorismo conocía muy bien los rudimentos. Al golpear ferozmente a la población le empezó a crear un cerco de protestas al gobernante con la consiguiente asfixia política ante la falta de una solución inmediata reclamada desde la desesperación.

El tiempo suele tamizar los recuerdos. La mirada hacia atrás amaina la emoción, el sobrecogimiento, la angustia del momento en que ocurren los hechos. Quizá por eso el hombre puede tolerar la faena del recuerdo, pero también, por lo mismo, suele desgastar, diluir, olvidar las miserias del pasado. En los archivos periodísticos se mantienen las escenas de ese tiempo y solo con la ayuda de las fotografías y la reincidencia de los videos con los testimonios de las víctimas vueltos a oír, se puede llegar a reconstruir, más bien, a intuir la salvaje situación a la que fue sometida la población en esos días. Además de los habituales atentados selectivos, Sendero Luminoso anegó con un terror indiscriminado las calles limeñas. Nunca en toda la historia, aun contando las catástrofes, hubo más muertes que en aquel explosivo año de 1992. Los coches bomba explotaron en cualquier sector de la ciudad, a vuelta de esquina era acribillado un policía junto a cualquier transeúnte, las ondas expansivas de los atentados alcanzaban a los empleados en el final de jornada y, sin más ni más, los hijos se enteraban en casa de que eran huérfanos.

En la primera mitad de ese año, se volaron edificios de viviendas, oficinas públicas, agencias bancarias, locales institucionales y las listas de muertos desbordaban la hora de cierre de los diarios ocupados en la cobertura de los asesinatos a líderes de comunidades populares o autoridades diversas. En el día a día, Lima padeció los martirios de toda ciudad sitiada. Los frecuentes cortes de luz por torres de alta tensión derribadas a dinamitazos armaban un embrollo en el tránsito.

Una estación radial, Radio Programas del Perú, incrementó su audiencia con el recurso caritativo de poner a un locutor dando indicaciones y mensajes de

calma a quienes se quedaban atrapados en la oscuridad de casa, en las salas de los hospitales, en medio de las compras de apuro en los supermercados, a la salida de un cine o a bordo de microbuses que avanzaban por una ciudad en tinieblas. Cada mañana, al despertar, las familias miraban las duchas como inútiles artefactos de museo: el baño matutino, por los atentados a las redes de agua potable, se hacía con agua almacenada en bidones y volcada en los cuerpos con ayuda de una jarra, de una taza o de lo que fuera capaz de contener algo de agua para la laboriosa higiene diaria.

Así vivió Lima en 1992. Pero la tragedia adicional de esa pesadilla fue un efecto a futuro que se infiltró sin condolencia alguna en el modo de vivir de sus gentes: la costumbre de la muerte y el hábito de la violencia convirtieron a Lima en la ciudad que es hoy en día, un lugar en el que sus habitantes se relacionan a través de la agresión, de la embestida al prójimo, con poco espacio para respetos elementales y necesarias solidaridades.

Recién hoy se puede llegar a saber que el detonante de los atentados de ese tiempo, fue la oscura guerra librada entre militares y terroristas. Ante los ataques clandestinos que empezaban a golpear a sus filas, Sendero reaccionó con la fiereza de un animal agredido. Su criterio era acerado como la hoja de un puñal: la población brutalmente agredida irá a reclamarle al gobernante y, ante la imposibilidad de respuestas, la autoridad se irá socavando y se verá obligada a replegar a sus efectivos clandestinos. Por eso, Sendero luminoso convirtió a la ciudad de Lima en un entorno de edificaciones demolidas, calles con enormes agujeros, ventanas desgajadas, cristales en añicos, asesinatos cotidianos, llantos, miedo.

Cada acción de ese tiempo fue una réplica a los ataques silenciosos de los grupos operativos del Ejército, en especial del Grupo Colina. Las acciones no informadas al país, las incursiones contra las guaridas terroristas, las ejecuciones sumarias de efectivos del senderismo, todo ese quehacer en las sombras dio lugar a la respuesta senderista, tomada línea a línea, con devoción de fanáticos, de los manuales maoístas que enseñan a golpear a la población civil para obligar al gobernante y a su Ejército a un repliegue, a un cese de acciones.

Con los recursos del trabajo de infiltración, con los criterios de inteligencia, con prisiones rígidas y aisladas para los cabecillas, se habría podido desbaratar a la organización terrorista sin necesidad de ingresar en esa Ley del Talión, cuyo costo sufragaron con dolor decenas de familias inocentes. De esas muertes y de esos días de terror que supieron convertir en aplausos, son también responsables aquellos que ordenaron el uso del terrorismo de Estado.

Pero Fujimori, sostenido por su corte militar, no estuvo dispuesto a usar

criterios racionales. Jaqueado por el terror, agobiado por las demandas de la población y atosigado por un Congreso dispuesto a no dejarlo gobernar, ingresó a un punto sin retorno y decidió doblar la apuesta fiel a ese estilo de vivir al filo de la navaja, un estilo que mantuvo hasta su último día en el poder. Optó por planificar, con secreto de cofradía, el autogolpe del 5 de abril de 1992 y disolvió el Congreso para empezar a gobernar con un poder único, el suyo. Tanto él como Montesinos estaban persuadidos de que era la única manera de derrotar al terrorismo. Iban a tener unos meses sin dar cuenta de nada a nadie y en sus cálculos estaba la convicción de lograr un triunfo militar capaz de devolverlos a la legitimidad con apoyo popular. Esa idea no provino de ninguna especulación, sino del trabajo de inteligencia que habían empezado a desarrollar y de los siniestros métodos que habían echado a andar.

«La planificación del autogolpe –refiere Martin Rivas– fue realizada en base a criterios de guerra política. Montesinos la conocía y tenía cerca a gente que había asistido a la escuela de guerra política en Taiwán. No se hizo nada a la aventura». Usando un guion previamente elaborado, Fujimori denunció un intento de golpe de sotanas, calificó como chacales a los jueces, planteó que los congresistas se bajen el sueldo; pidió facultades de emergencia para legislar sobre terrorismo y no se las dieron, más bien el parlamento pidió la vacancia de la presidencia. Su estrategia consistió en ingresar a escenarios de conflicto eligiendo cada tema en función de lograr sintonía con la población. Esa audaz planificación política le dio un resultado insólito: cuando cometió el autogolpe la aceptación ciudadana fue enorme.

Partícipe de reuniones secretas de esa época, Santiago Martin Rivas sostiene que «las ideas del juego político, de las declaraciones que se debían formular, del impacto que se quería buscar, todo se preparaba desde el SIN. Montesinos articulaba los planes, trabajaba con su equipo y lo que no sabía lo consultaba. Nadie tiene idea de cuántos hablaron con él. Historiadores, sociólogos, políticos, abogados, diplomáticos, a todos les consultaba y ¿quién se iba a negar a conversar con él? No le hablo de corrupción que eso vino luego, pero en esa etapa, con toda la información que acumulaban, procesaban y discutían, se armaban las ideas políticas, las decisiones, la elección de ministros, los viajes y las campañas sicosociales. Fujimori y Montesinos tenían la ventaja, al menos en ese tiempo, de ser fríos y pragmáticos. Después todo fue degenerando. En esa época, el trabajo que partía de Montesinos se integraba con el equipo de Santiago, el hermano del Presidente, que manejaba el funcionamiento del Estado, pero cuando vinieron los celos y Montesinos lo voltea se comete un gran error, todo se va al SIN, todo se militariza, la SUNAT

se vuelve un arma política, el poder judicial lo maneja como quiere, y se viene la corrupción. Montesinos sirvió para la guerra antisubversiva, pero después del 95 debió irse».

A su vez, El General afirma: «Cuando se produce el autogolpe del 5 de abril, ya había un plan para combatir al terrorismo. En lo esencial, tenía cuatro puntos centrales: quitarle el control de las cárceles a Sendero Luminoso; expulsarlos de las universidades, especialmente de San Marcos y La Cantuta; romper el cerco de los pueblos jóvenes; y contar con una ley antiterrorista que permitiese procesos con jueces sin rostro con sentencias draconianas en 48 horas y operaciones sicosociales en cantidad. ¿Un ejemplo de esas acciones? Todos se deben acordar cuando los noticieros de la televisión pasaban en cada edición, a diario, sin falta, a pobladores de la sierra presentados como militantes arrepentidos quemando las banderas de Sendero. Ese fue uno de los operativos sicosociales más usado. Para el que veía el noticiero era una rutina aburrida, una cojudez, pero el destinatario del mensaje era otro, eran los senderistas que miraban a desertores, que veían que perdían militantes y territorio; y no siempre era verdad, se usaba gente para armar esas escenas».

DOS DE LOS PUNTOS DEL PLAN ANTITERRORISTA esbozado en 1991 no solo eran vitales estratégicamente, tenían que ver, sobre todo, con un mellado sentido de la autoridad. Un ámbito era el de las universidades, un reducto ganado por el senderismo tanto para captar seguidores como para usar las instalaciones como refugio de sus efectivos de combate. En las aulas, se estudiaba lo que Sendero imponía, y antes que clases había adoctrinamientos, marchas y huelgas. Una carrera de cinco años no se completaba en el tiempo pautado y era usual encontrar a estudiantes con ocho, diez o más años de matrícula, muchos de ellos terroristas enmascarados como alumnos.

No en vano Sendero Luminoso surgió en un claustro universitario, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la segunda universidad más antigua de América, fundada en 1667.

Está afincada en la ciudad de Huamanga, la capital del departamento de Ayacucho, una localidad que, en el tiempo del esplendor colonial, sirvió como villa de descanso en la ruta hacia el Cusco y las minas de Potosí. Desde entonces ha conservado hermosas casonas coloniales, treinta y tres iglesias y una celebración de la Semana Santa que convoca a millares de visitantes por su enorme similitud con la de Sevilla, en España. La universidad se mantuvo cerrada por décadas hasta su reapertura en el fulgor de los años sesenta. Se reabrió con gran auspicio y arribaron a sus aulas importantes intelectuales

peruanos. Sin embargo, los aires revolucionarios que en esa década impregnaron al país y la guerrilla de 1968, trajeron abajo el proyecto académico y, en su lugar, ganaron espacio movimientos de prédica marxista luego copados por el maoísmo.

Fue el tiempo en que era usual encontrar en los patios, en las aulas y en los puestos de venta de los alrededores, una profusión de libros y folletos con las lecciones de Mao Tse Tung y las ediciones siempre actualizadas de *Pekín Informa* leídas como si fuesen boletines de vida para el día a día.

Hacia 1964, arribó un sombrío profesor arequipeño llamado Abimael Guzmán Reynoso, y bajo su influjo se gestó uno de los movimientos terroristas más sanguinarios que la historia registra. Surgió bajo la protección de las aulas universitarias y se refugió en el amparo de la autonomía universitaria, de modo que sus fanáticos militantes, tras perpetrar atentados mortales, asesinatos de autoridades o miembros de las fuerzas del orden, ingresaban a la residencia de estudiantes para escapar al asedio policial y descansar con tranquilidad.

Ese recurso de usar las instalaciones universitarias, se convirtió luego en una estrategia de Sendero Luminoso y cuando lanzaron sus acciones subversivas empezaron por copar las universidades nacionales. Su presencia más activa se dio en la más poblada universidad del país, San Marcos, y en las universidades de Ingeniería y La Cantuta. Las tres con alumnado de clases baja y media emergentes, numerosa presencia provinciana y un detalle de rigor: todas con comedores y residencias estudiantiles funcionales para los objetivos políticos y militares del terrorismo. En las residencias estudiantiles se llegó a niveles de tugurio para dar cumplimiento a la consigna de albergar a la banda senderista cuando la guerra interna, a inicios de los noventa, se trasladó definitivamente a Lima.

Aparte de esas evidentes razones, las universidades se convirtieron en un elemento crucial de la estrategia antiterrorista por un episodio personal sufrido por Alberto Fujimori.

En una visita realizada a la politizada universidad de La Cantuta, cuando tenía poco meses como gobernante, Fujimori fue recibido con una ruidosa manifestación en contra. Desde la muchedumbre volaron piedras y una de ellas impactó con fuerza en su espalda, haciéndolo trastabillar y obligándolo a retirarse con custodia policial. Sendero Luminoso mandaba en ese territorio y expresó abiertamente su rechazo a la presencia del poder oficial.

Para Fujimori el evento quedó marcado de modo indeleble. No solo por la agresión a una investidura presidencial que llevaba con solemnidad y cuya jerarquía hacía valer donde fuere, sino también porque al haber sido rector de la

Universidad Agraria, registró el vejamen a su condición de maestro universitario. Por último, si algo más debe sumarse al episodio, es su concepto oriental del honor. Y ese, en su caso, no es un dato menor. Meses después, un operativo militar dio lugar al llamado Caso La Cantuta: nueve estudiantes y un profesor de ese centro de estudios, sospechosos de terrorismo, fueron secuestrados y ejecutados extrajudicialmente.

El otro flanco era el de las cárceles. Si bien se logró apresar a un importante grupo de dirigentes terroristas, el efecto paradójico fue perder el control de los presidios. Concretamente, en el penal de Cantogrande los terroristas establecieron la Luminosa Trinchera de Combate, nombre bajo el cual empezó a operar la dirigencia senderista desde el encierro.

Los pabellones asignados a los terroristas pasaron a tener reglas y hábitos establecidos por ellos, las paredes lucían enormes retratos de su líder Abimael Guzmán y, por inconcebible que parezca, introdujeron material de construcción para modificar la estructura del local añadiendo paredes, parapetos y resguardos a las celdas. Las reuniones doctrinarias, la organización de planes, los cánticos y las consignas eran parte de una rutina con horarios establecidos por los jefes de los prisioneros. En julio de 1991, un reportaje de la BBC de Londres mostró escenas inauditas: en el patio del presidio, con impecable orden militar, desfiló ante las cámaras una fanatizada militancia luciendo impecables y severos uniformes, banderas rojas con la hoz y el martillo y entonando cánticos en celebración de los años de terror inflingidos al Perú desde 1980.

Al compartir un mismo ámbito los líderes y los militantes capturados, la Luminosa Trinchera de Combate pasó a tener una función de suma importancia para la organización subversiva: estudiaban, planificaban y ordenaban los atentados terroristas desde el presidio. En cada visita de los familiares –sin control ni verificación de un real vínculo familiar–, se entregaban los planes de ataque no solo de modo verbal sino con órdenes escritas y detallados esquemas.

¿Cómo lograron semejante impunidad? ¿Cómo ingresaron cemento, arena y pintura para modificar los ambientes de su cautiverio? ¿Cómo franquearon los controles para tener centenares de uniformes y banderolas? ¿Cómo consiguieron convertir en zona liberada un lugar que, por definición, debe tener rígida vigilancia? Lo hicieron con las mortíferas argucias de la amenaza, la imposición del miedo y la corrupción.

Desde el jefe del penal hasta el último de los guardias, se extendía el hilo pavoroso de una advertencia: sus vidas, o las de sus familiares, estaban en riesgo de muerte si impedían el señorío de los senderistas en las cárceles. También, para agilizar ciertos trámites o apurar determinadas situaciones, jugó su papel de

siempre el dinero. En ese tiempo, la alianza con el narcotráfico le proveía fondos a Sendero Luminoso.

Era una situación humillante. Militares y policías contemplaban desde la impotencia que arriesgar el pellejo para lograr capturas de importancia, no servía de nada. En las propias narices de la supuesta autoridad, el enemigo planificaba y ejecutaba violentos actos para destruir la vida cotidiana del país.

Lo cierto es que las cárceles y las universidades, eran símbolos de la autoridad perdida por el Estado y escenarios convertidos en bastiones del senderismo. Por eso, para el régimen fujimorista, fueron espacios obligados a recuperar. Era una cuestión de principio de autoridad, pero también, y sobre todo, una necesidad de eliminar focos desde donde provenían letales acciones.

Ambos lugares fueron escenarios de duros golpes asestados al terrorismo, pero utilizando acciones cuestionables desde elementales principios de humanidad. Uno de esos hechos, la matanza de la Universidad La Cantuta, ha sido materia de múltiples indagaciones y denuncias, pero hay otra cuya historia se mantuvo en silencio y nunca fue revelada: la matanza del penal de Cantogrande. El detalle de esa historia desnuda el signo de las implacables decisiones del gobierno en aquellos días.

OPERATIVO MUDANZA 1

Treinta días después del autogolpe, el 6 de mayo de 1992, se realizó el operativo de recuperación de los penales, en especial el penal de Cantogrande, ubicado en el distrito de Lurigancho, al norte de la ciudad de Lima. En sus instalaciones se encontraba el grueso de presos senderistas, hombres y mujeres, y un contingente de sus principales cabecillas e ideólogos.

Antes de proseguir con su relato, Martin Rivas busca el abrigo de una manta. Se queja por la humedad del arenal y cuenta que en los momentos más fríos acampando en los Andes, era posible soportar las bajas temperaturas con el abrigo militar porque el clima seco no tiene ni por asomo la anfibia humedad limeña. Comenta que el frío le agudiza un problema nasal. Precisamente, la envoltura de un medicamento utilizado para la sinusitis, meses más tarde, será una de las pistas seguidas por la policía para dar con él en otro inmueble, a muchos kilómetros de este lugar. Una vez que ha vuelto a tomar asiento afirma que el operativo para la toma del penal de Cantogrande se realizó en el SIN, como todas las decisiones en ese tiempo. El objetivo era terminar con la Luminosa Trinchera de Combate y restaurar el principio de autoridad. El ingreso, la requisita y el censo debían estar a cargo de la policía porque los militares están impedidos de ingresar a un centro de reclusión.

«En la última reunión –dice–, cuando ya todo estaba establecido, Montesinos vino con una idea. Tenía la relación de los principales presos senderistas, y en esa lista aparecían los integrantes del Comité Central, es decir, los más cercanos a Guzmán, los que eran el soporte ideológico y militar de Sendero. Propuso que al efectuar la toma del penal, en vista de que se iban a dar enfrentamientos porque los terroristas tenían armas, un equipo especial debía ingresar al pabellón donde estaban los dirigentes para darles vuelta allí mismo. Ninguno debía quedar con vida. Se explicaría después que resultaron muertos en la refriega.

»¿Cuál era la idea? Descabezar a Sendero. Era un golpe mortal. Una idea que tenía mucho sentido. Fíjese, formar un cuadro ideológico y de planificación militar lleva mucho tiempo, años de formación, de lecturas, y una convicción para transmitir a los militantes. Un “fierrero”, un combatiente, es menos complicado de conseguir. Pero no un ideólogo. Entonces, si Sendero se quedaba sin cuadros de mando, Abimael se quedaba solo, aislado, sin su Estado Mayor. Le iba a ser muy difícil recomponerse para seguir dando directivas y organizar atentados, las bases se iban a quedar desconcertadas y quienes tomaran el mando no iban a tener ni la experiencia ni la influencia necesaria sobre los militantes. La idea, desde el punto de vista militar, era muy buena. Tan buena que meses después se capturó a un Guzmán refugiado entre mujeres.

»Entonces, le digo, en una reunión en el SIN, se evaluó el planteamiento, se vieron las ventajas y desventajas y se aprobó. Ese plan se le llevó a Fujimori para su conocimiento y autorización. Ese era el esquema que se seguía. Además, toda esa etapa, Fujimori la siguió paso a paso en cada uno de los detalles. Él era así y, además, era el principal problema de su gobierno. Por eso, en la planificación de ese operativo se estableció inclusive un acto final propio de una guerra no convencional: una vez terminado todo, Fujimori tenía que aparecer en el lugar para dar el mensaje al enemigo: “la autoridad vuelve al gobernante, ya empecé a luchar y a derrotarte. Acabé con tu Luminosa Trinchera de Combate”».

El Operativo Mudanza 1 se inició en la madrugada del miércoles 6 de mayo de 1992. Aunque su objetivo oficial fue «el reordenamiento y reinstauración del orden y principio de autoridad» –lo que era cierto–, tuvo un objetivo de guerra: terminar con la denominada Luminosa Trinchera de Combate, garita que Sendero Luminoso había asentado en el penal de Cantogrande y desde el cual se planificaban las acciones terroristas. Aquel operativo, por ese significado militar, que los reclusos terroristas entendieron desde un inicio, tuvo una insólita duración de cuatro días, y solo en la noche del sábado 9 la cruenta batalla entre senderistas y fuerzas del orden tuvo un final.

Cuando las acciones se iniciaron en la madrugada del miércoles 6, el presidio de Cantogrande era el único lugar iluminado en el distrito de San Juan de Lurigancho, a oscuras por el corte del fluido eléctrico. Tres horas antes del alba, varias explosiones cortaron el silencio despertando a los seis mil reclusos del penal. Fueron cargas de explosivos para abrir un boquete en una pared del pabellón 1-A, reducto de las mujeres senderistas que debían ser trasladadas a la cárcel de mujeres en Chorrillos. Desde años anteriores, la falta de planificación había destinado a hombres y mujeres a un mismo presidio, y aunque ubicados en barracones distanciados, los presos habían construido un túnel que comunicaba el sector de mujeres con el pabellón 4-B de varones. De ese modo, la comunidad de terroristas mantuvo su unidad no solo para el intercambio ideológico, sino para el alivio de otras necesidades.

Ante el asalto, las reclusas reaccionaron arrojando quesos rusos, bombas de buen poder explosivo fabricadas artesanalmente y que al explotar despiden, además de la detonación, clavos untados con excremento para que las heridas causadas por el estallido reciban el efecto adicional de una infección capaz de generar una septicemia al sobreviviente.

En las horas siguientes, se tuvo que utilizar casi un centenar de kilos de dinamita para descoyuntar las paredes que habían sido reforzadas con ladrillos y fierros hasta dotarlas de un grosor de casi medio metro. En realidad, tanto en este sector como en el de los hombres, poco quedaba de la estructura original porque los senderistas habían efectuado una inverosímil refacción. De modo que, por ejemplo, lo que eran doce celdas se habían convertido en siete amplios salones resguardados por un laberinto de pasadizos zigzagueantes y paredes fortificadas. Contaban también con un equipo electrógeno para dotarse de luz cuando el reglamento del presidio ordenaba la oscuridad o para evitar los apagones que dejaban en tinieblas la ciudad por acciones de sus militantes. En aquella delirante reclusión contaban, además, con un almacén de alimentos para elaborar su propia comida y más de una nevera para conservarlos.

Quebrar esa resistencia –que sumó fusiles FAL trasladados por los varones desde su sector– tomó tiempo y recién el viernes en la mañana se logró la rendición de las reclusas. Cuando los efectivos policiales ingresaron en el pabellón se toparon con una ofrenda macabra: en uno de los pasadizos, cubiertos con mantas, estaban tendidos cadáveres con cargas explosivas atadas en la espalda. Minas humanas dispuestas a estallar apenas fueran manipuladas.

El día sábado se efectuó el asalto al pabellón 4-B, con los senderistas ya aturdidos por la batalla de los tres días anteriores. En la tarde, una potente explosión remeció el local y uno de los muros fue derribado con una carga

detonante mientras por un altavoz se les ordenó a los terroristas «salir con las manos en alto». No hubo respuesta. El mensaje se repitió en quechua, el idioma de la serranía, y el silencio volvió a ser la única respuesta.

Un rato después, los senderistas iniciaron un tiroteo junto al estallido de una carga de dinamita. El altavoz reiteró el llamado a la rendición dando un plazo de cinco minutos para «salir todos con las manos en la nuca», pero siguió el silencio como respuesta.

Entonces, soldados del Ejército acordonaron el perímetro exterior del penal y obligaron a los periodistas y curiosos a alejarse de la zona. Luego, una humareda oscura se elevó por encima del pabellón 4-B al abrirse dos boquetes de acceso al fortín. Cubiertos por los disparos efectuados por francotiradores ubicados en los pisos superiores, los efectivos policiales irrumpieron a balazos, pero la capacidad de fuego de los senderistas les permitió resistir cuatro horas más. Después, todo concluyó.

En esa embestida final ocurrió un hecho ilegal mantenido en silencio durante largos años. Un pelotón militar ingresó, en la última incursión, con un objetivo definido: aniquilar a cada uno de los integrantes de la dirigencia senderista, dejando a salvo a uno solo de ellos, Osmán Morote Barrionuevo.

Por una razón de protección usual en el senderismo, sus dirigentes debían estar en un sector específico y, en efecto, así ocurrió. Trece miembros de la cúpula senderista fueron ultimados a balazos sin requerirles la rendición y sus muertes fueron reportadas oficialmente por el presidente Fujimori como caídos en la refriega suscitada. Osmán Morote fue evacuado con una herida de bala en el glúteo derecho. Salvó la vida por una razón militar no exenta de lógica.

A las once de la mañana del domingo 10, el viento no había logrado disipar el fuerte olor a pólvora en el ambiente cuando el presidente de la república, Alberto Fujimori, cruzó el portón del presidio seguido por una caravana de seguridad. Permaneció una hora y media al interior. Luego salió para dar una conferencia de prensa, en la cual hizo una síntesis de la operación de asalto y anunció estas cifras: 28 reclusos muertos, 20 heridos y 451 rendidos (359 hombres, 92 mujeres). Días después, el boletín oficial del Ministerio del Interior elevó la cifra de muertos a 35.

Aquella vez, se impidió el acceso a la Cruz Roja Internacional, cuyos miembros siguieron los hechos desde las afueras del penal exigiendo un ingreso jamás concedido. En realidad, en esa guerra de mensajes silenciosos, el episodio de Cantogrande fue un hecho de guerra clandestina cuyas claves solo podían ser descifradas por sus actores. Por eso, al segundo día de esa contienda, Jorge Cartagena Vargas, un alto dirigente de Sendero parapetado en el organismo de

fachada denominado Asociación de Abogados Democráticos, declaró ante la prensa: «Fujimori está buscando una victoria militar». Sabía a qué se refería y Fujimori también. Por eso, en la mañana del domingo 10, las cámaras de televisión mostraron al país, en cadena nacional, una escena de combate, lúgubre y silenciosa: en un amplio patio del presidio recuperado, los prisioneros senderistas aparecieron tendidos boca abajo con las manos en la nuca, mientras el presidente Fujimori pasaba frente a ellos, con gesto autoritario, marcando el sentido de sojuzgamiento, como lo ordenan los cánones de la guerra clandestina.

«El mensaje de esa escena –señala Martin Rivas– fue para Abimael Guzmán y su gente. Se les estaba diciendo que la iniciativa y la autoridad la volvía a recuperar el gobierno. Esa misma actitud, recuerde usted, la repitió Fujimori cuando se liberaron a los rehenes de la residencia del embajador del Japón. Pasó por delante del cadáver de Cerpa, el jefe del MRTA, y esa escena la entregaron a la televisión para que la difunda. Son mensajes militares que se dan en una guerra de baja intensidad».

Abrigado, pero con el vaso a tope de Coca-Cola, Santiago Martin bebe un sorbo, se aclara la voz y entra en más detalles.

«En la reunión final antes de llevar el plan completo donde Fujimori se tomaron dos decisiones. Una fue dejar con vida a Osmán Morote. Era el enemigo de Abimael porque su propio jefe lo había delatado y enviado a la cárcel por disentir con él. Entonces, nos iba a ser muy útil, nos iba a deber la vida y le daríamos mejor trato. ¿Recuerda que esa vez Morote salió herido? Fue por eso. Murieron todos los dirigentes menos él. Si salía ileso se levantaban sospechas, por eso recibió un balazo en los glúteos, donde no hay peligro, y después la prensa se encargó de armar la historia de que Morote era cobarde y quiso huir y por eso le cayó un balazo en el culo. No fue así. Tuvo un sentido dejarlo vivo. Esa vez el mensaje fue muy claro: “Estamos en guerra total, así como me tumbas a mis cuadros más altos, te volteo a tus históricos, a tu columna vertebral, pero dejo vivo a tu disidente; Morote es ahora mi amigo”».

La otra decisión consistió en designar al grupo encargado del operativo. Ni Fujimori ni Montesinos ni el jefe del Ejército, el general Hermoza Ríos, admitían que la policía se encargue. Tenían dudas sobre la eficacia policial, pero sobre todo, no tenían formado un equipo para ese fin y era imposible conseguir la complicidad y el silencio de todo un destacamento en unos días. ¿Y si después un policía hablaba? No hubo duda en que la misión correspondía al Grupo Colina. Había sido creado para tal fin, venía operando y ejecutando diversas acciones y el alto mando confiaba en ellos.

Sin embargo, hubo una objeción planteada por Martin. Sostuvo que iba a

intervenir casi un millar de policías y al final podía trascender el ingreso de un pelotón del Ejército, por más disfrazados de policías que pudiesen estar. Al final, decidieron que no había alternativa distinta a correr el riesgo. «Siempre me ha llamado la atención –dice Martín– que nadie se diera cuenta o que nunca se haya hablado del asunto, yo pensé que se iba a saber, había demasiada gente, pero no fue así. Y mire, al final las dos cosas que se llegaron a saber, Barrios Altos y La Cantuta, fueron por obra de un traidor».

La finalidad del Operativo Mudanza 1 se cumplió tal cual fue concebido. Ese sábado 9 de mayo de 1992, por orden de Fujimori y Montesinos, fueron sometidos a ejecuciones extrajudiciales los miembros de la cúpula senderista: Deodato Juárez Cruzatt, Yovanka Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño, Janet Talavera Arroyo, Elvia Zanabria Pacheco, Ana Pilar Castillo Villanueva, Andrés Agüero Garamendi, José Antonio Aranda Company, Victoria Trujillo Abanto, Ramiro Mina Quispe Flores, Sergio Campos Fernandez, Fidel Rogelio Castro Palomino y Marcos Ccallocunto Nuñez.

El número total de dirigentes era diecinueve. Estaban presos catorce. Uno quedó con vida. Trece fundadores del movimiento fueron eliminados. Entre ellos el delfín de Abimael Guzmán, el ayacuchano Deodato Juárez Cruzatt. «Para mí –acota Martín– es falso cuando se dice que la captura de Guzmán trajo abajo a Sendero. Fue al revés. Guzmán cayó porque hubo una acción clave, la muerte de sus trece dirigentes. Se quedó sin cuadros. Se quedó solo».

Fue un mazazo para la organización senderista. Pero también fue un enorme desatino del gobierno no solo por aplicar métodos de barbarie, sino también porque el terrorismo reaccionó con una violencia más delirante todavía, y las mortales consecuencias las terminó pagando la inerte población civil. Desde el poder, cuando dieron la orden para esa matanza Fujimori y Montesinos sabían que la réplica del enemigo iba a ser desmesurada. Es lo que corresponde en una guerra clandestina. Sin embargo, siguieron adelante. Al igual que los jefes del terrorismo, los jefes de gobierno también pensaban que había muertes inevitables, que la población, ignorante de lo que ocurría subterráneamente, debía dar «una cuota de sangre». Era el terror contra el terror, sin detenerse a pensar en la necesidad de marcar una diferencia.

La primera acción de respuesta –no la más letal– la dio Sendero Luminoso el mismo sábado en que la policía tomó por asalto el pabellón 4-B. El blanco elegido fue el puesto policial de Carmen de la Legua, en el Callao. Un coche bomba con ciento cincuenta kilos de explosivos demolió tanto el local de la comisaría como la antigua iglesia aladaña, cuyo párroco quedó herido mientras ordenaba los bártulos de la misa matutina.

Aunque durante años no se pudo saber, la elección de ese objetivo no fue casual. En realidad, el ataque no se destinó únicamente a la comisaría, sino también a la iglesia, y no por una razón religiosa, sino como respuesta a una acción sicosocial que el Gobierno, en las semanas anteriores, había promovido con entusiasmo. Fue el famoso caso de «la Virgen que llora». Un evento con amplia difusión en la prensa y con una espectacular convocatoria de fieles.

Una mañana de marzo, en su vivienda del Callao, la señora Alicia Reátegui de Villena descubrió que la estatua de la Virgen puesta en su sala tenía el rostro húmedo por las lágrimas que caían desde sus ojos. Conmovida por el milagro, compartió su alborozado desconcierto con los vecinos y pronto empezaron a llegar los visitantes. En los días siguientes, la fila de peregrinos se hizo enorme con gentes llegadas de todos los distritos enterados por la televisión y los diarios que recogían con afán testimonios del prodigio. En las semanas posteriores, el hogar de la señora Reátegui se convirtió en poco menos que un santuario, hasta que una mezcla de envidia de algunas feligresas exigiendo que la sagrada imagen debía ir a una iglesia, más los deseos de la dueña de casa por recuperar su vida cotidiana perdida ante la invasión de gentes, llevó a la decisión de depositar la pequeña estatua en la cercana iglesia de Carmen de la Legua.

La Virgen efectivamente derramaba algunas lágrimas, pero no por el prodigio de un milagro, sino por efecto de un truco químico aprendido en la escuela de inteligencia de Colombia y aplicado por el servicio de inteligencia peruano con la anuencia de un agente lo suficientemente confiable para prestarse al operativo alterando la tranquilidad de la familia.

En ese marzo y abril de 1992 se iniciaron los operativos sicosociales de corte religioso para volcar hacia ese ámbito la ansiedad de una población aterrorizada por la violencia. Fue el año en que los santones y los curas empezaron a sanar enfermos de manera portentosa con oraciones colectivas e imposiciones de manos que ponían de pie a los inválidos y devolvían la vista a los ciegos, amén de alivios diversos para las sugestionadas almas creyentes. El más notorio fue el brasileño João Texeira, cuya visita a Palacio de Gobierno para efectuar una curación a Fujimori fue ampliamente divulgada en todos los medios, dando lugar a una delirante legión de dolientes tendidos, desde el amanecer, ante la casa del santón, a la espera de un milagro, mientras las bombas explotaban en la ciudad.

Las maniobras sicosociales, como el caso de «la Virgen que llora», forman parte de los manuales de la guerra clandestina o guerra de baja intensidad, y Sendero Luminoso lo sabía. Por eso demolió la iglesia de Carmen de la Legua, para alcanzar un recado al gobierno en esa sorda comunicación establecida. Lo

curioso es que, el día de la explosión, la estatua quedó de pie sin sufrir ni el más leve rasguño, y el martes 13 de mayo, un tropel de fieles, encabezados por el obispo del Callao, monseñor Ricardo Durand Flórez, sacó en procesión a la efigie, pero, en la trifulca de esa semana mortal, nadie atinó a usar a la prensa para convertir la casualidad en un milagro.

No fue la única réplica terrorista al Operativo Mudanza 1. El 15 de mayo, un camión bomba con trescientos kilos de explosivos estalló a espaldas de Palacio de Gobierno, derribó una dependencia policial y la onda explosiva causó daños materiales en la casa de gobierno, pero no afectó a sus habitantes porque Fujimori y su familia habían mudado su residencia a las fortificadas instalaciones del Pentagonito.

A pesar de estos atentados, las acciones más cruentas en respuesta a lo acontecido en Cantogrande, aún estaban por llegar. Abimael Guzmán, el otro presidente, «Presidente Gonzalo» como se hacía llamar, no cedió un ápice a pesar del mortífero embate contra su organización que le redujo a cinco los miembros de una cúpula de diecinueve y lo dejó sin compañeros de ruta, sin un sucesor y sin los históricos de su movimiento. Decidió, entonces, quemar sus naves.

Más de un militar partícipe de ese tiempo sostiene que Abimael Guzmán cometió su más grande error al radicalizar la guerra. Había vaticinado el golpe de Estado y su vaticinio se cumplió. Había sostenido que el partido ante una situación de guerra cruenta debía inmovilizarse para reestructurar sus acciones. Pero a la hora de los hechos, el teórico sucumbió ante el fanático herido. Tenía, además, sobre sí el cansancio de los años, un dato acaso cotidiano que las más de las veces no suele tomarse en cuenta a la hora de las revisiones históricas. El trastornado líder senderista, al llegar mayo del 92, había sumado más de catorce años de clandestinidad y doce de acciones violentas, se había alejado de su militancia, se recluía en casas ubicadas en barrios residenciales, había agudizado su afición al alcohol y, desde la implantación de una recompensa por su cabeza, vivo o muerto, pasó a rodearse de mujeres a las que consideraba más leales que los hombres. No estuvo lejos de la verdad. Fue un hombre de su entorno, Luis Alberto Arana Franco, quien hizo posible su captura al canjear los datos de su escondite por una nueva identidad y una nueva vida en el extranjero.

Si Guzmán hubiese paralizado su accionar, Fujimori y Montesinos se habrían quedado sin el pretexto central de su autogolpe y esa vuelta de tuerca los habría descolocado. Pero la Historia no está hecha de especulaciones sino de hechos y, herido por las muertes de su dirigencia, Abimael Guzmán optó por la guerra absoluta centralizándola en Lima. Se abrió un flanco débil. Por fin, las

fuerzas del orden tenían un escenario propicio para una guerra clandestina. En un territorio concreto, la ciudad de Lima, se podía detectar a ese enemigo que se había mantenido oculto durante tantos años. Fue una confrontación sangrienta para ambos bandos. Y los brutales efectos sacudieron hasta el horror a la población.

A TRAVÉS DE LAS DELGADAS PAREDES del recinto se empezó a colar, desde un vocinglero parlante, un cántico clerical con alabanzas al Señor en los cielos y reclamos por la redención de los pecadores terrenales. Al cruzarse con la mirada de sorpresa del periodista, el rostro de los militares mostró una mueca de desconcierto. La mordaz ironía del momento se superó con la información de que el vecindario contaba con los oficios de una agrupación evangélica, puntual en el inicio de sus ritos al caer la tarde. La celebración era diaria, y en su claustro, ambos mili-tares debían escuchar durante tres horas, y a veces más, rezos, cánticos y plegarias. De modo que, con el fondo de esa cáustica banda sonora, Martin Rivas continuó su relato con una sonrisa marrullera y guarnecido en la manta para el frío

«A nosotros nos favoreció mucho el error de Abimael Guzmán. Traer al Ejército Guerrillero Popular para definir el combate en Lima fue lo peor que pudo hacer, porque era gente acostumbrada a otro tipo de combate y tenía otra idiosincrasia. El serrano es solitario, de grandes espacios; es taciturno, puede caminar días y días; y con escaso alimento va bien y si lo has ideologizado va mejor todavía. El de la selva es distinto, no es de grandes distancias; no ve lejos, su vista está acostumbrada a la maleza; necesita escuchar bien; está preparado para combatir en la selva, en aguajales; puede estar todo el día mojado y no se enferma; come lo que encuentra. Juntar esos dos estilos y traerlos a la costa fue un error tremendo. Además, descubrieron otras cosas: una ciudad grande, atractiva, la música chicha que se empezaba a imponer en ese entonces, mujeres distintas a las de su tierra, manejaban el dinero que les daban los narcos, manejaban armamento y en los pueblos jóvenes tenían un aire mítico. Todo eso los llevó a cometer errores, a descuidarse, a distraerse. Fue el gran error estratégico de Abimael.

»Ocurrió algo paradójico y es una idea que no se me va de la cabeza. Él que había sido seguidor y estudioso de Mao Tse Tung se olvidó de una enseñanza clave, y fuimos nosotros los que la aprendimos leyendo sus archivos».

Apenas terminó la frase, se puso de pie y se acercó al desvencijado librero, buscó entre pocos libros, eligió uno y se lo alcanzó al periodista con la página abierta. Era una cita de Mao Tse Tung subrayada: «Cuando usted quiere

combatirnos, no se lo permitimos y no puede encontrarnos. Pero cuando nosotros queremos combatirlo a usted, nos aseguramos de que usted no pueda escapar y de que podamos golpearlo de lleno y exterminarlo. El enemigo avanza, nosotros retrocedemos, el enemigo acampa, nosotros lo hostigamos, el enemigo se cansa, nosotros atacamos».

Cuando el libro retornó a sus manos, enarcó las cejas y lo cerró y continuó: «Nos había aplicado esa táctica durante años y no se dio cuenta que al venir a nuestro terreno fijó un espacio, planteó la lucha en una ciudad que no conocía, y tampoco sabía que, por fin, nosotros estábamos aplicando inteligencia y empezábamos a descubrir sus escondites y podíamos seguirlos, esperarlos, medirlos y golpearlos, eliminarlos».

Con el relato asoma nítida la explicación a la ferocidad que Lima soportó entre mayo y julio del 92: a cada golpe asestado Sendero replicó con un atentado cada vez peor. Y, como efecto de la radicalización de la guerra, ocurrieron dos matanzas, una tras otra, una por cada lado.

16 DE JULIO DE 1992. DIEZ Y CINCO DE LA NOCHE. CALLE TARATA, MIRAFLORES

A veces las cifras, siempre acusadas de frialdad, resumen el espanto: 20 personas muertas; 132 heridas, 62 de ellas en grave estado; 6 mujeres con el embarazo trunco por abortos; 8 personas ciegas; 18 con fracturas expuestas, 6 de ellas con las extremidades mutiladas; 164 viviendas destruidas; 64 autos inutilizados; y afectadas alrededor de 400 edificaciones aledañas entre casas, agencias bancarias, tiendas comerciales, restaurantes, hoteles y otros negocios.

Lo que las cifras no pueden recoger es el pavor sin fondo y el suplicio de dolor de las 164 familias que vieron estallar sus paredes, sus ventanas, sus dormitorios, sus afectos, sus recuerdos. El esfuerzo de una vida entera en escombros. Y la pena sin consuelo de la muerte o las mutilaciones. Primero fue un apagón, uno más de los tantos que afectaban a la ciudad. Luego una escaramuza entre vigilantes del Banco de Crédito y los hombres que empujaban una camioneta con el motor súbitamente apagado. Quienes alcanzaron a ver la escena solo recuerdan que, una vez estacionado el vehículo, varios sujetos partieron a la carrera. Después, frente a los dos edificios de viviendas cuyas familias se disponían al descanso de esa noche, el coche bomba explotó su carga de seiscientos kilos de dinamita y nitrato de amonio, con tanta violencia que el motor del mortal vehículo voló ochenta metros hasta caer en una playa de estacionamiento.

Las escenas de esa noche, incluso en el recuerdo, están teñidas de fuego, humareda, olor a pólvora, sangre, gritos, ambu-lancias. Los autores del atentado

se refugiaron en la Universidad La Cantuta.⁵⁸

A la mañana siguiente, al observar los dos edificios devastados, los habitantes de la ciudad de Lima sintieron el frío escozor del miedo.

EL OPERATIVO LA CANTUTA

En esos días de zozobra, el atentado de Tarata fue la culminación de una oleada de casi un centenar de actos de terrorismo que dejó imágenes impresionantes como la de los taxistas calcinados al interior de sus vehículos por no obedecer la paralización decretada por el senderismo o niños aterrorizados por los atentados a sus colegios. Los servicios de luz y agua se interrumpieron y, en medio de los afanes de sobrevivencia, apenas trascendió –y durante un tiempo se mantuvo en el misterio– el secuestro y la desaparición de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, La Cantuta.

«Cuando ocurrió lo de la calle Tarata –cuenta Martín–, al día siguiente era viernes, hubo una reunión a la que me convocaron y en la que estuvieron Fujimori, Montesinos y Hermoza, además de otra gente con la que se veían los problemas del terrorismo. Estaban muy tensos. A pesar de la cantidad de atentados, Fujimori no salió a la prensa, no dio ningún mensaje. Sentían que el piso se les movía».

En el desasosiego de ese viernes 17, a los ánimos alterados por la feroz respuesta del senderismo, se agregó la incertidumbre generada por la llamada telefónica de un alto funcionario del gobierno norteamericano señalando que si los atentados continuaban con la frecuencia y el salvajismo de esa semana de espanto, empezarían a evaluar la intervención de una fuerza multinacional. La llamada se sintió como el prelude del final. Era un gobierno de facto y el ingreso de fuerzas multinacionales implicaba una transición democrática, es decir, el fin de Fujimori.

Evaluaron la situación y la conclusión a la que arribaron es una muestra cabal del estilo que caracterizó siempre a Fujimori: tomar riesgos más allá de los que, usualmente, un político se permite. Jugó a todo o nada. Junto a Montesinos y al general Hermoza, apostó por la lógica militar. Sus analistas, los informes y los operativos ejecutados hasta ese momento los inducían a pensar que la derrota de Sendero podía estar cerca. Si el senderismo reaccionó con tanta furia es que había acusado los golpes asestados en las semanas anteriores. Decidirse a jaquear Lima en una impresionante semana de terror sostenido significaba, para el análisis militar, que el enemigo estaba débil y jugaba sus cartas finales. Semejante exposición de fuerza era anuncio de flaqueza; la fortaleza real se expresa siempre desde el equilibrio.

«Por los agentes infiltrados –continúa su relato Martin– supimos que los autores del atentado de la calle Tarata se refugiaron en la residencia de estudiantes de La Cantuta. Esa residencia era un antro de senderistas y dormía más gente de lo permitido. Por eso infiltramos agentes como si fueran estudiantes, aparte del destacamento acantonado allí. Los agentes detectaron el apoyo a los del atentado. Entonces, el operativo tuvo una finalidad concreta: replicar Tarata. Era decirle a Sendero: “No sigas porque te vamos a seguir persiguiendo, ya sabemos dónde te escondes y vamos a seguir volteando a tu gente”».

El 17 de julio de 1992, una orden dictada en escala jerárquica dio inicio a un episodio cuyas consecuencias abarcarían largos años y llevaría a sus actores a prisión. A través de una línea telefónica encriptada, el general Juan Nolberto Rivero Lazo, jefe del SIE, le comunicó al general Luis Pérez Documet, jefe de la División de Fuerzas Especiales (DIFE), una orden dictada por el Comandante General del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien a su vez la había recibido del Presidente de la República, Alberto Fujimori, y del jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos Torres. La orden era muy concreta: en las próximas horas «un grupo especial del Ejército» ingresaría a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida con el nombre popular de La Cantuta. Para ello, Pérez Documet debía ordenar al jefe de la base militar acantonada en la universidad, franquear el ingreso al pelotón especial. ⁵⁹

En la madrugada del 18 de julio de 1992, el teniente José Adolfo Velarde Astete ordenó abrir el portón de la universidad y, a bordo de dos camionetas *pick up*, ingresaron los agentes del destacamento militar clandestino denominado Grupo Colina. Con los rostros cubiertos por pasamontañas y armados con fusiles de asalto HK con silenciadores, se encaminaron directamente al sector de la residencia de los estudiantes varones y mujeres.

Es extraño leer que las puertas de una universidad sean abiertas por militares pero en el convulso inicio de los años noventa, algunas universidades se habían convertido en territorio tomado por Sendero Luminoso. En los dormitorios y en los comedores estudiantiles planificaban y se refugiaban los autores de brutales atentados y asesinatos protegidos por la llamada «Autonomía universitaria» que impedía la intervención policial. Entonces, el gobierno de Fujimori decidió el cese de ese privilegio mal utilizado y dispuso la presencia de una base militar. Fue una convivencia áspera que dio lugar a una situación insólita: en la universidad La Cantuta se conocían los alumnos militantes o simpatizantes del senderismo con los militares encargados de tareas de

inteligencia, cada quién sabía de quién se trataba, pero, desde el lado de las fuerzas del orden, no podían actuar hasta que, luego del salvaje atentado en la calle Tarata, llegó la decisión política desde el gobierno autorizando la intervención militar. Lo que ocurrió en la madrugada del 18 de julio de 1992 está relatado en detalle en el boscoso expediente judicial 28-01. En la espesura de esas miles de páginas aparecen los siguientes testimonios.

DECLARACIÓN INSTRUCTIVA, FOJAS 39321/39330 Y FS. 41282.

CORONEL JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ CÓRDOVA, JEFE DE LA SECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES DEL EJÉRCITO - DIFE.

Señala que el 17 de julio de 1992, su jefe inmediato era el general Luis Pérez Documet, le mostró una relación de un grupo de personas de la Universidad la Cantuta, entre los cuales reconoció los nombres de Bertila Lozano como una dirigente de la Universidad que siempre reunía a los estudiantes para liderar cualquier protesta estudiantil, y a Hugo Muñoz Sánchez como un profesor que, según le habían comentado, se había reunido con Abimael Guzmán, habiendo escrito incluso un libro denominado «La Escuela y la Guerra» en donde llamaba a los estudiantes a la lucha armada, siendo a ellos dos a quienes se les consideraba como presuntos terroristas.

Refiere que a través de colaboradores e informantes, grupos de agentes que iban regularmente a la Universidad La Cantuta y de la inteligencia que se manejaba el año anterior, se obtuvo información relacionada con alumnos y profesores de la mencionada Universidad que formaban parte del movimiento subversivo Sendero Luminoso; toda esta información fue remitida a la DINTE o al SIE, incluso a la DINCOTE,⁶⁰ para su procesamiento y evaluación correspondiente. (...) Indica que por la información que manejaban sabían que eran presuntos delincuentes terroristas, los estudiantes Armando Richard Amaro Cóndor y Bertila Lozano Torres, así como el profesor Hugo Muñoz Sánchez.

Menciona que un día antes de los hechos de «La Cantuta», a las 15:30 horas aproximadamente, el coronel Federico Navarro Pérez se acerca a las oficinas, pidiéndole hablar con el general Luis Pérez Documet, luego que conversaran por diez minutos aproximadamente, llaman al declarante y le muestran una relación de alumnos de La Cantuta, el documento era una nota informativa de la DINTE, interrogándolo si los conocía, al manifestarles que sólo conocía a dos o tres, le preguntaron quien conocía a todos, respondiéndoles que conocían mejor el tema de La Cantuta, el S-2 del BIP 39, el teniente Portella Núñez; en ese estado, el general Pérez Documet le ordenó que le comunique al comandante Miranda Balarezo, jefe del BIP 39, que el teniente

Portella espere en la puerta del Cuartel a un grupo de oficiales que iban a realizar un operativo en esa Universidad, retirándose a cumplir la orden; agrega que no le indicaron que operativo se realizaría ni que personal lo ejecutaría.

MANIFESTACIÓN POLICIAL FOJAS 39389/39397

NORMA CECILIA ESPINOZA OCHOA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE - LA CANTUTA, DESDE ABRIL DE 1991 HASTA SETIEMBRE DE 1995. OCUPÓ UNA DE LAS HABITACIONES DEL PABELLÓN DE MUJERES HASTA EL 18 DE JULIO DE 1992.

Sobre los hechos que se investigan dijo que el 17 de julio de 1992 tuvieron una reunión celebrando el cumpleaños de los estudiantes (...) asistió hasta las 21:00 horas aproximadamente en que se retiró a dormir, en el camino al pabellón se encontró con su amiga Emilia Huamán Poma, y finalmente se quedó a dormir en la habitación de ésta última, y no en el cuarto que tenía colindante al de las internas Dora Oyague Fierro y Bertila Lozano Torres; a las 3:00 horas aproximadamente del 18 de julio de 1992 escucharon que el candado y la cadena de la puerta caían al suelo, al momento patearon la puerta y entró a su cuarto un hombre con polo blanco, jean azul, botas militares, pasamontañas negro y un fusil en la mano, ordenándoles se tiren al suelo y no se muevan, sacándolas una a una al pasadizo, a la declarante la arrastraron de los cabellos hasta un lugar cerca del lavadero, y seguidamente una a una procedían a levantarlas y una persona vestida de la misma forma las reconocía, cuando la levantaron ese sujeto movió su cabeza afirmativamente y se la llevaron junto con Dora Oyague y Bertila Lozano, como en todo momento la declarante gritaba diciendo que se estaban equivocando con ella y que tenía familia en el Ejército, uno de los sujetos con pasamontañas al verla ordenó que la bajen del vehículo, así la llevaron a rastras hasta la puerta del internado y la dejaron maniatada en la puerta de ingreso, de donde fue ayudada por su amiga Emilia Huamán Poma y otras internas. (...)

Refiere que al ver que sacaban del internado a las chicas Bertila Lozano Torres y Dora Oyague Fierro, quienes participaban en las actividades políticas de los «tucos» que tenían ideologías comunistas, dedujo que se equivocaban con la declarante y la habían confundido con otra chica de similares características a las suyas, a quien ellas llamaban «La Paquita» porque usaba botas, pero desconoce sus nombres y apellidos.(...)

Menciona que las actividades políticas en la Universidad eran realizadas en el pabellón de los varones y estaban dirigidas a concientizar a los alumnos con ideologías comunistas, esa labor era realizada por Luis Ortiz Perea «El

gato», y otras veces las hicieron Armando Amaro Cóndor, Marcelino Rosales Cárdenas y Bertila Lozano Torres, quien era la más representativa del grupo de los internos. (...)

Recuerda que la interna Jessica Bendezú, amiga de Bertila e integrante de los grupos políticos, se relacionaba con los militares de la base militar a efectos de obtener beneficios económicos, precisando que el novio y actual esposo de esa chica, en esos momentos estaba preso por su participación en actividades terroristas.

DECLARACIÓN TESTIMONIAL FOJAS 43290

ROSA EMILIA HUAMÁN POMA, INTERNA EN LA UNIVERSIDAD LA CANTUTA.

Llegó a conocer a todos los agraviados, habiendo sido testigo del hostigamiento del que era víctima su compañera Bertila Lozano por parte de los militares de la base de Acción Cívica quienes continuamente la insultaban diciéndole «perra tuca» o a veces la golpeaban. Detalla que en la madrugada del día 18 de julio de 1992, en circunstancias que todas descansaban, la declarante se levantó y pudo observar que alrededor de treinta militares corpulentos con uniforme y pasamontañas habían rodeado el internado, cuando de pronto entraron a sus habitaciones y las iban sacando una a una, las arrojaron al piso y las hicieron rampar hasta el pasadizo, mientras los militares gritaban los nombres de Bertila, Jessica y otro nombre más que no recuerda, luego las hicieron parar y las condujeron hacia la puerta principal con los ojos cerrados y las manos en la nuca, a la vez que uno de los militares las iba señalando diciendo sí o no, separando y llevándose a las que señalaban afirmativamente, no obstante ello la declarante pudo abrir los ojos y observar que estaban siendo filmadas y fotografiadas, les ordenaron caminar en círculos para después ponerse contra la pared, cuando escuchó que ingresaron al dormitorio de Bertila y ella les gritaba «cerdos», siendo sacada a golpes, según le comentaron sus compañeras de cuarto. Mostradas las impresiones fotográficas que obran en el presente expediente, la declarante Huamán Poma logró reconocer a Jorge Enrique Ortiz Mantas,⁶¹ como la persona que vestido de civil daba órdenes a los soldados.

MANIFESTACIÓN POLICIAL FOJAS 39407/39415

TEODOSIO HERNÁN QUIROZ AGUIRRE, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LA CANTUTA DESDE 1981. VIVE EN UN CHALET DE LA MENCIONADA UNIVERSIDAD.

Señala que el 17 de julio de 1992 siendo las 23:45 horas aproximadamente se encontraba libando licor con su colega Alcides Chávez Castilla en un lugar próximo a la puerta de ingreso a los chalets de los docentes, al estar regresando a su chalet, observó a un efectivo militar con su armamento, quien le indicó que

ingrese a su domicilio y no salga, en esos momentos observa al profesor Octavio Mejía Martell y a su esposa Lucy de Paz Sepúlveda que se encontraban con varios efectivos militares reclamando que dejen en libertad al profesor Hugo Muñoz Sánchez, que había sido sacado de su chalet, aproximadamente a la 01:25 horas del 18 de julio de 1992; refiere que dentro del grupo de intervinientes habían personas vestidas de civil con pasamontañas y portando ametralladoras chicas.

Indica que uno de los efectivos militares, que en ocasiones iba a su casa a tomar sus alimentos, le comentó que antes de lo del profesor Muñoz, habían irrumpido en la residencia de los alumnos varones, y uno de los intervinientes apuntaba con una linterna a los alumnos con la finalidad de identificarlos, separarlos y llevarlos a una camioneta, en esa acción se llevaron a siete estudiantes; por otro lado, otro contingente irrumpía en la residencia de las mujeres de donde se llevaron a tres estudiantes, pero una de ellas gritando que era pariente de un general del Ejército, logró que la suelten, logrando llevarse sólo a Dora y Bertila, a todos ellos se los llevaron en camionetas con destino al Puente Caracol, información que le fue confirmada por el comandante Iparraguirre en la mañana del 18 de julio de 1992, agregando que el mismo oficial le indicó que ya no vería a los estudiantes detenidos.⁶² (...)

Manifiesta que debido a las fotos que salieron en los periódicos puede afirmar que Santiago Martín Rivas acudió a la universidad tres o cuatro meses antes de los hechos, presumiendo que haya estado haciendo su labor de inteligencia; incluso menciona que en varias oportunidades Martín Rivas buscaba encontrarse con la estudiante Bertila Lozano y en cada encuentro ambos se insultaban.

Manifiesta que conocía que Bertila Lozano Torres participaba en las marchas y movilizaciones abiertas prosenderistas, Luis Enrique Ortiz Perea hacía alusiones que era militante de Sendero Luminoso, Felipe Flores Chipana, también participaba en las marchas prosenderistas y decía ser integrante de Sendero Luminoso; en el caso del profesor Hugo Muñoz Sánchez, éste pregonaba que era integrante de Sendero Luminoso.

DECLARACIÓN FOJAS 41165

JOSÉ ARIOL TEODORO LEÓN, PADRE DEL OCCISO AGRAVIADO ROBERT EDGAR TEODORO ESPINOZA

Refiere que en 1992 su hijo tenía 23 años y estudiaba Biología en la Universidad La Cantuta; señala que luego de tres días de ocurridos los hechos, cuando fue a recoger las pertenencias de su hijo al internado de la universidad,

sus compañeros le dijeron que el procesado Aquilino Portella Núñez, conocido como el teniente Medina, había sido la persona que con una lista en mano fue llamando a cada uno de los agraviados y los entregó al Grupo Colina, cuyos integrantes estaban encapuchados y portaban armas cortas con silenciador, y luego se los llevaron con rumbo desconocido.

EXPEDIENTE 28-01, DICTAMEN DE LA PRIMERA FISCALÍA SUPERIOR PENAL ESPECIALIZADA, FOJAS 16

Luego de la intervención, procedieron a llevarse a los intervenidos en las camionetas pick up indicadas, y cuando se encontraban por el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Priale, en los terrenos de propiedad de SEDAPAL, detienen los autos bajando a los detenidos, dándoles muerte en el acto, procediendo a enterrarlos e incinerarlos en dicho lugar; sin embargo, posteriormente, cuando otro grupo verifica la forma en que se habían desaparecido las huellas, informan que los cadáveres no estaban adecuadamente enterrados, por lo que, proceden a retirar algunos cadáveres, llevándoselos con destino a un lugar denominado Quebrada de Chavilca en el distrito de Cieneguilla, donde finalmente son dejados sus restos.

«¿Cómo fue ese operativo? Mire, señor periodista –se agita el mayor Martín–, mucho se ha hablado de eso. Han escrito de todo, que se usaron camionetas, que fueron tantos efectivos, que estaban vestidos de tal forma, han hablado hasta de los gestos, de las palabras que se dijeron como si los periodistas hubiesen estado presentes esa noche. Los detalles nadie los va a contar. Además, eso no es lo que importa. ¿Ocurrió? Sí, señor, ocurrió. Eran terroristas, no eran inocentes estudiantes como se ha dicho. El profesor Muñoz era dirigente de Sendero, un terrorista formado en la Universidad de Huamanga y luego en la China. Y el resto eran terroristas camuflados como estudiantes. Contra esos delincuentes se hizo el operativo para replicarle a Sendero: “ahora sí conocemos tus movimientos y te vamos a seguir golpeando”.

»En mi opinión, en ese operativo hubo un problema. Si se hubiese trabajado como en otros operativos, quizá nada se habría sabido hasta hoy. Pero en este caso metió su estilo el Tuto, el general Pérez Documet. El también percibió que se estaba en la definición de esa guerra y quiso sacar provecho, quiso llevar agua para su molino y como el destacamento de La Cantuta estaba bajo sus órdenes aprovechó eso y dijo, con su vozarrón y su manera de hablar bravucona, mandona: “Señor Presidente, yo mismo me voy a encargar, vamos a terminar con esos delincuentes”. Por eso asumió el mando operativo con la autorización de Fujimori, Montesinos y Hermoza, y coordinando con estos dos. Y se hizo a su

estilo. Y salió mal».⁶³

Eso explica que la noche del 18 de julio de 1992, el despliegue en La Cantuta fuera inusual y distinto de los operativos clandestinos. Los soldados de la División de Fuerzas Especiales llegaron en camiones portatropas y cercaron la universidad, mientras dos grupos ingresaron a los ambientes en que dormían el profesor y los nueve alumnos. Una vez secuestrados, se dirigieron a Huachipa por la autopista Ramiro Prialé.

Al llegar a la altura del Campo de Tiro, el general Pérez Documet ordenó detenerse al convoy. «Dos camionetas con los detenidos y escolta de soldados en camiones, un disparate total, demasiada gente», acota Martín Rivas. El general afirmó: «Hay orden de arriba para quemarlos». Se generó una discusión. Martín Rivas sostiene que los detenidos, por el descomunal atentado en que participaron, debían contar con buena información, en especial el profesor Muñoz que era un importante dirigente. Era necesario interrogarlos. En todo caso, después se podía proceder a su eliminación. Pero, el general Pérez Documet insistió en que la orden debía cumplirse. Impuso su prepotente estilo y en la explanada ultimaron a balazos al profesor Hugo Muñoz Sánchez y a los alumnos Bertila Lozano Torres, Marcelino Rosales Cárdenas, Roberto Teodoro Espinoza, Juan Mariños Figueroa, Luis Ortiz Perea, Felipe Flores Chipana, Heráclides Pablo Meza, Armando Amaro Cóndor y Dora Oyague Fierro.

«¿Quién dio la orden? Mire, si Pérez Documet era general a cargo de la DIFE, ¿quiénes eran los únicos que podían estar sobre él y en un operativo de ese tipo? ¿Quiénes estaban directamente interesados y preocupados? ¿Quiénes eran los únicos que podían llamarlo y ordenarle? Está claro, ¿no? Si las órdenes no venían de Fujimori, Montesinos y Hermoza, ¿de quién más podían venir? Le quiero precisar algo: el operativo se hizo mal, pero su objetivo fue cumplido. Sendero salió de las universidades, corrieron como conejos de las residencias estudiantiles a buscar nuevos refugios. El aviso se lo dieron entre ellos mismos, no se enteraron por los diarios porque en esos días no hubo repercusión de este caso, se informaron entre ellos, el mensaje llegó a destino: sabemos dónde andan y vamos a aniquilarlos. Ahora Fujimori niega totalmente su responsabilidad, pero le voy a dar un dato fundamental que nadie ha visto y es una prueba de que Fujimori sabía todo y autorizó y ordenó todos los operativos y el de La Cantuta, por supuesto. Mire».

Vuelve a dirigirse al librero. Esta vez saca un fólder con recortes periodísticos. Busca y separa uno y continúa. «24 de julio del 92, ¿de acuerdo? Aquí lo puede ver. Es decir, a los ocho días del atentado de Tarata, Fujimori dio este mensaje al país y en este mensaje, el Presidente de la República y Jefe

Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿me entiende?, Jefe Supremo, dijo lo siguiente: “Nadie tiene derecho a quitarnos lo nuestro. Por eso aquellos que desangran nuestro país, que matan a nuestros hijos, y que destruyen aquello que no han construido, para esclavizar al Perú, van a ser eliminados. Ellos y su veneno. Este es mi compromiso”.⁶⁴ Esa frase “eliminados, ellos y su veneno” no la dijo porque se le ocurrió o le dio la gana. En una guerra clandestina, esa frase no está dirigida a la gente común, el ciudadano la escucha como una frase más. Era un mensaje de dos puntas: a los senderistas y a los guerreros que estábamos peleando. A los terroristas les estaba diciendo: “El Presidente de este país soy yo y no el llamado presidente Gonzalo y los voy a liquidar”; a los militares nos estaba diciendo: “Tienen el respaldo político que no tuvieron en todos los años anteriores”, nos estaba diciendo: “Sigamos en la lucha, vamos a terminar de aniquilarlos y yo estoy respaldando esta política”. Por eso, le insisto que fue una política de Estado. Barrios Altos y La Cantuta no fueron la decisión de un grupo llamado Colina y veinte o treinta militares locos haciendo las cosas como querían, no señor, eso solo se podía decidir desde bien arriba y esa política de Estado existió».

LA META DE DERROTAR a Sendero Luminoso se logró porque cincuenta y nueve días después, el 15 de setiembre, fue capturado Abimael Guzmán y lo que quedaba de su Estado Mayor, mientras el remanente de sus tropas huyó hacia la selva.

Sin embargo, la pregunta, aún vigente, es si un Gobierno puede recurrir al terrorismo de Estado para combatir, precisamente, al terrorismo. Es una práctica enseñada y enarbolada por el Estado norteamericano y cada vez más extendida en el mundo entero en la lucha contra las organizaciones terroristas. No obstante, desde el lado de la civilización, desde el lado de la razón, la siguiente reflexión es ineludible: «Esta política es insensata, pero no incoherente ni ciega.(...) La cortina de humo con que se justifica –que la operación militar no tiene otro objetivo que “acabar con la infraestructura terrorista”– en verdad presupone esta idea: que solo se conseguirá la paz y la seguridad infligiendo una derrota militar y un escarmiento tal (a las huestes enemigas) que estas no tendrán otra alternativa que aceptar todas las condiciones que se les imponga, pues entenderán que ese será el precio de su supervivencia. (...) Semejante estrategia es contraproducente, como tratar de apagar un incendio a baldazos de combustible».⁶⁵

- ³⁷ En Perú se denomina así a los terrenos ocupados ilegalmente para construir viviendas.
- ³⁸ En Perú, pueblo joven es la denominación de una villa miseria o una favela. El término proviene de un demagógico bautizo de la Junta Militar de Gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).
- ³⁹ Acuerdos del Tercer Congreso Nacional de Vanguardia Revolucionaria, año 1983. Citado en catarsisyharakiri.blogspot.com
- ⁴⁰ Víctor Robles Sosa, La historia secreta de Barrios Altos: el testimonio del agente de inteligencia infiltrado, en www.blogcyh.com
- ⁴¹ *Ibíd*em
- ⁴² *Ibíd*em
- ⁴³ “Plan de Operaciones Ambulante”, presentado por el congresista Javier Diez Canseco, sesión de la Cámara de Senadores, 11 de noviembre de 1991.
- ⁴⁴ Sentencia de la Primera Sala Especial Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente 28-2011, folios 451, 784.
- ⁴⁵ Este dato es corroborado por la información contenida en el semanario *Caretas*, edición del 11 de noviembre de 1991: “Las polladas, tan populares en las zonas periféricas y tugurizadas de la ciudad, se han convertido también en un método de recaudación de fondos para Socorro Popular y otras organizaciones de fachada de Sendero (...). Ha habido versiones en los últimos tiempos, sobre polladas en Canto Grande, Villa María del triunfo y Comas en las que inclusive se habrían confundido dirigentes y altos mandos”.
- ⁴⁶ Sentencia de la Primera Sala Especial Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente 28-2011, folios 452, 453 y 454.
- ⁴⁷ Velásquez Asencio, Atúncar Cama, Meneses Montes de Oca, Ruiz Ríos Rosa, Barreto Riofano Mariela, Salazar Correa, Paquiyaury Huaytalla, Caballero Zegarra, Cárdenas Díaz Estela, Santillán Galdós, Terrazas Arroyo Haydee, Rojas Castro Shirley, Hinojosa Soplá, Vargas Ochochoque y Cubas Zapata.
- ⁴⁸ Sentencia Sala Penal Corte Superior, folio 456.
- ⁴⁹ Sentencia de la Primera Sala Especial Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente 28-2011, folios 469, 470.
- ⁵⁰ Sentencia de la Primera Sala Especial Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente 28-2011, folios 472, 894, y fojas 1874 Tomo 05.
- ⁵¹ Los fallecidos fueron Luis Antonio León Borja (33), Luis Alberto Díaz Astovilca (23), Alejandro Rosales Alejandro (43), Filomeno León León (30), Odar Mender Sifuentes Núñez (25), Teobaldo Ríos Lira (56) Máximo León León (39), Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco (31), Lucio Quispe Huanaco (45), Manuel Isaías Ríos Pérez (33), Benedicta Yanque Churo (18), Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre (38) Nely María Rubina Arquínigo (21), Tito Ricardo Ramírez Alberto (30) y Javier Ríos Rojas (8). Los heridos: Natividad Condorcahuana Chicana (35), Felipe León León(38), Alfonso Rodas Alvitres (45) y Tomás Livias Ortega (32).
- ⁵² Sentencia de la Primera Sala Especial Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente 28-2011, fojas 78996 Tomo 121.
- ⁵³ Uno de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, Tomás Livias Ortega, años más tarde, durante el gobierno de Alejandro Toledo 2001-2006, fue convertido en poco menos que un símbolo por la congresista Anel Townsend y la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Livias, sin duda, había sido víctima de un intento de ejecución extrajudicial y sus autores debían ser penados, pero el daño inflingido no modificaba su condición de presunto terrorista, o en el mejor de los casos, de activo colaborador de Sendero Luminoso. El agente Abadía declaró en la audiencia judicial del 29 de marzo del 2006 que había concurrido en compañía de Tomás Livias Ortega “varias veces a La Parada, a La Victoria, al comité senderista de La Victoria”.

⁵⁴ Término utilizado por Sendero Luminoso. Alude a seguimiento y vigilancia a potenciales víctimas de atentados.

⁵⁵ Referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que el día del atentado culminaba su visita al Perú.

⁵⁶ “Guerra psicológica” es otra de las denominaciones para referirse a la guerra no convencional o guerra de baja intensidad. Declaraciones de Montesinos en la sesión del 25 de abril del 2002, ante la Comisión Investigadora de la Influencia Irregular sobre el Poder Judicial y otros poderes del Estado.

⁵⁷ Ídem.

⁵⁸ Ver también: Álvaro Vargas Llosa, *En el reino del espanto*; Efraín Rúa, en *El crimen de La Cantuta*; revista *Sí*, edición del 19 de abril de 1993.

⁵⁹ Por la influencia marcada de Sendero Luminoso y las sospechas de terroristas camuflados como estudiantes, se había establecido una presencia militar bajo un nombre eufemístico: Base de Acción Cívica de la UNE - La Cantuta.

⁶⁰ DINTE: Dirección de Inteligencia del Ejército; SIE: Servicio de Inteligencia del Ejército; DINCOTE: Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Policía Nacional.

⁶¹ Militar miembro del Grupo Colina.

⁶² Alumnos: Bertila Lozano Torres, Marcelino Rosales Cárdenas, Roberto Teodoro Espinoza, Juan Mariños Figueroa, Luis Ortiz Perea, Felipe Flores Chipana, Heráclides Pablo Meza, Armando Amaro Cóndor y Dora Oyague Fierro. Profesor: Hugo Muñoz Sánchez.

⁶³ En 1992, el general Luis Pérez Documet era jefe de la División de Fuerzas Especiales (DIFE), y sus efectivos rodearon la Universidad La Cantuta la noche del secuestro de un profesor y nueve estudiantes.

⁶⁴ Diario oficial *El Peruano*, mensaje a la Nación de Alberto Fujimori, 25 de julio de 1990. (Las cursivas corresponden al autor). Los demás diarios de esa fecha consignan la misma información.

⁶⁵ Mario Vargas Llosa: “La guerra de Sharon”, en diario *El País*, 14 de abril de 2002.

LABORES DE OCULTAMIENTO

*No piense que, por depender de usted,
su amo lo querrá. Por el contrario, lo
más probable, es que lo odie y le tema.
Pero, ya lo dijo Maquiavelo, es mejor
ser temido que amado.*

*Más vale que la gente dependa
de usted por temor a
las consecuencias de perderlo,
que por el placer de su compañía.*

ROBERT GREENE

EL VIERNES 2 DE ABRIL DE 1993, en la sesión del Congreso Constituyente, Henry Pease, un importante congresista de izquierda y profesor universitario de buena reputación, anunció haber recibido un documento con una grave denuncia: un anónimo grupo militar autodenominado León Dormido revelaba que el secuestro y ejecución extrajudicial de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta fue obra de un comando de operaciones especiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, denominado Grupo Colina. El documento consignaba nombres y cargos de los oficiales implicados y detalles sobre el asesinato de los detenidos en un descampado de la zona denominada Huachipa. Horas después, la anónima entidad denunciante también entregó copia del documento a la prensa.

Desde el instante del anuncio, el impacto de la denuncia se dejó sentir, y aunque el Gobierno y sus congresistas intentaron contener el vendaval, en los quince días siguientes el tema acusó el efecto bola de nieve.

El 17 de abril, el Consejo Supremo de Justicia Militar se vio en la obligación de abrir instrucción contra «los efectivos militares que resultaren responsables». En realidad, era una maniobra para evitar que el tema sea investigado en el fuero civil.

Sin embargo, el impulso político de una denuncia de ese calibre empezó a generar un clima pesado para el Gobierno, y en especial para los militares, hasta llegar a un episodio de confrontación protagonizado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército, general Nicolás Hermoza Ríos.

El oficial fue invitado al Congreso en su condición de máximo jefe militar, pero en lugar de informar sobre los graves hechos denunciados, optó por la prepotencia, negó toda participación militar en los sucesos denunciados, acusó a los parlamentarios opositores de usar documentos «fraguados y apócrifos» y, al final de una sesión concluida a los gritos, hizo, ante la prensa, un reclamo a viva voz por lo que consideraba «una campaña de desprestigio y agravio contra el Ejército» y cerró sus declaraciones con el exceso de una frase en primera persona: «Esa campaña no la voy a tolerar».

El descomedido guion contenía más escenas. Al día siguiente, 22 de abril, una caravana de tanques y vehículos blindados cruzó la ciudad hasta llegar a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la céntrica avenida Arequipa. En ese paseo de entorchados a contramano de la historia, no fue nada fortuito que, en lo alto de uno de los tanques, marchase con rostro desafiante el

general Luis Pérez Documet, jefe de la División de Fuerzas Especiales y acusado de haber comandado el operativo de la matanza de La Cantuta.

Hubo más. Al otro día, 23 de abril, para azuzar más los rumores de golpe de Estado, los tanques volvieron a cruzar la ciudad rumbo al Fuerte Rímac. Al mediodía se realizó «una ceremonia de adhesión al comandante general del Ejército» con la asistencia de toda la plana militar dando su «total respaldo a su Comandante General» y dejando constancia de que no iban a admitir «se lesione la imagen de nuestro instituto».

El 24 de abril, el presidente Fujimori se vio obligado a dar un mensaje a la Nación. Señaló que las discrepancias entre el poder político y el poder militar habían sido superadas, respaldó al Congreso Constituyente, pero ni sancionó ni retiró de funciones al jefe militar ni a ninguno de los protagonistas de los dos paseos de tanques.

«Esa vez no hubo intento de golpe ni desafío a Fujimori como muchos dijeron –cuenta El General mientras mira los cubos de hielo desgastándose entre el vodka–. Los tanques en las calles, la ceremonia de respaldo y el comunicado que se leyó, tuvieron dos finalidades: primero, tratar de frenar a la oposición sugiriéndoles que podían tomarse medidas radicales; y segundo, y muy importante, fue la manera de decirle a los militares que, ante la denuncia aparecida, sus jefes estaban a la cabeza de todo y que había respaldo político. No hay que olvidar que el comunicado que leyeron terminaba reconociendo la subordinación ante el Presidente de la República. Todo eso fue coordinado con Fujimori, quien, además, ese día, si mal no recuerdo, se fue al interior. Por eso no hubo ninguna sanción contra Hermoza, que además se quedó los años siguientes en el cargo. Les preocupaba que al interior del Ejército pudiesen salir otros militares, aparte de los de León Dormido, haciendo denuncias. Todo lo que se hizo en esos días fue para advertir a los políticos y a algún rebelde militar y para calmar y dar confianza interna y evitar cualquier desbande entre los subordinados».⁶⁶

En el afán por desmentir la denuncia, terminaron dejando huellas. Primero, desde el gobierno usaron a la Policía para la emisión de un informe en el cual una supuesta pericia descalificaba como apócrifos los documentos presentados en la acusación. Luego, se informó que el día de la matanza no hubo ningún movimiento autorizado de efectivos militares en la Universidad La Cantuta y, por consiguiente, ningún miembro del Ejército podía haber participado en el evento denunciado.

Sin embargo, meses después, ante la evidencia sin vuelta de los cadáveres hallados en fosas clandestinas, el Ejército admitió que hubo personal militar

destinado a un operativo en La Cantuta la noche del 18 de julio de 1992 y procedió a enjuiciar a los integrantes del Grupo Colina –todos militares en actividad bajo la orden jerárquica de Hermoza Ríos–. Luego el gobierno solicitó al Congreso una ley de amnistía no solo a favor de los subordinados, sino, y el dato no es menor, a favor de los jefes militares y miembros del Servicio de Inteligencia.

Era un amplio paraguas para incluir a la jerarquía gubernamental, y Martin Rivas lo destaca: «¿Usted cree que por ayudar a un mayor, un comandante general del Ejército iba a poner en riesgo su cargo? ¿Usted cree que por mí o por el Grupo Colina iba a generarse un conflicto político que trajo consigo la intervención del gobierno americano?⁶² Con esos dos paseos de tanques y esa ceremonia de respaldo se estaban protegiendo. Tenían temor de que el asunto se complique».

A PESAR DE LAS BRAVATAS MILITARES y a pesar del mensaje a la Nación del Presidente buscando aquietar las aguas, la crisis no amainó. Aunque al principio el vendaval fue contenido con el recurso válido de cuestionar una denuncia por su condición anónima, el 5 de mayo de ese año 93, la acusación pasó a tener la explícita autoría de un alto jefe militar que asumió como propia la denuncia y proporcionó nombres y detalles específicos.

Ese día, el general Rodolfo Robles Espinoza convocó a una conferencia de prensa e hizo pública, no en persona, sino a través de su esposa, una carta confirmando, precisando y, en algún sentido, ampliando la denuncia entregada al congresista Pease bajo el ignoto membrete de León Dormido.

En su carta, Robles precisó que el secuestro, desaparición y asesinato del profesor y los nueve estudiantes de La Cantuta estuvo a cargo de un escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina, que actuó no por iniciativa propia sino de acuerdo con órdenes jerárquicas y planes operativos previamente diseñados y autorizados desde la más alta instancia. Señaló al mayor Santiago Enrique Martin Rivas como el jefe operativo, al mayor Carlos Pichilingue Guevara como jefe administrativo y dio detalles sobre el apoyo logístico y económico con que actuaban.

Cuando la carta era leída por su esposa, el general Robles iba en camino a la ciudad de Buenos Aires, donde buscó refugio por considerar que podía ser víctima de un atentado mortal.

Desde ese momento, el general Robles fue considerado ante la opinión pública como un hombre de enorme compromiso democrático. Si bien su denuncia puso al descubierto la creación de un escuadrón de la muerte en el

gobierno de Fujimori, también es preciso decir que su actuación no tuvo necesariamente un origen ético ni constituyó un acto de convicción moral.

Robles Espinoza era el número tres en la jerarquía militar y al no ser promovido al comando de la Segunda Región Militar y más bien destinado al exilio dorado como representante ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, decidió patear el tablero a pesar de que el 21 de abril, apenas catorce días antes de su denuncia, participó en la valentona de los tanques en las calles y apareció como el tercer firmante en el comunicado del Ejército protestando por las investigaciones que el Congreso iniciaba sobre el caso La Cantuta. Además, Robles sabía de las acciones de los equipos operativos clandestinos desde junio de 1991, pues estuvo en aquella Mesa Redonda que definió la estrategia de guerra sucia, seguida desde ese año, con la aprobación de todos los mandos militares, incluido su voto. En suma, la certeza de su denuncia no se discute, pero el ropaje democrático con el que se vistió requiere la precisión efectuada.

Como suele acontecer, el Gobierno trató de diluir la gravedad de la situación recurriendo a maniobras, discusiones políticas y argumentos diversos que condujeron al amparo de una justificación: no existen evidencias concretas. Es decir, el recurso cínico de sostener que no hay crimen porque no aparece el cuerpo del delito. Pero en la mañana del jueves 8 de julio de 1993, ocurrió un hecho determinante.

Ese día, una investigación llevada a cabo por periodistas del semanario *Sí* culminó con el descubrimiento de las fosas en las que se encontraban los cadáveres del profesor y los nueve alumnos secuestrados y asesinados.

En la quebrada de El Escalón, pasando un botadero de basura, en el kilómetro 14 del serpentín de Cieneguilla, en las afueras de Lima, se encontraron los restos calcinados y enterrados en cajas de cartón. Las investigaciones subsiguientes determinaron que las diez víctimas –sobre las que recaen acusaciones de haber sido integrantes de Sendero Luminoso⁶⁸ fueron muertas por disparos en la cabeza y en la nuca y enterradas en fosas cavadas en el campo de tiro militar ubicado en el km 1,5 de la autopista Ramiro Prialé, en la localidad de Huachipa. Luego, la mayoría de los cadáveres fueron trasladados a Cieneguilla, lugar en el cual la investigación periodística, siguiendo un plano proporcionado por una fuente militar, determinó el punto exacto de las sepulturas.

Al ser exhumados, los cadáveres estaban irreconocibles por el tiempo transcurrido, por la acción corrosiva de la cal con que los cuerpos fueron cubiertos y por la incineración parcial con kerosén a la que fueron sometidos

para evitar su identificación. Sin embargo, junto a dos de los restos ya descompuestos se encontraron dos llaveros y al realizarse la diligencia judicial de verificación, las llaves abrieron la puerta de ingreso al domicilio de Armando Amaro Córdor y la cerradura del armario de Juan Mariños Figueroa. Las dos evidencias no admitieron discusión sobre la identidad de los asesinados. Así se confirmó la inicial denuncia anónima de León Dormido y luego la explícita del general Rodolfo Robles Espinoza. El Grupo Colina existía y el gobierno sabía y ordenaba sus acciones.

Aunque Martin Rivas no admite la existencia del Grupo Colina como tal, tiene una versión sobre los motivos del traslado de los cuerpos.

«¿Sabe por qué se hizo el traslado? Porque esa noche los soldados cavaron las fosas a la rápida, antes de que amanezca y la gente empiece a circular, y por eso no eran profundas y había el riesgo de que los perros escarben y dejen los cuerpos al descubierto. Pero, además, trasladaron los cadáveres porque nada garantizaba que los soldados que participaron se quedaran callados. ¿Cómo vas a hacer un operativo supuestamente clandestino con soldados que ni siquiera conoces cómo van a reaccionar? Fue un disparate. Y después fue peor: para tratar que no se filtre el asunto se llevaron los cuerpos a Cieneguilla. No sé con quiénes y cómo lo habrá hecho la gente de la DIFE, pero encima los enterraron con sus llaves en el bolsillo».

El escándalo político se hizo más intenso y aunque el Gobierno, en ese momento, gozaba de amplia aprobación ciudadana por la reciente captura de Abimael Guzmán y el cese de los atentados terroristas, Fujimori, Montesinos y Hermoza sabían el riesgo que empezaban a correr. De modo que utilizaron el oxígeno de esos días para trazar un camino de salida. La fórmula la armó Montesinos y, como la mayoría de las propuestas que haría en el futuro, esta pasaba por el camino judicial. Más que abogado, era un porfiado leguleyo convencido hasta la testarudez de que la formalidad judicial era una excusa suficiente y un escudo capaz de proveer seguridad. En alguna medida, no le faltaba razón en un país en el cual toda tropelía puede revestirse con un fallo judicial. Su idea fue concreta: como los nombres de algunos integrantes del Grupo Colina ya eran de dominio público y la prensa empezaba a indagar por ellos, había que inculparlos para dejar a salvo a los jefes. Si se procesaba y condenaba a un grupo de subalternos, se lograría contener la tormenta política y se conseguiría alejar a los mandamases de la zona de riesgo.

Para llevar a cabo el esquema era preciso convencer a los acusados. Fue el general Hermoza quien se encargó de negociar con ellos hasta persuadirlos. Logrado el acuerdo lo mantuvieron en silencio esperando el momento de usarlo.

Cuando la presión política, la tenacidad de la prensa opositora y las consultas del gobierno norteamericano ya no dejaron espacio para más dilaciones, el 26 de noviembre de 1993, Alberto Fujimori, en una entrevista concedida al diario *The New York Times*, anunció la detención del mayor Santiago Enrique Martín Rivas.

«A partir de ese hecho –afirma El General–, se consolidó lo que algunos llamaron el triunvirato. Fujimori, Montesinos y Hermoza empezaron a gobernar mucho más juntos. Eran conscientes de que tenían que ir de la mano y necesitaban copar las Fuerzas Armadas de leales». Esa trenza se empezó a armar y todos los ascensos se decidieron en base a la lealtad sin importar el orden de méritos.

Una muestra del pacto subrepticio que los llevó a estar juntos hasta 1998, ocurrió apenas unos días después de aquel anuncio de Fujimori. El 9 de diciembre, en la celebración por el día del Ejército, Hermoza dio un discurso elogiando a Fujimori y este hizo lo mismo dándole amplio respaldo y calificándolo como «un general victorioso». La frase dio lugar a inevitables críticas pero fue usada porque, afirma El General, «fue un modo de decirle a los jefes militares leales que podían estar tranquilos y a los subalternos que se mantenía el apoyo político porque habían sido victoriosos en la lucha contra el terrorismo. Les gustaba utilizar un lenguaje basado en mensajes y eso nunca lo supieron descifrar los políticos ni los analistas porque nunca antes en el país se usaron tanto los conceptos de inteligencia».

A los miembros del escuadrón Colina se les planteó someterse a un proceso del que saldrían libres por falta de pruebas. Por esa actitud, se les dijo, serían recompensados con beneficios a futuro y con la continuidad de sus carreras. Sin embargo, las promesas y los plazos nunca se cumplieron. Fueron variando con el correr de los días hasta llegar a situaciones de conflicto, cuyos ribetes conoce en detalle uno de los partícipes de aquella negociación.

«A nosotros nos convenció el general Hermoza –recuerda Santiago Martín Rivas–. Era nuestro Comandante General, con él habíamos trabajado directamente. En mi caso yo tenía acceso directo a los más altos jefes por la confianza que él me tenía. Además, existe algo que no pueden entender los que no son militares. Nosotros nos manejamos con códigos de lealtad, de disciplina, de respeto al superior y también con criterios de honor. Yo, al menos, me considero así. Soy militar y nunca voy a dejar de serlo.

»Entonces, cuando el problema político siguió creciendo, apenas empezó noviembre, Fujimori le pidió a Hermoza una salida y nombres para hacer frente a las presiones. Él le dijo: “Son mis soldados, déjeme hablar con ellos”. Y, efectivamente, me reuní con Hermoza. Me pidió que como jefe diera el ejemplo

asumiendo responsabilidad, además mi nombre ya se manejaba en la prensa, y me prometió que me iban a encontrar una salida. Me dijo que si no salvábamos al Gobierno tampoco me iba a salvar yo, ni nadie, y la institución iba a ser muy golpeada porque las presiones políticas eran muy fuertes. Yo estuve dispuesto al sacrificio. Ir a prisión era para mí un galardón porque demostraba que los guerreros, los que luchamos contra el terrorismo hicimos los sacrificios necesarios por nuestro Ejército.

»Por eso, Fujimori soltó mi nombre a la prensa. Eso fue a fines de noviembre, pero el acuerdo lo habíamos tomado el 4 de noviembre, el día de mi cumpleaños. En verdad, no me detuvieron. Ese día me fui por mis propios medios a Pisco, al Depósito de Municiones. Era un lugar tranquilo, al cual me pidieron ir porque en ese lugar era imposible que la prensa me ubique, que era lo que más les preocupaba. En las semanas siguientes, como el tema seguía creciendo, los políticos presionaban, la prensa presionaba, todo el mundo jodía, Montesinos hizo un planteamiento concreto que Hermoza me comunicó. Un grupo de oficiales debía ser sometido a proceso para apagar el tema porque el año siguiente ya estaba a la vuelta, y ese 94 era año electoral y necesitaban conseguir la reelección. Era el futuro del Gobierno y también nuestro futuro. Su fórmula era concreta: “Van presos y son procesados pero sin aceptar los hechos. Todo el proceso se va a basar en indicios porque no hay pruebas. Y se les va a tener que absolver”. Aceptamos».

Si bien aquellos criterios, propios de la mentalidad militar, fueron determinantes en la decisión de aceptar ser recluidos y procesados para ocultar la responsabilidad directa de sus jefes, tampoco se debe perder de vista que, en la aceptación para ser sometidos a juicio y guardar silencio, influyeron ventajas adicionales.

Les convenía la reelección de Fujimori, así su carrera podía seguir, y, sin duda, salvar a la cúpula de gobierno significaba tener réditos a futuro. Hubo también una cuota de vanidad: al interior del Ejército tenían fama de «guerreros» y habían ganado respeto por sus combates contra Sendero Luminoso; el sacrificio de ir a prisión suponía cimentar ese perfil, añadir un logro más: el sacrificio de ir a prisión para salvar la imagen de su institución, ellos, los triunfadores de la guerra contra el terrorismo. Así lo veían. Posteriormente, ya en prisión y cuando el tiempo avanzó sin traer una solución, jugó un papel importante la recompensa económica. Al ser detenido en el verano de 2002, el agente Julio Chuqui Aguirre, reveló: «[durante la detención] recibíamos mil soles mensuales, al margen de nuestro sueldo, y al salir nos dieron cincuenta mil dólares».⁶⁹

Lo que no sabían es que Vladimiro Montesinos no estaba dispuesto a confiar en ellos y menos a sostener un acuerdo a futuro. Su promesa de ayuda era, en realidad, el primer escalón de un cadalso que les había empezado a montar. En el delito los cómplices son siempre una carga insegura. Lo sabía largamente Montesinos. Lo aprendieron y lo supieron compartir Fujimori y Hermoza Ríos.

LOS MALOS RECUERDOS se rememoran con un inevitable gesto de malestar en el rostro, y Martín Rivas, ceñudo y agrio, luego de tragar un sorbo de Coca-Cola, se arregla la manta que lo abriga y sigue hablando.

«No nos dimos cuenta que todo era una maniobra de Montesinos, por supuesto avalada por Fujimori y Hermoza. Si nosotros hablábamos, ellos caían. Cada paso lo dieron juntos. Pero la supieron hacer porque después de que aceptamos ir a prisión, Montesinos dijo: “Necesitamos a un general; nadie va a creer que un mayor hizo todo por su cuenta”. Ese general debía ser Pérez Documet, él había comandado todo el operativo de La Cantuta. Pero no fue así, eligieron al general Juan Rivero Lazo.

»Montesinos es perverso y muy hábil para la intriga. Encontró la manera de sacar de en medio a un rival directo. Rivero Lazo no solo era el jefe de la inteligencia militar, sino, por capacidades, estaba en línea de carrera para ser comandante general y era un hombre al cual Montesinos no podía manejar como después manejó a todo el Ejército. Necesitaba sacárselo de en medio y encontró la ocasión. Con el tiempo entendí todo lo que consiguió con esa movida. Es muy hábil. Fíjese. Primero, yo era un tipo incómodo, reclamón, y él no confiaba para nada en mí, entonces al involucrar al general Rivero me ponen en la línea de mando a un superior y evitan seguir negociando conmigo; con Rivero preso, por jerarquía se convirtió en el interlocutor, además sabían del respeto y el aprecio que yo le tenía a mi general. Él me contó que Montesinos le dijo: “Contigo no habrá lugar para las malacrianzas de Martín”. Segundo, era un excelente chivo expiatorio, mejor que yo. Si no aparecía un general al mando, entonces involucraban a Hermoza Ríos o a Pérez Documet. Meter a Rivero evitaba eso. Tercero, lograban sacar de juego al relevo de Hermoza Ríos en la Comandancia General, este podía respirar tranquilo porque se iba su futuro sucesor natural. ¿Cómo íbamos a imaginar que por primera vez en toda la historia habría un solo comandante general durante casi ocho años?».

En la memoria del mayor Pichilingue se encuentran más detalles sobre esta historia. Y aunque participa en silencio de la charla, se anima a precisar.

«Al general Rivero Lazo lo detienen el 20 de diciembre del 93 por la

mañana. En la tarde recibo una llamada y me ordenan presentarme ante el general Oliveros, jefe del SIE. Al llegar me informa que yo y otros agentes nos tenemos que sumar a la prisión del mayor Martín, en Pisco. Entonces, pregunté por el general Rivero que era nuestro jefe y me dicen que está detenido y que se encuentra en el comando administrativo donde le han acondicionado un cuarto. Pedí hablar con él, quería saber qué pasaba, porque, en principio, se había acordado que solo Martín iba a ser el detenido. Rivero me dijo: “Hay una variación, hablé con Hermoza y Montesinos, y tenemos que aceptar porque esto va a durar pocas semanas, está todo diseñado para que se haga un juicio y saldremos absueltos; el juicio es necesario por política, pero saldremos absueltos”. ¿Qué me quedaba? Me dijeron que debía ir a Pisco con el grupo de agentes y junto al coronel Federico Navarro, que iba como el más antiguo. Al día siguiente, nos reunimos en la Comandancia General y nos adelantaron mil soles del sueldo de diciembre por orden del general Enrique Oliveros Pérez. Llegamos al Depósito de Municiones de Pisco el 21 de diciembre».²⁰

¿Por qué razón el general Juan Rivero Lazo aceptó ir a prisión y someterse a un juzgamiento si quien debía ocupar ese lugar era un responsable directo como el general Luis Pérez Documet?

En la respuesta se encuentra el talento perverso de Montesinos para utilizar con eficacia la ambición del propio contendor. Sabía, con precisión de artesano, que el intercambio de gratitudes es enclenque y se quiebra ante la primera dificultad, pero en cambio es sólido y atractivo ofertar un interés mutuo que convenga a las partes en cuestión. Diversas fuentes militares coinciden en relatar una misma versión. Montesinos y Hermoza Ríos se reunieron con Rivero Lazo para hacerle un planteamiento con un tentador señuelo: «Por línea de carrera usted es el próximo comandante general –le dijeron– y como hemos luchado juntos contra el terrorismo y compartimos más de un secreto, a nosotros nos interesa que usted llegue al cargo. Afrontamos un problema –añadieron–: si bien usted ya tiene un prestigio ganado, estas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos lo afectan por ser jefe de la inteligencia militar y, a la hora de su nombramiento, podemos afrontar un serio problema político. El modo de allanar el camino es tener listo un argumento, es decir, usted se somete a un proceso judicial en el fuero militar, sale absuelto, y con ese argumento evitamos un cuestionamiento futuro. A la vez –finalizaron– usted gana una enorme credencial ante los militares por poner el pecho precisamente cuando el Ejército era duramente cuestionado».

La propuesta tuvo el encanto de un vaticinio de taumaturgo y sus autores le añadieron una contundente muestra de «buena voluntad»: a la promoción del

general Rivero Lazo le tocaba ascender, pero este, si estaba procesado, no podía avanzar de general de brigada a general de división. Entonces, paralizaron los ascensos para evitar que existan oficiales de su rango con más antigüedad que él. Significaba decirle: «Ya ves, estamos cuidando tu ruta a la Comandancia General». Rivero apostó y jugó sus fichas a la propuesta. Por su ascendiente, consiguió que los integrantes del Grupo Colina acepten ser procesados junto a él. Su presencia era una garantía para sus subalternos y su condición de interlocutor con el alto mando estaba asegurada también por la jerarquía de su cargo. Eso fue lo que creyeron.

EL DEPÓSITO DE MINUCIONES DEL EJÉRCITO está ubicado a media hora en auto desde la cercana ciudad de Pisco, y a 300 kilómetros de la ciudad de Lima. Es una zona desértica a la altura en que se inicia la Vía de los Libertadores, la carretera que se adentra hacia la sierra rumbo a Huancavelica y Ayacucho. La instalación militar se asienta lejos de la vía, sobre un inmenso terreno, por el riesgo de alguna explosión del material bélico que guardan sus almacenes. Todo ingreso y salida están sometidos a férrea vigilancia. Tras sobrepasar dos controles con vigías armados, hay un campo minado y, después, al fondo, se levantan las instalaciones para el personal. Un cerco de malla con sensores electromagnéticos impide la presencia de extraños y quienes se alojan allí tienen cómodas habitaciones, una piscina, espacios abiertos para hacer deporte y una antena parabólica para ver televisión. «Allí nadie nos iba a encontrar, ningún periodista podía llegar –dice Martín Rivas–. Querían tenernos tranquilos porque hasta un buen cocinero nos pusieron y algunas veces podíamos salir a pasear hasta Paracas».

El control del Consejo Supremo de Justicia Militar ya lo tenía Vladimiro Montesinos; y, en el caldeado enero de 1994, los confinados recibían la visita de un juez militar portando recursos aprobados en el escritorio de Montesinos para que sean aceptados y firmados por ellos. Sin embargo, esas reuniones solían terminar en irreconciliables discusiones por las objeciones puestas con empeño de letrado por Martín Rivas, alentado por su aprendizaje empírico de leyes que lo llevó a convertirse en su propio abogado y en el de sus compañeros. Ese hecho, sumado a la circunstancia de que tras seis semanas de detención sin atisbos del proceso breve y absolutorio que les fue prometido, generó un serio conflicto en los primeros días de febrero.

El mayor Carlos Pichilingue recuerda que «una mañana llegó un helicóptero. Era un MI-17 de la aviación del Ejército. Bajó un grupo de comandos que rodearon la instalación donde nos encontrábamos. Luego ingresó el coronel Bellina para dialogar con el coronel Federico Navarro, a fin de que

todos los detenidos seamos trasladados a la capital. Se armó una discusión en la que intervino el mayor Martin y, en medio de ella, los comandos tiraron al piso al agente Sosa Saavedra para esposarlo, este se resistió y los agentes detenidos, que aún poseían sus armas de dotación, las rastrillaron poniéndose en posición de combate. Ante esta situación, el coronel Bellina pidió el apoyo del jefe de unidad quien se la negó. Ante ello, acusó de insubordinación al jefe del cuartel y tuvo que retirarse al poblado para comunicarse con el general Hermoza a fin de saber cuál sería la salida. Después de varias horas de diálogo se acordó nuestro traslado en helicóptero hasta el cuartel general del Ejército».

A su vez, Martin Rivas, con una convicción que aflora de la confianza en su memorioso archivo mental, completa la remembranza. «A mí me tuvo que calmar el general Hermoza. Me dijo tranquilo, se vienen a Lima y hablamos. Llegamos al Pentagonito y estaba lleno de comandos, había un gran despliegue como si nos fuéramos a escapar. Eramos los agentes Suppo, Sosa, Chuqui y Carbajal más el coronel Navarro, yo y el mayor Pichilingue. El acuerdo fue que el proceso prometido debía hacerse de una vez y por eso nos llevaron al Cuartel Bolívar en Pueblo Libre. Nos trasladaron con escolta y con un gran alboroto. Esa noche llegó a mi celda el coronel Enrique Oliveros Pérez, jefe del SIE, que reportaba directamente a Montesinos y había sido nombrado por él, y se me tiró en contra. Escogió el peor momento. Fue una discusión muy fuerte. Me increpó no hacer caso y rebelarme, y lo boté de mi celda y le dije a los gritos: “Voy a nombrar mi abogado y empiecen a preparar los cuartos para Fujimori, Hermoza y Montesinos y lárguese”. Al día siguiente, como a las dos de la mañana, volvió Oliveros. Habló con el general Rivero para que interceda y calme las aguas. Cuando el general me llamó, le dije que nos estaban engañando y le sugerí que hablásemos directamente con Fujimori, Montesinos y Hermoza. Y así fue.

»Mi planteamiento fue: dennos un buen abogado y vamos al fuero civil porque nadie va a creer en una absolucón lograda en un tribunal militar; no hay pruebas, no nos van a poder condenar. Incluso se llegaron a barajar los nombres de posibles abogados. Esa noche, Montesinos se mantuvo todo el tiempo en silencio. Quedaron en darnos una respuesta. Fue negativa. Después supimos que Montesinos se opuso porque temía que pudiésemos cambiar de opinión y acusarlos. Según él, en el fuero militar nos tenían bajo total control, pero en el fuero civil había el riesgo de que actuáramos de otro modo. A los pocos días nos confirmaron que íbamos al fuero castrense. La opción del fuero civil fue desechada. Pusieron dos anillos de seguridad y se restringieron las visitas».

El 19 de febrero de 1994 se dio inicio al proceso. Fue un proceso a puertas cerradas y con una duración inaudita: apenas tres días. En verdad, fue una

pantomima. Los detalles están en el testimonio entregado por escrito por el mayor Carlos Pichilingue.

Nos dijeron que el Presidente de la República y todo el alto mando militar nos pedían participar en una nueva operación de inteligencia para beneficio de la Nación. Ese plan de operación de inteligencia consistía en efectuar el proceso en el fuero militar y así calmar las presiones políticas. Se enfatizó que el Presidente, en una situación de guerra interna que aún no terminaba, nos pedía que aceptemos el juicio, que nada negativo sucedería.

Se nos dijo que el jefe del SIE, el coronel Oliveros Pérez, por orden del Ing. Alberto Fujimori, Presidente de la República, del Dr. Vladimiro Montesinos Torres, asesor de Inteligencia, y del general Nicolás Hermoza Ríos, comandante general del Ejército, sería el interlocutor válido desde el inicio del proceso hasta la solución del problema.

Se suponía que era una operación de inteligencia, tras la cual volveríamos nuevamente a nuestras labores. En las historias de los espías o agentes de inteligencia de la CIA, la KGB, el M16 británico e inclusive el MOSSAD israelí, los agentes han llegado algunas veces a estos extremos, por lo tanto, no era algo fuera de lo común lo que se nos estaba pidiendo. Era aceptar la realización del juicio y no revelar planes de seguridad de la Nación.

El día del inicio del juicio muy temprano llegaron dos señores, tocaron la puerta de la celda. El soldado que hacía de carcelero estaba acompañado de dos señores de terno y maletín. Eran los abogados. Uno de ellos se haría cargo de la defensa del mayor Martin y el otro de mi defensa. La entrevista duró aproximadamente treinta minutos. El abogado nombrado por el Consejo Supremo de Justicia Militar era un oficial retirado de aproximadamente 55 años, quien me mostró su carnet de abogado. Me comunicó que había sido enviado para hacerse cargo de mi defensa. No sabía nada esencial del caso. Solamente me alcanzó un documento escrito desde el SIN para que yo firmara. Era mi alegato de defensa. Lo leí y lo rechacé. Solo firmé la aceptación como abogado de oficio. Al mediodía nuevamente lo vería en la sala donde se realizó el juicio oral. Al final de mi intervención balbuceó algunas palabras para agradecer al tribunal por haberlo considerado como abogado defensor y luego de esta participación teatral nunca más lo volví a ver. Por supuesto, estos señores nunca esgrimieron una frase de defensa en el juicio. Ni siquiera estoy seguro si sabían quiénes éramos y de qué acusación se trataba. Los oficiales nos presentamos uniformados. Hasta este requerimiento había sido negado por Montesinos en una primera instancia, pero tuvo que ceder.

El primero en ingresar a la sala fue el general Juan Rivero Lazo, luego el coronel Federico Navarro Pérez y el coronel Manuel Guzmán Gallardo. Con ellos el jurado se demoró entre quince y diez minutos. En ese juicio –operativo de inteligencia– solamente el fiscal fue el que hizo más preguntas con respecto al caso La Cantuta. Luego, no se preguntó nada más. Al no haberse actuado pruebas, supusimos que seríamos declarados inocentes.

En la tarde de ese día, fuimos llamados los dos mayores. Con nosotros se quedaron más tiempo. En el caso del mayor Martín Rivas las preguntas duraron más de dos horas, en las cuales los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM)

–compuesto por los generales Luis Chacón Tejada del Ejército, Oscar Granthon Stagnaro de la Fuerza Aérea y el contralmirante Eduardo Reátegui Guzmán de la Marina, así como el fiscal militar coronel Raúl Talledo Valdivieso– decidieron preguntarle específicamente sobre temas relacionados al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, así como nuestra opinión relacionada a los actos sucedidos en La Cantuta. Para ello, se valieron de la investigación que había realizado el fiscal civil Víctor Cubas Villanueva. Similar procedimiento usaron conmigo. No se analizaron ni confrontaron pruebas. Pensé, como todos, que seríamos absueltos conforme a lo acordado.

Todo el «proceso» de un caso tan grave y complejo, duró 72 horas. Entre el viernes 19 y el lunes 21 de febrero. El día anterior a que se emita la sentencia, un agente que laboraba en el CSJM nos hizo llegar a los dos oficiales una nota indicándonos que los vocales habían recibido de Montesinos una sentencia en la cual los dos seríamos condenados a veinte años de prisión, los agentes a quince años, el general Rivero a cinco años y el coronel Navarro a cuatro.²¹ Ante esta noticia, donde nuevamente se trasgredía un acuerdo, decidimos llamar al coronel Oliveros. La explicación que dio fue que se trataba de una primera instancia y que luego de escuchar el veredicto, al no haber pruebas, pidiéramos la apelación respectiva. Era necesario proceder así, nos dijo, para que todo sea creíble para la oposición, la prensa y la opinión pública, pero que no afectaba en absoluto la posición de que se respetaría la decisión de sacarnos libres.

Terminada la lectura de la sentencia confirmando lo que ya conocíamos, solicitamos la apelación. Volvimos al cuartel Bolívar, doblaron la vigilancia y nos aislaron.

En la sentencia de aquel proceso fraguado, existe un rastro de evidencia sobre la participación directa de Vladimiro Montesinos.

Un párrafo del documento judicial está redactado con la manifiesta intención de poner a resguardo tanto al jefe de facto de los Servicios de

Inteligencia como al general Hermoza Ríos. Dice: «De las diferentes pruebas obrantes en autos se determina meridianamente que el Comando del Ejército, representado por su Comandante General y el personal del Servicio de Inteligencia Nacional no ordenaron ni intervinieron en la planificación, elaboración y puesta en ejecución de plan alguno para incursionar en la Universidad La Cantuta». En otro pasaje se añade: «No se ha probado que la incursión del personal militar a la Universidad La Cantuta, la que originó el secuestro y la posterior muerte de los universitarios, haya provenido de orden verbal o escrita de autoridad alguna del Ejército Peruano».²

¿Por qué se consignaron esas expresas menciones exculpatorias sobre personajes que, en ese proceso, no habían sido ni acusados ni investigados? La inaudita absolución de personajes no procesados obedeció al intento de generar una protección judicial anticipada ante la eventualidad de acusaciones que podrían surgir más adelante, como en efecto ocurrió. La caligrafía de los culpables siempre termina por dejar una fatal evidencia.

EL 23 DE FEBRERO, los militares procesados amanecieron en sus habitaciones del Cuartel Bolívar convertidos en flamantes sentenciados. La promesa del juicio concebido como «una operación de inteligencia», tras la cual todo volvería a la normalidad, no aconteció para nada, y más bien volvieron del tribunal con una ruma de años a purgar en la prisión militar.

En el fondo, la maniobra del Gobierno sirvió apenas para ganar tiempo en su afán por afrontar la campaña electoral aplacando los vientos de una acusación tan grave. Lo concreto es que ambos bandos tenían la certeza de que estaban enfrentados a un inminente conflicto interno capaz de desembocar en un desbarajuste de grandes proporciones.

«Estando presos en el cuartel Bolívar –ha dicho Martin Rivas–, sabíamos que la apelación no iba a resolver nada. De veinte años de prisión lo más que íbamos a conseguir era una rebaja de la pena. ¿A cuánto? ¿Quince años? ¿Doce años?. Ellos también eran conscientes de eso y antes que se arme el lío trajeron una nueva propuesta. El general Oliveros vino a decirnos que la sentencia solucionaba las presiones políticas y permitía encarar el proceso electoral con tranquilidad. Sobre esa base, nos plantearon esperar hasta el final de las elecciones, y con el triunfo de Fujimori nos daban una ley de amnistía. Mientras tanto, nos flexibilizaban el encierro y podíamos recibir visitas, tener acceso a televisión y diarios, libertad de movimiento dentro del cuartel y usar las instalaciones deportivas.

»Nuestra interpretación fue: nos engañaron con el proceso porque

necesitaban una salida política, pero con una ley de amnistía se resuelve todo. Era una buena alternativa. Ya había sido usada en otros países. Aceptamos. Además, no veíamos otra opción. Así se fue todo el año 94. A inicios del 95 se dio el conflicto con el Ecuador y cuando las cosas se empezaron a complicar, porque ese fue un conflicto inventado para ganar las elecciones, se barajó la posibilidad desde el alto mando de que participáramos».

«En la ley militar –interviene Pichilingue– a los procesados o sentenciados se les puede suspender la pena para prestar servicios por requerimiento temporal de la institución. La idea era formar un equipo especial de infiltración en territorio ecuatoriano. Ingresábamos como partisanos para armar una ola de sabotajes: volar torres de alta tensión, puentes en carreteras claves, centros de abastecimiento. Los ecuatorianos se iban a encontrar frente a un accionar de terrorismo y ese iba a ser el argumento para forzar un final al conflicto».

«Si alguien tiene alguna duda sobre este tema –retoma la palabra Martín– le digo simplemente algo: el problema de una guerra inventada es ver cómo terminarla. Más aún, cuando la respuesta ecuatoriana fue mejor de lo que se pensaba, y esa guerra no se podía perder porque se perdía la reelección. Por eso se pensó en un plan de acciones de sabotaje. Pero, nuevamente, Montesinos se opuso a cualquier participación nuestra. Sobre mí tenía una enorme desconfianza. A esas alturas nos llevábamos muy mal.

»Mi error, desde el principio, fue no darle el respeto que él exigía cuando recién empezaba a tener poder. En las reuniones con él siempre me comporté muy pedante. Y eso le molestaba. Arrebatos de joven, pero qué le voy a hacer, así fue y no se llora sobre la leche derramada.

»Era hábil Montesinos porque esa vez él planteó la salida. ¿Se acuerda cómo terminó ese conflicto? ¿Recuerda las críticas cuando se supo que nunca se tomó Tiwinza en el Ecuador? Bueno, pues, Fujimori anunció el cese unilateral del fuego. Era decir: “No estamos aceptando ninguna derrota pero queremos que esto acabe”. Tuvo su ingenio la salida».

LA PROMESA DE LA AMNISTÍA tuvo plazo: junio de 1995. Era una fecha elegida sin el auxilio del azar, más bien seleccionada con el embrujo de una aparente coherencia. Al momento de convencerlos para una larga espera, usaron un argumento de persuasión: debía ser en junio, un mes antes de que Fujimori asuma su segundo mandato. De ese modo el Congreso saliente, ya sin crédito, se tiznaba con el tema sin afectar a los parlamentarios recién electos.

Sin embargo, en el tendal de engaños disfrazados de promesas, asomó una pieza más. En los primeros días de junio, el general Percy Corrales apareció con

la novedad de que debía postergarse la salida acordada. Martín Rivas reaccionó de manera airada.

«Nos dijo que un presidente recién electo podía verse afectado por una ley de ese tipo, que era mejor esperar a final de año. Allí me cerré y se armó el lío. Si bien desde el punto de vista político podían tener razón, a ese paso siempre tendrían una excusa para evitar cumplir el pacto y mientras tanto nosotros seguíamos presos. Empezaron las presiones. Le pidieron al general Rivero Lazo que me convenciera. Me negué. Mi argumento era: ¿quién garantiza que en diciembre dan la ley de amnistía? Al fin y al cabo, le decía al general Rivero, usted y yo y todos estamos aquí presos por un pacto que no se cumple.

»Una noche, volvieron con que había un problema operativo: había que armar la ley y eso tomaría tiempo. Allí exploté. Les alcancé un proyecto de ley que había preparado copiando leyes de amnistía de otros países, y un mensaje para Fujimori, Montesinos y Hermoza: hay varios sobres amarillos entregados a gente de confianza con todos los detalles de los operativos que nos ordenaron; si esto no sale, vamos presos todos, incluido el Presidente. Les jodió en el alma mi actitud. Me hicieron saber que era insolente y que los estaba amenazando. Pero dieron la ley el 14 de junio.²³ Desde entonces nunca más pude volver a hablar con el general Hermoza. Nunca más me quiso atender. Era mi comandante general, me pidió que sea disciplinado y acepté el proceso. Fui disciplinado cuando me dijeron que podía perturbar las elecciones del 95 y acepté ir al fuero militar a pesar de estar convencido de que no era una solución. Fui disciplinado y leal, ¿puedo ser leal ahora con estos ladrones a los que se les ha descubierto fortunas?».

Hay un detalle que no es menor. Apenas tres días después de su promulgación, la flamante Ley de Amnistía, acaso porque en el tráfago de las presiones internas olvidaron detalles, fue objeto de una nueva ley precisando los alcances de la amnistía otorgada. En ese afán de precisión asoma otra huella de mala conciencia que delata la necesidad de anticiparse al inexorable futuro. En el artículo tercero de esa segunda ley, se incluye esta frase reveladora: debe entenderse que la amnistía es a favor de «personal militar, policial o civil involucrado se encuentre o no denunciado o investigado».²⁴ Un imposible jurídico aquel de absolver un delito a futuro, y absolver a quienes no fueron parte de ningún proceso. Usted no ha sido acusado ni investigado pero, por las dudas, lo absuelvo. Un leguleyo salvoconducto para ser usado en caso de asomar una acusación cuando ya el poder hubiese dejado de amparar a un presidente, su asesor y su más alto jefe militar.

El efecto inmediato de la Ley de Amnistía fue la libertad de los militares

presos. Cuando sus compañeros abandonaron el confinamiento del Cuartel Bolívar, después de un año y medio de reclusión, Santiago Martín Rivas sorprendió con un anuncio que hubo de ser consultado a la jerarquía: decidió fijar como su domicilio la misma habitación en la que estuvo recluido.

«El 15 de junio quedé en libertad, pero pedí seguir viviendo en el cuartel Bolívar, y allí estuve hasta marzo del 97. ¿A dónde iba a ir? Era el lugar más seguro. Allí no me iba a buscar ningún terrorista. ¿Quién va a pensar que un preso que queda en libertad elige seguir en su prisión? Montesinos aceptó mi pedido. Era lógico que así lo haga. Una vieja regla dice: “Nunca pierdas de vista a tu enemigo”. Siempre me tuvo mucha desconfianza. Su lógica era: “Este ha participado en tantas operaciones, ¿qué pasa si un día alguien lo convence o le da plata y termina en la televisión denunciando y logra asilo y nos revienta?”. Ese era el temor de Vladimiro. Por eso, como sabía de mi aprecio al general Rivero Lazo, cada cierto tiempo lo llamaba y me mandaba mensajes: dile que esté tranquilo, si necesita algo que me avise.

»Uno de esos mensajes fue una propuesta para que vaya a trabajar con él, en el SIN, como analista del frente interno. No acepté por orgullo, porque me iba a pelear con él y porque desde teniente fui cabecita de ratón, pero cabecita. Como teniente dirigí Inteligencia en Ayacucho y los generales hablaban directamente conmigo. Cuando vine a Lima accedí directamente al jefe del SIE y solo recibía órdenes de él y solo a él le daba cuentas. Cuando el jefe del SIE se iba a hablar con el Comandante General me llevaba para explicarle los avances. Cuando el Comandante General iba a Consejo de Ministros yo le armaba la agenda de seguridad interna, cuando se iba al Consejo de Defensa Nacional, lo mismo. Los domingos me quedaba en el SIE y cuando el Comandante General recibía una llamada de Fujimori, de inmediato me pedía a mí la información y yo ya había cumplido con llamar a las regiones, y tenía todos los datos. Cuando volví del curso en Colombia fui a la Dirección de Inteligencia y daba reporte directo con el Comandante General. Siendo solo un capitán tenía trato con generales y exponía sobre inteligencia, absolvía preguntas y analizaba el material conseguido. Tenía llegada propia a los divisionarios y como sabían que nunca salía de franco me querían llevar a trabajar con ellos.

»Debo reconocer que yo también contribuí a que la relación con Vladimiro se deteriorara. Había vuelto como el número uno en el curso en la Escuela de Inteligencia de Colombia, donde van los mejores oficiales de distintos países, y reconozco que me dejé ganar por crearme dueño de la verdad. La vanidad mal utilizada trae problemas. En las reuniones que organizaba Montesinos con todos los jefes de las fuerzas del orden para los operativos contra el terrorismo, yo lo

contradecía mucho porque había estudiado las ideas militares maoístas y conocía de marxismo. Además, como nos conocíamos desde los años en que Vladimiro no tenía ni para la gasolina, no le tenía el respeto que él exigía en esa época. En una palabra, no acepté ir a trabajar al SIN porque allí me iban a poner los galones, iba a tener por encima al jefe del SIN, a un coronel y permiso para entrar, permiso para salir, uniforme, trabajar mañana y tarde y noche bajo los gritos de Montesinos y sus manías y sus jerarquías. Me iba a ir mal. Me iba a pelear.

»Como no acepté su propuesta me dieron de baja el 17 de noviembre del 95. No fui el único, a todos nos dieron de baja. Libres por la Ley de Amnistía, pero fuera del Ejército. Así terminamos. Así actuaba Montesinos. No lo digo como cuestionamiento. Su traición era posible, siempre fue así, el comportamiento de un delincuente no puede sorprender».

El general Rivero Lazo fue destinado a la sexta región en Bagua, como segundo de Luis Pérez Documet; al coronel Federico Navarro lo enviaron a Iquitos; al mayor Carlos Pichilingue a Bagua y Santiago Martín Rivas se quedó en Lima sin función específica, alojado en el cuartel Bolívar. En noviembre todos ellos fueron dados de baja. Los agentes habían quedado fuera de la institución en agosto. Recibieron cincuenta mil dólares de recompensa y les consiguieron puestos de trabajo en distintas ciudades del interior, todos separados y distanciados, ninguno junto a otro en la misma ciudad.

En cuanto a la relación de Martín Rivas con Fujimori y Montesinos, la desconfianza se acentuó. En 1996, en ese segundo período de gobierno que se había echado a andar, ambos ya compartían el poder en igualdad de condiciones. Pero, para ambos, existía ese flanco débil mortificándolos. A luz pública estaban las dos matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cuyas investigaciones nunca cesaron del todo como hubiesen querido, y en las penumbras del frágil secreto se agolpaban decenas de operativos que podían liquidarlos con tan solo un testimonio dotado de las pruebas suficientes.

A pesar de la Ley de Amnistía, el tema de las violaciones a los derechos humanos nunca pasó al olvido, y cada tanto la prensa publicaba versiones que dejaban piezas sueltas de un rompecabezas que un día podría armarse totalmente. Pero esa vehemencia informativa también tuvo un lado contraproducente: el ansia por las denuncias periodísticas y la búsqueda de réditos de los políticos dio lugar a la aparición de personajes de última fila, ínfimos agentes del Servicio de Inteligencia resentidos o necesitados de dinero ofreciendo testimonios endebles, contradictorios, inverosímiles, «yo escuché detrás de la puerta a Fujimori planificando crímenes con Martín Rivas»,

testimonios que mantenían el tema en vigencia, pero iban deteriorando su veracidad en beneficio de los principales responsables.

Montesinos sentía esa fragilidad por partida doble: por su propio temor y por la prevención de Fujimori recordándole la necesidad de mantener el tema bajo control. Pocas cosas molestan más a los poderosos que el restregón de una piedra en el zapato, ellos que se sienten con derecho a andar en total soltura. Y allí estaba Santiago Martín Rivas con todas las historias guardadas en su condenada memoria de elefante. Los dos personajes que se conocieron en aquel verano de 1988 jamás pudieron engarzar una amistad ni algo que se le pareciera. Con los años se dieron cuenta de que ninguna cercanía les estaba destinada, no podía haberla entre esos dos hombres con rasgos imposibles de conciliar. Uno, Vladimiro Montesinos, ávido de poder, movido por la sensualidad de los bienes materiales, dispuesto a cobrar revancha de derrotas pasadas con el recurso de acumular autoridad y dinero; el otro, Santiago Martín Rivas, con su rígida mentalidad militar llevada al extremo, con un carácter capaz de mezclar hasta el exceso un desproporcionado sentido del deber, una testaruda afición por el silencio y un impulso autodestructivo.

Era obvio que ante esa brecha, Montesinos iba a aplicar con Martín Rivas el mismo procedimiento encajado al país: la vigilancia, el seguimiento.

Puso informantes en el Cuartel Bolívar cuya función era referir de manera minuciosa los movimientos, las visitas, la rutina del militar que convirtió su celda en vivienda. Cuando el jefe del Grupo Colina decidía salir a la calle, eran otros los encargados del reporte: los vigilantes encubiertos como taxistas siguiendo sus quehaceres. Pero nada de eso era una garantía absoluta. Y la sensación de dependencia por secretos que podían ser revelados, se acrecentó cuanto más poder fue acumulando Montesinos. En 1997 ya era señor y amo del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, compartía la designación de ministros, empezaba sus turbios negocios con los canales de televisión, el dinero bajo la mesa, las hipotecas con la publicidad estatal. La dimensión del poder y el dinero ya era otra y la sociedad con Fujimori no debía ser perturbada con historias que los señores del poder justificaban como actos necesarios y propios de una guerra cruenta y como una victoria que el país debía agradecerles.

Un día, empezado ya el año 97, en la Plaza Dos de Mayo, el topetazo de una fugaz camioneta dejó con las llantas hacia arriba al pequeño volkswagen en que viajaba Santiago Martín. Salió por una de las ventanas, fue atendido en la clínica Maison de Santé y el hecho quedó asentado en la comisaría de Cotabambas. «No fue casualidad, la excusa de un accidente es la mejor cuando se quiere silenciar a alguien».

Por esos días, en sus salidas del Cuartel Bolívar empezó a notar un dispositivo especial:

«Salía por una puerta y había vigilancia, usaba otra y era igual. A los dos días, avancé por unas calles y luego volví sobre mis pasos y me acerqué a uno de los vehículos y lo abordé de frente.

–Oiga, agente, ¿qué pasa?, ¿por qué me siguen?

–¿De qué habla?, está equivocado.

–No seas huevón, es una marcación para quebrarme, no me jodan, yo he sido maestro de ustedes. Anota bien este encargo: infórmale a Montesinos que ya me di cuenta y que se convenza de que le sirvo más vivo que muerto. Si yo aparezco muerto con un cartel de Sendero en el pecho, por si acaso ya tengo cinco sobres amarillos distribuidos en la ciudad, y, ojo, no en Colombia, que no busque allá, y va a caer junto al Presidente, se van de por vida a la cárcel, él sabe por qué.

»Al día siguiente me llamó el general Rivero Lazo y me dijo: “Vladimiro está molesto, dice que era protección reservada y lo has malinterpretado”. Le dije que eso era mentira, si quiere cuidarme, entonces que me dé un auto y dos hombres míos armados y yo me cuido.

»Poco tiempo después apareció descuartizada la agente Mariella Barreto, el 5 de abril del 97, con la cual tuve una hija. La noticia salió en la televisión, primero en Canal Dos, pero en la noche el Canal Cuatro lanzó un reportaje con supuestas precisiones y señalándome como culpable. Estaba claro. Matan a una persona relacionada conmigo, usan a su prensa para incriminarme, voy a prisión y me matan en una reyerta en el penal o un terrorista toma venganza».

Ante los hechos, señala Martín, se reunió con dos amigos a evaluar la situación. Concluyeron en que por vez primera tenía que recurrir a la prensa para defenderse. El domingo 13 de abril de 1997 se propaló, en Panamericana Televisión, la entrevista que le hizo Panorama, el principal programa periodístico de esa estación.

El reportaje fue objeto de duras críticas porque nada se dijo sobre los operativos ilegales, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales. Se limitó a la defensa de Martín Rivas exponiendo las razones por las que no tenía responsabilidad en el crimen de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariella Barreto Riofano. El estilo complaciente y la habitual falta de preparación del entrevistador originó que la emisión periodística reciba la acusación de haber sido promovida por el propio Gobierno. En realidad, no existió ningún pacto con el poder, más bien sintieron pánico y ocurrió algo inusual: el real impacto de esa entrevista ocurrió antes de ser emitida.

Por razones de seguridad, fue grabada el día anterior a su emisión y, desde el sábado por la noche, el canal emitió promociones de la nota periodística. En Palacio de Gobierno, en el SIN y en el Pentagonito se aterraron ante la certeza de que Martín Rivas salía a denunciarlos como respuesta al cargo de asesinato que habían mandado difundir.

La noche de ese sábado, un enjambre de agentes del SIN salió a darle caza mientras en el sexto piso de la Comandancia General del Ejército una reunión de urgencia juntó a Montesinos con los mandos militares. Con la angustia de las horas, un ministro de gran confianza, y luego el propio Fujimori, cercaron con llamadas al dueño del canal hasta obtener la información adelantada de que no había ninguna denuncia mortífera. Pero el susto que se llevaron en las horas de incertidumbre, no lo iban a olvidar nunca. «Mi interés –dice Martín Rivas– era probar que no tenía relación con el asesinato de Mariella Barreto, pero se volvieron locos pensando otra cosa; y después dicen que no tienen ninguna responsabilidad».

Los documentos que contienen las investigaciones policiales y judiciales afirman que Martín Rivas acreditó su ausencia de la ciudad de Lima cuando ocurrió el crimen de la agente Barreto y, según esas fuentes, por contar con una veintena de testigos además de documentos, la Fiscalía le retiró los cargos ante la falta de elementos incriminatorios.

El militar sostiene que esa muerte debe investigarse por el lado de Vladimiro Montesinos. Su afirmación tiene sentido si se presta atención a los cabos sueltos en aquel tétrico episodio. Una apresurada nota, anticipando una denuncia televisiva, publicada en el diario El Sol –cuyo propietario reportaba a Montesinos–; una extraña información policial en la que aparece una descripción del rostro del cadáver y, sin embargo, a la morgue arribó el cuerpo sin cabeza y sin manos; el sospechoso aviso de la muerte a los familiares a cargo de una agente del SIN y dos sesgados reportajes emitidos en América Televisión que, sometidos a una atenta mirada, permiten entrever una intencionalidad que no es informativa.

Ese crimen es uno de los varios misterios del período Fujimori-Montesinos y todo esfuerzo por resolverlos debe acompañarse de graves preguntas que no suelen plantearse: ¿Cuánto sabía o cuánto participó Fujimori de las actividades de Montesinos? ¿Por qué le tributó tantas defensas públicas? ¿Por qué cuando ocurrió la debacle final, lo «indemnizó» con quince millones de dólares?

Uno de aquellos misterios –el uso del terrorismo de Estado– estuvo sometido a malabares de ocultamiento durante una década, hasta que dos militares cargados de información y dueños de un testimonio clave requerido

durante años, sucumbieron a la necesidad de mitigar los padecimientos de la memoria y, antes de ser capturados, en uno y otro escondite, a lo largo de varios meses, le contaron al periodista esta historia secreta cuya lectura confirma una milenaria sentencia: no hay crimen perfecto.

⁶⁶ El punto 4 del comunicado militar dice: “Finalmente, el Ejército Peruano expresa su disciplinada subordinación al señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, así como su decidido respaldo a las medidas que está dando para la reconstrucción del país”. Por su parte, Fujimori, desde la ciudad del Cusco, anunció aumento de salarios para maestros y trabajadores de salud, dos gremios mayoritarios e importantes.

⁶⁷ Se refiere a la declaración publicada el 24 de abril por el Departamento de Estado Norteamericano sobre la llamada telefónica efectuada al presidente Fujimori por Bernard Aronson, secretario de estado adjunto para asuntos interamericanos, y en la que le hizo saber que “Estados Unidos considera esta demostración de fuerza un intento inaceptable de intimidar a la rama legislativa”.

⁶⁸ Así lo sostuvo la revista *Sí* en su edición del 19 de abril de 1993, y luego los libros publicados por Álvaro Vargas Llosa: *En el reino del espanto* y por Efraín Rúa: *El crimen de La Cantuta*.

⁶⁹ Expediente 032/2002 seguido ante el Quinto Juzgado Anticorrupción de Lima, jueza Victoria Sánchez.

⁷⁰ El plural se refiere a los integrantes del Grupo Colina que quedaron prisioneros. El listado se completa con el coronel Federico Navarro Pérez y los agentes de inteligencia Julio Chuqui Aguirre, Pedro Suppo Sánchez, Nelson Carbajal García y Juan Sosa Saavedra.

⁷¹ El fallo final fue: general Juan Rivero Lazo, cinco años; coronel Federico Navarro Pérez, cuatro años; capitán Adolfo Velarde Astete, dos años; los tres por delito de negligencia. Los mayores Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, veinte años; los agentes suboficiales Juan Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre, Nelson Carbajal García y Pedro Suppo Sánchez, quince años. Todos por los delitos de abuso de autoridad, secuestro, desaparición forzada de personas, contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato.

⁷² Fallo del Consejo Supremo de Justicia Militar en el caso La Cantuta emitido el 21 de febrero de 1994. Consta de 47 considerandos contenidos en 25 páginas.

⁷³ Ley 26479 promulgada por el Congreso Constituyente Democrático que concedió “Amnistía general a personal militar, policial y civil”. En su artículo primero señala que la amnistía comprende “todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la presente ley”.

⁷⁴ Ley 26492. Su art. 3º dice: “Interprétese el artículo 1 de la Ley 26479 en el sentido que la amnistía general que se concede es de obligatoria aplicación por los órganos jurisdiccionales y alcanza a todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado se encuentre o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado; quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución archivados definitivamente”.

LA CAPTURA DE SANTIAGO MARTIN RIVAS

*Jamás pienses que una guerra,
por necesaria o justificada que parezca,
deja de ser un crimen.*

ERNEST HEMINGWAY

EN LA NOCHE DEL MARTES 12 de noviembre de 2002, el periodista recibió una llamada telefónica. Una voz femenina le hizo saber que hablaba por encargo del Dr. Gómez. Al escuchar el apellido redobló su atención. Hacía tres meses que había perdido todo rastro y esta vez reaparecía una de las tres claves utilizadas por Santiago Martin Rivas cada vez que deseaba retomar contacto. Aunque la voz delgada y apurada no la había escuchado antes, siguió con atención las indicaciones de la mujer: estaría al día siguiente a las dos de la tarde en la esquina de las avenidas La Marina y Universitaria vistiendo un blue jean y una blusa blanca. Al periodista le asomó una curiosidad, pero se ahorró la pregunta: la última vez que vio a Santiago Martin Rivas fue en el escondite al norte de la ciudad, camino a Ancón, y esta vez lo citaba en el extremo opuesto, a decenas de kilómetros de distancia.

Al día siguiente, puntual, subió al automóvil una muchacha joven, delgada, de rasgos firmes y una nariz pronunciada que le daba cierto encanto. Sin dar pie a una conversación, se limitó a informar que Martin había mudado de refugio, que estaba dispuesto a concluir la última conversación que habían tenido pero antes solicitaba el favor de conducirla al supermercado Metro ubicado a unas cuadras.

La mujer recorrió a paso rápido las góndolas colocando en el carrito de compras alimentos enlatados, algunas hortalizas, fideos, café, azúcar y varias botellas de Coca-Cola. Cuando iban rumbo a la caja hizo el gesto de quien está olvidando algo y se dirigió hacia el *stand* de alquiler de películas. En ese trayecto apareció un sujeto que les dirigió una mirada fulminante, agresiva. El periodista se sintió incómodo por la insistente y violenta mirada y tuvo la intención de acercarse al individuo para preguntarle qué demonios le ocurría, pero el tipo apuró el paso, se unió a otro y se alejaron conversando.

En el *stand* de películas la mujer eligió seis y se encaminó hacia la caja, pagó una cuenta de ciento diez soles, avanzó hacia la playa de estacionamiento, acomodó sus compras en el auto y le indicó al periodista enrumbar hacia la avenida Universitaria, en dirección al mar. Cuando llegaron a la intersección con la calle Lima, doblaron a la derecha y una cuadra después la mujer indicó girar a la izquierda. Era la calle Comandante Moore, en el distrito de San Miguel, que días después cobraría enorme celebridad. Estacionaron frente a un modesto edificio de cuatro pisos con una puerta de rejas negras y la numeración 290. Bajaron las bolsas hasta el rellano y ella le pidió que la ayudara a subirlas. Por una estrecha escalera llegaron hasta la puerta del departamento 401. La mujer dio tres golpecitos con una llave y alguien franqueó el ingreso desde dentro. Era

el mayor Santiago Enrique Martín Rivas.

Los dos hombres se saludaron con la misma formalidad de las entrevistas anteriores. En el espacio destinado a la sala, lucía, solitaria, una mesa con tres sillas; el ambiente continuaba hasta el sector destinado a la cocina con un pequeño frigobar y un repostero de melamine en cuyos compartimentos la mujer, en absoluto silencio, descargó el contenido de las bolsas. El departamento se completaba con un baño y dos pequeños dormitorios. En uno de ellos, el que daba a la calle, un plástico negro hacía las veces de cortina y frente a la cama se distinguía el mismo vetusto televisor de los huariques anteriores.

El militar le indicó al periodista tomar asiento junto a la mesa sobre la cual había un grueso fólter y junto a él unas hojas impresas además de un libro. Un instante después, se acercó provisto de una botella de Coca-Cola y dos vasos. Cuando los dos hombres estuvieron listos para iniciar su reunión, la mujer dijo hasta luego y se marchó.

ESA TARDE DEL 13 DE NOVIEMBRE había sol y la temperatura anunciaba el verano. El prófugo tenía una actitud relajada cuyo origen era fácil de explicar: recién había mudado de refugio y, por lo mismo, se sentía más seguro. Desde abril de 2001 había tenido cuatro mudanzas cumpliendo una de las reglas básicas de quien vive en la clandestinidad: no permanecer por mucho tiempo en un mismo lugar. A su favor habían jugado la incompetencia de los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGEMIN) y los titulares sin sustento de la prensa que insistían en situarlo en el norte del país, sobre todo, en su ciudad de origen: Trujillo y sus alrededores. Más de una vez el militar pudo leer en Lima primeras planas con el anuncio de que estaba cercado en una hacienda trujillana o, al encender la televisión, se enteraba de que había estado de huésped en una casa de la ciudad de Piura.

Por dar crédito a esas informaciones la Policía se dedicó a rastrear su presencia en el norte y le dejaron un margen de movimiento en Lima, ciudad que no abandonó en ningún momento, ni siquiera para asistir al sepelio de su madre. De modo que el escondite de la calle Comandante Moore parecía muy seguro.

El barrio era tranquilo, sin vecinos que pudiesen llamar la atención y en el edificio cada habitante se ocupaba de lo suyo sin indagar en la vida de los demás. Nadie había llamado a su puerta con un gesto de vecindad y no se escuchaba ningún bullicio más allá del usual sonido de radios o televisores prendidos. Que no existieran anécdotas era bueno para el prófugo que recordaba a aquella pareja de populares y jóvenes actores que, en el edificio de la avenida Arequipa donde inició su travesía clandestina, habían instalado su lugar de

encuentros amorosos y solían alborotar la calma del lugar sea con su pasión o con sus disputas, hasta que un vecino empezó a recolectar firmas para desalojar a la bella actriz y a su amado y se puso a tocar con insistencia el timbre del departamento ocupado por Martin porque escuchaba el sonido de un televisor prendido.

En la calma del edificio de la calle Moore no había atisbos de inseguridad y, sin embargo, el militar estaba viviendo sus últimos días de libertad. Esa tarde del 13 de noviembre, aconteció la que sería la última entrevista. En realidad, concluía una larguísima entrevista desarrollada a lo largo de espaciados encuentros en los meses anteriores. En el momento en que se hizo un silencio y mientras recogía sus utensilios de trabajo, el periodista le solicitó una reunión final para precisar algunas dudas que pudiesen surgir de un manual militar que le había entregado. Martin Rivas respondió: «Léalo y nos juntamos uno de estos días».

No se acercó a abrir la puerta, dejó que el visitante se ocupe de la tarea y, más bien, se ubicó bajo el dintel de la cocina para quedar fuera del alcance de alguna mirada casual. Cuando el periodista llegó a su automóvil, pensó aliviado que esa noche concluían los largos meses de paciente trabajo y riesgos corridos en las visitas a los distintos escondites del prófugo. Tenía toda la historia, tenía, además, el enorme logro de tres cintas de video como prueba irrefutable de las confesiones obtenidas a punta de perseverancia. En suma, tenía el reportaje que tantos habían perseguido durante una década. Sin embargo, aún le quedaba por vivir un episodio más.

EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE, los agentes de la DIGEMIN habían logrado ubicar el edificio de la calle Moore. No fue un mérito propio de expertos en Inteligencia; fue producto del único error que cometió Santiago Martin Rivas durante el tiempo en que vivió a salto de mata. El escaso dinero con el que financiaba su sobrevivencia provenía de su pensión como mayor en situación de retiro del Ejército Peruano. Esa pensión le era pagada a través de la Caja de Pensiones Militar Policial y la cobraba su hermana mayor Mercedes a través de un poder notarial. Cada vez que efectuaba el cobro, depositaba el dinero en una cuenta corriente del Banco de Comercio²⁵ y la suma era retirada en una agencia bancaria por aquellos que le prestaban ayuda en cada uno de los inmuebles en que anduvo escondido.

Desde su llegada al departamento 401 en el edificio de la calle Moore, el uso de esos fondos estuvo a cargo de la mujer que contactó al periodista. Como la atención de la Policía estaba puesta en Trujillo habían sometido a

seguimientos de rutina a Mercedes Martin Rivas. Y entonces ocurrió que el lunes 11 de noviembre por vez primera rompieron el rigor de no establecer contacto personal con familiares. En una calle del centro de Lima, la hermana de Martin le entregó a la mujer del edificio un sobre con documentos que el militar debía firmar para renovar la carta poder con la cual cobrar su pensión.

Los agentes, que habían seguido desde Trujillo a Mercedes Martin, se toparon con el hallazgo de esa otra mujer a la que nunca antes habían visto. La siguieron y así fue como descubrieron el edificio de la calle Moore. La vieron salir portando el mismo sobre con el que había ingresado, retornar al centro de la ciudad y entregárselo a la hermana del prófugo. Los policías no tenían la certeza de que en ese inmueble se encontrase Santiago Enrique Martin Rivas, pero, sin duda, la posibilidad existía: ¿por qué otra razón la hermana del prófugo haría un viaje de 500 kilómetros, esperaría el tiempo necesario para que le devuelvan un sobre y se embarcaría nuevamente hacia Trujillo?

Sometieron a discreta vigilancia el edificio y no ocurrió nada llamativo hasta dos días después, el miércoles en que la mujer y el periodista ingresaron al supermercado Metro. Aquel sujeto que en ese establecimiento fijó su rabiosa mirada en el periodista era un agente que, de esa torpe manera, buscó identificarlo.

La Policía, entonces, empezó a sumar datos: el encuentro de Mercedes Martin con la desconocida mujer del edificio, la diaria compra de varios periódicos que la mujer hacía en un barrio con gentes poco proclives a la información, el ingreso de un periodista al edificio, el fugaz perfil de un hombre que se dibujó en una de las ventanas la tarde del jueves y la ausencia de movimiento en el departamento 401, el único que no tenía aliento familiar en un edificio habitado por familias. Todo eso hizo avanzar a la policía en la certeza de que Santiago Martin Rivas podía ser, tenía que ser, el ocupante del silencioso departamento.

La información fue elevada al ministro del Interior, Gino Costa Santolalla, y este la trasladó al presidente Alejandro Toledo. Ordenaron una total vigilancia, pero decidieron no allanar el inmueble por una razón: todo anunciaba una catástrofe del oficialismo en los comicios municipales y regionales a celebrarse el domingo de esa semana y se les había aparecido la gran noticia con la cual ocultar su desastre electoral. Aunque en público, Toledo y su corte criticaban con furor a Vladimiro Montesinos, en privado eran sus aprovechados alumnos en las malas artes de las cortinas de humo y otras más. Decidieron no echarle mano, hasta el lunes 18, a quien era el hombre más buscado en el país. La noticia les fue de enorme utilidad porque Perú Posible –el partido gobernante– fue

desaparecido en las urnas electorales²⁶ y el presidente Toledo abucheado al momento de emitir su voto, pero en pocas horas la atención del país giró totalmente hacia la captura del jefe del Grupo Colina.

Desde el jueves el militar estaba a solas. La Policía lo sabía porque vieron embarcarse a la misteriosa mujer en un bus con destino a Trujillo. Dos agentes la siguieron. Era Milagritos Malpica Risco, una abogada trujillana de 31 años de edad, que conocía a Martin Rivas desde los cinco años porque el militar era amigo de su padre, había sido alumno de su madre en la escuela primaria y ambas familias vivían en la calle Unión. Era ella quien alquiló el departamento, quien le llevaba los alimentos al prófugo y había aceptado asumir su defensa legal, junto a su padre Estuardo Malpica Odiaga. Las compras que hizo el miércoles 13 fueron para varios días porque viajó a Trujillo a emitir su voto. Cuando retornó a Lima se topó con la noticia de la captura.

En las primeras horas de ese lunes 18, Martin Rivas se percató de un paisaje inusual en la tranquila calle. Para un observador cualquiera no había diferencias sustanciales, pero a él, conocedor de los seguimientos y reglajes, le llamaron la atención dos hombres sumidos en una interminable charla en la esquina, cada uno con una mochila como si fueran estudiantes, pero con un aire policial imposible de esconder para un ojo entrenado; en la acera opuesta, sentado en la berma, vio a otro individuo leyendo un diario y, a mitad de calle, alcanzó a distinguir un auto estacionado con tres ocupantes.

Con el correr de la mañana la preocupación de Santiago Martin Rivas fue en aumento. Apareció otro auto con dos ocupantes. Y en ambas esquinas aparecieron más individuos como consumiendo el tiempo en conversaciones de vagos. Hacía calor pero todos tenían una casaca liviana o una mochila. La deducción era inevitable: escondían sus armas. El militar tomó dos maletines y empacó ropa, documentos, libros y una computadora portátil. En uno de los maletines, el de color negro, puso encima de todo el equipaje una pistola y una cacerina.

Se comunicó a través de su teléfono celular con Estuardo Malpica Odiaga. Era su abogado, pero sobre todo un amigo de larga data. Había estudiado en la universidad con su hermana Betty y luego al casarse con la señora María Risco de la Melena fijó su domicilio en la misma calle de los Martin Rivas. Ambas familias se conocían desde hacía veinticinco años y fue la razón por la que el doctor Malpica aceptó patrocinarlo. Esa mañana, el militar le informó que estaba cercado y le hizo saber el gran temor que lo acompañó desde el inicio de sus meses clandestinos: estaba convencido de que le aplicarían la ley de fuga, es decir, que sus captores lo ejecutarían para anunciar después que murió tratando

de escapar. Esta aprensión se la había contado al periodista meses atrás afirmando que así habría de ocurrir porque «hay mucha gente a la cual no le conviene que yo pueda hablar».

Esa mañana, el abogado Malpica le aconsejó que llamara de inmediato a una persona que pudiese estar presente como testigo para evitar que su recelo – cierto o no– pudiese convertirse en realidad. A las once de la mañana marcó el teléfono del periodista, le dijo que le había conseguido unos documentos importantes y que debía pasar ya mismo por ellos. El otro contestó que no le era posible hasta el final de la tarde, pero Martín replicó que sólo había tiempo para fotocopiarlos hasta la una y recalcó que se trataban de documentos muy importantes. El periodista decidió concluir una reunión, cancelar otra y le hizo saber que arribaría poco después del mediodía.

Al llegar, a las doce y diez, le llamó la atención que la solitaria calle del miércoles pasado hubiese congregado a tantos esquineros matando el tiempo a mediodía. Estacionó su automóvil y no necesitó tocar el timbre porque encontró la puerta abierta, subió las escaleras, se topó con dos individuos que bajaban a trancos, llegó hasta el departamento 401, dio tres toques con una llave y el acceso se abrió, pero, a diferencia de la última visita, se topó con el militar cargado de una tensión descomunal. Tenía el rostro abrumado, la mirada dilatada e inquieta y el cuerpo tan rígido que parecía pronto a explotar.

A mitad de la sala estaban los dos maletines y Martín Rivas se desplazaba con apuro y desesperación. Avanzó primero hacia el ventanal de la sala y oteó la calle, después se dirigió al fondo de la cocina buscando exasperado un resquicio en la ventana cubierta por una reja imposible de mover. Volvió sobre sus pasos y encontró al periodista mirando hacia la calle. En ese instante, los hombres de los automóviles se desplazaban hacia el edificio junto a los que habían simulado tontear en las esquinas.

En el departamento apenas hubo tiempo para una brevísima discusión. El periodista lo increpó a viva voz: «Si estás cercado para qué mierda me llamaste», y el prófugo respondió: «Discúlpame, pero si me encuentran solo me matan». En ese instante, se oyó una voz agreste: «Policía, abra la puerta». Martín Rivas se arrojó a una de las paredes de la sala para quedar fuera del alcance de la puerta. La voz insistió: «Abra, carajo, todo el edificio está cercado». El militar siguió en silencio. Entonces, el vidrio ubicado en la parte superior de la puerta estalló en añicos por el impacto del mango de un revólver. El periodista se dirigió al militar y le dijo: «Voy a abrir», pero Martín Rivas decidió avanzar hacia la puerta y apenas se escuchó el sonido de la cerradura con el pestillo corrido cayó sobre él, como un alud, una muchedumbre de policías. En medio de gritos se lo llevaron

en vilo cuatro metros hasta dar contra una pared y caer al piso. Al ver las pistolas de cada policía, Martin se quedó quieto.

A la vez, otro grupo de efectivos puso al periodista de pie contra la pared, este sintió el impacto de dos revólveres presionados contra su espalda a la altura de los pulmones, atinó a pedirles calma con el temor insondable de un disparo que pudiese escapárseles, les pidió que extraigan de uno de sus bolsillos su identificación como periodista y volvió a pedirles que se calmen.

Agitados y a los gritos, acomodaron al militar sobre una de las sillas de la sala y empezaron a colocar en la mesa los objetos que encontraban en sus bolsillos, mientras otros efectivos abrían los maletines. Al hallar la pistola uno de ellos gritó: «Cachéalo bien, de repente tiene otra». No le hallaron otra arma. Al periodista, luego de ver su identificación, le hicieron vaciar sus bolsillos, le quitaron el teléfono móvil y le indicaron ubicarse al final de la sala.

El alboroto no cesaba. Celebraban. Conversaban a los gritos. «Era él, carajo, aquí estaba». Una mujer que había ingresado junto a quienes irrumpieron en el departamento seguía grabando con una pequeña cámara. A través de una radio el jefe del operativo reportó: «Mi general, era el hombre. Ya lo tenemos». Recibió indicaciones y al cortar ordenó a la mujer grabar al militar y al periodista y alertó a un subalterno para que hubiese una motocicleta lista «para llevar las imágenes al despacho del señor Ministro».

Con el escenario bajo control hicieron pasar a la fiscal Ana Cecilia Magallanes Cortéz –quien junto a una dotación de policías se había mantenido a resguardo en el departamento de enfrente– para levantar el acta del operativo.

Lo que siguió fue una tediosa jornada propia de los formalismos judiciales. Lo interrogaron durante cinco horas mientras una funcionaria transcribía en una máquina de escribir portátil y en copias al carbón las respuestas del militar. A la vez, hicieron un inventario minucioso de sus pertenencias. Dejaron constancia del registro de la pistola Browning²⁷, se sorprendieron por los libros que fueron hallando, por los *files* con datos completos del proceso judicial que tenía abierto y por los posibles misterios escondidos en una caja con disquetes. En un momento, encendieron una de las dos computadoras portátiles y quisieron dejar constancia en el acta de cada uno de los archivos que contenía, pero la tarea se reveló no sólo extensa sino inútil y decidieron consignarla como «material a ser revisado por el departamento correspondiente». En el disco duro de esa computadora así como en los disquetes²⁸ que le incautaron existía información valiosa, pero en los meses siguientes, y hasta hoy, nadie supo el destino de ese material.

Afuera, la serena calle de los días pasados se llenó de una muchedumbre de

manifestantes, vecinos y curiosos y un enjambre de periodistas empuñaba sus micrófonos y cámaras de televisión. Estos, a través de sus transmisiones en vivo y en directo, hicieron amplios honores a la objetividad difundiendo desopilantes versiones imaginarias sobre lo que ocurría dentro del inmueble. Otro tanto ocurrió con las crónicas de los diarios al día siguiente. Escribieron como si hubiesen estado presentes. Una de ellas afirmó que Martin Rivas «se enfrentó a golpes con sus captores» y otra afirmó el hallazgo de videos en los que aparecían Fujimori y Montesinos observando un entrenamiento del Grupo Colina.

Hacia las siete de esa tarde, los policías le colocaron a Santiago Martin Rivas un chaleco antibalas, lo tomaron de cada uno de los brazos, bajaron por la escalera y en medio de un alboroto de consignas, gritos, insultos, flashes y micrófonos se abrieron paso hasta depositarlo en una camioneta. El hombre más buscado del país, el que conocía los secretos que agobian al expresidente Alberto Fujimori terminó esa noche su vida clandestina de veinte meses, pero, sobre todo, terminó su largo periplo de acciones contrasubversivas iniciadas en Ayacucho en 1982 y marchó rumbo a prisión cargado de historias que quizá nunca termine de revelar por completo.

Mientras tanto, al periodista le tocó vivir una historia propia de un país que se maneja con una robusta doble moral. Cuando vio ingresar a la fiscal Ana Cecilia Magallanes, se acercó a ella confiado en las versiones que la señalaban como una magistrada honesta y justa y le pidió resguardo a sus derechos de ciudadano, entre ellos evitar ser sometido a la grabación de un video que con afán reclamaba desde su despacho el ministro del Interior con la evidente finalidad de utilizarlo públicamente. La fiscal Magallanes no aceptó el pedido a pesar de tener frente a ella el carné que identificaba al periodista y, más bien, como si fuese una enviada ministerial y no una fiscal encargada de garantizar la legalidad de lo que acontecía, autorizó a la policía a efectuar la grabación y les permitió salir raudos.

Apenas arribó el motociclista con la cinta, el ministro Gino Costa y su viceministro, Carlos Basombrío Iglesias, aparecieron ante las cámaras de televisión dando una conferencia de prensa. Habían preparado todo con anticipación porque tenían una cartulina, que no se prepara en media hora, en la que aparecía la fotografía del rostro de Santiago Martin Rivas recién capturado y, al lado, de manera inexplicable, la fotografía del periodista. La intención era sugerir a la opinión pública que ambos eran partícipes de una misma actividad y, a continuación, echaron a andar la insostenible teoría de que estaban reunidos para organizar un complot contra el Gobierno. Fue una maniobra propia de la estulticia del presidente Alejandro Toledo que les impartió esa orden tomándose

revancha de antiguos y vigentes desencuentros con el periodista.

En aquella conferencia de prensa, Costa y Basombrío afirmaron que «el periodista ingresó al inmueble a la medianoche». Fue una alevosa mentira porque el inmueble estuvo sometido a vigilancia durante toda esa semana, tenían un registro de todos los movimientos y el ingreso del periodista, al mediodía del lunes 18, fue visto por los policías desperdigados en la calle y, a su vez, los agentes y la fiscal, guarecidos en el departamento vecino, lo escucharon tocar la puerta del escondite de Martín. Sin embargo, actuaron dóciles ante la orden de Toledo a pesar de que un funcionario de la Comisión de la Verdad se comunicó telefónicamente con el viceministro Basombrío para acreditarle que había estado reunido con el periodista horas antes y, por lo tanto, estaban incurriendo en una deliberada falsedad. No entendieron razones y siguieron adelante.

Lo llamativo es que Costa y Basombrío, además de su condición de autoridades coyunturales, eran abogados, conocían los límites que debían observar y estaban obligados a preservar la presunción de inocencia que le asistía al periodista. Su actuación encuentra una explicación muy concreta. Ambos se autodenominan defensores de los derechos humanos y en esa condición han trabajado en entidades de ese rubro y ya se sabe que esos círculos operan bajo esta distinción: quienes piensan como ellos tienen derechos; quienes opinan de otro modo carecen de ellos.

El burdo guión fue completado al día siguiente con la aparición en cuanto espacio le fue posible de la congresista Anel Townsend Diez Canseco, una operadora del oficialismo que durante toda su actuación pública se condujo con tanta arbitrariedad y doblez que terminó recogiendo una de las peores sanciones para un político: el total olvido de la ciudadanía. Finalmente, el propio presidente de la República, Alejandro Toledo, salió a decir que él mismo «se encargaría de monitorear el caso» porque estaba convencido de que el periodista tenía que ser investigado «porque a mí no me convence que haya estado haciendo una entrevista».⁷⁹

Era una intromisión en los fueros del Poder Judicial y una peligrosa manera de poner en cuestión la labor periodística, pero a ningún columnista –en un país plagado de columnistas de opinión– se le ocurrió el mínimo comentario no en defensa del periodista sino en resguardo de la tarea del periodismo de investigación que tiene entre sus principales herramientas la opción de entrevistar a individuos que se encuentran en la clandestinidad.

En la Dirección Contra el Terrorismo, la asistente de la fiscal Magallanes, en ausencia de esta, recibió una llamada de Alejandro Toledo solicitándole la elaboración de un atestado para la detención del periodista. Minutos después

aquella funcionaria, Rocío Marilú Rojas Trigoso, enarboló una tarjeta de presentación de Estuardo Malpica Risco –hallada en el registro del inmueble– afirmando que estaba entre los documentos que el periodista tenía en sus bolsillos y, por lo tanto, era necesario investigar el vínculo porque esa tarjeta correspondía al hermano de Milagritos Malpica Risco, la mujer que lo había contactado días atrás para conducirlo al último escondrijo de Martin Rivas.

El general Marco Miyashiro, ante la burda maniobra reaccionó con la actitud de un hombre de bien y policía ejemplar –pocos, pero existen– y le hizo saber a la fiscal que en su dependencia no se iba a efectuar un ardid de ese tipo, le indicó que dejase de fingir que no podía identificar al periodista y, por último, le hizo saber que estaba en condiciones de acreditar su identidad más allá de su carné porque lo conocía desde hacía más de diez años.⁸⁰

Pasada la medianoche, el periodista fue puesto en libertad y como corresponde a los usos peruanos sus colegas cuestionaron su salida. El hombre se marchó a casa y en los días siguientes, sin efectuar reclamos, en silencio frente a los discursos de los pontífices de lo políticamente correcto. Y con el anuncio de que sería arrestado por las presiones del presidente Toledo exigiendo una investigación que la Fiscalía había aceptado, este, tras prestar su declaración ante la fiscal, se embarcó hacia Buenos Aires a realizar el trabajo que correspondía: escribir este libro con las pruebas que años más tarde, en 2007, los jueces chilenos habrían de considerar como fundamentales para aprobar la extradición del expresidente Alberto Fujimori.

LA ÚLTIMA ENTREVISTA

Esta es un fragmento de una entrevista más extensa. Varios de los puntos tocados, y otros adicionales, se encuentran detallados en un documento de análisis preparado por Santiago Martin Rivas y que el autor mantiene en sus archivos. En dicho documento se detalla todo el concepto estratégico seguido en las acciones clandestinas realizadas contra Sendero Luminoso. Asimismo, además de la entrevista grabada en video, existe otro material audiovisual, también en los archivos del autor, en el cual Martin Rivas expone sus puntos de vista sobre episodios concretos y reitera el rol y las responsabilidades del expresidente Alberto Fujimori. Todo lo que el militar afirma en esta entrevista constituyen asuntos complejos sobre los cuáles siempre habrán discrepancias y polémicas y corresponde a cada lector formarse una propia opinión. En todo caso, publicarla sirve, primero, porque toda esta postura que explica –más no justifica– las decisiones tomadas a partir de 1990 fue omitida en el Informe de la Comisión de la Verdad; y, segundo, sirve como una pieza más junto a otras que existen para tratar de descifrar los crueles misterios de los años de violencia que

azotaron al país.

–Para entender las decisiones tomadas por el expresidente Alberto Fujimori en materia de lucha antiterrorista, es necesario conocer las diferencias entre guerra convencional y guerra clandestina. ¿Cuáles son esas diferencias?⁸¹

–En la primera, dos países entran en conflicto y se enfrentan de manera abierta a través de sus Fuerzas Armadas respetando ciertas normas o leyes de la guerra: el empleo de uniformes, el respeto a los prisioneros, la asistencia a los heridos y todo lo que está pactado en Convenciones como la de Ginebra o en los reglamentos de la Cruz Roja. Esa es la guerra convencional.

–¿Y la otra es la llamada guerra sucia?

–Llámela así si gusta. A quiénes dicen «guerra sucia» les pregunto: ¿existe una «guerra limpia»? Toda guerra por definición es brutal y conduce a la muerte.

–Pero aún así una guerra tiene ciertas reglas básicas que buscan resguardar lo que queda de humanidad en medio de la barbarie.

–Esas reglas existen en la guerra convencional. Pero la guerra clandestina, guerra de baja intensidad o guerra sucia, como quieran llamarla, ha sido impuesta en el mundo por el terrorismo y no tiene reglas. Es cruenta y salvaje. Y en nuestro país la impuso el fanatismo de Sendero Luminoso y no los militares.

–¿Y qué características tiene ese tipo de guerra?

–No hay declaratoria de guerra ni ejércitos uniformados identificables que se enfrentan abiertamente, las armas convencionales pasan a segundo plano ante otra arma mucho más peligrosa que es el arma psicológica. El enemigo es clandestino, se esconde y confunde entre la población y forma parte de esta. Y como el arma psicológica es fundamental las acciones de ese enemigo clandestino consisten en atentados brutales para desmoralizar al país y desestabilizar a su gobierno. Esa fue la guerra que generó Sendero Luminoso. Una guerra basada en el miedo, en el terror y, lamentablemente, muchos ayudaron a ese avance desde los errores de las autoridades hasta ciertos sectores o personajes sobre los cuáles no se dice nada.

–¿A quiénes se refiere?

–Espero que esta entrevista no tenga censuras. En todo caso, me refiero a los llamados «senderólogos» y a la prensa. Fíjese, y aunque les moleste a ustedes, en el Perú apenas surge un tema trascendental, cualquiera sea este, en

política, deportes, modas, delincuencia, lo que sea, inmediatamente aparecen los «especialistas» que se apoderan del tema, toman por asalto los medios de comunicación y en pocos días encontramos novísimos «especialistas» que por arte de birlibirloque se doctoran con solo ponerse el vocablo «logo». Así aparecieron, doctorados no se sabe por qué universidad, los «senderólogos» y todos los días aparecían en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, ensayando sus teorías, interpretando el drama del país desde un escritorio.

–Guardo distancias con esos presuntos especialistas, pero no puede negar que gozaron de gran audiencia y eran consultados incluso por quienes gobernaban...

–Por supuesto que captaron atención. Ese fue el problema. Al no existir una versión oficial de los hechos, la población estaba desorientada y asustada y buscaba, necesitaba información. Como el Estado no se la daba, entonces, se refugiaban en las apreciaciones de esos señores que habían encontrado en un asunto tan delicado, una manera de ganarse la vida o hacerse conocidos. Para muchos de ellos, no para todos, la violencia estructural que sufrió el país se convirtió en un buen negocio.

–Pero todos los analistas, en distintos campos, operan sobre hipótesis y manejan evaluaciones a partir de ciertos datos. ¿Qué es lo que hace particularmente cuestionable el rol que tuvieron los «senderólogos»?

–Su irresponsabilidad en un tema tan grave. Esos señores durante largos años generaron una fuerte corriente de temor y miedo en la sociedad y hacían sentir que era muy poco lo que se podía hacer y agrandaban la imagen de Abimael Guzmán creando de esta manera zozobra en la gente e influyendo en quienes debían tomar decisiones en el país.

–Ellos podrían argumentar que más bien perfilaron las características de Sendero Luminoso y de su cabecilla Abimael Guzmán...

–Oiga usted. Cuando se inició la violencia terrorista la gran pregunta era: ¿quién es Abimael Guzmán? y allí empezaron las versiones. Pronto aparecieron un par de fotografías antiguas y de inmediato los «senderólogos» con sus amplísimos «conocimientos» de guerra revolucionaria empezaron a hablar de las cualidades estratégicas de Abimael Guzmán, de sus grandes talentos pero resulta que ninguno lo conocía ni había tenido acceso anterior a un individuo inmerso en la total clandestinidad. Después, cuando el tiempo fue pasando y se seguía sin saber nada del «gran Presidente Gonzalo», empezaron a aparecer las «primicias

de muy buena fuente» de la prensa que unidas a la «sabiduría de los senderólogos» daban lugar a todo tipo de versiones hasta convertir a un asesino en una leyenda: que Guzmán era un genio, que hablaba no se cuántos idiomas, que dominaba con la mirada, que convencía en pocos minutos, que fue engreído de Mao Tse Tung y hasta un Presidente de la República le envidió su mística y otros decían que había muerto y, entonces, nos estaba ganando la guerra desde la tumba como el Cid Campeador. Lo único que se conseguía era darle un sitio enorme a un vil individuo y atemorizar a la población. Guzmán lo aprovechó muy bien. En sus documentos internos ordenaba la creación de «el mito subjetivo».

–Ese mito concluyó con su caída...

–Pero alguien había creado ese mito sin tener información real y concreta. Cuando se encontró el video donde Abimael Guzmán aparece bailando la danza de *Zorba, el griego* junto a todo su Comité Central, ahí nos enteramos de muchas cosas: primero, que estaba vivo; segundo, que vivía cómodamente en lugares residenciales; que tenía los hábitos de cualquier ser humano común y silvestre, o sea, que le gustaban sus tragos, que tenía sus mujeres, que no tenía ninguna aureola especial. Era como cualquier persona. Y cuando fue presentado con su traje a rayas su discurso no tuvo ninguna brillantez ni correspondía a esa leyenda que le habían inventado y un año después de su captura, sin ningún honor ni valentía, firmó su rendición y la firmó ante Montesinos ni siquiera ante el Presidente de la República. Habíamos sido víctimas de un engaño de parte de «senderólogos», periodistas y demás mentirosos de la noticia. A estos mercaderes de la historia colectiva también habría que pedirles que asuman su responsabilidad. Porque resulta que toda esa gente se ha encargado de exigir la responsabilidad de los militares pero jamás les he escuchado o leído una línea sobre los policías y militares muertos en emboscadas o asesinados a dinamitazos.

–Para traer abajo el mito del Presidente Gonzalo, ¿el Estado tenía que usar los métodos terroristas de Abimael Guzmán?

–No había otra manera. Con los métodos convencionales hacía diez años que Sendero ganaba la guerra. Para combatir a un enemigo clandestino se tiene que recurrir a hombres clandestinos, se necesita combatir a los terroristas en las mismas condiciones clandestinas y con las mismas reglas que utilizan y aplicando algunos de los métodos vedados que ellos emplean contra las fuerzas del orden.

–Ese es el punto en cuestión: un Estado no puede, no debe actuar como

actúa un grupo terrorista, cuando lo hace está abdicando de su orden legal y abre las puertas a la ley del Talión...

–Claro, desde la teoría es muy fácil plantear las cosas de ese modo. En los hechos, ¿cómo se defiende un país de los salvajes ataques de un enemigo invisible? Hasta el día de hoy no se descubre otro tipo de estrategia que pueda reemplazar a la guerra clandestina.

–Quizá no se encuentra otra manera porque se parte de un pensamiento estrictamente militar...

–No, señor, no es así. En la guerra de baja intensidad se requiere de algo fundamental: una decisión política. Por tratarse de acciones clandestinas los militares no podemos tomar esa decisión porque estamos supeditados a órdenes y la orden para actuar fuera del marco oficial sólo puede provenir de la autoridad política. En el mundo entero es la autoridad política encarnada en el Presidente de la República quien ordena que se ejecuten las tan cuestionadas operaciones de inteligencia. Después del atentado a las Torres Gemelas, ¿quién autorizó la invasión a Afganistán: los militares o el presidente Bush?

–Pero eso es oponer al terrorismo el terrorismo de Estado, es convertirse en terrorista...

–Es aplicar la guerra de baja intensidad. El terrorismo es uno de los más vivos y claros ejemplos del empleo del miedo como método. Aprovechan cuánto hay de blando en una sociedad para imponer acciones brutales, crueles, salvajes. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Los llamamos a la reflexión? ¿Les pedimos sensatez? ¿Sacamos pañuelos? ¿Exhibimos manitas pintadas de blanco? Había que enfrentarlos con sus mismas armas. Hasta ahora no se ha inventado otra manera.

–Se podría decir que los militares decidieron aplicar la guerra sucia. De hecho Fujimori sostiene que él no dio ninguna orden...

–No señor. Se requiere de la orden presidencial porque una guerra clandestina tiene un costo político y el gobernante debe estar dispuesto a asumirlo con tal de ganar la guerra contra el terrorismo. Si los militares actuásemos por nuestra cuenta, apenas se presentan los reclamos por los actos de esa guerra clandestina, el Presidente de la República ordenaría nuestra baja y encarcelamiento. ¿Por qué Fujimori no hizo eso? ¿Acaso no era fácil meter preso a un mayor del ejército y a sus subalternos y deshacerse del problema? No lo hizo porque no podía, porque era el jefe, el que había decidido pagar ese costo con tal de derrotar al terrorismo. Hay muchos hechos concretos.

»¿Por qué Fujimori fue el encargado de dar el listado de bajas después de la toma de los penales? ¿Por qué se paseó delante de los presos vencidos? ¿Era un tonto para hacer todo eso sin saber por qué lo hacía? ¿Por qué impulsó la ley de amnistía? ¿Por qué sostuvo a Hermoza Ríos y a Montesinos? Fueron ellos quienes le explicaron los fundamentos de la guerra de baja intensidad y los tres tomaron la decisión. ¿O usted cree que el mayor Santiago Martín Rivas tenía más autoridad que los tres juntos?

–Frente a esas afirmaciones, Fujimori respondería que se trata de deducciones o interpretaciones, pero que no existen elementos concretos que lo incriminen...

–No pretendan un «vladivideo» donde se le ve dando las órdenes. La cuestión de fondo es ¿quién era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas?, ¿quién era el gobernante obsesivo por controlar todo en sus mínimos detalles?, ¿quién anunciaba los resultados de los operativos?

»¿No fue Fujimori el que se paseó delante del cadáver de Cerpa en la residencia del embajador del Japón? ¿Acaso esa imagen se la tomó un periodista? Entonces, ¿por qué difundió esa imagen por propia iniciativa? Porque sabía todo, porque entendía los mensajes que había que dar en una guerra de baja intensidad y por eso encabezó todo. Tengamos un mínimo de honor. Yo asumo mis responsabilidades hasta donde me competen, pero quienes gobernaron que asuman las suyas.

»Mire, le voy a mostrar un documento –se pone de pie, ingresa a una de las habitaciones y retorna con un libro de tapas color caqui. El ejemplar tiene un sello que dice "Reservado". Martín Rivas lo muestra mientras dice–: Este es el Reglamento de Contrasubversión del Ejército Peruano, denominado Texto Especial N° 41, Guerra No Convencional; este tipo de texto es elaborado por los Departamentos de Instrucción y Doctrina de los Institutos Armados y son aprobados en las más altas instancias –busca en una página, anuncia que es la 105 y la lee–: «La destrucción propiamente dicha o sea la eliminación de los elementos componentes de la organización político-administrativo local, se llevará a cabo a base de las condiciones siguientes: 1. Que se haya recibido informaciones suficientes para garantizar el éxito de la eliminación; y 2. Que la eliminación planeada, pueda llevarse a cabo por entero –levanta la vista y continúa leyendo–: Con respecto al momento en que debe realizarse la eliminación de los componentes de la organización política-administrativa local, es conveniente tener presente lo siguiente: 1. El jefe y los miembros más destacados de la organización político-administrativo local se hallan demasiado

comprometidos en la subversión para que pueda esperarse de ellos un cambio de actitud; tampoco puede esperarse que hablen con libertad al ser arrestados». –y termina diciendo–: Se puede concluir con claridad meridiana que una de las misiones primordiales de las Fuerzas Armadas fue la eliminación individual y/o general de los subversivos. ¿Esto no lo sabía Fujimori? ¿Cómo no iba a saberlo si era el jefe de un gobierno acosado por el terrorismo y necesitaba tener un sustento para darnos las órdenes que nos dio?

–¿Y por qué Fujimori tendría que haber asumido tamaño riesgo cuyos efectos hasta hoy lo persiguen?

–Hay que ver las cosas en contexto. El año 90 no tenía tiempo para pensar ni proyectar el año 2000. Todo era urgente. Había una guerra y dos presidentes antes que él la habían perdido, y él era un advenedizo en la política que si no resolvía el problema se lo traían abajo. Súmele algo más: Fujimori nunca fue respetuoso de las formas constitucionales. Era un pragmático. Y, por último, enfrente tenía a un enemigo que extraía su fuerza a través de un dogma: «Cruzaremos un río de sangre hasta fundar la República de Nueva Democracia». Ese era el escenario del año 90. Ahora todos lo han olvidado. Y esa amnesia también la pretende Fujimori que no reconoce la responsabilidad que le toca.

⁷⁵ Tarjeta Multicuenta N° 276880 a nombre de Santiago Enrique Martín Rivas, Atestado policial del 24 de marzo de 2003, PNP-Dirpoccc-Divamp/G3.

⁷⁶ Unidad Nacional obtuvo Lima y 14 distritos; Somos Perú 16 distritos y una región; el APRA 11 gobiernos regionales; los movimientos independientes 7 regiones y 5 distritos; y Perú Posible apenas una región y un distrito.

⁷⁷ Calibre 9 mm, serie 245PN67093.

⁷⁸ Se incautaron dos computadoras portátiles. Una Compaq 1120, serie 2860 E-FCC ID:CNT 75 MB 02 CE y otra IBM Think Pad TYPE 26 10-13 C S/N 97-DITC 4. Fueron dieciocho los disquetes incautados.

⁷⁹ Los diarios y los archivos televisivos de esos días difundieron toda esta información y así constan en sus archivos.

⁸⁰ No tenían vínculo de amistad. Se conocían por las coberturas periodísticas de años anteriores, pues, Marco Miyashiro es uno de los policías que luchó con éxito contra el terrorismo y formó parte del equipo que capturó a Abimael Guzmán.

⁸¹ Aunque es evidente, se indica que las negritas corresponden al entrevistador y las blancas al entrevistado.

LA EXTRADICIÓN DE ALBERTO FUJIMORI

*Para quienes ambicionan el poder,
no existe una vía media entre
la cumbre y el precipicio.*

TÁCITO

Las fuentes para la elaboración de este capítulo han sido diversas y, por obvias razones, solicitan reserva. Entre ellas, dos personajes han sido fundamentales por su gran cercanía al entorno fujimorista y por su discrepancia con el plan de retorno que se echó a andar. Esas dos fuentes sostienen que «personas necesitadas de una resurrección política influenciaron en Fujimori sabiendo que el riesgo lo corría él y ellos quedaban a salvo si las cosas salían mal».

CUANDO EL EXPRESIDENTE Alberto Fujimori fue arrestado en Santiago de Chile a la una y treinta de la madrugada del 7 de noviembre de 2005, apenas habían transcurrido doce horas desde su sorpresivo aterrizaje en el aeropuerto de Pudahuel. Cuando la televisión difundió su rostro apesadumbrado cubierto a mitad por su mano derecha mientras partía en el vehículo que lo transportaba a su lugar de detención, asomó una pregunta cuya respuesta recién se puede hallar: ¿por qué abandonó su cómodo refugio en Tokio?, ¿por qué asumió un riesgo de tamaño magnitud que lo llevó en pocas horas a una celda de la Escuela de Gendarmería chilena?, ¿qué lo llevó a emprender ese viaje cuyo paradero final terminaría siendo la Corte Suprema de Justicia del Perú?

Aquel viaje sin retorno no fue una decisión apresurada, aunque sus resultados sugieran lo contrario. En realidad, los preparativos se iniciaron en marzo de ese año 2005 y el primer acto visible ocurrió el 18 de mayo cuando Alberto Fujimori apareció en las oficinas del consulado peruano en el barrio de Gotanda, para efectuar los trámites de renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Fue un acto preparado en detalle. Hubo una cámara para registrar el episodio, simpatizantes «espontáneos» bajo la apariencia de ciudadanos efectuando gestiones y un Fujimori preguntándoles si deseaban que volviese a ser Presidente del Perú.

Su aparición fue la primera sorpresa. La siguiente fue la singular cortesía con que fue recibido. El atento empleado Luis Manyari lo condujo hasta la oficina del cónsul Raúl Matallana y, a pesar de que tenía un pedido de extradición en curso y varias órdenes de detención, los representantes del Estado peruano accedieron a su pedido y en veinte minutos le entregaron el comprobante con el cual recabar el documento cuando fuese extendido. No tomaron ninguna acción, a pesar de que Fujimori era consciente de estar corriendo un riesgo, tanto que asistió acompañado de su abogado Rolando Souza quien «cumplía la función específica de asesorarme legalmente –ha dicho Fujimori– ante cualquier problema que pudiera presentarse durante este trámite».

Las imágenes del expresidente en el consulado saludando sonriente a su claqué, coparon los noticieros peruanos y dieron lugar a una inquietud: ¿para qué podía necesitar un DNI peruano si se había refugiado en el Japón amparado en su nacionalidad japonesa? Se pensó que era un acto de provocación, un show más. Pero no lo era. En las semanas previas Fujimori había evaluado opciones, repasado alternativas, examinado escenarios hasta llegar a una decisión que meses más tarde habría de ser la audacia fallida de un hombre acostumbrado a vivir apostando al borde del abismo.

Tenía cinco años de exilio dorado en el Japón y se sentía un jubilado viendo pasar los años, despojados de toda importancia él que desde los años ochenta había buscado los deleites del poder hasta encontrarlos y disfrutarlos y padecerlos durante toda una inverosímil década para, al final, acabar como un extraño en el país de sus ancestros. La soledad del poder es una de las condenas de los poderosos, pero la soledad sin poder después de haberlo paladeado es una sensación mucho peor: el síndrome de abstinencia de una droga que no se puede comprar en una esquina cualquiera.

Tenía sobre sí, además, un asunto que lo abrumaba: la sombra constante de los procesos judiciales abiertos en su contra, sobre todo uno que podía llevarlo a largos años de prisión. Estaba seguro de solucionar esa incógnita sobre su futuro con el respaldo de sus «millones de seguidores». Así lo decía entre los suyos y estos así se lo repetían en cada visita o en cada comunicación intercontinental.

Alberto Fujimori barajó estas cartas con su nuevo entorno sin advertir que ya no era el astuto y maquiavélico entorno de sus años de gobernante –lo demostraría de manera inapelable el resultado final– y decidió elaborar una estrategia para participar en las elecciones presidenciales del 2006. Aún hoy suena absurda tal pretensión pero los líderes mesiánicos son así, tienen su propia percepción de la realidad y escrito está que cada quien elige sus aciertos y sus yerros y lo que interesa, a final de cuentas, es conocer lo que hubo detrás.

El objetivo era lograr el ingreso de Fujimori al Perú para convertirlo en candidato de facto y, desde esa posición, apoyado por movilizaciones populares, exigir su inscripción como postulante a la Presidencia de la República. De ese modo, lograría el escudo necesario para enfrentar los procesos judiciales alegando persecución política en un país que encuentra un gozo especial en acusar pero luego diluye, pacta, acomoda las sanciones.

Su entorno lo alentó con el influjo de las encuestas y él que había gobernado con encuestadores trabajando a diario en el Servicio de Inteligencia, volvió a sentir el peligroso aplauso de las estadísticas envueltas en el aroma temerario de la nostalgia. Le reportaron que a pesar de su ausencia, con la cruz de procesos judiciales y con el encono de una prensa implacable, lograba el 20% de preferencias. Al estimulante dato se añadía una lista de candidatos que el país veía sin emoción: Alan García y el estigma de su primer gobierno, Lourdes Flores con el karma del pepecismo destinado a no triunfar y un tal Ollanta Humala. No era imposible –pensaron en Tokio y en Lima– ganar electores a favor en un país acostumbrado a jugarse la estabilidad a cara o cruz.⁸²

Todo este razonamiento no es una especulación. Así lo pensaron y así lo decidieron. Y en ese mayo de 2005 nadie podía deducir lo que el fujimorismo

estaba echando a andar y por eso se consideró como una situación pintoresca lo que, en realidad, fue la primera difusión pública del plan de retorno de Alberto Fujimori. En efecto, el mismo día de la aparición del expresidente en el consulado peruano de Tokio, Carlos Raffo, su vocero en Lima, declaró con sus usuales maneras de guardaespaldas: «¿Por qué tanto ruido si el suelo está parejo?; Fujimori está trabajando sobre hechos concretos y la renovación de su documento de identidad es parte de todo un proceso para su retorno al Perú y su candidatura en las elecciones del año que viene».⁸³

Al día siguiente, fue Absalón Vásquez el encargado de señalar que «la solicitud del expresidente Fujimori para renovar su DNI es parte de la estrategia que ha desarrollado con miras a las elecciones del año 2006».⁸⁴ Días después, el 22 de mayo, el propio Fujimori afirmó: «Tramitar el DNI es un paso importante en la dirección del camino de retorno de Fujimori (sic) al Perú».⁸⁵

El trámite concluyó el 4 de julio, día en que Kenji Fujimori se presentó en el local de la Cancillería, en Torre Tagle, con una carta poder de su padre y recogió el DNI para llevárselo personalmente a Tokio. Evitaron el envío a través de los canales oficiales porque necesitaban ganar tiempo para la segunda parte del plan al que Fujimori denominó: El pasaporte del retorno, documento de viaje que logró obtener el 13 de setiembre con la benevolencia de las autoridades que le concedieron cuanto certificado solicitó a pesar de existir impedimentos legales. El propio Fujimori lo relata con tono socarrón:

«Obtener un pasaporte nuevo en el extranjero no es una tarea fácil. Se requieren tantos documentos que parece algo difícil de alcanzar, sino imposible. Hay que presentar la libreta militar original (yo no lo tenía a la mano, se tuvo que tramitar otra), presentar la partida de nacimiento legalizada en varias instancias, incluida el ministerio de Relaciones Exteriores, igualmente la partida de matrimonio legalizada y el DNI, que se obtuvo a tiempo. Y, además, como lo saben muchos residentes en el extranjero, no hay pasaportes disponibles, salvo para emergencias. Pero vencidas todas estas vallas, obtuve mi pasaporte nuevo en el consulado de Tokio, el día martes 13 de setiembre, un martes 13 para el antifujimorismo. (...) Creo que a estas alturas y luego de todo lo explicado, además del apoyo de millones de mis compatriotas, es obvio que he obtenido mi pasaporte nuevo porque soy 100 % peruano».⁸⁶

Paralelamente, otra pieza de su estrategia de retorno se había iniciado en agosto cuando sus abogados César Nakasaki y Rolando Souza empezaron a plantear nulidades procesales en la docena de juicios que tenía abiertos en los tribunales peruanos. El objetivo de estas nulidades, se verá luego, tenía directa relación con su futuro arribo a Chile, un viaje que emprendió bajo un influjo

irracional que puede causar asombro al ciudadano común pero no a quienes conocen las complejidades de los animales políticos que transitan por la vida con la irracional convicción de su destino de elegidos.

Para que sus seguidores no tuviesen duda alguna, Alberto Fujimori, el 21 de setiembre, cuarenta y seis días antes de su despegue del Japón, reiteró su decisión: «La verdad es que el inicio de mi defensa legal, los primeros resultados de ella, la obtención de mi DNI y la expedición de mi pasaporte son las piezas claves para el objetivo del retorno y mi participación en las elecciones del 2006, que es lo que ha expresado un grueso sector de la ciudadanía».⁸⁷

Había iniciado su campaña electoral convencido de traer abajo la enorme valla de impedimentos legales que hacían inverosímil una candidatura suya y pocos, acaso ni sus seguidores, podían tener la total certeza de que estaba dispuesto a dejar su seguro refugio japonés para correr un albur librado a los vientos del azar, por más que estuviese persuadido –desde su punto de vista– de contar con un plan riguroso.

Sin embargo, el 18 de octubre dio un paso más. Y nuevamente contó con la curiosa anuencia de las autoridades: apareció en la franja electoral emitida a través de Canal 7. No era candidato, estaba requisitoriado por la justicia, tenía en trámite un proceso de extradición y, sin embargo, en el espacio destinado a su agrupación política Sí Cumple, le permitieron difundir un mensaje para todo el país, una promesa electoral (el proyecto Sierra Verde) y el anuncio de su retorno al país «antes de lo que muchos imaginan». Parecía un anuncio falaz, un acto efectista, pero no lo era. Estaba a tres semanas de su aterrizaje en Chile.

Por esos días, Fujimori se reunió en Tokio con Luis Delgado Aparicio Porta, secretario general de Sí Cumple y otro de los personajes que contribuyó a llevarlo al callejón de la amargura. Le llevó reportes desde Lima, encuestas que habían contratado de manera privada y entusiastas opciones para la movilización de simpatizantes, en suma, le acercó un escenario favorable que se podía sintetizar de este modo: si ingresa al país tendrá el amparo de las masas fujimoristas y con esa base popular podrá exigir su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones bajo el argumento de que el pueblo sea el verdadero juez con su veredicto en las elecciones. Si las acusaciones son ciertas, la sanción popular se notará en las urnas; si son falsas la competencia democrática dará fe de ello.

Además, la coyuntura del país –según la mirada fujimorista– auguraba buenas posibilidades por la debilidad política del presidente Alejandro Toledo y la actitud contemplativa de los candidatos presidenciales que no se animaban a cargar contra Fujimori porque tenían la esperanza de conquistar a sus

simpatizantes.⁸⁸

Fujimori, en lugar de evaluar fríamente los datos que le acercaban, se envalentonó. Y así, el primero de noviembre, cinco días antes de su arribo a Chile –lo que equivale a decir cinco días antes de ser recluido en una celda de la Escuela de Gendarmes chilena– escribió:

«El regreso del secretario general de Si Cumple, el Dr. Luis Delgado Aparicio, después de varios encuentros de trabajo aquí en Tokio, para confirmar a todo el Perú que “el Chino viene y nadie lo detiene”, ha desatado una verdadera psicosis en nuestros adversarios políticos y mediáticos. La demostración de ello, además de la inseguridad de algunos candidatos, puede resumirse en la frase que he leído esta semana: la candidatura de Fujimori es una “hipótesis legalmente imposible”. La frasecita ha sido lanzada tras las declaraciones de algunos analistas políticos, que nada tienen de simpatía por el fujimorismo (...) Pero si se recorre Costa, Sierra y Selva, midiendo el sentimiento de gratitud y reconocimiento de la gente por las obras de un gobierno como el de los 90s, que sintieron suyo, porque les dio futuro, esperanza, y los protegió del terror, la cosa es distinta. Nada impide mi candidatura y sobre la Constitución y la voluntad popular no puede imponerse ningún gobierno y menos argumentos seudolegales o interpretaciones de la ley dictadas por el temor a la competencia democrática».⁸⁹

SONRIENTE, ENTUSIASTA y liviano de equipaje, a las cinco y cuarenta del sábado 5 de noviembre Alberto Fujimori abordó, en el inmenso aeropuerto de Haneda al pie del espléndido volcán Fuji, el jet Bombardier, matrícula N949GP, de la empresa Global Express y operado por la empresa de charters ACI Pacific, y partió rumbo a Santiago de Chile acompañado por su asistente personal Nagato Kusataka, por Arturo Makino Miura⁹⁰ y por Jorge Béjar Ayvar.⁹¹

En sus cinco años en Tokio el pasaporte japonés había sido un documento útil para evadir a la justicia pero no le alcanzó para aliviar las nostalgias de lo que en verdad era: un peruano moldeado en las vilezas de la picardía y un político necesitado de la intriga y el poder como el pez necesita del agua. A los sesenta y siete años de edad la soledad tiene una presencia ófrica y eso había sido Tokio para él: paseos en silencio, calles impersonales y pocos, casi nadie con quien conversar cotidianamente.

Esa noche, sentado en el avión, Alberto Fujimori volvió a sentir nuevamente el azaroso placer de la adrenalina. Otra vez protagonista, otra vez el chinito audaz iniciando otra campaña electoral. Quince años atrás en un modesto tractor de faena agrícola; esta vez en un moderno y costoso jet de alquiler.

Arturo Makino prendió la cámara y empezó a grabar las escenas que después Fujimori divulgó en la televisión con el talante de un líder que retorna: relataba complacido el itinerario sobre suelo peruano –«ahora estamos volando sobre Trujillo; ya estamos en Arequipa»–, volvía confiado en la memoria sin memoria de los peruanos. Antes de partir había escrito un mensaje, en tono mesiánico, al pueblo japonés y a sus autoridades: «Dejo el Japón en ruta al Perú, a cumplir con el compromiso de honor adquirido con millones de mis compatriotas y para que la verdad histórica se imponga. Una a una levantaré las acusaciones y dejaré sentada mi inocencia y mi honor». En las líneas finales anotó una frase premonitoria: «Voy al encuentro de mi destino».⁹²

A las diez y diez de la noche, hora mexicana, la aeronave hizo una escala técnica en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana. Durante cincuenta minutos provisionó combustible y ninguno de sus pasajeros descendió. La INTERPOL pasó por alto la requisitoria que pendía sobre el viajero y la nave pudo continuar su itinerario. Qué arreglo hubo en Tijuana, es un asunto que todavía está en el misterio. Pero el ingreso a Chile sí tiene una historia de complicidad con personajes explícitos.

La estaba en Santiago, en el plan de retorno de Fujimori, suponía una escala breve de no más de tres días, a la espera de que en Lima sus abogados tuviesen listo, en al menos uno de los procesos, el levantamiento de una de sus varias órdenes de captura. Esa era la razón por la cual, desde el mes de agosto, habían sometido a nulidades procesales los diversos juicios y a eso se había referido Fujimori en su anuncio del 21 de setiembre al manifestar que: «La verdad es que el inicio de mi defensa legal (es una de) las piezas claves para el objetivo del retorno».

Solicitar la nulidad de un proceso tiene como efecto devolverlo a su inicio y, a consecuencia de ello, quedan sin efecto las medidas coercitivas. Dicho de otro modo, si lograban la nulidad de al menos uno de los procesos quedaban suspendidas, por unos días, las ordenes de captura internacional. De ese modo, podían argumentar ante INTERPOL que Fujimori estaba en condiciones de ingresar al país; luego, ya en territorio peruano echarían a andar la protección del apoyo popular.⁹³

Habría sido, obviamente, un ingreso irregular porque el hecho de presentar una orden de captura levantada no traía abajo la vigencia del resto de órdenes, pero la eficacia de INTERPOL no es precisamente ejemplar y una muestra explícita de ello ocurrió a las 2 y 15 de la tarde del domingo seis de noviembre cuando la aeronave en que viajaba Fujimori aterrizó en el aeropuerto de Pudahuel y se dirigió al hangar de Aerocardal –una empresa de aviación

corporativa que atiende a pasajeros de vuelos privados—. Siguiendo la rutina para los vuelos VIP un empleado solicitó a la Policía Internacional la presencia de un efectivo para efectuar el control migratorio. El detective Roberto Ruiz Fernández ingresó al salón VIP de Aerocardal y se encontró con sólo tres pasajeros (Nagato, Makino y Béjar) pero recibió cuatro pasaportes. Fujimori esperaba dentro del avión. El policía selló los cuatro pasaportes sin efectuar el chequeo en el sistema de Gestión Policial, en el cual constaba la orden de captura contra Fujimori. Aunque después las autoridades argumentaron como un error de funcionario lo ocurrido en el aeropuerto, nadie sella un pasaporte si no tiene al pasajero ante sí. Este fue el primer acto de protección otorgado al expresidente peruano en su arribo a Chile.

En apenas veinte minutos, Fujimori cruzó el control de migraciones chileno con una visa de turista estampada en el pasaporte y, a bordo del Mercedes Benz del abogado Juan Carlos Osorio,⁹⁴ que estuvo alerta ante cualquier contratiempo que pudiese haber ocurrido, se marchó rumbo a una suite reservada en el Hotel Marriott por un personaje de su total confianza, Germán Kruger Espantoso, exalcalde de Miraflores.

A pesar de las órdenes internacionales de arresto, hasta ese momento, su plan funcionaba: había logrado salir de Tokio, había evadido el control en México, había logrado el ingreso a Chile. Le quedaba el último tramo de su itinerario: ingresar al Perú.

El ingreso a Chile fue negociado por importantes empresarios que veían como una interesante apuesta jugar la carta de que Fujimori intente postular a la presidencia del Perú. Si resultaba, era un gran negocio a futuro —ya lo había sido en la década pasada—; y si el boleto no salía premiado, pues, solo perdían el esfuerzo de una gestión. Además, había quien necesitaba de un giro en el panorama político peruano.⁹⁵

Esa gestión consistió en obtener la anuencia del gobierno saliente para permitir que Fujimori tenga en territorio chileno una escala de apenas 72 horas. Para un gobierno en plan de despedida, no era un costo significativo. Además, Fujimori debía comprometerse públicamente a una estadía temporal y fue ese el motivo por el cual, a las cinco y treinta de la tarde, apenas cuatro horas después de su arribo, emitió un comunicado señalando: «Es mi propósito permanecer temporalmente en Chile, como parte del proceso de retorno al Perú y cumplir con el compromiso adquirido con un importante sector del pueblo peruano que me ha convocado para que participe como candidato a la presidencia de la República en los próximos comicios del 2006».

Entonces asomó, con más evidencias todavía, el mecanismo de protección

oficial a Fujimori. Ante un requerimiento enviado esa misma tarde por el gobierno peruano señalando que existía una orden de captura y ante las precisiones que la prensa empezó a solicitar, a las siete de la noche, la encargada de INTERPOL-Chile, María Elena Gómez, se pronunció recurriendo a un embuste. Dijo que a Fujimori no se le podía detener mientras no hubiese un pedido formal del gobierno peruano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esta instancia, a su vez, tenía que derivar el pedido a la Corte Suprema chilena. Solo así podrían detenerlo. Protegida por un paraguas superior, la funcionaria no tuvo recato alguno en declarar un disparate que suponía la abolición de su propio centro de trabajo, la INTERPOL, porque entre lo que tarda un trámite diplomático y judicial todo pillo levantaría vuelo y, entonces, no habría razón para la existencia de una autoridad policial encargada de las detenciones internacionales en los aeropuertos del mundo.

Lo más grave ocurrió una hora después cuando se hizo público un aval surgido desde el Palacio de la Moneda. En efecto, el secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, dio el primer comunicado oficial señalando que el expresidente peruano «No será detenido mientras no exista una orden de un tribunal chileno en ese sentido» y añadió «en Chile sólo se puede detener a las personas con una orden de los tribunales competentes. El Gobierno sólo cumple con la ley: El señor Fujimori tiene visa de turista normal y cualquier otra resolución es resorte de los tribunales». Este anuncio se efectuó tras la reunión sostenida por Puccio con el ministro del Interior, Francisco Vidal, y el director de Investigaciones, Arturo Herrera, y con la aprobación, por vía telefónica, del presidente Ricardo Lagos.

Apenas el vocero presidencial terminó de anunciar el insólito respaldo a Fujimori, la candidata favorita para ganar los comicios, Michelle Bachelet, reaccionó indignada: «Yo me pregunto como todos los chilenos: ¿qué vino a hacer este señor a Chile? A mí me parece que a la máxima brevedad tiene que ser retenido, porque tiene una orden de captura internacional y creo que la Policía de Investigaciones tendrá que explicar por qué lo dejó ingresar».

Bachelet tenía razones para exigirle a su gobierno una actitud distinta. Ocupaba el primer lugar en las encuestas y a muy pocas semanas de la celebración de los comicios necesitaba manejar el escenario nacional para cerrar su campaña con éxito. Era el peor momento para la aparición de un intruso que de pronto captaba la atención de toda la prensa e introducía un elemento de turbulencia política. Además, esta mujer que terminaría convirtiéndose en la presidenta de los chilenos, desconocía los arreglos para el ingreso temporal de Fujimori y sintió más bien que el presidente Lagos le estaba endosando un

problema engorroso. Finalmente, en lo personal, Bachelet tiene especial aversión hacia los personajes vinculados a las violaciones de derechos humanos por los graves hechos que padecieron ella y su familia en el régimen del general Augusto Pinochet.⁹⁶

Su reclamo fue tan inmediato y público y con tal arrebatado de indignación que el gobierno de Lagos no tuvo más opción que retroceder en su engaño: los trámites engorrosos anunciados poco antes se convirtieron de pronto en rápidas gestiones de enorme eficacia y, entre las 9 y doce de la noche de un día domingo, lograron obtener una orden de detención. A la 1:30 de la madrugada del 7 de noviembre, Fujimori pasó de la lujosa suite del Marriot a una simple habitación en la Escuela de Investigaciones, en la avenida Pajaritos. No pudo enviar el mensaje que esperaban sus simpatizantes en un local del centro de Lima, la televisión lo mostró en un auto custodiado por agentes y con la mano en el rostro tratando de cubrir su enorme turbación. El plan de retorno, de audacia desmesurada, había fallado.

Al día siguiente las cosas se le complicarían más por la decisión del gobierno chileno de trasladarlo a una celda en la Escuela de Gendarmería, con un régimen de reclusión en un ambiente de diez metros cuadrados, con horario de visitas, comunicación restringida, cámaras de video filmándolo todo el día, y una radio y un televisor como toda distracción. Estas medidas se tomaron para evitar cualquier comentario sobre la actuación previa del gobierno chileno y para frenar cualquier intento de acción política de Fujimori.

Fujimori no supo evaluar todo el escenario con la agudeza necesaria para un riesgo extremo. Y, junto a su libertad, el expresidente vio esfumar el mito aquel que lo dibujaba como un estratega minucioso y frío, capaz de anticipar las tres jugadas siguientes. Ahora tenía un entorno sin ningún talento y la ausencia de su socio de trapacerías, Vladimiro Montesinos, se dibujó notoria. Si bien el ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia era un sujeto muy apto para las intrigas, su habilidad mayor consistía en sumar talentos para definir objetivos. Su modus operandi consistía en convocar a los mejores especialistas para recopilar sapiencias diversas y, de ese modo, conformaba el armazón final de estrategias sólidas.

En su análisis, Fujimori olvidó la coyuntura electoral que vivía Chile y no tomó en cuenta el factor Michelle Bachelet. Fue la enérgica protesta de ella y su rotunda exigencia al gobierno para una respuesta inmediata, lo que determinó que Fujimori perdiese la protección concedida y terminase preso. Hubo otro factor que tampoco alcanzó a valorar y acaso sea una muestra de una ansiedad por el retorno. La semana en que arribó fue una semana muy tensa entre Perú y

Chile por la decisión peruana de fijar sus límites marítimos de un modo que al vecino sureño le parecía inadmisibles. En ese contexto, la aparición de Fujimori abrió otro foco de tensión y este grueso error fue sintetizado de manera explícita por el canciller chileno Ignacio Walker: «Nos parece que es absolutamente imprudente e irresponsable haber llegado en estas condiciones a Chile».

Tiempo atrás, Vladimiro Montesinos le había dicho a Fujimori: «Somos siameses; si yo caigo, cae usted». Volvía a ocurrir el mal augurio: a partir de ese lunes 7 de noviembre de 2005, el gobierno peruano tenía sesenta días para tramitar el pedido de extradición.

EN EL MES DE ENERO DE 2005, el equipo extradición de la Procuraduría Ad Hoc encargada de la extradición de Alberto Fujimori tenía cuatro años de creada y no había logrado resultados concretos. Más aún, el expediente enviado al Japón adolecía de gruesos errores tantos que, en un informe secreto entregado en junio del año 2003 al Ministerio de Relaciones Exteriores por el experto en procesos internacionales Roberto MacLean Ugarteche, se afirma que la extradición del expresidente Alberto Fujimori «no será concedida por el Japón porque el expediente carece de una calidad probatoria capaz de persuadir a un juez de alto estándar y más bien puede ser tomado como un indicio de venganza política».

A raíz de ese informe, el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, José Luis Pérez Sánchez-Cerro, se reunió con Mac Lean y redactó el Memorandum (SME) N° 435/03 dirigido al secretario de Política Exterior de la Cancillería glosando los comentarios personales del jurista Mac Lean quien, entre otros puntos, llegó a decirle que le daba la impresión de que se estaba buscando evitar la extradición de Fujimori.

Lo concreto es que la Procuraduría tuvo un origen bastante peculiar. El primer procurador, José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, fue nombrado en noviembre del año 2000 por el propio Alberto Fujimori poco antes de su fuga al Japón. Cuando este episodio aconteció, el abogado Ugaz en lugar de renunciar, como habría correspondido por elemental ética, continuó en el cargo y se erigió como el perseguidor de Fujimori movilizándolo un enorme protagonismo mediático para dotarse de una imagen de justiciero. Sin embargo, como lo muestra el informe de Mac Lean y muchos otros hechos concretos, no logró ningún avance en el Caso Fujimori. Luego, la gestión de Ugaz la continuó un socio suyo, Luis Vargas Valdivia, con idénticos resultados negativos y en cuya gestión, además, se presentó ante el gobierno japonés un expediente sin solidez probatoria.

Cuando el 20 de enero de 2005 asumió el cargo Antonio Maldonado, este se

encontró con un desorden documental interno en especial en lo relativo a los asuntos administrativos y a las notificaciones de los diversos procesos judiciales. La designación de Maldonado para un cargo lleno de complejidades y presiones políticas sorprendió a muchos porque si bien es un profesional capaz y honesto, no es un abogado penalista y venía de una ausencia del país de casi una década trabajando como funcionario de un organismo internacional. Sin embargo, después de mucho tiempo el cargo de Procurador encontró a alguien dispuesto a asumir en serio el objetivo central.

En noviembre de 2005, Maldonado se topó con el gran reto de enviar los cuadernillos de extradición en apenas sesenta días contados a partir del 9 de noviembre, tras la detención de Alberto Fujimori.⁹⁷

El equipo de la Procuraduría logró cumplir con el plazo y el 3 de enero de 2006 el Estado peruano solicitó formalmente la extradición del expresidente Fujimori ante el gobierno chileno. Ese mismo mes, tomó una decisión interna que a la larga demostraría sus ventajas: se creó la Unidad de Extradiciones. Después de años, por vez primera, se empezaban a tomar medidas concretas que anunciaban una real intención por cumplir seriamente con el objetivo para el cual había sido creada la entidad.

No obstante, en julio de ese 2006, al asumir el gobierno aprista, surgió la duda sobre si habrían de continuar con su trabajo. Los temores se disiparon, al menos al principio, con el nombramiento de la jueza María Zavala como ministra de Justicia. Había sido compañera universitaria de Maldonado y este dedujo un respaldo a su gestión. Sin embargo, ante su primer pedido de audiencia no recibió respuesta durante quince días; simultáneamente, en la Cancillería de la República –ente importante para la celeridad en el envío de documentación para el proceso en Chile– las aguas se hicieron lentas y, para enturbiar más el panorama, en el Congreso se efectuó una designación en apariencia insólita pero que era parte de un acuerdo político: fue nombrado como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rolando Souza, el exabogado de Alberto Fujimori y militante de su organización política.

El procurador Maldonado empezó a tener razones para intuir que su trabajo y el de su equipo empezaría a encontrar escollos y esa percepción disparó un rasgo de su carácter: la idea de sentirse perseguido. Cuando la ministra Zavala finalmente recibió al equipo de procuradores el diálogo se inició tenso y en un momento de la exposición que efectuaba Maldonado, ella puso sobre la mesa un teléfono celular, acto que desató la protesta del abogado: “Señora ministra, si usted va a grabar esta reunión, entonces corto mi exposición porque se trata de una reunión reservada en la que estoy informándole sobre la estrategia que

seguiremos para la extradición”. El enojo de la autoridad se manifestó de inmediato: «Oiga usted, yo soy su jefa y me debe respeto y no puede estar sugiriendo tamaño disparate».

En realidad, nada se estaba grabando de manera subrepticia, pero el jefe de los procuradores andaba suspicaz por no encontrar señales claras de respaldo gubernamental y recogió aquella leyenda urbana que instaló Vladimiro Montesinos sobre grabaciones posibles de ser realizadas utilizando la batería de un teléfono celular. Maldonado, junto a su enorme capacidad de trabajo con asistencias a su oficina incluso en los fines de semana, era un personaje singular. Llegó a adoptar un gato techero que rondaba por el patio de la Procuraduría y lo bautizó como Alegato. Fue una adopción con todos los beneficios porque el gato Alegato fue vacunado, dormía en su oficina, era atendido en su alimentación y cuando a los cuatro meses desapareció la conmoción fue tal que todo el cuerpo de vigilantes fue citado para determinar lo que había acontecido.

La relación entre Maldonado y la ministra Zavala se fue deteriorando y una tarde decidió marcharse. Lo hizo fiel a su estilo. Depositó su carta de renuncia en la mesa de partes del Ministerio y le dio la noticia al diario Perú21. De ese modo la ministra de Justicia se enteró de su alejamiento a través de las páginas del matutino.

Entre agosto y setiembre de ese año 2006 la Procuraduría quedó acéfala y la ministra María Zavala no parecía tener entre sus principales preocupaciones cubrir la plaza. Tampoco había candidatos a disposición porque se avizoraba poco o nulo apoyo político y, de paso, el sueldo asignado se redujo de los cuarenta mil soles mensuales que disfrutaron los procuradores iniciales a los quince mil pagados en el régimen aprista. El 24 de setiembre cuando ya la presión pública obligaba a designar un reemplazo, el abogado Francisco Peixoto, jefe del gabinete de asesores de Zavala, recomendó nombrar a Carlos Briceño, un hombre que ya había integrado la institución durante la gestión de Maldonado.

Briceño, un abogado de bajo perfil, parco en sus expresiones y venido del mundo académico, también decidió tomarse muy en serio la función. Organizó cuidadosamente su equipo, dio claras ordenes internas para llegar al objetivo y designó como jefe de la Unidad de Extradiciones a Omar Chehade Moya, un joven abogado de 36 años que venía trabajando en la institución desde hacía veinte meses y había obtenido con buenos enfoques y enorme convicción importantes logros en diversos procesos. Para trabajar con Chehade, se designó un equipo entre cuyos integrantes destaca un abogado muy hábil en el análisis de información y el diseño de estrategias. La Unidad de Extradiciones inició su

nueva etapa el 2 de octubre de 2006 asumiendo cuarenta casos de extradición pero con el encargo explícito de que el objetivo principal era el Caso Fujimori.

El 18 de octubre, Briceño y Chehade viajaron a Santiago de Chile para entrevistarse con el abogado del Estado peruano Alfredo Etcheverry. Se dieron con la sorpresa de que este no sabía si el nuevo gobierno deseaba continuar con sus servicios o si iban a dar por concluido su contrato. Briceño le señaló que debían continuar trabajando: el vínculo estaba vigente y no había indicaciones en contrario.

La contratación de Etcheverry fue una recomendación del embajador peruano en Chile, José Antonio Meier, y fue un acierto. Es un prestigioso catedrático de 76 años de edad, con varios libros publicados y un renombre internacional. Quizá su único flanco débil era su mirada exclusivamente jurídica sin interés en analizar las implicancias políticas del caso, aunque al final tuvo razón en su argumento repetido una y otra vez: «los jueces chilenos no se van a dejar influenciar por presiones políticas». Lo que sí lo desconcertó fue el cambio de actitud acontecido en la embajada peruana en Santiago. Muy atenta y eficiente en las gestiones requeridas cuando estuvo a cargo del diplomático Meier, se volvió morosa cuando asumió la función Hugo Otero Lanzarotti, funcionario que no puso trabas pero tampoco generó impulso bajo el lema también repetido en Lima: «No hay que politizar el caso».

En cuanto al aspecto estrictamente jurídico, el acierto central de la Unidad de Extradiciones fue replantear la estrategia y encaminar el caso hacia un asunto fundamental que en las gestiones anteriores extrañamente se había dejado de lado: sustentar el concepto de Guerra de Baja Intensidad a partir del cual se podía encontrar el vínculo de responsabilidad de Fujimori.

En efecto, Chehade y su equipo se percataron de un hecho: el material audiovisual en el cual el jefe del Grupo Colina, mayor Santiago Martín Rivas, señalaba explícitamente las responsabilidades del expresidente Fujimori no estaba en el expediente. Apenas existía una fría acta de transcripción de la larga entrevista pero el video estaba ausente.

Chehade tomó contacto con el periodista en febrero de 2007 y le solicitó una copia de la cinta, este se sorprendió por la ausencia del material y, al momento de entregarle una copia, le hizo saber que cuando ocurrió la captura de Martín, le había informado al procurador Ugaz que tenía información clave pero el funcionario no se interesó en el asunto; luego cuando el periodista necesitó contar con garantías para ingresar al Perú desde su exilio en Buenos Aires y presentar el libro Ojo por ojo junto con el video que contenía la entrevista efectuada a Martín Rivas, envió dos cartas, una al procurador Luis Vargas

Valdivia, y otra a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón. En la Procuraduría no dieron respuesta alguna, pero en la Fiscalía de la Nación la actitud fue muy diligente ante la importancia de las pruebas: la Dra. Calderón realizó de inmediato un viaje relámpago a la ciudad de Buenos Aires.

Junto a su asesor de mayor confianza, aterrizó en Ezeiza a las siete de la mañana, descansaron brevemente y a las once iniciaron la reunión con el periodista. Vieron el extenso video con la entrevista al mayor Martín, se sorprendieron al ver y escuchar por vez primera entretelones nunca antes conocidos, revisaron los originales del libro y antes de embarcarse a Lima ese mismo día le aseguraron al periodista garantías para su retorno, entre ellas que la investigación abierta por la fiscal Ana Cecilia Magallanes quedaría sin efecto por carecer de todo sustento.

Recién en setiembre y cuando los medios de comunicación hicieron público el material, el procurador Vargas Valdivia le pidió una cita urgente, le solicitó no divulgar que había hecho caso omiso a su pedido y declaró públicamente que el material sería incorporado al expediente de extradición que se tramitaba ante el gobierno de Japón.

La sorpresa fue que cuatro años más tarde, en febrero de 2007, el procurador Briceño y el jefe de la Unidad de Extradiciones, Chegade, descubrieron que el material en video no estaba en el expediente. Apenas había una transcripción perdida entre los veinticinco mil folios del caso. Cuando presentaron la cinta a la fiscal judicial de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado, la sorpresa de esta magistrada fue enorme al encontrarse frente a una prueba sólida y persuasiva porque siguiendo el hilo de las respuestas coherentes, lógicas y documentadas de Santiago Martín Rivas llegó a la convicción de que correspondía aplicarle a Fujimori la Teoría del Dominio del Hecho. Y en ese sentido, emitió su fallo señalando, entre otros argumentos que:

La existencia y operaciones del grupo paramilitar denominado «Colina», que llevó a cabo estos delitos, es un hecho histórico suficientemente probado, y existen indicios vehementes que sus acciones contaban con el conocimiento y aprobación del señor Fujimori; así se desprende principalmente de las declaraciones extrajudiciales de su Jefe el Mayor de Ejército Santiago Martín Rivas, contenidas en las entrevistas televisivas hechas por el periodista señor Humberto Jara (fs.1246 a 1283 y 2171 a 2190 de los antecedentes del caso N°11 «Barrios Altos-La Cantuta») en que afirma haber redactado un manual o reglamento para la «guerra de baja intensidad», a petición del Sr. Fujimori en una reunión en julio de 1990, que fue aprobado por éste para combatir el terrorismo de Sendero Luminoso y de MRTA, que las acciones de Barrios Altos y

*La Cantuta constituyeron réplicas a acciones terroristas, destinadas a manifestar la intención del Gobierno de eliminar en forma física a los terroristas, y que en el caso de La Cantuta, el Presidente había visitado días antes la Universidad como acción de provocación para justificar la intervención militar (fs.1277 y 1278); si bien en sus declaraciones judiciales se retracta de estos dichos sosteniendo que las grabaciones se encontrarían manipuladas, ellas constituyen indicios de suficiente gravedad para considerarlas como medios de prueba fidedignos.*⁹⁸

El mérito de la estrategia jurídica que llevó al éxito en la extradición de Fujimori corresponde al procurador Briceño, al jefe de la Unidades de Extradiciones, Omar Chehade, y al abogado encargado del análisis y estrategia del caso. Fueron ellos quienes se dedicaron a estudiar todas las pruebas existentes, que hasta ese momento eran documentos inconexos, para situarlas en un nuevo enfoque: demostrar judicialmente cómo cada una de ellas respondía al concepto de guerra de baja intensidad. De ese modo, llegaron al fondo del asunto: todo conducía directamente a la Teoría del Dominio del Hecho, que permitió obtener el fallo favorable con que concluyó el proceso.⁹⁹

El camino hacia la sentencia final tendría un bache cuando el juez Orlando Álvarez rechazó la extradición pero al final la Corte Suprema chilena rectificó la sentencia y, en concordancia con el dictamen de la fiscal Maldonado, aprobó, el 21 de setiembre de 2007, la extradición del expresidente Alberto Fujimori. A las 8:53 de la mañana del día siguiente, en un avión Antonov AN-32 de la policía peruana fue embarcado rumbo a Lima. Había culminado una estadía de 695 días en el país sureño y 81 meses desde su fuga en el avión presidencial para encontrar refugio en el Japón. A finales de octubre había declarado al diario *The New York Times*: «Arrestar a Fujimori significaría desatar un terremoto político». Días después comprobó cuán lejos estaba de la realidad.

⁹² Ese entorno estuvo conformado básicamente por Luis Silva Santisteban García-Seminario, Luis Delgado Aparicio Porta, Germán Kruger Espantoso, Luis Alberto Sánchez Dergán, Jorge Béjar Aybar, Víctor Aritomi, Arturo Makino Miura, Carlos Raffo Arce, Kenji Fujimori Higushi y los abogados César Nakasaki y Rolando Souza.

⁹³ Declaraciones emitidas por Radio Programas del Perú el 18 de mayo de 2005.

⁹⁴ Declaraciones emitidas por Radio Programas del Perú el 19 de mayo de 2005.

⁹⁵ “Fujimori renueva su DNI en Consulado de Perú” publicado en <www.albertofujimori.com>.

⁹⁶ “Pasaporte de Fujimori y la justicia peruana” publicado en <www.fujimorialberto.com>.

⁹⁷ Ídem en <www.fujimorialberto.com> (subrayado del autor). La afirmación “el inicio de mi defensa legal”

tiene una evidencia concreta: después de cuatro años sin interés en presentar un abogado que lo represente, decidió nombrar a César Nakasaki para que asuma su defensa en los 21 procesos que tenía abiertos. La primera reunión con Nakasaki ocurrió en marzo, durante la Semana Santa, fecha en la cual Fujimori ya había empezado a desarrollar su estrategia de retorno.

⁸⁸ Una revisión de archivos de la época muestra a los políticos con declaraciones condescendientes.

⁸⁹ “Alianza Sí Cumple-Cambio 90-Nueva Mayoría” en <www.albertofujimori.com> (subrayado del autor).

⁹⁰ Hijo de Roberto Makino, personaje que tuvo a su cargo, junto a Pedro Fujimori, la ONG Apenkai investigada por mal uso de las donaciones que el gobierno japonés realizó en los años noventa.

⁹¹ Amigo de Fujimori desde sus tiempos escolares en la Gran Unidad Alfonso Ugarte, financista del programa radial La hora del Chino que se emitía por radio Miraflores.

⁹² “Mensaje Alberto Fujimori” en <www.albertofujimori.com>.

⁹³ Si esta estrategia pudiese parecer inverosímil téngase en cuenta que el 20 de octubre, dieciséis días antes del ingreso de Fujimori a Chile, su abogado Nagasaki logró una sentencia de la Corte Suprema peruana que absolvía de los cargos de asociación ilícita para delinquir en el caso de la compra de armamentos, a Fujimori, al exministro de Economía, Jorge Camet y a Vladimiro Montesinos. Asimismo, en un país plagado de jueces venales o jueces suplentes que hacen el negocio de dictar una medida y luego salir de escena, el objetivo de levantar una orden de captura no era imposible de lograr.

⁹⁴ El abogado Osorio fue contratado horas antes por Luis Silva Santisteban, otro personaje que influyó en el plan de retorno con análisis equivocados. Silva Santisteban, vinculado a Fujimori y Montesinos en julio de 1990, fue quien manejó la ilegal purga de 117 miembros del servicio diplomático en 1992.

⁹⁵ Ese año 2005, en los tribunales peruanos, enfrentaba un grave proceso el empresario Andrónico Luksic, líder del mayor grupo empresarial chileno, amigo personal del presidente Ricardo Lagos y, en su momento, muy cercano al gobierno de Fujimori. Asimismo, las relaciones entre Chile y Perú, ese año, fueron muy tensas por las revelaciones sobre la venta de armas chilenas a Ecuador durante la guerra del Cenepa y el conflicto por límites marítimos. Para Chile tener de retorno a Fujimori era una opción interesante. También tuvo participación en esas gestiones el excanciller de Fujimori, Francisco Tudela.

⁹⁶ El 10 de enero de 1975, Michelle Bachelet y su madre fueron detenidas por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y llevadas al campo de prisioneros políticos Villa Grimaldi. La actual presidenta chilena fue dejada en libertad a los doce días y su madre al mes. Se exiliaron en Australia y luego en la República Democrática Alemana. Su padre, el general de la fuerza aérea Alberto Bachelet Martínez, murió de un ataque al corazón tras ser detenido y sometido a torturas.

⁹⁷ Así lo estipula el Tratado Bilateral de Extradición Perú-Chile.

⁹⁸ Fallo emitido por la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado Croquevielle, Expediente N° 5.646-05, Santiago de Chile, 7 de junio de 2007. En la cita glosada existe una mención al periodista César Hildebrandt como coautor de la entrevista a Martin Rivas. El error se debe a que el procurador Vargas Valdivia realizó la transcripción de los fragmentos de video presentados en el programa de Hildebrandt y no transcribió el íntegro del original que le fue entregado.

⁹⁹ Se considera autor de un delito a quien tiene el dominio del hecho, vale decir, a quien decide sobre los aspectos fundamentales en la ejecución de un delito. Según unánime doctrina jurídica, para determinar la autoría se toma en cuenta el dominio del hecho, es decir, que el agente del delito esté en la capacidad de “dominar el curso de la realización del hecho, tener las riendas del acontecimiento típico y de esta manera estar en condiciones de frenar o no, según su voluntad, la realización del delito”.

EPÍLOGO

EL PODER POLÍTICO VIVE ENEMISTADO con el periodismo de investigación. No tiene, no puede tener, buena relación con un oficio cuya ocupación central es abrir las cerraduras de silencio con las cuales los políticos tratan de proteger sus actos ilegales. En los últimos años se ha extendido un accionar que comparten el poder político y el poder empresarial: controlar la información que difunden los medios de comunicación. Uno de los efectos de esta tendencia ha sido cancelar los espacios para la investigación periodística. En ese contexto, el rebelde quehacer del periodismo de investigación se ha ido trasladando a dos ventanas de libertad: la publicación en formato de libros o la difusión en espacios de internet y, desde esos dos escenarios, su presencia se ha vuelto cada vez más amplia logrando una influencia que ha terminado por trascender el ámbito periodístico. Este libro es una muestra de ello.

En efecto, fue un documento clave para que las autoridades chilenas decidan aprobar la extradición del expresidente Alberto Fujimori, pues, el 7 de junio del año 2007, la Fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, dictó su fallo ordenando la extradición basada en los «medios de prueba fidedignos» de esta investigación aludiendo como ya vimos anteriormente a «las declaraciones extrajudiciales de (...) Santiago Martín Rivas, contenidas en las entrevistas televisivas hechas por el periodista señor Umberto Jara».¹⁰⁰ Dos años más tarde, este libro habría de adquirir mayor relevancia al aportar las pruebas fundamentales –y su autor convocado como un testigo principal– en el juicio que condenó al expresidente Alberto Fujimori a veinticinco años de prisión.

Todo aquel que revise la sentencia emitida el 7 de abril de 2009 podrá notar que, a lo largo de sus 763 páginas, el fallo de la Corte Suprema de la República utiliza como uno de sus hilos conductores los argumentos y las pruebas presentadas por este libro y, además, dicha sentencia establece como jurisprudencia que un libro puede ser considerado como «prueba documental de carácter privado» dando, de ese modo, un valor de aporte jurídico al periodismo de investigación y permitiendo, a futuro, que los periodistas, dedicados con seriedad y rigor al género, puedan contribuir más allá del ámbito informativo en futuros procesos.

Lo señalado no significa que la sentencia que condenó al expresidente Fujimori sea incuestionable. Si bien en lo sustancial contiene sólidas pruebas de fondo, sus integrantes no mantuvieron el estricto límite legal a que estaban

obligados y fueron permeables a subjetividades por la presión de sectores políticos y mediáticos que presionaban no desde el equilibrio de la razón sino desde las pasiones y los intereses políticos.

Así, cabe citar apenas dos ejemplos concretos: se consideraron como secuestro con agravante de trato cruel los casos del periodista Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen y el empresario Samuel Edward Dyer Ampudia, cuando, en realidad, fueron detenciones ilegales y, por supuesto, punibles pero no bajo la figura penal mencionada.

El tribunal también cedió a la coacción de las ONG de derechos humanos – poco afectas al cumplimiento de la ley y más bien abocadas a tolerar las acciones subversivas–. En el numeral 827 de la sentencia, los magistrados César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo manifiestan que «el Tribunal Hace Constar, terminantemente, que los veintinueve agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta –cuyos nombres se indican en el párrafo 783°, I y II, del fallo– no estaban vinculados a las acciones terroristas del PCP-SL ni integraban esa organización criminal».¹⁰¹

No había fundamento para dejar una constancia con ese tono tan imperativo cuando el tema no había sido materia del juicio y, además, existían pruebas dentro del mismo expediente que anunciaban lo contrario. Esa «constancia» forzada fue un doblegarse ante las presiones. Luego, el tiempo, como siempre ocurre, terminó mostrando las evidencias que contradicen lo señalado por el tribunal: a los agraviados de los casos Barrios y La Cantuta les alcanzaba, por lo menos, la presunción de vínculos con Sendero Luminoso. Para evitar objeciones fuera de contexto cabe reiterar esta afirmación: jamás debieron ser ejecutados extrajudicialmente, correspondía su detención para ser sometidos a un debido proceso.

Ahora bien, lo expuesto sobre el rol del periodismo de investigación en un proceso judicial no debe hacer perder de vista un elemento esencial: el oficio del periodista no es el de fiscal ni el de juez –un desatino que daña al periodismo es la tendencia de convertir a los medios de comunicación en tribunales–; un periodista es, sobre todo y solamente, un testigo y tal es el valor esencial de su actividad.

Este libro no tuvo en su origen ningún interés político y mucho menos persiguió como objetivo la condena judicial de sus actores. Fue una indagación paciente y riesgosa sobre episodios que a lo largo de los años distintos periodistas, con legítimo derecho informativo, quisieron descifrar. ¿Cómo decidieron combatir al terrorismo Fujimori, Montesinos y la cúpula militar al inicio de la década de los noventa? ¿Cuál fue la razón por la que fue creado el

Grupo Colina? ¿Cómo y de qué manera ejecutaron sus acciones clandestinas? ¿Qué hubo detrás de aquella semana infernal de julio de 1992 cuando Lima parecía ser demolida por la demencia terrorista? ¿Por qué hubo una ley de amnistía para los militares del destacamento Colina cuando habría bastado con degradarlos y enviarlos a prisión? ¿Qué ocultaban desde el poder los que manejaron el país entre 1990 y 2000? En la búsqueda de resolver esos misterios iban surgiendo historias complementarias que es lo que suele acontecer cuando alguien se esmera en las tareas del periodismo de investigación. Y la prueba irrefutable de que el único afán fue periodístico es que la primera edición de este libro salió a circulación en septiembre de 2003, cuando nadie avizoraba un juicio para un expresidente de la República y cuando Alberto Fujimori tenía una holgada vida en la ciudad de Tokio, Japón.

Años después, Fujimori decidió dejar su refugio japonés para asumir la aventura de convertirse en candidato en las elecciones presidenciales de 2006 y esa aventura dio lugar a su extradición y procesamiento. Las pruebas estaban en esta investigación desde hacía cuatro años atrás cuando nadie imaginaba ningún proceso y, paradojas del destino, quien le otorgó vigencia y calidad judicial a los documentos y videos que sustentan este libro fue el propio Alberto Fujimori cuando, asesorado por un entorno de caricatura y agobiado por la nostalgia del poder, decidió su retorno al Perú. En suma, el libro al que lector ha dispensado su generosa lectura hasta esta página, es, sencillamente, un libro de periodismo de investigación y nada más.

Dicho todo lo anterior, cabe resaltar que este libro es, en esencia y sobre todo, un retrato de una de las épocas más duras que ha padecido el Perú. La historia que el lector ha recorrido en estas páginas es una historia de violencia, una violencia de atroz dimensión que generó el enfrentamiento y la muerte de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos habitantes de una misma nación. Sin embargo, a pesar de la pesadilla de muerte y destrucción que duró doce años, las lecciones finales no han sido asumidas para entender que la paz es obligatoria si se quiere vivir dentro de los límites razonables de humanidad.

El país, en su mayoría, durante y después de los hechos que narra este libro, se ha volcado a un ejercicio de la violencia cotidiana que, muchas veces, tiene la paradoja de ser practicada por quienes declaman la necesidad de la armonía. Hubo una entidad que actuó bajo el nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que, mientras duró su vigencia, generó lapidaciones morales a quienes osaban plantear críticas y terminó produciendo un informe con trazo político y sesgos que le restan imparcialidad y validez;¹⁰² las organizaciones de derechos humanos amparadas en la tragedia de las víctimas de la violencia

encontraron la oportunidad de lucrar con la desgracia que azotó al país al extremo, incluso, de asumir la defensa de individuos implicados con el terrorismo hubo también familiares de víctimas que vieron la ocasión de obtener una indemnización pecuniaria sin tener la decencia y el coraje de admitir los errores de sus deudos comprometidos con la subversión; ministros de Estado que encontraron la ocasión para dictar normas dando libertad a terroristas para acceder a cargos en politizadas cortes internacionales; hubo, a su vez, periodistas que asumieron que la información podía hacerse desde una opción política y no desde la verdad; y, mientras tanto, en el día a día, se cimentó el olvido para las viudas y los huérfanos de inocentes victimados; se mantuvo la pobreza para campesinos pobres al principio y pobres al final; se dejó librados al azar de sus destinos a los migrantes expulsados de sus pueblos por el fuego cruzado entre senderistas y fuerzas del orden; y también sin ayuda los policías y los militares heridos o mutilados en acción o sus viudas y huérfanos destinados al desamparo.

Ha pasado el tiempo. El país sigue empecinado en la batalla de sus rencores, en el tumulto de sus discrepancias. En lugar de incorporar el hábito de una mínima tolerancia en la vida cotidiana se ha edificado el país del anti, el país de la rivalidad entre compatriotas, el país que se divide en pasiones inútiles y se niega a consensos esenciales para construir mejores días. Nadie se ha detenido a recoger las lecciones de paz tan necesarias luego de los períodos de violencia.

En las líneas finales, cerrando la historia que contienen estas páginas, a pesar del áspero camino recorrido, cabe conservar una difícil aspiración, una frágil esperanza: que un día, al fin, cese el rencor y habite la armonía y no se vuelva a nombrar y no se aplique y no se sufra, la ley antigua, la salvaje ordenanza, del ojo por ojo.

¹⁰⁰ Fallo de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado Croquevielle, Expediente N° 5.646-05, Santiago de Chile, 7 de junio de 2007, (fs.1246 a 1283 y 2171 a 2190 de los antecedentes del caso N°11 “Barrios Altos-La Cantuta”).

¹⁰¹ Sentencia expedida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Especial, Expediente N° A.V. 19-2001, Parte IV – Decisión, página 762.

¹⁰² La Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue creada en junio de 2001 por el presidente Valentín Paniagua. Su tarea principal era la de elaborar un informe sobre las acciones y consecuencias del período de violencia armada que vivió el país entre los años 1980 y 2000. Sin embargo, terminó ingresando en matices ideológicos y planteando premisas no siempre imparciales. Composición de sus integrantes: seis miembros de la izquierda (46.15 %): Salomón Lerner Febres, Rolando Ames Cobián, Carlos Tapia García, Enrique Bernal Ballesteros, Sofía Macher Batanero, Carlos Iván Degregori Caso; cuatro miembros de la iglesia afines a la izquierda (30.76 %): José Antúnez de Mayolo Larragán, Gastón Garatea Yori, Luis Bambarén Gastelumendi. Pastor Humberto Lay Sun; un militar funcional a cada régimen que lo convocaba (7.6 %): Luis Arias Grazziani; una excongresista renunciante al régimen fujimorista (7.6 %): Beatriz Alva Hart; el

rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (7.6 %): Alberto Morote Sánchez.



Umberto Jara. Es escritor, periodista y abogado. Estudió en la Universidad Católica del Perú, donde se graduó en Letras y Derecho y luego se desempeñó como catedrático en la Facultad de Derecho. Ha ejercido el periodismo en prensa gráfica, radio y televisión realizando coberturas sobre terrorismo, narcotráfico y campañas electorales.

Ha sido editor de las revistas *Debate* y *Semana Económica* del Grupo Apoyo (1988-1990), editor de la revista cultural *El Suplemento* (1990-1992), editor general del diario *Expreso* (1991-1992), director del programa televisivo *Panorama* (1993-1996) y director del quincenario *Cero* (2006). Ha ejercido también el periodismo deportivo dirigiendo las coberturas de los Mundiales de Fútbol Estados Unidos 94 (Panamericana Televisión) y Francia 98 (América Televisión) y el semanario deportivo *Once* (1997-2000).

Ha publicado el libro de crónicas *Con ojos de testigo* (1997) y los libros de periodismo de investigación *Ojo por ojo, la verdadera historia del Grupo Colina* (2003); *Historia de dos aventureros* (2005), *Secretos del túnel* (2007) y *Morir dos veces* (2016). Sus libros han sido publicados en Perú, Argentina, Colombia y Chile. Actualmente, se desempeña como Consultor en Estrategias Corporativas Legales y Comunicacionales.

Inicios de los años noventa. El terrorista Abimael Guzmán emprendió la destrucción y captura de Lima, la capital del Perú.

Misteriosos operativos. El Grupo Colina, un destacamento militar clandestino, respondió ejecutando extrajudicialmente a miembros y simpatizantes de Sendero Luminoso.

Decisiones secretas. El presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos dieron las órdenes y durante más de una década nadie supo lo que escondían esos mandatos.

Secretos descubiertos. Un periodista logró unir las evidencias dispersas, obtuvo la confesión de Santiago Martín Rivas, el jefe del Grupo Colina, y reveló la historia escondida. Su minuciosa investigación se convirtió en el documento fundamental para la extradición de Fujimori y aportó las pruebas principales en el histórico juicio que condenó por vez primera a un ex Presidente de la República.

Ojo por ojo, la verdadera historia del Grupo Colina, se ha convertido en un libro clásico del periodismo de investigación. Su autor, con gran talento narrativo, atrapa al lector de principio a fin y retrata de manera impecable los años de terror que padeció el país. Un documento imprescindible para conocer la historia contemporánea del Perú. Un libro que llevaba mucho tiempo agotado y que ahora se reedita con nuevo material que redondea, sin dejar cabos sueltos, este fascinante relato.

Table of Contents

[Página del título](#)

[Copyright](#)

[Índice](#)

[Prólogo a la primera edición](#)

[Prólogo a la segunda edición](#)

[Nota previa](#)

[Las alas del deseo](#)

[Voces clandestinas](#)

[Tiempo de revancha](#)

[Labores de ocultamiento](#)

[La captura de Santiago Martín Rivas](#)

[La extradición de Alberto Fujimori](#)

[Epílogo](#)

[Contraportada](#)